RADICALITZEM *la vida*

La majoria de llibres de Virus editorial es troben sota llicències lliures i per la seva lliure descàrrega. Però els projectes autogestionaris i alternatius, com Virus editorial, necessiten un important suport econòmic. En la mesura que oferim bona part del nostre treball pel comú, creiem important crear també formes de col·laboració en la sostenibilitat del projecte. Subscriu-t'hi!!

La mayoría de libros de Virus editorial se encuentran bajo licencias libres y para su libre descarga. Pero los proyectos autogestionarios y alternativos, como Virus editorial, necesitan de un importante apoyo económico. En la medida en que ofrecemos buena parte de nuestro trabajo para lo común, creemos importante crear también formas de colaboración en la sostenibilidad del proyecto. ¡Subscríbete!

Satèl·lit sense quota

-5%

5 compras
mínimo anual
a les 5 compres una sorpresa

Pack bienvenida
Punto de lectura
+ postal

Càpsida

60€

4 libros
Virus editorial
sin límite de precio

-5%
En toda la librería online

Pack bienvenida
Bolsa #RadicalitzemLaVida
+ Punto de lectura
+ postal

Descuentos
En grupos de lectura
i otras actividades

Replicant

100€

8 novedades
Virus editorial
durante un año

Pack benvinguda
Bolsa #RadicalitzemLaVida
+ Punto de lectura
+ postal

-5%
En toda la librería online

Descuentos
En grupos de lectura
i otras actividades

https://www.viruseditorial.net/es/editorial/socios

Marc Almodóvar

Egipto tras la barricada

Revolución y contrarrevolución más allá de Tahrir

Virus editorial

Creative Commons
LICENCIA CREATIVE COMMONS
autoría - no derivados - no comercial 1.0

- Esta licencia permite copiar, distribuir, exhibir e interpretar este texto, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
Autoría-atribución: se deberá respetar la autoría del texto y de su traducción. Siempre habrá de constar el nombre del autor/a y del traductor/a.
No comercial: no se puede utilizar este trabajo con fines comerciales.
No derivados: no se puede alterar, transformar, modificar o reconstruir este texto. Los términos de esta licencia deberán constar de una manera clara para cualquier uso o distribución del texto. Estas conciciones sólo se podrán alterar con el permiso expreso del autor/a.

Este libro tiene una licencia Creative Commons Attribution-NoDerivs-NonCommercial. Para consultar las condiciones de esta licencia se puede visitar: http://creativecommons.org/licenses/by-nd-nc/1.0/ o enviar una carta a Creative Commons, 559 Nathan Abbot Way, Stanford, California 94305, EEUU.

© 2014 de la presente edición, Virus editorial
© 2014 del texto, Marc Almodóvar

Primera edición: enero 2014

Maquetación: Virus editorial

Cubierta: Silvio García-Aguirre López Gay

Imagen de la cubierta cedida por: Manu Brabo (http://manubrabo.22slides.com)

Traducción al castellano: Yolanda Hurtado

Revisión de la edición en castellano: Paula Monteiro y Pátric de San Pedro

Lallevir SL / VIRUS editorial
C/ Junta de Comerç, 18 baixos, 08001 Barcelona
T. / Fax: 93 441 38 14
C/e.: virus@pangea.org
www.viruseditorial.net

Impreso en:
Bookprint
Botánica 176-178
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93 102 50 10
Fax.: 93 102 50 11
C/e.: administracion@book-print.com

ISBN-13: 978-84-92559-50-3
Depósito legal: B-1147-2014

Índice

Prólogo 9

La era Mubarak 19

- Antecedentes y contextualización 21
  - Egipto visto desde el Nile City 21
  - · El mejor reformista del planeta 26
  - · El clan Gamal y el peligro hereditario 31
  - · La calles hablan 35
  - · Nace Kefaya 41
  - · El período electoral de 2005 43
  - · Mubarak y los Hermanos Musulmanes 49
  - · La lucha obrera 57
  - · La *intifada* del 6 de abril 60
  - · La represión enciende la mecha 64
  - · Un Estado policial 68
  - · Armas blancas en la urnas 73
  - · Se acerca la insurrección 79
- Dieciocho días 83
  - · El 25 de enero 83
  - · El viernes de la ira 87
  - · La república de Tahrir 92
  - · La Batalla del Camello 95
  - · La caída de un faraón 97

La revolución después de Mubarak 103

- Los militares: de «El pueblo y el Ejército de la mano» al *Kazeboon* 103
  - · La Junta Militar toma el poder 103
  - · La República de los Generales 108

· ¿Victoria popular o golpe de Estado silencioso? 113
· El pacto de la transición 116
· Khairat Shater: el hombre de la transición 121
· La rueda de la producción 127
· Doctrina del *shock* 131
· Se negocia el préstamo 134
· La mano de hierro de los juicios militares 136
· Violencia militar: palo sin zanahoria 139
· La calle arde 142
· Elecciones sobre un charco de sangre 146
· Las urnas entre el caos 152
· Militares *kazeboon* 157
· El nuevo Parlamento 160
· Un nuevo balance de poderes 164
· Masacre en el campo de fútbol 166
· Impunidad ante todo 170
· Un régimen que se defiende 174
· El juicio del siglo 177

• El circo de las presidenciales 185

· Una luna de miel en peligro 185
· Aislamientos polémicos 190
· La Comisión Electoral dispone 194
· Una primera vuelta manchada por la duda 198
· El antiguo régimen y la Hermandad, cara a cara 200
· Golpe de Estado por ley 204
· Tensión en las urnas 206
· Una semana al borde del precipicio 209

• Egipto bajo los Hermanos Musulmanes 217

· Un nuevo mapa 217
· Mursi jubila a Tantawi 221
· El ataque a Gaza y el decreto constitucional 226
· Una Constitución que se aprueba de madrugada 232
· La guerra por la Constitución 235
· Asimilando el antiguo régimen 241
· La amnistía al antiguo régimen 246
· El FMI es la solución 252
· La amarga pastilla de la reforma 259

• Golpe revolucionario o revolución golpista 267

· Tamarrod 271
· Se acerca el 30 de junio 274
· Crónica de una caída 280
· Fin del ultimátum 285
· El Ejército rompe el pacto de transición 289
· Un nuevo ejecutivo liberal 294
· Riad aplaude 297
· La Casa Blanca se ahoga 301
· El mubarakismo renace 304
· El mandato de El-Sisi 307
· Rabaa Adaweya y la ruptura del hilo 212
· Caza de brujas

Epílogo 319

Glosario 325
· Temas 325
· Personalidades 326
· Instiruciones y organizaciones 328
· Cronología básica 330

Bibliografía 335

A Hassan, Ebeid, Amr y Ezz, mis compañeros de revolución.

Pero, sobre todo, a Nagui, Semsem y a las pequeñas Marwa y Mariam, quienes desde su frágil torre de olvido y silencio, donde las carreteras llevan a lugares impronunciables y las letras no son sino garabatos indescifrables, son las víctimas que alimentan esta montaña de avaricia, despotismo y esclavitud humana. Porque, como decía Galeano, «su hambre nos da de comer y su desnudez nos viste».

Y agradecer a Andreu sus consejos, a Núria sus días de corrección y a Yolanda, eso mismo, además de esas largas horas de charla fumando shisha*, sin las cuales este libro quizá nunca se hubiera maquinado.*

نصف ثورة يساوى هلاك أمة

«Una revolución a medias es la destrucción de un pueblo»

Pancarta en la plaza Tahrir

Prólogo

Santiago Alba Rico

Dos acontecimientos marcaron, al final de la Segunda Guerra Mundial, el destino del mundo árabe en el avispero geopolítico internacional del siglo xx. El primero tiene que ver, naturalmente, con el petróleo. El 14 de febrero de 1945, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt y el rey Abdelaziz Ibn Saud, fundador del actual Estado de Arabia Saudí, firmaron el llamado «pacto del *Quincey*», por el nombre del crucero militar donde se celebraron las conversaciones que llevaron a un acuerdo energético, aún vigente, en virtud del cual se garantizaba a Estados Unidos el acceso privilegiado al combustible fósil del Golfo Pérsico. A cambio, la potencia estadounidense permitió a Arabia Saudí utilizar esta formidable fuente de riqueza para difundir en toda la región, no el bienestar social y el desarrollo económico sino la versión más reaccionaria, violenta y puritana del islam suní. El wahabismo, doctrina fundada por Mohamed Abdel Wahab a mediados del siglo xviii y que hasta entonces sólo había merecido el desprecio y la condena del mundo musulmán, se convirtió poco a poco, tras el pacto del *Quincey*, en una especie de «nueva ortodoxia» o al

menos en una visión integrada, respetable y atractiva del islam. El petróleo, que no ha dejado más que miseria y guerras en la zona, abortó además la renovación ilustrada y progresista del pensamiento musulmán (vinculada al movimiento Nahda de las primeras décadas del siglo) para imponer o alimentar las formas de organización e interpretación más retrógradas y antidemocráticas.

El segundo acontecimiento es la fundación en Palestina del Estado de Israel. En 1948, mientras el colonialismo retrocedía en todo el mundo como resultado del empuje de los pueblos y de la refundación de las Naciones Unidas al servicio de un nuevo orden internacional, las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial apoyaron un anacrónico proyecto colonial en Palestina cuyas consecuencias se prolongan hasta nuestros días. Tras seis guerras, miles de muertos y millones de desplazados, la ocupación sionista de Palestina se ha convertido en el mayor catalizador de solidaridad panárabe y de inestabilidad mundial.

Toda la política occidental en la zona ha girado en torno a la defensa de estos dos pilares: el petróleo del Golfo y el Estado colonialista de Israel. Frente al wahabismo petrolero y al sionismo israelí, en la década de los años cincuenta y sesenta surgieron en el mundo árabe proyectos soberanistas que impugnaban las divisiones geográficas heredadas de los acuerdos Sykes-Picot. De ambición panarabista, forjados en torno al nasserismo egipcio y al baazismo sirio-iraquí, estos movimientos se sostuvieron al amparo de la Guerra Fría, minados por sus propias divisiones, las derrotas frente a Israel y el autoritarismo creciente de sus gobiernos. La derrota de la Unión Soviética en 1989 y el empuje del neoliberalismo acabaron por enterrar sus potencialidades socialistas dejando intacto su aparato dictatorial. Para entonces, el apoyo de la CIA a los muyahidines afganos contra la URRS y la revolución antiestadounidense en Irán, casi contemporáneos, habían renovado el impulso islamista de manera contradictoria, cambiando

las fuerzas, pero no la relación entre ellas, en el tablero geopolítico regional. Mientras Occidente jugaba a aprendiz de brujo alimentando a los regímenes más reaccionarios en defensa de sus intereses, el antiimperialismo se desplazaba de forma irremediable desde la izquierda panarabista a la derecha panislamista. La infame invasión de Irak por Estados Unidos completó paradójicamente este cuadro, entregando al enemigo iraní un país destruido y dividido.

Atrapados en su propia importancia abstracta como piezas de ajedrez, los pueblos árabes fueron sometidos a las necesidades de un paradójico equilibrio siempre acompañado de matanzas, guerras, invasiones y pobreza, plagas encerradas en el cepo de feroces dictaduras congeladas en el tiempo. Si en algo coincidían por igual occidentales, islamistas y nacionalistas era en el desprecio por la democracia y el Estado de derecho, incompatibles con la «lucha antiterrorista» y con la «lucha antiimperialista». La tortura, la represión, el amordazamiento de la libertad de expresión, junto a la corrupción y el desprecio por la gente, eran funciones indispensables del mantenimiento del statu quo. Ésa era la situación que describía el famoso informe encargado, en abril de 2005, por el PNUD a un grupo de intelectuales árabes: «De acuerdo con los estándares del siglo XXI, los países árabes no han resuelto las aspiraciones de desarrollo del pueblo árabe, la seguridad y la liberación, a pesar de las diversidades entre un país y otro a este respecto. De hecho, hay un consenso casi completo en torno a la existencia de graves carencias en el mundo árabe, y la convicción de que éstas se sitúan específicamente en la esfera política». El informe hablaba de un «agujero negro» y de la inminencia de «una explosión social» y, con firme delicadeza, responsabilizaba a Israel y Estados Unidos de «obstaculizar el camino hacia la democracia».

En estas condiciones, hace dos años y medio se puso en marcha en el mundo árabe un proceso inesperado de irrupción de los pueblos (llamado a veces «Primavera Árabe») que abrió una modesta pero luminosa oportunidad en la zona. Yo la lla-

maría sin lugar a dudas «revolución». No fue una revolución socialista y no fue dirigida por la izquierda. Tampoco fue una revolución islámica y los islamistas tuvieron asimismo un papel muy reducido. Pero, como fue una revolución democrática (por la dignidad y la justicia social), salió a flote la verdadera relación de fuerzas en la zona —reprimida durante décadas—, y las elecciones, allí donde las hubo, llevaron al gobierno a los partidos islamistas de la órbita de los Hermanos Musulmanes. Tanto la izquierda de la región, avejentada y estalinista, como los partidos islamistas, que incubaban sueños de califato, cedieron a la presión popular y adoptaron sinceros programas democráticos. Los *fulul* de la dictadura, a su vez, se reciclaron en demócratas y, desde distintas organizaciones y partidos, en condiciones sin precedentes de libertad de expresión y reunión, comenzaron a trabajar para recobrar el poder. La situación económica y social se mantuvo inalterada y, en algunos casos, se volvió aún más dramática y desesperada.

En todo caso, la llamada «Primavera Árabe» iluminó un descubrimiento y una esperanza: el descubrimiento de que el islamismo yihadista era apenas popular en el mundo árabe y la esperanza de que iba a ser definitivamente derrotado junto a las dictaduras contestadas por las revueltas. Durante unos meses, los clichés islamofóbicos de los medios de comunicación europeos dejaron lugar a clichés de signo contrario: un burbujeo hasta ahora oculto de jóvenes blogueros y voluntad democrática. Pero ese nuevo cliché tenía también un asidero en la realidad. En abril de 2011, el izquierdista Khaled Saghiya, entonces redactor jefe del periódico libanés *El-Akhbar*, certificaba la defunción de Al-Qaeda en un hermoso y brillante texto de título *La muerte de Osama y las intifadas árabes: no hay sitio para Ben Laden*. En él, Saghiya vinculaba el «éxito» relativo de Al-Qaeda en la última década al vacío político, las dictaduras y el imperialismo y su muerte, por tanto, al despertar de los pueblos: «¿Quién entre los árabes necesita la coraza de un Bloque cuando en todas las plazas se reclama a gritos la

caída del régimen? ¿Y qué Administración estadounidense necesita la guerra contra el islam o la islamofobia cuando el islam político se ha convertido en un socio fundamental en la reestructuración de la zona?».

Fue así. Era una realidad. Pero a medida que las contrarrevoluciones han impuesto su ley o las revoluciones se han enquistado en la sangre y el fango, la normalización democrática y mediática anhelada han dado paso de nuevo a los clichés islamofóbicos de antaño, que vuelven a dominar los titulares y los análisis. Contienen también, claro, un atisbo de realidad. Porque lo cierto es que la vieja confluencia de caos, pobreza, dictadura e imperialismo están resucitando el cadáver de Ben Laden. La ferocidad de la represión en Siria ha producido el mismo efecto que la invasión estadounidense de Irak: la penetración y creciente influencia de los grupos yihadistas suníes y la deriva militar «sectaria». El golpe de Estado de El-Sisi en Egipto, por su parte, ha reactivado la guerra en el Sinaí. Y el caos libio, con la aspersión de armas en toda la región, ha tenido un efecto ventilador en Mali, Argelia y Túnez.

Lo que no se puede negar es que, como antaño, esta reactivación de la ultraderecha islamista sólo beneficia a los que apuestan por impedir la normalización democrática del mundo árabe y, por supuesto, la soberanía popular sobre los recursos materiales y la justicia social. En Siria, Bashar Al-Assad ha alimentado desde el principio el yihadismo contra la legítima revuelta de su pueblo y con resultados conocidos: la relegitimación internacional del régimen, que sigue bombardeando a su propia población, y el abandono de la oposición democrática, desprovista de armas y de financiación. En Egipto, la «guerra contra el terrorismo», que incluye también, de nuevo, como en tiempos de Mubarak, el islamismo «moderado» de los Hermanos Musulmanes, refuerza la autoridad y prestigio del Ejército y el apoyo «nacionalista» a la brutal represión, en un consenso de violencia que Mohamed Zaraa, militante de los derechos humanos, no duda en calificar de «fascista».

En este sentido, el golpe de Estado militar en Egipto, el 30 de junio de 2013, ilumina y profundiza la ofensiva contrarrevolucionaria que, desde el interior y desde el exterior, ha tratado de limitar o abortar los procesos de cambio iniciados en el mundo árabe a partir de enero del año 2011. Detenidas en el rompiente de Siria, donde las protestas populares se están desviando de su impulso ecuménico original y son secuestradas e instrumentalizadas por potencias extranjeras, y empujadas hacia el conflicto «sectario» o religioso, el sangriento *putsch* egipcio forma parte, en realidad, de un golpe de Estado regional contra los Hermanos Musulmanes y sus diferentes ramas locales: un golpe de Estado, en definitiva, contra el modelo turco-catarí, aceptado sin entusiasmo por Estados Unidos y la Unión Europea, que parecía destinado a «democratizar» Oriente Próximo y el norte de África y garantizar una nueva estabilidad, sin cambios estructurales, durante algunos años.

El derrumbe vertiginoso de este modelo turco-catarí complace a las fuerzas más reaccionarias en la zona, Arabia Saudí, Israel, al régimen sirio y, por supuesto, al Ejército egipcio; y es secundado, más o menos a regañadientes, por la Administración Obama, muy debilitada y dependiente de sus aliados en la zona. Este derrumbe amenaza las frágiles transiciones democráticas abiertas en Egipto, Libia y Túnez y fortalece, de un lado y de otro, a las derechas laicas asociadas a las viejas dictaduras y a las extremas derechas islamistas. Una angustiosa sensación de *déjà vu* se apodera de analistas y testigos: todas las esperanzas polinizadas por la irrupción de los pueblos de la región hace dos años y medio parecen revertirse muy rápidamente; y, bajo la embestida de la involución antiislamista, se restablece el viejo y trágico ciclo de dictaduras, represión y radicalización contra el que se alzaron los movimientos populares.

En este contexto, por su población, su historia y su fuerza militar, Egipto jugó un papel central en la difusión de las revueltas y en las transformaciones geoestratégicas en 2011 y juega ahora un papel central en la reversión del nuevo y frágil

modelo. Como recuerdan la mayor parte de los analistas, la política de Estados Unidos en Oriente Próximo se basa, desde hace cuarenta años, en tres pilares: Arabia Saudí, Israel y el Ejército egipcio. A partir de los acuerdos del *Quincey* en 1945, la teocracia saudí se convirtió en la llave del dominio energético estadounidense y en el muro de contención de las izquierdas y los nacionalismos panarabistas. Tras la guerra de 1967, Israel, por razones al mismo tiempo de política interna y de geoestrategia, pasó a centrar de forma obsesiva, aunque a veces de manera incongruente, todas las posiciones de Washington en la región. Con Sadat y los acuerdos de Camp David en 1978, el Ejército egipcio, máximo receptor de ayuda estadounidense (si exceptuamos precisamente a Israel), se transformó en el verdadero garante de un siempre precario equilibrio regional, más frágil y amenazado que nunca tras la «pérdida» de Irán en 1980. Política de Estado por encima de las diferencias entre administraciones sucesivas; este triple eje ha sido siempre el pivote sobre el que se ha fundado la hegemonía de Estados Unidos en esta zona, la más «geoestratégica» del planeta (para desgracia de sus habitantes).

Con independencia de sus distintos orígenes, y por muy incoherente que parezca, estas tres fuerzas —Arabia Saudí, Israel y el Ejército egipcio— han mantenido siempre unas estrechas relaciones de alianza interesada, como lo demostró, tras el golpe de Estado de El-Sisi, la reacción de saudíes e israelíes, con un explícito apoyo económico de los primeros y una pública palmada de sostén y aplauso de los segundos; y con la intervención diplomática de ambos a fin de que la Unión Europea y Estados Unidos diesen «una oportunidad a la hoja de ruta» de los militares egipcios. Estas tres fuerzas coinciden, entre otras cosas y por distintos motivos, en su odio a los Hermanos Musulmanes.

El sangriento golpe de Estado en Egipto ilumina también, en consecuencia, un aspecto paradójico de este dominio estadounidense. Su dependencia de Arabia Saudí, Israel y Egipto

concede a estos tres regímenes una autonomía que no tienen países menos necesarios, o incluso más hostiles, en el orden regional. No son simples títeres de Washington, como lo prueba asimismo la asonada militar egipcia: Obama se vio obligado a «tragarse» el golpe (que nunca llamó así) y negociar con el Ejército.

Pues bien, el libro de Marc Almodóvar que el lector tiene entre sus manos ilumina de un modo casi asfixiante la autonomía y poder de este Ejército egipcio que, desde 1952, ha fagocitado de tal modo los aparatos securitarios, económicos e ideológicos del Estado egipcio que ha acabado por identificarse orgánicamente con el Estado mismo. La revolución del 25 de enero apenas rozó este monstruo, que se adaptó a las circunstancias para seguir rigiendo los destinos del país; y la tentativa de los Hermanos Musulmanes para transformarlo desde dentro a su favor, a expensas de los jóvenes revolucionarios de Tahrir (y de los obreros, los parados, los socialmente excluidos), se ha saldado con una derrota traumática que es también en parte la derrota de todos los partidos y de todo el pueblo egipcio. Almodóvar, que está sumergido al mismo tiempo en la plaza y en los documentos, desde el cuerpo y desde los libros, describe hora a hora, casi minuto a minuto, esta guerra mortal entre el Ejército y la Hermandad: un Ejército que impone una y otra vez su ley y una Hermandad ingenua, hipócrita, temerosa e interesada, que cree poder derrotar a los militares pactando con ellos y haciéndoles concesiones contrarrevolucionarias.

El libro de Almodóvar es, en algún sentido, una minuciosa crónica de casi tres años de batalla cotidiana, en las calles y en los palacios; una obra —si se quiere— de *anales*, ese género histórico en el que destacó el romano Tácito. Es, sin duda, un relato factual, nutrido de experiencias y periódicos, de una erudición concreta casi apabullante, y por ello mismo constituye un documento excepcional, instructivo, informativo y, al mismo tiempo, apasionante. Pero todo relato implica selección y orden, y toda selección entraña una interpretación, y toda

interpretación *toma partido* y plantea tesis y propuestas. Obviamente, Almodóvar toma partido —en lo que coincido plenamente— contra los dos contendientes, el Ejército y los Hermanos Musulmanes, cuyo enfrentamiento, sin embargo, parece conducir de un modo fatal al golpe del 30 de junio de 2013 y al retorno del pasado en forma de dictadura militar. ¿No era posible otro desenlace? El relato, es verdad, cierra todos los caminos e invita poco a la esperanza. Hay una «objetividad» pétrea, casi determinista, en el encadenamiento de los hechos. Pero eso es lo que pasa cuando *han pasado* las cosas y se narran con seriedad y rigor: las decisiones no tomadas, los impulsos ausentes, las presiones no ejercidas, no tienen cuerpo y no son, por tanto, *objeto* del relato. Almodóvar narra minuto a minuto *lo que ha pasado* como si no pudiera haber pasado de otro modo y este fatalismo nos proporciona una información colosal, imprescindible, esclarecedora, sobre las fuerzas en concurso, pero nos deja con la impresión de que las cosas no podían haber ocurrido de otra manera, que los actores no podían actuar de manera más inteligente, que la oposición no podía organizarse mejor y, sobre todo, que el pueblo egipcio no podía vencer en esta batalla.

Pero ese «fatalismo» es un efecto engañoso de la verdad narrativa misma y de la calidad del trabajo de Almodóvar. Todo relato puede ser desmentido desde fuera en cualquier momento, como lo demuestra la propia revolución del 25 de enero. Por eso el autor introduce al pueblo egipcio al final, en el epílogo, consciente de que la fuerza por la que él toma partido está ausente, de que ha sido desalojada por la propia consistencia «objetiva» del relato. Cito la última frase del libro, que es también —en intención— la primera y que no es una conclusión sino una adherencia en la raíz: «El proceso de cambio en Egipto aún tiene muchas páginas por escribir. Más allá de las transformaciones que experimente el país, que indudablemente nunca volverá a ser como había sido bajo Mubarak, la auténtica revolución se ha producido en la mente de millones de egipcios que se

han despertado de un largo sueño. La revolución abrió un nuevo horizonte de debates y perspectivas que no será aniquilado con facilidad. Las calles, cafés y mercados de Egipto hablan hoy en día sin rodeos. La conciencia de millones de personas se ha despertado. […] La revolución que en enero de 2011 reclamaba "Pan, libertad y justicia social" no ha muerto. Estará viva mientras la injusticia provocada por unas políticas generadoras de desigualdades y por la extensión de las nuevas formas de esclavismo y colonialismo sigan vivas. Mientras a los pies de los lujosos rascacielos de las Nile City Towers siga existiendo la miseria de las chabolas sin agua ni luz de Ramlet Boulaq, la revolución seguirá viva. Reclamando "Pan, libertad y justicia social"».

La revolución, que es un proceso y necesita tiempo, conoce retrocesos; y en cuanto al tiempo está llena de reveses y de muertos. Esta extraordinaria *crónica hermenéutica* y comprometida de Almodóvar, ayuda a comprender el punto de reflujo en el que nos encontramos, tras el *tsunami* de 2011, pero deja abierta la rendija por la que deben fluir nuevos torrentes. Su libro explica muchas cosas; su epílogo expresa la verdad viva, caliente, *a la espera*, de unos pueblos que —ni en Egipto ni en Túnez ni en el resto de la región— han dicho aún su última palabra.

La era Mubarak

Antecedentes
y contextualización

Egipto visto desde el Nile City

El Nilo ha sido la base de la vida en Egipto a lo largo de los siglos. El devenir del país siempre ha estado vinculado a la ribera de este río y su capital se extiende justo en el punto en que nace la formación del Delta, creado por los ricos sedimentos recopilados durante más de 6600 kilómetros. En El Cairo, los jóvenes flirtean con sus parejas por la *corniche* del río, mientras embarcaciones con instalaciones luminosas psicodélicas y rococós airean a todo trapo los últimos éxitos de la música popular local. Jóvenes y mayores se sientan en las terrazas de los cafés para pipar durante horas la famosa *shisha* o narguile entre el resonar de las bocinas del último atasco cairota.

La orilla del río Nilo, con su paseo de la *corniche*, es también una muestra del poder capitalino; allí están el acomodado barrio de Zamalek, la sede del Partido Democrático Nacional de Mubarak, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la televisión pública o la Corte Suprema, además de los más lujosos hoteles

e importantes oficinas de negocios. El poder duerme a su vera; lo que representaba el régimen egipcio se vuelve evidente.

En esta misma orilla, a escasos kilómetros del centro, se encuentra uno de los ejemplos gráficos más claros de lo que fue durante treinta años la dictadura de Hosni Mubarak. Allí se alzan, faraónicas, las dos torres del complejo Nile City. Construidas por el binomio formado por el clan saudí Shobokshi y el clan egipcio Sawiris, muy próximos a Mubarak, simbolizan todo el lujo y la ostentación construida por el régimen. Con 34 plantas y 142 metros de altura, figuran como el cuarto y quinto edificios más altos de Egipto. Las torres albergan principalmente oficinas de las más destacadas marcas del país, los más relevantes gabinetes asesores e, incluso, la sede diplomática de varios Estados. También tiene un pequeño centro comercial al más puro estilo occidental. Las más sofisticadas salas de cine del país estrenan allí las últimas novedades comerciales de Hollywood y se puede comprar en tiendas de las más reconocidas marcas de ropa o perfumería, mientras se consume un café Starbucks o un helado Häagen-Dazs. Las torres cuentan también con el hotel Fairmont, uno de los más selectos de la capital cairota con instalaciones de *spa*, lujosos restaurantes y coctelerías con exclusivas vistas al Nilo. Dormir una noche en sus entrañas difícilmente baja de los doscientos dólares.

Un poco más allá, en las faldas de las torres del Nile City se encuentra el barrio de Ramlet Boulaq, parte integrada de Boulaq Abu Alaa, una de las más extensas zonas de barracas de la ciudad. Una barriada donde buena parte de sus habitantes, encajonados en viviendas de autoconstrucción entre talleres de forjadores de hierro, viven con menos de dos dólares diarios y donde todavía hoy, en pleno siglo XXI, estos vecinos del lujo egipcio luchan exigiendo instalaciones sanitarias, agua y alumbrado público. Precisamente, fruto de la especulación creada por la construcción de las torres, cientos de habitantes de la zona se vieron forzados a vender sus casas. Mientras que algunos estudios indicaban que el valor del metro cuadrado sobrepasaba los cuatro mil euros, muchos vecinos acosados por las promotoras y sus matones se desprendieron de sus viviendas, donde llevaban décadas, a cambio de poco más de cien euros por metro cuadrado. Ésta es la imagen de los dramáticos efectos de la liberalización económica del régimen de Mubarak: los crecientes beneficios de una minoría a cambio de la multiplicación de la miseria colectiva de la mayoría.

Nile City representa claramente aquel proceso. En la planta octava de la torre norte, junto a la embajada de Nueva Zelanda, se encuentra la sede del Centro Egipcio de Estudios Económicos (ECES). Constituido en 1992 gracias a la aportación de diez millones de dólares de la USAID, la agencia estadounidense para el desarrollo, era el *think tank* que lideraba el asesoramiento para el proceso de liberalización económica que viviría Egipto en la era Mubarak. ECES fue creado por el abogado Taher Helmi, quien capitanearía la Cámara Americana de Comercio en Egipto y que también fue fundador de Helmi, Hamza and Partners. Esta empresa, cuya sede con parqué estaba en la planta 21 de la misma torre norte del Nile City, actuaba como delegación cairota de Baker & McKenzie, un importantísimo bufete de abogados con sede en Chicago. Si ECES actuaba como *think tank* del proceso de liberalización económica, Baker & McKenzie era su rama jurídica, la que redactaba las leyes y contratos necesarios para la venta de propiedades públicas. Tanto ECES como B&M constituyeron la base para el proceso de privatización empresarial y liberalización salvaje de la economía egipcia en el cambio de siglo. Los informes encargados por ECES dictaban, el Gobierno ejecutaba. El vínculo era tan fuerte que varios miembros del comité ejecutivo de ECES, como el propio Helmi, Mahmoud Mohieldin, Ahmed el-Maghrabi, Ahmed Ezz o el mismísimo hijo del dictador, Gamal Mubarak, estaban fuertemente vinculados con el partido gubernamental y con el Gobierno. Y, además, se veían beneficiados personalmente por aquellas privatizaciones. En 2005, cerca de 200 de las 315 empresas estatales habían sido ya

privatizadas, la mayoría de forma fraudulenta por debajo de su valor real de mercado. Según algunos informes del propio ECES, el país sólo había ingresado una décima parte del valor real de los activos vendidos en los últimos veinte años. Entre mediados de la década de 1990 y 2005, el número de trabajadores estatales se redujo en un 50%. Un 20% de los bancos estatales también habían sido transferidos al sector privado. Se construían zonas francas libres de impuestos, se agilizaba y facilitaba la creación de empresas, se recortaban las barreras arancelarias y se congelaban los salarios.

ECES nacía un año después de que Mubarak firmara con el Fondo Monetario Internacional el segundo de los cuatro paquetes de ayudas que marcarían su reinado. En la era del *rais*, Egipto acordaba cuatro programas con el FMI por un valor total de 1850 millones de dólares.[1] En 1991, Egipto entraba en la rueda del denominado Consenso de Washington, la receta económica de las instituciones financieras internacionales para los llamados «países en desarrollo». Esto agudizaría el proceso de liberalización económica iniciado por el presidente Anuar el-Sadat en los años setenta bajo el nombre de *infitah*, a través del cual Egipto se había alejado de las políticas de socialismo de Estado y control estatal de la economía, promovidas por el general Gamal Abd el-Nasser durante las décadas de 1950 y 1960. Aquel giro provocó un cambio de alianzas políticas en El Cairo, que pasó de la órbita soviética a los brazos de Estados Unidos a partir de los setenta.

La entrada de Egipto en el Consenso de Washington, a principios de los noventa, hizo que los precios de los productos agrícolas se liberalizaran y gran parte de los subsidios fueran eliminados. En 1992, se emitía la ley número 96, que liberalizaba la explotación de los arrendamientos de tierras, permitiendo a los propietarios el aumento de las rentas y la expulsión de los aparceros si así lo querían. La ley, que revocaba y acababa con la reforma agraria hecha por el presidente Abd el-Nasser en 1952, se haría efectiva cinco años después, poniendo punto de partida a la expulsión de los campesinos de las tierras y a la precarización de su situación económica y laboral. La oposición a la nueva ley originó cientos de encarcelamientos, denunciados por instituciones internacionales.

1 Información extraída de la página web del FMI.

En 1996, se ponía en marcha un nuevo proceso masivo de privatización empresarial. Eran los requisitos del tercer pacto de la era Mubarak con el FMI, esta vez por valor de 434,3 millones de dólares. A tal efecto, y diseñado por el vicepresidente estadounidense Al Gore, se realizó un cambio de Gobierno y se nombró a un nuevo gabinete liderado por Kamal el-Ganzouri. El cambio de Gobierno llevaba un claro sello norteamericano; el Congreso de EE.UU. aplaudía el cambio y alababa al nuevo ejecutivo que tenía «el encargo de liberalizar la economía desregularizando el sector comercial, aumentando la competitividad en el sector financiero y acelerando el camino de la privatización». Con este objetivo, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (USAID) comenzó a ofrecer una ayuda anual de 200 millones de dólares al Gobierno egipcio.[2] En pocos años, se habían creado o se crearían leyes para facilitar la creación de empresas (3/1998), para finalizar el control estatal sobre la producción (8/1997), para instaurar un moderno mercado de valores egipcio (95/1993), para liberalizar el mercado de telecomunicaciones (10/2003) o el mercado de exportaciones (155/2002). El proceso se aceleraría dramáticamente a partir de 2002 con la entrada del clan Mubarak en la dirección del oficialista Partido Democrático Nacional (PDN) y, en 2004, con la llegada del Gobierno de Ahmed Nazif, cuyo gabinete estaba repleto de nombres vinculados a ECES, los cuales aplicarían hasta el extremo la agenda reformista de las instituciones internacionales.

2 Jason Hickel: «The fallacy of freedom: USAID and neoliberal policy in Egypt», *Though Leader*, 15-03-2011 [*online*].

El mejor reformista del planeta

Según los analistas *neocons*, la reforma económica de Egipto funcionaba a las mil maravillas. El país agilizaba la creación de empresas, liberalizaba la moneda para atraer inversiones y cerraba acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos e, incluso, Israel. En este período, el Gobierno de Mubarak fue muy elogiado por el FMI y el Banco Mundial al haber alcanzado tasas medias de crecimiento del PIB del 8%. En 2007, llegaba a ser catalogado por el Banco Mundial como «el máximo reformista del planeta», un título que actuó como imán para inversores. El número de días en que se tardaba en abrir una empresa en el país caía de los 19 a los 7, entre 2007 y 2011, mientras que el número de formularios necesarios disminuía, en el mismo período, de 10 a 6. Según Doing Business, un proyecto dependiente del BM, Egipto se situaba como el país número 21 del mundo en facilidad para crear nuevos negocios, sólo superado en aquella región por la conservadora Arabia Saudí. Egipto se convertía así, según algunos informes, en el segundo lugar del planeta con más Mercedes-Benz en sus calles, sólo por detrás de Alemania. El crecimiento de su PIB era señalado por los analistas neoliberales como una prueba de que las recetas del llamado Consenso de Washington podían funcionar en los países en desarrollo. Todo funcionaba según los indicadores macroeconómicos.

Las consecuencias sobre el terreno, sin embargo, eran bastante más dramáticas.

La doctrina neoliberal transfería el sector público a manos de una minoría muy bien conectada. Las empresas eran malvendidas a especuladores que intentaban hacer más negocio con la venta de los terrenos o de la maquinaria que con la reactivación de la industria. Figuras cercanas al régimen se beneficiaban de las privatizaciones. La inversión extranjera, tan largamente publicitada, se limitaba básicamente a inversiones financieras y a la explotación de petróleo y gas, y generaba pocas ofertas de

trabajo. El resultado fue la concentración absoluta de la riqueza del país; el 80% se concentraba en menos del 20% de las manos.

Desde el inicio de estas políticas, la población que vivía por debajo del umbral de la pobreza (dos dólares diarios) pasó de un 20 a un 44% y en los últimos años de la era Mubarak, cuando el PIB registraba récords históricos alabados en el ámbito internacional, el porcentaje de población que vivía en la miseria (menos de un dólar al día) ascendía del 16 al 25,2%.[3] En 2011, más de quince millones de egipcios vivían con menos de dos dólares por día, pero sólo ocho hombres de negocios en todo el país controlaban un patrimonio superior a los dieciocho mil millones de dólares. Según el Programa Mundial de Alimentos, en la década 1995-2005, que siguió a la implementación del liberalismo del régimen de Mubarak, el coste de la vida en Egipto aumentó un 75%. En ese mismo período, el Gobierno de los tecnócratas reducía del 42 al 20% los impuestos a las grandes fortunas, equiparándolos a los que se aplicaban a pequeños propietarios con salarios de 350 euros anuales.[4] Según datos del Centro Egipcio para los Derechos Económicos y Sociales, mientras los impuestos a la industria representaban sólo un 13,2% de las recaudaciones, el ciudadano medio había experimentado un aumento de su contribución tributaria de un 330% a través de 29 tipos de impuestos y tasas directas sobre los productos. Las prestaciones sociales más básicas eran eliminadas y, en una sociedad en que cada año cerca de medio millón de personas contraían la hepatitis, los tratamientos fundamentales no estaban cubiertos por el Estado y, por tanto, no se encontraban al alcance de la mayoría de la población.

El recorte de los servicios fue sangriento. Entre 2002 y 2008, al menos dos mil personas perdieron la vida en accidentes de tren, incendios, derrumbes de viviendas, naufragios de

3 Sameh Naguib: *La revolución egipcia. Análisis y testimonio político*, En Lucha, 2012.

4 *Ibíd.*

embarcaciones y otros desastres con una relación más o menos directa con la Administración desmantelada por el régimen. En 2010, el World Economic Forum situaba el sistema educativo egipcio en la posición 135 (de un total de 139) en el *ranking* mundial, muy por debajo del nivel general de desarrollo del país (94, según el mismo estudio). El Gobierno egipcio se gastaba menos de 250 dólares anuales por estudiante en primaria. Mientras tanto, las familias gastaban entre diez y quince mil millones de dólares en clases de refuerzo para sus hijos.[5] Estas clases de refuerzo no eran más que el resultado de la corrupción instalada en el departamento de Educación: los profesores obligaban a los alumnos a tomar estas clases para poder completar sus exiguos sueldos que apenas si llegaban a los 30 euros mensuales. Dos terceras partes de las familias egipcias pagaban por estos servicios y para un 60% de ellas este gasto suponía, como mínimo, una tercera parte de sus magros ingresos.

Los salarios, además, seguían congelados a pesar de la inflación. El sueldo mínimo se situaba en poco más de cuatro euros mensuales desde 1984, mientras que la recientemente liberalizada libra egipcia perdía, desde 2004, un 40% de su valor. La liberalización de la moneda atraía a los inversores extranjeros, seducidos por el aumento de su poder adquisitivo, pero también provocaba una inflación galopante que golpeaba con dureza a las clases más desfavorecidas. En los primeros meses de 2009, 88 000 personas perdieron sus puestos de trabajo, llegando a un ritmo de tres despidos diarios en sectores como el turístico. A principios de 2011, cerca de cuarenta millones de personas (casi la mitad de la población) dependían de las cartillas de racionamiento del Estado. Las crisis climáticas, que afectaban a los suministros de trigo o azúcar, impactaban brutalmente en la frágil sociedad egipcia.

5 Ahmed Zewail: «Reflections on arab renaissance», *The Cairo Review of global affairs* [*online*].

La enorme dependencia alimentaria, especialmente en la importación del trigo o de la popular haba, debilitó con fuerza a una economía egipcia afectada por una inflación de los precios del 18,9%, en enero de 2011, un punto y medio por encima de la del mes de diciembre anterior. Productos como el tomate habían sufrido aumentos de hasta diez veces su precio.[6] Éste era el resultado de una balanza comercial que hacía que las importaciones superaran a las exportaciones aproximadamente en un 25%. Esta gran dependencia provocada por la liberalización del mercado volvía a la economía egipcia muy vulnerable a la crisis internacional. Utilizando como baremo el período 2008-2011, las remesas de inmigrantes caían un 17%, el turismo disminuía 25 puntos y aportaba una balanza negativa por primera vez en muchos años, mientras que los ingresos por el Canal de Suez descendían un 7,2%. Las exportaciones a Europa bajaron de un 33 a un 15% entre 2008 y 2009.

La situación límite en que vivía la población egipcia se expresaba, a menudo, de forma dramática. En marzo de 2008, morían, como mínimo, cincuenta personas en las colas de los hornos peleándose, literalmente, por una ración de pan. La crisis era causada por la especulación con los alimentos en el mercado internacional y agravada por la fuerte dependencia en que se sumía al país. En un territorio en el cual vivían cincuenta millones de personas del pan subsidiado, dos terceras partes de los más de nueve millones de toneladas de trigo necesarios para hacer este pan subvencionado eran importadas. Un 3% del PIB egipcio se destinaba exclusivamente a la adquisición de trigo.[7] Crisis similares se repetirían posteriormente, como la del suministro de gas butano en otoño de 2010.

Según informes del propio Gobierno, a finales de ese mismo año, se calculaba que más de doce millones de egipcios vivían

6 *The Arab Spring and Climate Change. A Climate and Security Correlations Series*, Center for American progress, 2013.

7 *Ibíd.*

en cerca de 1200 barriadas de chabolas que poblaban el país. Diecisiete millones de personas eran analfabetas y más de tres mil pueblos no tenían servicios sanitarios básicos. Pero el propio informe apuntaba que las cifras reales podían ser aún más escandalosas. Por ejemplo, en la provincia de Assiut, la proporción de pobreza era del 58,1% respecto al total de la población. En la de Sohag, era del 45,5%. El economista del centro de estudios económicos de Al-Ahram, Ahmed el-Naggar, afirmaba incluso que, en 2010, el 95% de los trabajadores del sector público, los funcionarios, vivían en niveles de pobreza.

En noviembre de 2009, Amnistía Internacional había alertado del riesgo de que la población más desfavorecida de la capital muriera enterrada bajo la miseria. «Alrededor de la mitad de los 13,5 millones de personas que, según cálculos, residen en el área metropolitana de El Cairo viven en asentamientos informales levantados en terreno agrícola o desértico.» Y el desastre tuvo lugar. El 6 de septiembre de 2008, un centenar largo de residentes del barrio informal de Duweiqa morían fruto de un desprendimiento. Una situación que contrastaba con el florecimiento de los llamados *compounds*, o barrios de lujo, que cada vez poblaban con más agresividad los alrededores de El Cairo o Alejandría. Con pomposos nombres en inglés (Hyde Park, Beverley Hills, Utopía o Evergreen) y lujosos centros de *spa*, golf o tenis, una villa podía fácilmente valer 4,5 millones de libras. Un precio que el trabajador que cuidaba el jardín tardaría un millar de años en cobrar, como destacaba un reportaje de Reuters.

Mientras la fortuna del *rais* era una auténtica incógnita, su población moría literalmente de hambre. Informes oficiales hablaban de una cantidad estimada en 1300 millones de dólares en efectivo, acciones empresariales y activos inmobiliarios por todo el país. Otros informes calculaban que esa fortuna oscilaba entre los 29 000 y los 50 000 millones de euros en residencias y cuentas corrientes repartidas por medio planeta. Sólo en Egipto, el clan familiar disponía de más de cuarenta villas y un millar de libras

en cuentas bancarias. Investigaciones posteriores revelarían que, sólo en Egipto, el *rais* disponía de tres cuentas bancarias secretas que superaban los nueve mil millones de dólares, la mayoría provenientes de ayudas internacionales a la cooperación para paliar los efectos del terremoto de 1992 o para el desarrollo del sistema educativo.[8] La corrupción mataba, literalmente, a cientos de personas en todo el país, pero la pobreza no parecía preocupar a Mubarak. «No hay que avergonzarse porque haya gente pobre en Egipto. Lo que tenemos que hacer es trabajar para dar a nuestro país una apariencia adecuadamente civilizada para atraer al turismo», afirmaba el entonces presidente.[9]

El clan Gamal y el peligro hereditario

La principal cara visible de aquel proceso de liberalización económica no fue otra que Gamal Mubarak, el flamante hijo del presidente egipcio. El hijo del *rais*, formado en Londres y de vocación claramente prooccidental, iba ganando peso político en el país y se empezaba a postular con fuerza como futuro presidenciable, al estilo de una república hereditaria similar a la del caso sirio. En 2002, en el octavo congreso anual del oficialista Partido Democrático Nacional (PDN), se creó la figura del secretariado político, al frente del cual se situó el hijo del dictador. Su carta de presentación era la pretendida modernización del país a través de la apertura de los mercados y su obsesión, alcanzar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Era prácticamente la misma hoja de ruta marcada por ECES que, de hecho, contaba con varios altos cargos entre los miembros del nuevo secretariado. A parte del propio Gamal,

8 Las anteriores cifras son referencias sacadas de noticias publicadas en *Ahram Online*, *The Guardian*, *Egypt Independent* y el periódico *Shorouk*, respectivamente.

9 Citado en Sonallah Ibrahim: *Zaat*, The American University in Cairo Press, El Cairo, 2004.

estaban allí Tamer Helmi, Ahmed Ezz, Mahmoud Mohieldin, Ahmed el-Maghrabi o Hussam Badrawi.

La entrada en juego de Gamal se hizo notar con rapidez. Dos años después, en el verano de 2004, Ahmed Nazif era nombrado nuevo primer ministro en sustitución de Atef Ebeid. Nazif, que, como ministro del anterior ejecutivo, había iniciado el proceso de liberalización del mercado de telecomunicaciones egipcio, organizaba ahora un nuevo Gobierno con cambios básicamente estéticos, llamando a la reactivación económica como principal objetivo. Lo más relevante, sin embargo, era que formaba parte de un ejecutivo tecnócrata con la presencia de varios nombres cercanos a Gamal Mubarak y al círculo de ECES. Casi la mitad de las carteras iban a parar a personajes considerados próximos al hijo del *rais:* era la llamada «sociedad del futuro». Entre ellos, destacaban los auténticos cerebros del aperturismo económico más agresivo, el Trío de Gamal: el ministro de Comercio e Industria, Rachid Mohamed Rachid, el de Finanzas, Youssef Boutros Ghali, y el de Inversiones, Mahmoud Mohieldin. Era la versión egipcia de los *chicago boys* de Friedman, los caballeros del liberalismo económico en el valle del Nilo.

Tanto Rachid Mohamed Rachid como Mahmoud Mohieldin eran miembros del ejecutivo de ECES y este último, además, compatibilizaría su cartera ministerial con su posición como representante del Banco Mundial en El Cairo. Mientras Mohieldin firmaba la venta de empresas estatales por debajo de los precios del mercado, era alabado por el Banco Mundial en sus informes de 2008 y 2009. Pero la dualidad de cargos no representaba ningún problema para el Gobierno de Nazif. Youssef Boutros Ghali, por su parte, compaginó su cargo como máximo responsable de las finanzas egipcias con el de presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI. Este tecnócrata ya había sido miembro destacado del FMI en la década de 1980, y negoció luego, en nombre de Egipto, la deuda externa del país y la aplicación de las políticas de

privatización. Todo para, poco después, a partir de octubre de 2008, volver al FMI y presidir el comité financiero de la entidad, a la vez que se ponía al frente de la cartera ministerial en Egipto. Ghali negociaba a ambos lados de la mesa.

Cuatro meses antes del levantamiento de enero de 2011, el ex ministro egipcio Mahmoud Mohieldin era premiado con una de las tres direcciones generales del Banco Mundial en Washington DC. Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial lo calificaría como un «inagotable reformador» que había permitido a Egipto «capear la crisis financiera internacional».[10] Paradójicamente, Mohieldin fue nombrado presidente del Programa para la Reducción de la Pobreza del Banco Mundial. El ministro de Inversiones de un país que se hundía en el abismo de la fractura social presidía el Programa de Reducción de la Pobreza del Banco Mundial, cargo que había logrado después de multiplicar por diez las deudas contraídas entre Egipto y el BM en proyectos preparados por su pareja, trabajadora de la oficina cairota de esta institución internacional.

El cambio de Gobierno de 2004 sorprendió a varios analistas, sobre todo porque no respondía a las necesidades ni reclamaciones políticas del momento. A un año de las elecciones presidenciales, el movimiento era visto por muchos como una forma de allanar el camino hacia la presidencia a Gamal, que por entonces tenía 41 años. Aquel verano de olimpíadas, el régimen colgaba imágenes gigantes del hijo del *rais* rodeado de los cinco medallistas de Atenas. Sólo la oposición puso el grito en el cielo y forzó al régimen a retirar los anuncios. Pero los temores aumentaron cuando la guardia cercana al hijo del dictador salía reforzada del congreso anual del oficialista Partido Democrático Nacional. El lema de Gamal, secretario del Comité Político del partido, era el de la liberalización de la economía y la apertura de los mercados.

10 Nota de prensa 2011/081/EXC del Banco Mundial, con fecha del 8 de septiembre de 2010.

El nuevo ejecutivo aceleró la reforma. Si el año antes de la entrada de Nazif el Gobierno había privatizado nueve empresas, durante los dos primeros años del nuevo Gobierno se privatizaron 59. El ejecutivo también recortó los aranceles aduaneros, estableció un tribunal mercantil, una ley antitrust o la agilización de los trámites para la creación de empresas. Pero las reformas beneficiaban sólo a unos pocos; las prácticas corruptas se comían el pastel. Algunos informes hablaban de pérdidas anuales de 4500 millones de euros por la corrupción.[11] Las privatizaciones caían siempre en manos cercanas al régimen y, en varias ocasiones, incluso se derivaban a gente vinculada al propio ECES, el *think tank* creado por la USAID. Ése fue el caso de gente como Ahmed Ezz, figura destacada del Centro de Estudios Económicos y del PDN, además de presidente del Comité Presupuestario del Parlamento, que en poco tiempo pasó de controlar el 35% del sector nacional del acero a hacerse con el 60%, provocando un encarecimiento del 70% del producto. Todo gracias a la deliberada falsificación de presupuestos de empresas estatales para comprarlas por debajo de su valor de mercado.

Otra destacada figura del ECES fue el ministro de Vivienda Ahmed Maghrabi. Que éste fuera a la vez inversor inmobiliario no parecía un problema como tampoco lo fue que firmara varias ventas de terreno público a entidades que le eran afines. Según destaparía la prensa local, el propio Gamal Mubarak especuló durante años con la compraventa de deuda pública egipcia. Primero a través de su posición como trabajador en la oficina cairota del Banco de América, posteriormente con una empresa radicada en el paraíso fiscal de las Bahamas y, finalmente, con la compañía Medinvest, creada en Londres para esta finalidad, junto con su hermano Alaa. Gamal se convertía así en el nuevo *rais* y hacía y deshacía a su antojo.

11 «Egypt lost $57.2 Billon From 2000-2008», Financial Transparency Coalition, 26-01-2011 [*online*].

Las calles hablan

En la arena política, el miedo a una sucesión hereditaria del poder era recibida con inquietud. En mayo de 2003, varias formaciones (entre ellas el Wafd, el Karama o el Tagammo) formaban el Frente Nacional y reclamaban reformas urgentes. Entre éstas, el fin de la ley de emergencia vigente en el país desde hacía tres décadas y la elección directa del nuevo presidente. La iniciativa, que moriría tan rápido como había nacido, seguía la estela del Comité en Defensa de la Democracia creado pocos meses antes. Más relevante sería, sin embargo, la creación de otra agrupación surgida de las sinergias generadas contra la guerra de Irak. Era el Movimiento Popular por el Cambio 20 de Marzo, que recordaba la histórica ocupación de Tahrir a raíz de la invasión militar de Irak. Las críticas a la Casa Blanca, vista como la principal aliada de Hosni Mubarak, y a la política exterior de Estados Unidos en la zona se convertirían en una válvula de escape ideal para atacar al propio régimen egipcio. Las protestas contra Estados Unidos fueron, de hecho, la cuna de estos movimientos de oposición, nacidos media década antes de la aparición de Gamal Mubarak en escena.

En diciembre de 1998, Estados Unidos y el Reino Unido iniciaban la llamada «Operación Zorro del Desierto» contra Irak. Fue una campaña de cuatro días de bombardeos en medio de la crisis por el desarme del régimen de Sadam Hussein. Sin embargo, muchos interpretaron el ataque como una cortina de humo de la Casa Blanca para distraer a la opinión pública del proceso de incapacitación contra el entonces presidente Bill Clinton, salpicado por la polémica del caso Lewinski.

La ofensiva contra Irak provocó manifestaciones de miles de egipcios a las puertas de la Universidad Americana, ubicada en la céntrica plaza Tahrir. Varias personas hicieron pública su intención de pasar la noche en la plaza hasta que la policía dispersó la concentración y detuvo a algunos participantes. Era la

primera vez en décadas que una protesta política llegaba al corazón de la capital egipcia y desafiaba los diecisiete años de ley de emergencia vigente en el país. Se superaba así la dinámica de los últimos años: protestas obreras, campesinas y estudiantiles aisladas y silenciadas de forma radical por los medios de comunicación.

La escena se repitió durante la Segunda Intifada en Palestina, en septiembre de 2000. La provocadora visita del presidente israelí Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas de Jerusalén generó una escalada en la confrontación entre los palestinos y la entidad sionista. El punto culminante llegó con la difusión, a través de los canales por satélite, de la muerte del niño palestino Mohamed el-Durra, de tan sólo nueve años, a manos de un francotirador israelí. La imagen, que generaría polémica en círculos prosionistas que dudaban de su veracidad, surtió efecto. La impactante visión conmocionó a la opinión pública pro Palestina y, entre otros, lanzó a la calle a miles de egipcios. Se organizaron manifestaciones, huelgas de hambre y acampadas mientras se formaba el Comité Popular Egipcio en Solidaridad con la Intifada, que agrupaba a una veintena de organizaciones no gubernamentales y tejía una red asociativa en todo el territorio. La proliferación del Comité permitiría, posteriormente, la convocatoria de una protesta en la plaza Tahrir para condenar el apoyo estadounidense y egipcio al Estado de Israel y el afianzamiento de vínculos clave entre los movimientos de oposición al régimen. El Comité Popular también sería una de las bases para la organización, en diciembre de 2002, de la Primera Conferencia contra la Guerra, impulsada por la Campaña Popular Egipcia para Enfrentarse a las Agresiones Americanas.

La guerra fue, precisamente, lo que volvió a llevar a la gente a la plaza. El 20 de marzo de 2003, decenas de miles de activistas ocuparon Tahrir en rechazo a la nueva invasión estadounidense de Irak. Esa misma noche comenzaba la Operación Nueva Alba, de la que el régimen de Mubarak era considerado cómplice. El presidente egipcio, según reveló Wikileaks posteriormente, habría alertado a la Casa Blanca de los riesgos estratégicos de una invasión de Irak, pero su papel fue clave para dar luz verde al ataque norteamericano. Bush afirmaba después en sus memorias que había sido el dictador egipcio quien le había convencido de la existencia de armas químicas en Irak.

Algunas de las declaraciones que se consideraron claves para llevar adelante la invasión habían sido extraídas bajo tortura en las cárceles egipcias dentro del episodio de los aviones fantasma de la CIA en la llamada «guerra contra el terror». Egipto era aeropuerto habitual para aquellos aviones no registrados y sus prisiones, el escenario de brutales torturas para conseguir cualquier tipo de confesión. Las arrancadas bajo tortura a Ibn el-Cheik el-Libi en Egipto en 2002 y que hablaban de un falso aprovisionamiento iraquí de armamento químico relacionado con una extraña vinculación entre Saddam Hussein y Al-Qaeda, habrían sido consideradas claves para el inicio de la guerra.[12] Los detalles de su confesión habrían sido utilizados por Colin Powell en su defensa de la invasión ante las Naciones Unidas en febrero de 2003.

El caso de los aviones y las detenciones secretas se destapaba en enero de 2010 en un informe de las Naciones Unidas. Un documento elaborado por cuatro investigadores acusaba a Egipto y a otros países del llamado «Tercer Mundo» del secuestro y detención, en prisiones clandestinas, de presuntos terroristas durante los nueve años anteriores, violando sus derechos más fundamentales, bajo el encargo de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, la CIA. Omar Suleiman, jefe de los servicios secretos egipcios, estaba detrás de la organización de estos aviones de la muerte, enmarcados en la esquizofrénica guerra contra el terror que habían emprendido George Bush y la Casa Blanca. El informe, dirigido por Manfred Nowak, relator especial sobre la tortura para la ONU, y Martin

12 *Globalizing torture. CIA secret detention and extraordinary rendition*, Open Society Justice Initiative, 2013.

Scheinin, relator especial de asuntos de terrorismo y derechos humanos, señalaba que el objetivo de este tipo de detenciones era facilitar la tortura y los tratos inhumanos y degradantes para conseguir informaciones o silenciar a la gente. En la lista de destinos de presos se encontraban también Etiopía, Yibuti, Jordania, Marruecos, Pakistán, Siria, Tailandia, Polonia o Rumanía. El máximo responsable egipcio de estas sesiones, Omar Suleiman, calificado por *Foreign Policy* como uno de los más influyentes jefes de espionaje del mundo, era conocido con el apodo de «Torturador en Jefe de Egipto» y tenía fama de despiadado. Según explica el periodista Ron Suskind, cuando la CIA reclamó a Suleiman que les enviara una prueba de ADN de un familiar del jefe de Al-Qaeda, Ayman el-Zawahiri, él decidió enviarles un brazo entero.[13]

Los vínculos entre El Cairo y Washington eran fuertes. De hecho, Egipto era el segundo receptor mundial de ayuda estadounidense, por detrás de Israel. Desde que se sellaran en Camp David, en 1979, los acuerdos de paz entre El Cairo y Tel Aviv, la alianza entre Egipto y Estados Unidos quedó marcada por la presencia de Israel. Aquellos acuerdos de paz provocaron la muerte de Sadat, asesinado en 1981 por militantes yihadistas durante un desfile militar, pero Mubarak hizo todo lo posible para construir su estabilidad sobre ese documento altamente impopular. El Cairo, además, servía de aliado estratégico de la Casa Blanca para mediar en las negociaciones con los palestinos. El jefe del espionaje egipcio, Suleiman, volvería a ser clave para cocinar el golpe de Estado contra Hamás en 2006.

La presencia de Estados Unidos en Egipto se ejemplificaba de forma simbólica con la monumental embajada en el centro de El Cairo, el cuerpo diplomático estadounidense más grande del mundo para la época, y se consolidaba con una ayuda económica esencial —de 64 000 millones de dólares, entre 1979 y 2009, según el Congressional Research Report—, la práctica totalidad de la cual iba a las opacas arcas del omnipotente Ejército egipcio. De los 1500 millones de dólares anuales de ayuda norteamericana, 1300 iban a las Fuerzas Armadas año tras año; un cheque en blanco para mantener la difícil estabilidad en la zona o, lo que es lo mismo, a costa de las libertades políticas y sociales. Para los estadounidenses, la inversión valía la pena. *The New York Times* ya lo describía con claridad en la década de 1980: «Los líderes egipcios se lo pensarán dos veces antes de adoptar ninguna posición que pueda llevar al fin de la ayuda».[14] Esta dependencia económica sólo era superada por los tres mil millones de dólares anuales que recibía —y aún recibe— Israel de la Casa Blanca, lo que demuestra el interés de Washington en la región.

La calle era consciente de esta situación. Aquel 20 de marzo de 2003, y a raíz de la invasión militar estadounidense de Irak, se quemaron banderas de Israel y Estados Unidos en la plaza Tahrir, pero también, por primera vez, se destrozaron carteles con la cara del dictador egipcio. La histórica ocupación de la plaza, con unos veinte mil participantes, se mantuvo durante casi 24 horas. Durante su desalojo, fueron detenidas 800 personas. Mientras tanto, los Hermanos Musulmanes se unían hipócritamente al Partido Democrático Nacional de Mubarak en una protesta oficialista contra la invasión de Irak en el estadio de El Cairo. El régimen, que trataba de lavarse la cara internamente, se aliaba con la oposición islamista para denunciar públicamente una operación militar que él había ayudado a cocinar.

Durante esos mismos días, Hosni Mubarak provocaba la indignación popular con un discurso en el que acusaba a Sadam Hussein de ser el responsable de la guerra. Un grupo de 29 intelectuales, entre los que se encontraban destacados jueces y

13 Mathew Cole y Sarah O. Wali: «New egyptian VP ran security team, oversaw torture», *ABCNews*, 01-02-2011 [*online*].

14 Citado en Sonallah Ibrahim: *Zaat*, The American University in Cairo Press, El Cairo, 2004.

escritores, respondían al dictador con una carta en la que dejaban claro su desacuerdo con las palabras del *rais*. Era la primera vez que, con nombres y apellidos, se hacía pública una crítica tan evidente al presidente. Hubo también una segunda versión del comunicado, que fue firmada esta vez por el presidente del Club de Jueces Zakaria Ahmed Abd el-Aziz.

Las protestas relacionadas con la política exterior se fueron convirtiendo de manera espontánea en muestras del descontento interno. Lo que parecían simples y aisladas expresiones de solidaridad internacional eran, de hecho, la piedra fundacional del movimiento de insurrección contra el régimen que estaba por venir. Del descontento contra la guerra en Irak, surgirían movimientos políticos relevantes, encabezados por movimientos seglares de izquierda, que se convertirían en un músculo importante de la oposición al régimen.

Ese mismo verano se puso en circulación una petición que reclamaba reformas constitucionales y económicas profundas, así como elecciones directas con pluralidad de candidatos. Aquella circular fue firmada por trescientas personalidades y sería el paso previo al manifiesto del juez Tareq el-Bishr, considerado el comunicado fundacional del Movimiento Egipcio para el Cambio, popularmente conocido como *Kefaya* («Basta», en árabe), y que hacía un llamamiento a la desobediencia civil de todos los egipcios. Era la primera vez que se lanzaban consignas directas contra la sucesión hereditaria del poder que representaba Gamal Mubarak, que en septiembre de 2004 emergió como la principal figura del Partido Democrático Nacional. La oposición —una quincena de formaciones políticas, incluidos los Hermanos Musulmanes y el Movimiento del 20 de marzo— ponía en marcha el Movimiento Popular por el Cambio contra la sucesión hereditaria, pero con el tiempo se demostraría que la aparición de Gamal Mubarak en escena inquietaba también a importantes facciones del régimen.

Nace Kefaya

El 12 de diciembre de 2004, el movimiento Kefaya hacía su primera aparición pública y llamaba a una manifestación a las puertas de la Corte Suprema, en El Cairo, en lo que sería la primera concentración de la historia específicamente convocada contra el régimen de Hosni Mubarak. Varios cientos de activistas se reunieron mayoritariamente en silencio, tapándose la boca con adhesivos de la organización. «No a la renovación, no a la sucesión hereditaria», era su lema principal.

El Gobierno, ante ese movimiento urbano formado por gente de clase media y alta que se expresaba frente a la prensa y las cámaras de televisión, se mostró nervioso y, puesto que no podía aplastarlo con la brutalidad que hubiera querido, recurrió a tácticas más propias de gángsters. Un mes después del texto de El-Bishr, la policía detuvo, golpeó y abandonó desnudo en medio de la Carretera del Desierto, que une la capital con la costa mediterránea, al periodista Abd el-Halim Qandil, portavoz de Kefaya. Creado al abrigo de la izquierda egipcia y también de sectores del nasserismo, este movimiento rompía un tabú histórico; su particularidad era la capacidad de reunir a formaciones completamente encontradas del espectro político para plantear una oposición conjunta al régimen de Mubarak: desde los islamistas históricos, los Hermanos Musulmanes, hasta los nasseristas del Karama, el ilegalizado Partido Comunista o el centro de derechos humanos Hisham Mubarak. Esta transversalidad era completamente nueva en Egipto y reforzaba la figura del movimiento opositor. A pesar de su incapacidad para romper las barreras sociales del país y ofrecer soluciones plausibles, su creación marcaba un antes y un después en el activismo político del país. Kefaya organizó nuevas protestas en la Feria del Libro de El Cairo y a las puertas de la Universidad en una escalada de confrontación histórica.

El régimen de Mubarak empezó a acusar a las campañas por el cambio de haber recibido setenta millones de dólares de

manos extranjeras. Este movimiento antagonista comenzaba a captar ligeramente la atención de la comunidad internacional, para quien Egipto se encontraba políticamente «congestionado», con una oposición incapacitada para provocar un cambio real y un Gobierno incapacitado para reprimir las manifestaciones como quisiera. Así lo declaraban responsables oficiales egipcios a la BBC.

Está claro que la aparición de Kefaya provocó un cambio en el activismo político egipcio. El año 2005 estuvo cargado de protestas y movilizaciones en universidades y calles. Algunas llevaban el sello de los Hermanos Musulmanes, principal fuerza de oposición, mientras muchas otras tuvieron lugar en el ámbito estudiantil. Alrededor de Kefaya se crearon asociaciones como Jóvenes por el Cambio, Escritores por el Cambio, Trabajadores por el Cambio, Doctores por el Cambio o Periodistas por el Cambio. También la Asociación de Madres de Egipto, la Campaña Nacional del Perdón o las marchas de «La calle es nuestra».

Sin embargo, la movilización fue contestada. El régimen arrestó a Ayman Nour, un político opositor liberal, a quien acusaron de falsificar firmas para la formación de su partido, el Ghad. El encarcelamiento del político alejandrino provocó una pequeña crisis con Condolezza Rice, que se negó a visitar el país y forzó a una delegación de la Unión Europea a ir a Egipto y presionar hasta conseguir su liberación mientras esperaba sentencia. La detención de Nour parecía sólo una pieza más del rompecabezas egipcio y se dio justo antes del anuncio de reforma del artículo 76 propuesta por el régimen. Esta reforma constitucional forzada por la tenue presión internacional, de cara a celebrar las primeras elecciones multipresidenciales de la historia de Egipto, sustituía el antiguo referéndum en que la población avalaba al candidato presentado por el Parlamento. Esta propuesta, que generaba muchas dudas, era calificada de «teatral» y de intento de «reformular la dictadura» por los miembros de Kefaya, además de que se presentaba ofreciendo

poco tiempo de reacción, a las puertas del cierre de inscripciones para los votantes. Según la nueva redacción, un candidato debía recibir el apoyo de 250 parlamentarios o miembros electos de los órganos oficiales, que eran controlados por completo por el PDN de Mubarak. Los partidos políticos podían presentar candidatos, pero necesitaban tener un mínimo de un 5% de los asientos parlamentarios y cinco años de vida legal autorizada por el régimen. A la práctica, todo conducía a una aceptación previa y tácita del Gobierno. «El PDN no sólo quiere escoger su candidato, sino que también quiere escoger el de la oposición», afirmaba Hussein Abderrazzek, del partido Tagammo.

El período electoral de 2005

El anuncio de reforma constitucional abría un triple período electoral en el país en menos de seis meses —referéndum en mayo de 2005, presidenciales en septiembre y legislativas a finales de año—, que formaba parte de la agenda aperturista prometida por la nueva dirección del partido, presionada por la Administración Bush. Desde 2003, la estrategia política de la Casa Blanca se había centrado, al menos en apariencia, en reforzar el programa de democratización de Oriente Próximo. Para los técnicos estadounidenses, había un vínculo entre la frustración provocada por el autoritarismo y el auge del terrorismo en la zona, por lo que Estados Unidos reforzó los programas de democratización en la zona a través de la MEPI (Middle East Partnership Initiative) o la USAID presionando a sus aliados políticos en este sentido. Y Egipto era uno de sus socios privilegiados. La agenda reformista, sin embargo, aquel año de elecciones sufriría un fuerte viraje.

En la calle, el activismo aumentaba para hacer frente a las intenciones del régimen, denunciadas como poco legítimas, pero se mostraba todavía demasiado tierno para generar resultados

inmediatos. En abril, 1200 miembros del Club de Jueces amenazaron en Alejandría con no supervisar las elecciones si no se garantizaba la independencia de su trabajo. Por otro lado, dos mil profesores universitarios hicieron público su boicot al proceso. A las puertas de las votaciones, novecientos miembros de los Hermanos Musulmanes, entre los que figuraban algunas figuras dirigentes, fueron detenidos tras convocar manifestaciones reclamando reformas. En los enfrentamientos con la policía, murió un miembro de la formación llamado Tareq Mahdi. A pesar de la tensión, el referéndum tuvo lugar el 25 de mayo. Ese mismo día, una protesta convocada por Kefaya a las puertas del Colegio de Periodistas era atacada por matones contratados por el régimen y policías de paisano. Varias mujeres denunciaron agresiones y se dio a conocer el caso de Nawal Ali quien denunció que, a las puertas el Colegio de Periodistas, había sido despojada de su ropa por los policías y vejada públicamente. Aparte de ese incidente, las votaciones transcurrieron con relativa tranquilidad. Y, aunque las cifras oficiales hablaron de un 52% de participación, algunos observadores afirmaron que ésta no había sido superior al 5% y, como era de esperar, el resultado fue el apoyo oficial total a la propuesta del régimen.

La situación abrió las puertas a la celebración de las primeras elecciones multipresidenciales del país, previstas para el 7 de septiembre. Lejos de ser libres, estos comicios se hacían eco de una lucha por el poder creciente en el país. El 30 de julio, en una manifestación en El Cairo contra la intención de Mubarak de presentarse a una nueva legislatura, dos mil partidarios de Kefaya fueron atacados por matones y policías de paisano. La agresión se repitió el 7 de septiembre, cuando un grupo de manifestantes pedía el boicot al proceso electoral en el centro de la capital.

Ayman Nour, el político liberal que había sido encarcelado a principios de año, participó en aquellas elecciones en las que los partidos de izquierda optaron por el boicot. Era el único candidato con una mínima independencia del régimen de una

lista de diez, entre los que también destacaba Numan Guma, miembro del nacionalista Wafd. Un 88,6% de los votos apoyaron a Mubarak. Pero la bajísima participación revelaba que sólo unos seis millones de egipcios, de un total de 32 millones con derecho a voto de setenta millones de ciudadanos, habían apoyado al presidente. La Comisión Electoral otorgó a Ayman Nour sólo un 7% de apoyo, pero éste pagó cara su osadía de intentar hacer frente al *rais*. Justo después de las elecciones, los tribunales volvían a enviarlo a prisión con una condena de cinco años por falsificación de firmas. A pesar de su diabetes, el político opositor mantuvo una huelga de hambre de dos semanas para denunciar su situación. Sin embargo, no tuvo demasiado éxito ya que su liberación se produjo cuatro años después, como una muestra de buena voluntad del clan Mubarak hacia el nombramiento de Obama como nuevo presidente de Estados Unidos. Nour se había convertido en una carta política que el régimen jugaba con Washington.

El proceso electoral, no obstante, fue aplaudido por el régimen enérgicamente y tanto la monarquía saudí como el departamento de Estado de Estados Unidos alabaron las elecciones, en lo que consideraron un «histórico punto de partida».[15] Pero los comicios tuvieron muchos puntos oscuros. Se denunció el transporte de votantes, la coacción en el voto o el cierre de colegios electorales teóricamente no adeptos al régimen. En algunos centros se denunció el voto repetido y continuado de algunos electores y la falsificación premeditada de papeletas; algunas organizaciones hicieron pública la proliferación de la compra de votos. El régimen también negó la visita a observadores internacionales, acusados de interferir en los asuntos internos de la nación.

Sin embargo, los resultados fueron utilizados por el Gobierno para demostrar su salud y fortaleza. Pese a que los medios oficialistas pronosticaron la muerte del movimiento Kefaya, el

15 «Mubarak wins Egypt vote», *CBSNews*, 11-02-2009 [*online*].

día de la nueva investidura del presidente se reunieron unas cinco mil personas en las calles de El Cairo para gritar contra Mubarak. «Seis millones dicen sí, pero setenta dicen no», era la consigna de los manifestantes.

Dos meses después, el régimen volvía a ponerse a prueba. Entre el 7 de noviembre y el 5 de diciembre se celebraron las elecciones legislativas: 32 millones de egipcios fueron llamados a las urnas en más de 222 demarcaciones electorales para elegir a los 444 representantes parlamentarios, de entre más de 7000 candidaturas. La presión reformista internacional, sobre todo proveniente de la Casa Blanca, había provocado algunos cambios dentro de la ley electoral y se habían aprobado algunas medidas aperturistas que propiciaban una mayor participación política. Los cambios, evidentemente, fueron publicitados por el régimen que veía la oportunidad de afianzar su legitimidad y, de rebote, su control sobre el país. Estas medidas se anunciaron a bombo y platillo, como si se tratara de las primeras elecciones limpias de la historia del país.

Aparentemente, los informes de los servicios secretos habrían planteado a Mubarak que unas elecciones mínimamente limpias no iban a hacer peligrar su poder y que, aunque el descontento era generalizado, los Hermanos Musulmanes, principal grupo de oposición, no podría alcanzar más de treinta escaños. Pero los resultados sorprendieron a todos. En la primera vuelta, los Hermanos Musulmanes sacaron cerca de un 70% más de votos de los que el régimen esperaba. De hecho, estos resultados también sorprendieron a la propia Hermandad, que no parecía preparada para los mismos a tenor de los comentarios que hicieron sus estupefactos líderes durante toda la jornada. La situación inquietó mucho al Gobierno, que contraatacó en la segunda vuelta.

Mubarak dio marcha atrás en la agenda aperturista y sacó de nuevo la carta represiva. Algunos activistas de la Hermandad fueron detenidos, se extendió el fraude electoral y las fuerzas policiales sitiaron algunos colegios electorales, sobre todo

los más favorables a grupos islamistas opositores, para impedir el voto. El régimen extendió el uso de alborotadores a sueldo, popularmente conocidos como *baltagueya*, para sembrar el caos junto a las urnas. Frente a estos disturbios, la policía no intervenía «para mostrarse neutral» y, cuando lo hacía, llevaba a comisaría a los miembros de la Hermandad. Los comicios dejaron doce muertos en enfrentamientos a la puerta de los colegios electorales, más de setecientos heridos y dos mil detenidos, más de un millar de los cuales eran miembros de los Hermanos Musulmanes.[16] Se presentaron más de 158 denuncias de irregularidades y, aunque las cifras oficiales estimaban la participación en un 25%, varios observadores la consideraron claramente inferior.

Los Hermanos terminaron alcanzando 88 escaños, pero se cree que les hubieran correspondido 128. Nada comparable a los 311 diputados del oficialista PDN, que ganó el 68,5% de la cámara. El PDN perdió 93 asientos, pero se garantizaba, por nueve diputados, la mayoría de dos tercios que le seguía asegurando el control de la reforma constitucional. A pesar del fraude, la formación islamista quintuplicó su fuerza en el Parlamento y puso de manifiesto un nuevo equilibrio de poderes en el país. Ningún otro grupo de oposición sumaba el 5% de la cámara porque todas eran formaciones ilegales que sólo podían presentar candidatos individuales. La primera fuerza parlamentaria de la oposición fue en esas elecciones el histórico partido nacionalista del Wafd, con un 1,3%.

Estos resultados electorales supusieron un auténtico terremoto político. Algunos lo achacaron a una maniobra del Ministerio del Interior en connivencia con los servicios secretos, que estaban rabiosos con el auge del clan Gamal y el aperturismo estadounidense. El núcleo duro del régimen veía con inquietud y desconfianza aquel proceso y ésta podría haber sido su hábil

16 Sharon Otterman: «Muslim Brotherhood and Egypt's Parliamentary Elections», Council on Foreign Relations, 01-12-2005 [*online*].

forma de contraatacar. El Gobierno, nervioso, aplazó dos años las elecciones municipales previstas para el mes de abril siguiente. Y es que, aunque los islamistas no tenían un peso político real, habían hecho patente su presencia. El cambio de estrategia del régimen de Mubarak, cortando la agenda aperturista, inquietó a algunos pero, aunque la amenaza de una victoria islamista parecía pesar, la Casa Blanca no se atrevió en ese momento a alterar el statu quo.

Poco después de las elecciones de Egipto, vino el triunfo de Hamás en los territorios palestinos ocupados. El éxito del grupo islamista, que no fue reconocido por Fatah y llevó al enfrentamiento entre ambas facciones y al aislamiento de Hamás en Gaza, puso en alerta a Washington. Después de lo sucedido en Egipto con los Hermanos Musulmanes, se convencieron de que una democracia en Oriente Próximo podía llevar al poder al islamismo político, algo que el ejecutivo Bush no quería imaginar ni en pintura. Por lo tanto, se renovó la permisividad con los abusos del régimen contra el proceso de democratización y se entregó un nuevo cheque en blanco al clan Mubarak. La agenda autoritaria volvía a estar sobre la mesa.

El régimen volvía a sentirse fuerte, incluso de cara al exterior, pero la respuesta no tardó en volver a las calles. Pocos meses después, en la primavera de 2006, casi nueve mil letrados, representados por el Club de Jueces, plantaron cara al régimen reclamando la independencia judicial. Era una reacción a la voluntad de Mubarak de juzgar a dos destacados colegiados que habían denunciado la manipulación del voto en las elecciones de octubre de 2005. Los jueces Mahmoud Mekki y Hisham el-Bastawisy, a quienes se les había negado poder realizar el control de transparencia de las votaciones, abanderaron por un tiempo la lucha por la separación de poderes y exigieron la nulidad del proceso electoral. Ambos jueces habían denunciado el fraude cometido por algunos de sus compañeros, que habrían dejado pasar, a pesar de las evidencias, algunos de los fraudes cometidos por el régimen. La movilización de los jueces provocó muestras de solidaridad de todos los movimientos demócratas y pro derechos humanos y originó un fuerte debate público en los medios y la detención de varios activistas que habían apoyado la causa de los jueces, sobre todo en la Red. Entre éstos se encontraba Alaa Abd el-Fattah, hijo del abogado activista Ahmed Seif, creador del Centro Hisham Mubarak. La presión dio resultados cuando el régimen se vio forzado a absolver a los encausados.

Pero el Gobierno, legitimado después del juego electoral, continuaba adelante con su deriva represora como si nada hubiera ocurrido. El dictador decidió hacer frente al desafío de los jueces rebeldes y, en diciembre de 2006, propuso la enmienda de 34 artículos constitucionales; entre otras, la supresión de la supervisión judicial de las elecciones —en el artículo 88—, limitándola sólo a las sedes centrales. También se incluía la modificación del artículo 179 que daba rango constitucional a los juicios militares a la población civil y permitía la intervención policial de domicilios sin autorización judicial previa, algo que de hecho ya era una práctica habitual gracias a la ley de emergencia vigente en el país desde la llegada del propio Mubarak. El régimen lo presentaba como una reforma necesaria para cumplir la promesa electoral de derogar la ley de excepción. Este cambio constitucional sería aprobado en un referéndum sin supervisión judicial, en marzo de 2007. Habían pasado menos de dos años de la consulta anterior. Y, a pesar de que la participación según cifras oficiales no superaba el 27%, el dictador afirmó que el gran triunfador había sido «todo el pueblo de Egipto».

Mubarak y los Hermanos Musulmanes

El 22 de marzo de 1928, Hassan el-Banna se reunía en la ciudad de Ismailiya con seis compañeros de trabajo de la Compañía del Canal de Suez. Lejos de imaginárselo, estos siete hombres

se encontraban a punto de crear la que sería una de las más influyentes asociaciones de los tiempos modernos. Nacían así los Hermanos Musulmanes, una histórica formación que ocho décadas después contaría con una presencia destacada en una quincena de países, en la mayoría de los cuales figuraba como el principal grupo de oposición. Los Hermanos Musulmanes son un auténtico imperio internacional en red, político pero también social y económico con conexiones en todo el planeta.

El grupo nacía influenciado por el movimiento de renacimiento islamista planteado por Muhamad Abduh, defensor de un panislamismo que combatiera el colonialismo europeo. Esto convirtió a los Hermanos Musulmanes en una opción muy popular en la zona del Canal de Suez, donde la presencia británica era más destacada; desde allí, se fue expandiendo poco a poco. La Hermandad participó de forma activa en el levantamiento de los oficiales libres que puso fin a la monarquía y el dominio británico en el país en 1952. Pero las luchas de poder, las discrepancias políticas y el enfrentamiento entre Gamal Abd el-Nasser y líderes islamistas como Sayed el-Qotb rompieron el romance.

El 26 de octubre de 1954, Nasser sufría un intento de asesinato en Alejandría. El régimen acusó a la Hermandad de estar detrás del complot y el presidente ilegalizó la formación arrestando a treinta mil de sus miembros. La cruzada de Abd el-Nasser contra el grupo islamista siguió hasta el golpe que en 1964 llevó al encarcelamiento de dieciocho mil militantes y sus principales líderes, algunos de los cuales, como Sayed el-Qotb —que con el encarcelamiento evolucionó ideológicamente de un socialismo islámico a una feroz crítica de Occidente y una defensa de la resistencia armada—, serían ejecutados.

La situación cambió con la llegada de Sadat al poder. Cercano a la formación, el nuevo presidente ponía fin a la represión de los movimientos islamistas, a los que utilizaría, a partir de ese momento, para combatir la presencia de la oposición de izquierdas mayoritaria, muy beligerante contra el programa de

aperturismo económico (*infitah*) planteado por el régimen en la década de los setenta. En pleno ascenso del petrodólar e influenciados por la emigración egipcia en Arabia Saudí, el país vivió una inédita explosión del islamismo. Pero la oposición al proceso de paz con Israel produjo otra nueva ola represiva del régimen. Sadat tuvo que acallar a las fuerzas políticas internas, que clamaban en contra del acuerdo. Entre otros, detuvo a la dirección de los Hermanos Musulmanes, que volvió a encontrarse entre rejas. El poder del islamismo ya no era el mismo y la facción armada del mismo decidió reaccionar. Cuatro miembros de un grupo escindido de la Hermandad durante los años setenta, la Yihad Islámica, introdujeron 56 balas en el cuerpo de Sadat durante un desfile militar el 6 de octubre de 1981 y pusieron fin a la vida del presidente.

Fue entonces cuando un sorprendido Mubarak se encontró de golpe con el poder en sus manos. Personaje débil políticamente, decidió liberar a la oposición, encabezada por los Hermanos Musulmanes, y tratar de establecer pactos tácticos que serían bien recibidos por la dirección de la Hermandad que llegó a llamar a todos los musulmanes para que se unieran «al presidente en estos momentos críticos».[17] A pesar de seguir siendo una formación ilegal, la Hermandad presentó candidatos independientes o se agrupó en coaliciones políticas con otras formaciones en todas las elecciones legislativas durante el mandato de Mubarak, logrando asientos en todas las legislaturas en que decidió presentarse.

Nadie ocultaba su vinculación con la Hermandad y aquellos candidatos eran así presentados por los medios. El lema «El islam es la solución» se expandió por todo Egipto junto con los programas sociales de una formación sin poder político real pero con una popularidad creciente. El ligero aperturismo del régimen permitió que la Hermandad abogara por controlar los

17 Bruce K. Ruthenford: *Egypt after Mubarak: liberalism, Islam and democracy in the Arab World*, Princeton University Press, USA, 2008.

colegios profesionales, que en poco tiempo pasaron a formar parte de su órbita. Aunque su presencia parlamentaria era más bien simbólica, los islamistas se hicieron especialmente fuertes en los colegios de médicos, abogados, ingenieros y farmacéuticos, que se convirtieron en los bastiones reales del poder de los Hermanos Musulmanes.

Al llegar la década de los noventa, se produjo un cambio de paradigma en la relación entre el régimen y la Hermandad. El poder en auge y la influencia islamista comenzaron a inquietar a un Mubarak que, por otra parte, se veía reforzado por las alianzas selladas en 1991 con las instituciones financieras internacionales y la Casa Blanca. En 1992, el régimen atacó al sistema financiero de la Hermandad, en lo que se dio a conocer como «el caso Salsabeel».

Salsabeel era una empresa de ordenadores y redes de información propiedad de Khairat Shater, uno de los grandes magnates y figura destacada de la Hermandad. Aunque la compañía había incluso cerrado acuerdos comerciales para suministrar *software* al Ejército, el régimen acusó a Salsabeel de construir una peligrosa red de información paralela a la de los servicios secretos del Estado. La policía inculpaba a la Hermandad, con base en un documento de trece páginas intervenido en la casa de Shater, de tener un plan para controlar el país. El Estado cerró la empresa y encarceló a sus directivos y a 43 trabajadores. Los principales acusados fueron el propio Shater, junto con el también magnate islamista Hussein Malek y Taher Abd el-Meneim. Tanto Shater como Malek eran considerados el corazón económico de la formación y los principales financiadores de sus campañas electorales.

Muchos analistas coincidieron en señalar el asunto Salsabeel como un punto de inflexión dentro de las relaciones entre los Hermanos Musulmanes y el régimen. Esas detenciones se convirtieron en el primer ataque de envergadura a la Hermandad desde los tiempos de Nasser. Sin embargo, a las puertas de las elecciones parlamentarias de 1995, el grupo recibió un nuevo golpe policial que buscaba sitiar a sus integrantes. Cientos de militantes, entre ellos varios candidatos, fueron detenidos y llevados ante los tribunales. Como resultado, sólo un miembro de los Hermanos Musulmanes conseguiría un escaño en el Parlamento ese año. El régimen le detuvo un año después, acusándolo de practicar «acciones subversivas».

La Hermandad preocupaba porque había logrado victorias clave en los colegios profesionales y había extendido su influencia popular a través de las redes de asistencia social, que suplían por entonces al desguazado Estado del bienestar. Redes de abastecimiento de comida a los más desfavorecidos, escuelas, hospitales y programas de alojamiento para estudiantes universitarios eran sus bastiones fundamentales. Tras el caso Salsaabel, la Hermandad hizo una nueva demostración de fuerza llevando a la práctica su eficaz asistencialismo como respuesta al terremoto más fuerte que había experimentado el país desde 1847. En octubre de 1992, 545 personas perdieron la vida y más de 50 000 se quedaron sin casa a consecuencia de un seísmo de 5,8 grados en la escala de Richter. El despliegue islamista, especialmente intenso en barriadas populares como la cairota Imbaba, volvía a dejar en evidencia a un Estado lento e ineficaz. El régimen necesitaba cortar las alas a la Hermandad. Dos semanas después del terremoto ordenó que toda ayuda humanitaria pasara por el filtro de las agencias estatales.

En 1993, Mubarak trató de poner cerco al control islamista de los colegios profesionales y promulgó la Ley Unificada de Sindicatos Profesionales, que limitaba la independencia de estos órganos introduciendo la posibilidad de la intervención judicial. En la práctica, era un intento de volver a situar estas instituciones en la órbita del régimen. El Colegio de Ingenieros estuvo más de quince años sin celebrar elecciones, mientras que los médicos pasaron diecisiete años sin elegir a sus representantes. También las elecciones en el Colegio de Farmacéuticos permanecieron congeladas a partir de 1993.

Esta presencia de una «amenaza islamista» servía, además, para que el *rais* pudiera justificar la falta de libertades en Egipto ante la comunidad internacional. Las oleadas represivas contra los Hermanos, de hecho, solían estar vinculadas a procesos políticos y electorales. Mubarak jugó durante años al palo y la zanahoria con esa formación. El régimen, en un hipócrita doble juego, no abandonaba la mano dura con los islamistas, mientras les permitía una mínima y simbólica participación política. El dictador era capaz de encarcelar a sus líderes un día y, al día siguiente, organizar protestas conjuntas con los islamistas, como la que se dio en 2003, como respuesta a la invasión de Irak. Como si fueran monos de feria, servían al régimen para mostrar a los aliados occidentales, por un lado, los esfuerzos aperturistas y, por otro, la amenaza islamista que podían suponer. En definitiva, como describiría un comunicado del Centro de Estudios Socialistas, «el Sistema ha tenido éxito en el uso de la Hermandad Musulmana como un espantapájaros para preocupar a Occidente con la posibilidad de la llegada de los islamistas al poder y, por lo tanto, para imponerse como la única alternativa para mantener la alianza estratégica egipcio-estadounidense».[18] Un claro ejemplo de ello llegaría con las elecciones de 2005. Después de permitir que la formación alcanzara los mejores resultados electorales de su historia, el régimen emprendió una nueva ola represiva contra los islamistas. En diciembre de 2006, 140 miembros de los Hermanos Musulmanes fueron detenidos en el llamado «caso de las milicias de El-Azahar». Entre los represaliados se volvían a encontrar los nombres de Khairat Shater, Hussein Malek o Mohamed Ali Basher. El régimen aprovechaba el incidente para atacar de lleno a la cúpula de la formación y golpear, otra vez, su corazón financiero. El motivo fue la representación, dentro de la universidad religiosa de El-Azhar, de una especie de escenificación militar.

18 «El-nizam yuzaded tawaheshan. Bedaam America w sharaka moaarda mozyfa», *Markez el-darasat el-eshterakeya*, 20-10-2010 [*online*].

Los islamistas defendían que el acto evocaba a la resistencia palestina e incluso hablaban de «evento deportivo», pero el régimen decidió encarcelar a destacadas figuras de la Hermandad que poco o nada tenían que ver con el suceso y dar un nuevo golpe importante al grupo opositor no legalizado. No era la primera vez que la formación hacía ejercicios de este tipo, pero sí era la primera que lo hacían después del cambio de escenario provocado por las elecciones parlamentarias de 2005. Y el régimen no pensaba dejar escapar esa oportunidad y utilizó toda su fuerza mediática para demonizar a los islamistas y vincularlos a movimientos violentos. Los medios oficialistas llegaron a calificar a Shater de «usurero» y lo relacionaron con kafkianos negocios con empresarios sionistas.

El incidente de las milicias marcaba el inicio de una nueva escalada represiva del régimen contra la Hermandad, que iría en constante aumento. Si en 2008, fueron detenidos 3674 miembros, en 2009, se realizaron 5022 detenciones y en 2010 se llegó al récord histórico de 6001 miembros atacados por las fuerzas policiales.[19] Mubarak, además, cerraba el círculo político contra la Hermandad estableciendo en 2007 la prohibición de crear formaciones políticas de carácter religioso o que utilizaran eslóganes religiosos. Según la propia Hermandad, durante el reinado de Mubarak cerca de 32 000 militantes fueron encarcelados bajo la aplicación de la ley de emergencia y fueron intervenidas más de 1400 empresas vinculadas a la formación.

El objetivo parecía ser el de descabezar a la Hermandad. Unos cuarenta líderes de la formación fueron sentados en el banquillo, frente a un tribunal militar, en un juicio que duró un año, acusados de blanqueo de capitales y financiación de grupos terroristas. La justicia militar congeló todos sus bienes y, en abril de 2008, justo antes de las elecciones locales, se dictó sentencia. Previo al anuncio público de dicha sentencia, fueron

19 «2010 records highest number of MB arrest totalling over 6000», Ikhwan Web, 09-01-2011 [*online*].

detenidos doscientos activistas de la Hermandad más; el régimen temía la ira de los islamistas. Veinticinco de los cuarenta acusados fueron condenados a penas que iban de los tres a los diez años de cárcel. Shater y Malek recibieron una sentencia de siete años de prisión mientras que los otros quince dirigentes fueron absueltos. Cinco de los encausados serían juzgados *in absentia*, entre los que destacaba Youssef Nada, el considerado ministro de Exteriores de la Hermandad y fundador del controvertido banco Taqwa. La falta de garantías en el juicio fue denunciada a posteriori y el analista político Diaa Rashwan no dudó en calificarlo como «el peor veredicto contra los Hermanos Musulmanes desde los años sesenta».

Pero ésta no fue la única ofensiva de aquella época. Justo antes de las elecciones al Consejo de la Shura (el Senado egipcio), cerca de 1500 miembros de la Hermandad fueron detenidos, incluyendo al portavoz Essam el-Erian. Las elecciones locales de 2008 también se vieron precedidas por el apresamiento de 850 militantes islamistas, incluidos 187 candidatos electorales. Según afirmaría la propia Hermandad, de las 10 000 candidaturas presentadas a las elecciones, sólo superaron el listón del régimen 5745 y sólo 498 pudieron acabar participando.

Esta oleada represiva forzó a esta formación a encerrarse en sí misma, marginar a los grupos reformistas y arropar a los más conservadores. La consolidación del papel de Khairat Shater o el nombramiento de Mohamed Badie como guía supremo, así como el aislamiento de los sectores más reformistas, como el representado por Abd el-Meneim Abu el-Fotouh o Mohamed Habib, marcaría la culminación de este proceso a principios del 2010. Durante aquel mes de febrero, el régimen de Mubarak volvió a atacar a la dirección de la Hermandad y encarceló a quince de sus líderes. Entre ellos se encontraban Mahmoud Ezzat y Essam el-Erian, que fueron acusados de constituir un cuerpo político basado en los pensamientos de Sayed el-Qotb, el líder islamista que se enfrentó a Nasser en los sesenta y que compartió celda con el nuevo guía supremo de la Hermandad,

Mohamed Badie. Además los culpó de formar parte de una organización ilegal, de intentar perturbar la paz social y de montar células de entrenamiento para grupos armados en el Sinaí con la voluntad de derrocar al régimen. Amnistía Internacional reclamó la liberación de las víctimas de «detenciones arbitrarias» contra «opositores pacíficos».[20]

La lucha obrera

A setenta kilómetros de El Cairo, en pleno delta del río Nilo, se encuentra la población de Mahala el-Kobra, famosa por sus plantaciones de algodón y sus, durante décadas, populares industrias textiles. Allí se alza una de las fábricas de hilados más grandes del mundo. Esta factoría estatal de hilado y tejidos, llamada Tejidos Misr, reunía en los años noventa a más de cuarenta mil trabajadores. En 2006, las medidas de liberalización económica aplicadas por el régimen hicieron que esta cifra se redujera a veintisiete mil. Conocida también por ser un punto neurálgico histórico de insurrección obrera, en 1986 sus trabajadores ya habían desafiado al dictador cuando, durante una protesta laboral, salieron a la calle con un féretro que llevaba un retrato del presidente Mubarak.

A finales de 2006, veinte años después, la ciudad estallaba contra las reformas del régimen. Allí dio comienzo una movilización obrera que marcaría un importante punto de inflexión.

El Gobierno de Nazif había prometido la subida de la prima anual de los trabajadores del sector público. Cuando fueron a cobrarla, los obreros se dieron cuenta de que la promesa no se había cumplido y, por ello, el 7 de diciembre de 2006 acordaron detener la producción en señal de protesta. A pesar del acuerdo, algunos parecían no tenerlo claro. Fue entonces

20 «Egypt: end stranglehold on Muslim Brotherhood», Amnesty International, 08-02-2010 [*online*].

cuando unas tres mil mujeres, al ver que sus compañeros no acababan de decidirse a llevar adelante la huelga consensuada, pararon las máquinas y salieron a manifestarse dando vueltas alrededor de la fábrica al grito de: «Aquí estamos las mujeres, ¿dónde están los hombres?». Al quedar en evidencia, ellos se añadieron a la protesta y todos juntos ocuparon la gigantesca factoría, con la maquinaria parada, durante tres días. Los trabajadores, además de la prima anual, exigieron asistencia sanitaria, guarderías para sus hijos, sistemas de transporte y el fin de la administración corrupta, dependiente del Gobierno central.

Al cuarto día de huelga en Mahala, el Gobierno aceptó la mayoría de las demandas y los obreros volvieron al trabajo. Pero la chispa ya había prendido. Un mes después de estos hechos, el ministro de Inversiones, Mahmoud Mohieldin, anunciaba la privatización de un centenar de empresas estatales, provocando una insurrección obrera que llevaría a cerca de 150 000 trabajadores a la huelga en las poblaciones del Delta. Según el centro Tierra de estudios sociales, en 2005 Egipto registró 202 acciones obreras colectivas. En 2006, fueron 220, aunque algunos elevan el número a 315. En 2007, ya llegaban a 614, más del triple.[21] Según informaba *Al-Masry al-Youm*, durante los primeros cinco meses de 2007 se registró una huelga diferente cada día. Durante el año 2008, las cifras se mantuvieron, con 609 protestas registradas. Era la ola de movilizaciones laborales más importante en el país desde la Segunda Guerra Mundial. Era evidente que el ejemplo de Mahala había calado.

Mahala volvería a la huelga en septiembre de 2007, porque casi un año después de las promesas gubernamentales éstas seguían sin cumplirse. Según los participantes de la movilización, esta huelga fue aún más militante. Ahora también se reclamaba el aumento de los salarios mínimos con gritos de «Abajo el

21 Sameh Naguib: *La revolución egipcia. Análisis y testimonio político*, En Lucha, 2012.

Gobierno» y contra el colonialismo del FMI y el Banco Mundial. Cinco trabajadores fueron detenidos durante los seis días en que se paró la producción, y se logró la dimisión de un alto cargo y el abono inmediato de la paga prometida. Los líderes obreros de Mahala trataron de coordinarse con otros trabajadores para iniciar una campaña nacional para reclamar el aumento del salario mínimo, estancado en las 34 libras (4 euros) desde 1984.

A finales de 2007, los recaudadores de impuestos de bienes inmuebles fueron también a la huelga. Durante tres meses, 55 000 empleados paralizaron sus tareas, reduciendo la recaudación de impuestos en un 90%.[22] Como puntilla, en diciembre, cerca de tres mil trabajadores acamparon durante once días frente a la sede del Ministerio de Economía. Fueron las luchas laborales las que introdujeron el concepto de la acampada como forma de protesta. Muchas se iniciaron con encierros en las fábricas, como los que habían protagonizado los obreros de Mahala, pero fue la extensión de estas acampadas a la calle, como en el caso de los recaudadores de impuestos y luego tantas y tantas otras, lo que configuró un imaginario de lucha que terminaría confluyendo años después en la mediatizada plaza Tahrir. Hombres y mujeres convivían en las calles, hacían pancartas, coreaban los lemas y repicaban tambores para hacerse escuchar; y ellas se sobreponían a los ataques por inmoralidad de la población con la firmeza de saberse luchando por lo que era justo.

Los recaudadores de impuestos, gracias a su lucha, consiguieron un aumento de sueldo del 325% y, lo que quizás es aún más importante, lograron la constitución, en diciembre de 2008, del primer sindicato libre en Egipto desde la instauración del régimen militar en 1954. Curiosamente, era el que aglutinaba a los recaudadores de impuestos de bienes inmuebles, liderados por Kamal Abu Eita. La victoria sindical marcaba clara-

22 *Ibíd.*

mente un nuevo hito dentro de la lucha obrera y un nuevo punto de inflexión en la carrera para derribar al régimen de Mubarak. Ésta no sería sencilla y Abu Eita sería denunciado judicialmente por Hussein Megawer, jefe de la Federación General de Sindicatos, un organismo estatal. Pero la insurrección ya había empezado.

La *intifada* del 6 de abril

El primer trimestre de 2008 fue duro en Egipto. La desprotección resultante de las medidas económicas del Gobierno tecnócrata estaba afectando a las clases más desfavorecidas y la crisis alimentaria mundial se encargaba de terminar de sacudir el escenario. En poco tiempo, los precios se multiplicaron; el del pollo había subido un 146% desde 2005 y el de la carne, un auténtico bien de lujo en el país, un 33%. El arroz también había duplicado su precio en sólo un año. Durante los primeros tres meses del año, los precios de los productos lácteos aumentaron un 20% mientras que los del aceite se incrementaron un 40%. En marzo, la situación se había vuelto dramática, con la muerte de decenas de personas en las colas de los hornos estatales. Mientras el Gobierno era recompensado por el Banco Mundial con el título de mejor reformista del año, los egipcios morían, literalmente, por una rebanada de pan. Según el diario *El-Quds*, en dos meses habían muerto más de cincuenta personas en las desesperadas peleas por conseguir un poco de pan; era la llamada «*intifada* del pan», una revuelta que no sería exclusiva de Egipto y que sacudiría también a otros países debido a la especulación alimentaria.

En medio de este clima tenso, las protestas estallaban por todos lados. Los trabajadores del sector textil de Mahala dieron un paso al frente convocando una parada de la producción para el 6 de abril. Denunciaban las nuevas privatizaciones y reclamaban, entre otras cosas, el retorno de los subsidios a los

bienes básicos y el aumento del salario mínimo, estancado en los cuatro euros mensuales desde 1984. Como estandartes de la revuelta obrera, su llamamiento encontró eco en los activistas cairotas. La oposición vio entonces la oportunidad perfecta para convocar una huelga general «contra el hambre y la miseria». Se utilizó Internet, se imprimieron octavillas y la gente salió a la calle reclamando el apoyo a la movilización de Mahala. Como una aportación individual, una joven, Isra Abd el-Fattah, creaba una página en Facebook bajo el nombre «Movimiento 6 de abril». En pocas horas, la página pasó a recibir el apoyo de más de setenta mil usuarios de las redes sociales. Los Hermanos Musulmanes, en un principio, se negaron a apoyar oficialmente la movilización.

El miedo que demostraba el régimen era evidente. Un día antes de la convocatoria, Mubarak ofrecía un aumento del 60% de los sueldos para los trabajadores de Mahala. Algunos rumores apuntaban a que la huelga sería desconvocada, pero ésta seguía el curso pactado. El paro estaba previsto en el cambio de turno de las 7.30 de la mañana. Para entonces, las principales entradas a las fábricas ya hacía rato que habían sido tomadas por las fuerzas policiales, que controlaban el flujo de entrada y salida de los obreros a la factoría. En el interior, policías de paisano intimidaban a los trabajadores y trataban de disolver todo intento de asamblea. De hecho, esto tampoco era muy relevante porque la población de Mahala estaba preparada para la revuelta. Los obreros textiles decidieron tomar las calles, donde miles de campesinos recolectores de algodón, desocupados varios y simples ciudadanos esperaban el disparo de salida. En pocos minutos, las calles reclamaron a gritos la caída del régimen. La masa descolgó los retratos del dictador, en una imagen icónica que daría la vuelta al país y, frente a los ataques con fuego real y gas lacrimógeno de las fuerzas centrales de seguridad, la masa respondió con el lanzamiento de piedras. Los airados manifestantes quemaron neumáticos, cortaron la vía del tren y atacaron los carros policiales.

Hacía casi treinta años que no se veían imágenes similares en Egipto. Al menos tres personas perdieron la vida por la acción policial, incluyendo un menor de nueve años que observaba los incidentes desde el balcón de su casa. Los otros dos tenían quince y veinte años. Cientos de personas fueron detenidas. Se produjeron concentraciones de apoyo en todo el país, especialmente en las universidades de El Cairo y Helwan, así como en algunas poblaciones donde también se dieron algunos incidentes. En lugares como la cementera de Tora, un 60% de los trabajadores no acudieron a sus puestos de trabajo, mientras que los molinos de Sayida Zeynab registraron un absentismo del 50%. Pero la huelga general sólo había triunfado en la ciudad textil. Cerca de 150 personas fueron detenidas en todo el Estado durante esa jornada; en Mahala, fueron más de 600. Entre ellas, se encontraban algunas de las figuras de la lucha obrera en la población: Karim el-Beheiri, Kamal el-Faioumi y Tarek Amin. Pocos días después, también serían apresados dos personajes destacados del movimiento Kefaya: George Ishak y Fathi el-Hefnawy. Con el tiempo, se descubriría que algunas empresas de telefonía móvil colaboraron con el régimen egipcio en la ofensiva contra los trabajadores de Mahala. Annie Collins, empleada de Vodafone, desvelaría la implicación de la empresa en el suministro de información detallada sobre los activistas obreros. Una práctica que, afirmaba, era bastante habitual. Posteriormente se supo que otras compañías telefónicas también habían estado implicadas en éstas y otras acciones de espionaje contra los opositores.

Al día siguiente, se repitieron las manifestaciones en Mahala y en otros lugares del país, como la capital, al grito de «Mañana comienza la revolución». Las autoridades impusieron un toque de queda no oficial y cortaron los suministros eléctricos durante dos noches para intentar poner fin a las protestas. El día 8 de abril, el presidente del Gobierno, Ahmed Nazif, se desplazó por sorpresa a Mahala y, en un mitin ante los trabajadores, prometió el pago de un bono de treinta días y la revisión de

los salarios y la asistencia sanitaria. Pero la respuesta real del régimen fue menos condescendiente que sus palabras.

Los detenidos fueron trasladados a la prisión de Burg el-Arab, en Alejandría, donde denunciaron haber sufrido abusos por parte de las autoridades. Ante el procurador, declararon haber sido golpeados, haber sufrido descargas eléctricas y haber sido amenazados con que se cometerían abusos sexuales contra sus madres, hermanas y mujeres. Alguno de los obreros también denunció haber sido objeto de acoso sexual. Pese a que la fiscalía reclamó su liberación, la mayoría de los apresados siguieron entre rejas. La dirección de la empresa estatal los despidió por absentismo laboral, a pesar de saber perfectamente su condición de reclusos y de haber recibido los papeles que así lo certificaban. Karim, Kamal y Tarek iniciaron una huelga de hambre en protesta por el trato que recibían y sus rostros concentraron las campañas de solidaridad que pedían su excarcelación. La huelga de hambre afectó al estado de Karim, que llegó a pedir un traslado a un centro médico, aunque éste le fue denegado. No sería hasta el mes junio cuando veinte de los detenidos salieron de la cárcel, a pesar de que nueve de ellos volverían a ser arrestados bajo la ley de emergencia, mientras que el resto siguió en presidio.

El caso generó preocupación entre las organizaciones de derechos humanos, que catalogaron el juicio de farsa. El 15 de diciembre de 2008, fueron juzgados por un tribunal militar 49 líderes obreros de la ciudad de Mahala. Considerados como «chivos expiatorios» por Amnistía Internacional, 22 de estos detenidos recibieron penas que iban de los tres a los cinco años de cárcel por saqueo y por atacar a las fuerzas de seguridad y poseer material peligroso. La mayoría eran artesanos de veinte años de edad. El resto fueron absueltos. Eran las primeras sentencias desde que el régimen decidiera prolongar, por enésima vez, el período de vigencia de la ley de emergencia en el país.

La represión enciende la mecha

En febrero de 2010, Egipto comparecía ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para someterse a la Revisión Periódica Universal. Un examen regular, con escasa vinculación política, pero que ponía a debate la voluntad del régimen de discutir la situación de los derechos humanos en el país. Egipto comparecía una semana después de haber sido criticado por asociaciones como Amnistía Internacional por la detención, calificada por estos grupos como arbitraria, de quince líderes de los Hermanos Musulmanes, y poco menos de un mes después de que las propias Naciones Unidas hubieran denunciado la participación egipcia en el secuestro y tortura de detenidos en el caso de los aviones secretos de la CIA.

Ante el Consejo, Egipto se comprometió a cumplir 119 de las 165 recomendaciones que se le hicieron. Entre ellas, aseguraba que redefiniría legalmente el concepto de tortura en el Código Penal y prometía levantar el estado de emergencia vigente en el país desde 1981. También se comprometía a trabajar por la libertad de culto y de información. El régimen, sin embargo, rehusaba 21 recomendaciones, siete de las cuales por creer que se basaban en «información no correcta» o por estar «en contra de los valores y la moral de la sociedad egipcia». Egipto también aplazó pronunciarse sobre 25 casos más hasta la siguiente sesión del Consejo, en el mes de junio. Entre las recomendaciones que rechazó se encontraba la de derogar la ley que castigaba con la cárcel la difusión de información fraudulenta o el insulto al presidente de la República, a la par que se negaba a abolir la pena de muerte. El Gobierno rechazó también la visita de observadores internacionales para las elecciones de diciembre, eliminar las referencias religiosas de los documentos oficiales y poner fin a los procesos por cuestiones de orientación sexual.

Ante esta sesión no vinculante, Egipto hizo oídos sordos y rompió las promesas hechas a las Naciones Unidas. Tres meses

después de prometer que derogaría la ley de emergencia, ésta era renovada por dos años más en el Parlamento, con el apoyo de 308 de los diputados, un 68% de la cámara, a pesar de las protestas ante la sede. El texto incluía algunos pequeños retoques considerados del todo insuficientes por los activistas pro derechos humanos. El primer ministro Ahmed Nazif afirmaba que la ley se extendería sólo por dos años más y únicamente se aplicaría a delitos de drogas o terrorismo, repitiendo viejas promesas que la población ya no se creía. El régimen, cargado de cinismo, intentaba convencer a los enviados extranjeros de que la renovación de la ley no era más que una innovación política para garantizar los derechos de manifestación y protesta a opositores y blogueros.

Pero la ley de emergencia era el eje del sistema represivo. Jurídicamente, ésta forma parte de las cinco medidas que permite implementar el Estado en caso de una situación en teoría inestable, reservándose la potestad de restringir los derechos de sus ciudadanos. En Egipto, esto implicaba limitar los derechos de asociación y reunión, de manifestación, de huelga o de financiación de asociaciones, entre otros, otorgando a las fuerzas policiales el derecho de entrar sin orden judicial ni requerimientos de ningún tipo en domicilios u oficinas y detener peatones. Para la Organización Egipcia de Derechos Humanos, ésta era «la principal fuente de las violaciones de derechos humanos en Egipto». Para el régimen era una medida de lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas, aunque la definición de estos delitos y la extendida falta de garantías daban alas a los excesos policiales. Algunos grupos de derechos humanos calculaban que a finales de 2010 al menos cinco mil personas cumplían detenciones de larga duración, sin cargos, en aplicación de la ley de emergencia. Algunos de estos detenidos llevaban más de quince años encarcelados sin acusaciones formales ni cargos.[23] El resultado de la renovación de esta ley,

23 *Work on Him Until He Confesses. Impunity for Torture in Egypt*, Human Rights Watch, Nueva York, 2011.

llevada a cabo en mayo de 2010, se evidenció un mes más tarde, en un incidente que marcaría un punto y aparte para los movimientos sociales del país.

La madrugada del domingo 6 de junio, un grupo de policías de paisano entraron en un cibercafé del barrio de Cleopatra de Alejandría. Según los testigos, tras una discusión con uno de los clientes, los policías abofetearon al joven, le dieron varias patadas y le estamparon la cabeza contra la mesa de mármol del local antes de terminar de rematarlo, una vez en el suelo, entre los gritos de pánico de los presentes. La paliza, que se prolongó durante más de veinte minutos, continuó a las puertas del local, antes de que los oficiales lo hicieran subir al vehículo policial y lo llevaran a la comisaría de Sidi Gaber, donde se certificó su defunción.

Este joven se llamaba Khaled Said y su muerte conmocionó al país. La policía dijo que Said se había ahogado intentando ingerir una bolsa de marihuana que trataba de ocultar del registro. Ante las escalofriantes imágenes difundidas de su cadáver desfigurado, las fuerzas de seguridad afirmaron que las heridas habían sido producidas cuando el joven, al intentar huir de la detención, había caído del vehículo policial. Autolesiones, dijeron. Los certificados médicos de la defunción fueron alterados, según demostraron judicialmente varios activistas.

Khaled Said, de 28 años, había nacido un año después de que se instaurara la ley de emergencia y murió un mes después de que ésta se renovara por enésima vez. Por ello, se le llamó «el mártir de la ley de emergencia». Pese a que durante un tiempo se planteó que Said había sido asesinado por poseer un vídeo que señalaba la participación policial en el tráfico de drogas, la verdad es que el perfil apolítico del joven lleva a pensar más en un ataque policial rutinario que en uno premeditado. La muerte de Said, aunque nada extraordinaria, conmocionó a parte de la sociedad egipcia en una época convulsa. El abuso policial, habitual en los barrios populares, impactaba

con fuerza en los barrios de clase media. Este asesinato mostraba la brutalidad del régimen ante los ojos de un sector social que había querido vivir de espaldas a ella. Y eso lo cambió todo.

Un grupo de activistas creó un grupo de apoyo en Facebook llamado «Mi nombre es Khaled Said» que, al poco tiempo, cambiaría su nombre por el de: «Todos somos Khaled Said». La iniciativa consiguió grandes muestras de solidaridad. Sus responsables eran Abd el-Rahman Mansour, un bloguero colaborador de Al-Jazeera —y uno de los creadores del Wikileaks árabe— y el directivo de Google Arabia, Wael Ghoneim. En poco menos de un mes, la página ya tenía más de doscientos mil seguidores. Las movilizaciones organizadas contra el asesinato policial gozaron de una transversalidad nunca vista antes, puesto que atrajeron a ciudadanos poco o nada politizados. Además de las concentraciones a las puertas de la comisaría de Sidi Gaber, tuvieron lugar varias manifestaciones por el centro de Alejandría y otros rincones del país, a menudo encontrándose de nuevo con la represión de las fuerzas de seguridad. Miles de activistas se concentraban los viernes en todo el país, pero especialmente en la Alejandría natal de Said, en lo que denominaron una «revolución silenciosa». Filas interminables de personas, vestidas de negro, hacían honor al fallecido y pedían el fin de la ley de emergencia y la brutalidad policial. Las impactantes colas silentes, en forma de cadena humana, se prolongaban durante kilómetros, viernes tras viernes.

Pese a las protestas, la misma comisaría de Sidi Gaber volvería a ser noticia poco después, durante el mes de noviembre. La familia de Ahmed Shaaban, de 19 años, llevaba tres días buscando al joven, desaparecido cuando iba camino de una boda. Aunque sus familiares recibieron llamadas que les informaban de la detención del joven, los policías de Sidi Gaber negaron de manera repetida tenerlo bajo su custodia. Su cuerpo fue encontrado muerto en un canal fluvial cercano a la sede

policial después de que una llamada anónima revelara su localización. La reconstrucción de los hechos volvió a dar indicios de la participación de los cuerpos del orden. El nombre del comisario Ahmed Othman, implicado en la muerte de Khaled Said, sonó otra vez. La policía no permitió tomar fotos de la víctima para que no se repitiera el estallido de indignación popular que había supuesto el asesinato de Said unos meses atrás, pero la familia aseguró que la identificación sólo se había podido efectuar por una marca de nacimiento que tenía el joven. El Fiscal General de Alejandría decidió archivar el caso porque, aseguraba, no se podían detectar indicios de delito. El magistrado aseguraba que Shaaban era un ladrón que, en moto, había intentado robar un bolso a una mujer y había caído de forma accidental al canal. Por aquellas mismas fechas, el entierro de otro joven conductor de 19 años muerto en una emboscada policial en El Cairo se convertía en una marcha contra la brutalidad del sistema.

Un Estado policial

Muhammad Ibn Idriss el-Shafie fue un destacado jurista nacido en el siglo VIII en lo que hoy es la franja de Gaza. Como una especie de Maquiavelo islámico, una de sus más crueles referencias sería parafraseada en los años ochenta por un ministro de Interior egipcio: «Es permisible terminar con una tercera parte de la población de un Estado para que las otras dos terceras partes puedan vivir en paz».[24]

La anulación de la ley de emergencia, en vigor desde hacía 29 años, ya formaba parte de las promesas electorales de Mubarak en las presidenciales de 2005. Fue entonces cuando prometió que la cambiaría por una nueva legislación antiterrorista, pero ésta nunca llegó. Los egipcios habían vivido bajo este es-

24 Citado en Sonallah Ibrahim: *Zaat*, *ob. cit*.

tado de excepción de forma ininterrumpida desde 1981, pero si se iba más atrás, al año 1967, podía decirse que sólo habían vivido dieciocho meses sin esta legislación. Hacía tiempo que Egipto funcionaba como un Estado policial. La obsesión aumentó a raíz del intento de asesinato de Mubarak en 1995, en Addis Abbaba. En junio de aquel año, el presidente salió ileso de un ataque yihadista justo cuando llegaba a la capital etíope para asistir a una cumbre de la Unión Africana. Los vidrios blindados del coche oficial salvaron su vida en lo que fue el más espectacular de los seis intentos de asesinato del dictador contabilizados por sus fuerzas de seguridad. Aquella tentativa, sin embargo, marcó el inicio del crecimiento del Estado policial. Entre esa fecha y 2005, el presupuesto del Ministerio del Interior se multiplicó por cuatro y llegó a acercarse al que recibía el omnipotente y opaco Ministerio de Defensa, sin incluir la ayuda anual norteamericana.[25] Habib el-Adly, ministro del Interior a partir de 1997, se convirtió en la cara visible de aquel ejército policial encargado de aplacar la disidencia política y social.

El edificio del Ministerio del Interior en El Cairo es una auténtica fortaleza militar que demuestra la importancia capital de esta institución en el país. Como muchos otros edificios gubernamentales egipcios, es un monstruo arquitectónico en forma de búnker militar a pocas calles de la céntrica plaza Tahrir. Su sola presencia infunde respeto y atemoriza al paseante. Es una clara metáfora de lo que significaba la policía en tiempos de Mubarak.

Las fuerzas de seguridad jugaban un papel central en la configuración del régimen. En la década de los noventa, el *rais* había transformado el régimen militar creado por los oficiales libres de la década de los cincuenta en un Estado que se alzaba como un águila bicéfala, con un jefe militar y otro policial.

25 Según datos aportados por Carnegie Endowment for International Peace, citando fuentes ministeriales egipcias.

Desde el control del fraude electoral a la represión ciudadana, pasando por la construcción de los fantasmas sociales necesarios para reforzar el poder del presidente, la policía era un eje clave del régimen. Tanto era así que Mubarak llegó a convertir el Día Nacional de la Policía, que originalmente conmemoraba el papel patriótico de las fuerzas de seguridad en la lucha contra la colonización británica, en una festividad nacional que rendía tributo al papel esencial de represor que el cuerpo policial ejercía para la pervivencia misma del régimen. El Día de la Policía era el 25 de enero, fecha que los activistas rescatarían con otra finalidad.

Si los servicios de inteligencia eran los ojos y el cerebro del país, la policía era la mano sucia. El Ministerio del Interior contaba con tres cuerpos policiales separados. El primero era la Policía General, encargada de investigar, detectar y prevenir los crímenes; un cuerpo que, como el resto, tenía un largo historial de denuncias por tortura y otras violaciones de derechos básicos, aunque estaban, en general, poco vinculados a cuestiones políticas. Era el brazo que solía tener trato con la ciudadanía, con frecuencia mezclado y enlazado con las funciones de monitorización de los barrios y espionaje de baja intensidad de la población civil.

A finales de la década de los sesenta, Egipto creó la unidad de policía antidisturbios, las Fuerzas Centrales de Seguridad, con el claro objetivo de poner cerco a toda disensión política y movilización social incómoda al poder. Abd el-Nasser necesitaba un cuerpo militarizado, separado del Ejército, que aplacara el creciente descontento interno provocado por la derrota militar de 1967 contra Israel. El régimen no podía permitirse más ataques al prestigio de las Fuerzas Armadas, y decidió crear las unidades de *Amn Markezi*, la Seguridad Central, la «fuerza bruta» del régimen. En un principio, no eran mucho más de cien mil miembros, pero la obsesión represiva de Mubarak llevó a que, a principios de 1990, ya sobrepasaran los trescientos mil. En 2010, este grupo paramilitar contaba con 325 000 hombres,

jóvenes en servicio militar obligatorio, con estudios insuficientes como para acceder al Ejército regular. La policía antidisturbios egipcia estaba formada por campesinos y masas urbanas marginadas, las capas más desfavorecidas de la sociedad. Con sueldos que rondaban las 230 libras mensuales (25 euros), muchos no sabían leer ni escribir y eran a menudo víctimas de abusos —«pieza esencial» del entrenamiento militar, según informaban los internos— por parte de sus superiores.

El tercer cuerpo fundamental para el Ministerio era el aparato de Seguridad Estatal («SS» por su acrónimo en inglés; «Amn el-Dawla», en la versión egipcia). Prácticamente sin monitorización judicial y encargado de la seguridad interna del país, este cuerpo era conocido como la «Gestapo egipcia». Funcionaba como la contraparte policial de los servicios de inteligencia encabezados por el temido Omar Suleiman, y era dirigida por oficiales con sueldos astronómicos, una forma de garantizar su fidelidad al régimen. Reforzada por las prerrogativas que, durante décadas, había otorgado la ley de emergencia, la SS egipcia contaba con cien mil hombres encargados de peinar de arriba abajo el país. Mahmoud Wagdi, jefe de los servicios penitenciarios, lo dejaría muy claro en declaraciones ante la Justicia: «Cualquier activista político tiene una ficha en el Ministerio».[26] La marca británica Finfisher proveyó al Ministerio con entrenamiento y *software* para el espionaje de las cuentas de correo y los ordenadores personales de los objetivos deseados por el cuerpo policial.

Todo era controlable y perseguible. En 2008, se registraron 7555 detenciones políticas y 1500 denuncias contra agentes policiales por torturas, con un saldo de 18 muertos bajo custodia. Estas prácticas incluso llegaban a incomodar al propio estamento policial, que experimentaba deserciones dentro del propio cuerpo. Un informe de la Organización Árabe por

26 «Mahmoud Wagdy: Ay nashet siasi leho malaf fe Amn el-Dawla», *Al-Masry al-Youm*, 13-02-2013.

los Derechos Humanos (AOHR), exiliada en Londres, afirmaba en 2009 que «el uso de la tortura y la violencia policial ha alcanzado unos niveles insoportables en el país» y que se extendía a todos los niveles y grupos de la sociedad. «La tortura se ha convertido en una conducta política sistemática que necesita de la aprobación y aliento de las más altas autoridades.»[27]

Según este informe, en el período 2000-2009 se habían producido 285 casos de tortura en dependencias policiales que habían provocado 118 muertos. El texto apuntaba una ligera escalada de abusos en los últimos años: en 2007, cuarenta casos de tortura y tres muertos; en 2008, 46 casos y 17 muertes; mientras que, en los primeros seis meses de 2009, se producían quince casos de tortura y una muerte. El informe tipificaba 76 tipos diferentes de tortura, siendo los más populares la bañera, la rotura de costillas, las palizas, el desgarro de la ropa, el «fantasma de la lluvia», la privación de sueño, la obligación de estar de pie durante largas horas y las descargas eléctricas, entre otros.

En este sentido, el inicio del año 2009 fue especialmente sangriento. El 25 de enero, un joven moría bajo custodia policial en Alejandría; cinco días antes, se había denunciado la muerte de otro chico detenido en El-Arish. La misma semana, un apresado «se tiró», según testimonio policial, desde el cuarto piso del Directorio de Seguridad del Mar Rojo. El día 28, una joven de 24 años, Mona Said, denunciaba haber sido torturada por el responsable de investigaciones criminales de la comisaría de Shoubra el-Kheima; éste le afeitó la cabeza, le quemó las mejillas con colillas de cigarro y la amenazó con violarla cuando ella le recriminó que hubiera detenido de forma ilegal a su marido en repetidas ocasiones. Otro joven, que estaba a la espera de juicio, murió arrollado a principios de febrero de 2009 en la prisión principal de Alejandría. En mayo, la Seguridad del Estado lanzó a un miembro de los Hermanos Musulmanes desde una cuarta planta, durante un registro en su casa de Damanhour, enmarcado dentro de una redada nacional contra la Hermandad.

27 «Systematic torture ocurring in Egypt», *Egypt Independent*, 24-10-2009.

La impunidad estaba al orden del día. Sin embargo, según informes oficiales, entre 2006 y 2009, sólo seis policías fueron condenados por los tribunales egipcios.[28] En noviembre de 2007, los oficiales de policía Islam Nabih y Reda Fathi fueron sentenciados a tres años de prisión por haberse probado su implicación en las torturas al conductor Amer Kabeer en Boulak Dakrour. La sensación de impunidad y su prepotencia les llevaron a grabar y colgar ellos mismos en la Red los vídeos de la sodomización del preso, aportando así la que sería la prueba más clara del aquel cruel acto. Esta sentencia de mínimos sería revocada menos de dos años después. La intercesión del Ministerio del Interior favoreció la liberación de los policías y su reintegración inmediata al cuerpo, dentro del departamento de Assiut. Como si nada hubiera pasado.

A finales de enero de 2009, se vivió otra situación similar. Un policía fue condenado a tres años de prisión tras probarse que había matado de un disparo a bocajarro a un conductor que se había negado a pagarle un soborno equivalente a siete euros. Poco después de la sentencia, fue amnistiado y volvió a integrarse al cuerpo. De nuevo, como si nada hubiera pasado.

Armas blancas en las urnas

«Las armas blancas y las piedras entran en la batalla electoral.» Con este titular encabezaba, el 30 de noviembre de 2010, el rotativo egipcio *Al-Masry al-Youm* las noticias sobre los enfrentamientos entre fuerzas policiales y los partidarios de los Hermanos Musulmanes en Alejandría y Mansoura. La policía empleó bombas lacrimógenas y pelotas de goma antes de

28 *Work on Him until He Confesses*, *ob. cit.*

detener a más de cien manifestantes y herir a una veintena de activistas. El origen de los disturbios fue la detención de 137 miembros de los Hermanos Musulmanes en diecisiete provincias del país, acusados de hacer campaña electoral con lemas islámicos. La tensión iba en aumento, como era habitual, a medida que se acercaban los comicios para designar un nuevo Parlamento. Seiscientos candidatos islamistas corrían el riesgo de ser ilegalizados en cualquier momento, en un año en que las detenciones contra miembros de la Hermandad habían alcanzado el techo histórico de 6001 represaliados.

Estas elecciones eran decisivas puesto que precedían a las presidenciales de 2011. El nuevo Parlamento, según la ley, sería decisivo para poder presentar candidaturas; o dos terceras partes del Parlamento apoyaban la candidatura o una formación política parlamentaria con más del 5% de los escaños lo presentaba como candidato propio. La oposición, encabezada por los Hermanos Musulmanes, se había unido en torno a la figura del diplomático y Premio Nobel de la Paz Mohamed el-Baradei, que había regresado a Egipto, arropado por las fuerzas políticas opositoras, como el hijo pródigo que podía hacer frente a Mubarak. Aquéllas serían, además, las primeras elecciones que se realizarían con un único día de votación en todo el país y también las primeras sin control judicial, lo que había levantado suspicacias en los analistas. Los observadores internacionales, definidos por el secretario general del oficialista PDN como «parásitos políticos», tampoco tendrían permiso para monitorear el proceso. En un intento por controlar el flujo de información, la Autoridad Nacional para la Regulación de las Telecomunicaciones canceló en octubre los permisos de todas las emisoras de televisión con contenido informativo y las instó a solicitar nuevas licencias, que pasarían por el filtro de las instalaciones públicas de cara a la cobertura de las elecciones legislativas. La entidad también establecería nuevas regulaciones para el control de los servicios de mensajería instantánea masiva, que habían sido claves para el monitoreo electoral de las legislativas de 2005.

Aquel mes de noviembre, también se detuvo al periodista alejandrino Youssef Shabaan bajo la acusación de tráfico de drogas, en una maniobra que cientos de activistas denunciaron en manifestaciones en El Cairo y Alejandría como un claro montaje político. Shabaan, miembro del diario de oposición *El-Badil*, fue detenido por cuarta vez en un año, después de cubrir profesionalmente una manifestación en un barrio de clase baja de Alejandría. Aunque los tribunales pidieron su liberación, ésta no se produjo hasta pasada la contienda electoral.

Los partidarios de Khaled Said pidieron a los ciudadanos que votaron nulo en los comicios y propusieron votar con una tarjeta donde se leía el nombre del mártir. A las puertas de las elecciones, el 26 de noviembre, una llamada cibernética de los grupos en solidaridad con el mártir Khaled Said invitaba a participar en el «Día de la ira», aunque la convocatoria sólo duraba media hora. Se produjeron protestas en todo el país, aunque probablemente la más concurrida fue la que se celebró en el barrio cairota de Imbaba, donde cuatro activistas fueron detenidos, incluido un periodista. Alejandría, Giza, Zagazig, Beni Sueif, Suez, Port Said, Gharbeia, Qalubiya, Mounfia o Mansoura también vivieron protestas similares, en las que se alzaron retratos de Khaled Said y se reclamó poner fin a la brutalidad policial. Las movilizaciones, a pesar de su corta duración, empoderaron a muchos jóvenes manifestantes en un claro preludio de lo que estaba por venir.

En las horas previas al día de elecciones, la tensión era palpable. El Tribunal Administrativo paró las votaciones en 24 demarcaciones a 48 horas de su inicio, pero la decisión no fue atendida por el régimen. El diario opositor *El-Badil*, basándose en el testimonio directo de un detenido, afirmó que la policía planeaba el uso de matones para la jornada electoral, mientras el Ministerio de Sanidad declaraba la situación de emergencia ante la cita con las urnas.

A pesar de las reclamaciones judiciales, los comicios siguieron su curso. A primera vista, destacó la baja participación aunque, de los ochenta millones de egipcios, con más de 40 millones mayores de edad censados, sólo 25 tenían derecho a voto. El régimen habló de una participación electoral del 25%, mientras que los observadores dieron cifras por debajo del 10%. Safwat el-Sherif, secretario general del PDN, consideró las elecciones parlamentarias como una «fiesta» asegurando que «nuestra democracia se hace más fuerte día tras día». Nada más lejos de la realidad; el fraude, la coacción y la violencia eran los verdaderos titulares de la jornada. Los enfrentamientos se habían extendido por todo el país. La Coalición Egipcia para la monitorización de las elecciones, denunció que «la violencia es una de las características más evidentes del proceso electoral». Algunos de estos observadores también denunciaron haber sufrido intimidaciones e incluso detenciones y torturas. Incluso el oficialista *El-Ahram* hacía uso de una fina ironía cuando titulaba «los egipcios eligen en medio de una fuerte competencia».

El grupo solidario Tadamon informó de hasta ocho muertos en enfrentamientos a las puertas de los colegios electorales, mientras que los Hermanos Musulmanes hablaron de más de 150 detenciones y de otra muerte no contabilizada por Tadamon. El diario *El-Badil* habló incluso de diecisiete víctimas mortales. Entre éstas, se encontraba el hijo de un candidato en Ain Shams y Mattariya, que murió tras sufrir varios navajazos. Cinco personas resultaron muertas después de que un coche las atropellara ante el mismo colegio electoral y una niña de cinco años fue atropellada en Port Said por un convoy del oficialista Partido Democrático.

Las imágenes del fraude, como en comicios anteriores, llenaron las redes sociales. Había votantes que no encontraban su nombre en las listas del censo, comisionados electorales que llenaban las papeletas de personas no presentes, candidatos oficialistas que amenazaban a los votantes con espadas, individuos que confesaban con orgullo haber votado más de cuatro veces, urnas llenas antes de que abrieran los colegios y un gran número de peleas en las calles de varias ciudades del país. Según denunciaron las organizaciones de monitoreo, a muchos candidatos se les impidió el acceso a los colegios electorales. Hasta se compuso un tema musical, con videoclip incluido, que recogía todas estas imágenes del fraude.

El 5 de diciembre se celebró una poco trascendente segunda vuelta, que fue boicoteada por los dos principales grupos de la oposición: los liberales del Wafd y los islamistas Hermanos Musulmanes. La insignificante relevancia de la jornada hizo que los incidentes disminuyeran, pero aun así se denunciaron algunos enfrentamientos, como en Qena, con pistolas incluidas, y la continuada compra de votos; el precio de un voto llegó a más de cuarenta euros.

Sin embargo, las irregularidades, según anunció la Comisión Electoral, no habían alterado el resultado final. La comunidad internacional, con la Unión Europea y Estados Unidos a la cabeza, mostraron su preocupación por los excesos, pero mantuvieron su voluntad de «seguir trabajando con el Gobierno egipcio y con la vibrante sociedad civil de Egipto para ayudar a conseguir sus aspiraciones políticas, sociales y económicas», como afirmaba el comunicado de la Casa Blanca.[29] Estos resultados llevaron al prestigioso periodista británico Robert Fisk a afirmar con contundencia que «ahora ya lo sabemos, a Estados Unidos realmente no le importa la injusticia en Oriente Próximo».[30] El desenlace de la jornada no hizo más que reafirmar la voluntad inamovible del régimen y dejar un regusto excesivamente amargo en las bocas de la oposición. El oficialista PDN consolidaría su peso, superando

29 «Egypt's parliamentary elections. Press statement», Prn 2010/1723, U.S. Department of State, Washington, 29-11-2010.

30 Robert Fisk: «Now we know. America really doesn't care about injustice in the Middle East», *The Independent*, 30-11-2010 [*online*].

en 143 diputados los resultados de 2005: 473 escaños. El 91,2% de la cámara quedaba en manos del régimen. El control era casi absoluto. La segunda formación era el Wafd, con sólo seis asientos, el equivalente al 1,1% de la cámara. Los Hermanos Musulmanes, a pesar de su boicot, alcanzaron un asiento de un miembro que se desvinculó de la decisión de la formación y consiguió su escaño. Essam el-Erian, portavoz de los Hermanos Musulmanes, afirmaría que el Parlamento no representaba la voluntad popular: «Sólo representa a los corruptos y matones que han secuestrado la determinación del pueblo».[31]

El día en que se constituía la nueva cámara, el 12 de diciembre de 2010, cientos de manifestantes reclamaron la disolución de ese Parlamento a las puertas del Tribunal Supremo. Algunos incluso hablaban de conformar un plenario simbólico alternativo. Mientras tanto, en la sesión de apertura, el presidente Hosni Mubarak se mostraba sarcásticamente desafiante: «Dejad que se entretengan», afirmó ante la claca parlamentaria a pesar de las quejas de la oposición. Si bien reconocía «algunas irregularidades», no dudó en señalar a otros responsables. Mubarak, ante un Parlamento entregado y servicial, afirmó con socarronería: «Como presidente del partido del Gobierno, estoy feliz de los buenos resultados que hemos conseguido; como presidente de los egipcios hubiera preferido que los resultados de la oposición hubieran sido buenos». Por otro lado, dejaba claro que los candidatos de la oposición y algunos de sus partidarios eran los responsables «de comportamientos negativos inaceptables» y les pedía que sacaran las conclusiones pertinentes al valorar los resultados. Ese mismo día, el diplomático Mohamed el-Baradei llamaba a la unión de la oposición y hacía unas declaraciones premonitorias, al afirmar que el sistema no duraría demasiado y que su caída sería inminente.

31 «Mubarak's Ruling Party Wins Egyptian Parliamentary Elections by Landslide», Bloomberg, 06-12-2010.

El-Baradei no debía de ser consciente de hasta qué punto eran proféticas sus palabras.

Se acerca la insurrección

El 14 de enero, el dictador Ben Ali, después de 27 años en el Gobierno, huía de Túnez con el rabo entre las piernas debido a la presión popular. En El Cairo se llevaron a cabo marchas solidarias con el pueblo tunecino, en las que algunos oradores incitaron al pueblo a seguir la estela y aprovechar el impulso. Pero la mayoría parecía escéptica. La red de activistas de Internet aprovechaba, sin embargo, el precedente tunecino para reforzar las convocatorias ya previstas para el Día de la Policía y llamar a un nuevo «Día de la ira» para el 25 de enero. La consigna era repetir las cortas marchas realizadas antes de las elecciones parlamentarias del mes de noviembre anterior.

En todo el mundo árabe, los diversos regímenes movían ficha para frenar el impacto popular en cadena. Argelia compraba partidas no previstas de trigo para evitar la falta de suministros. En Siria, tras años de una política de reducción del subsidio a los combustibles, se volvían a dar ayudas a los recursos energéticos para la calefacción. En Sudán, Bashir decidía encarcelar a El-Torabi, líder de la oposición, después de que éste hiciera un llamamiento a una «revuelta popular» y exigiera la dimisión del ministro de Hacienda. En Kuwait, el emir decidía donar mil dinares (2664 euros) a cada ciudadano y proveerlos de alimentos gratuitos durante catorce meses. Algo similar sucedería posteriormente en Arabia Saudí, donde también se ejerció presión sobre los ciberactivistas de acuerdo con una nueva ley instaurada el primero de enero de ese año contra el denominado «terrorismo cibernético».

En Egipto, para curarse en salud, el régimen sacaba sus armas. Al día siguiente de la huida de Ben Ali, el oficialista *Akhbar el-Youm* titulaba con un «Estamos creciendo», que

alababa un pretendido auge de la economía egipcia, mientras que algunos portavoces afirmaban que —en contra de todas las expectativas— ni precios ni impuestos se incrementarían en los años siguientes. Sin embargo, las evidencias retrataban al Gobierno y el mercado de valores se desplomaba. Durante los últimos años, el país había sufrido una sacudida como consecuencia de la liberalización de los mercados, consolidada sobre las bases del despotismo político y el control policial de la oposición y la sociedad en general. Las barreras del régimen se habían visto desbordadas y esto afectaba a casi todos los estratos de una sociedad cada vez más agotada. El ejemplo tunecino abría la puerta de la insurgencia en Egipto, a pesar del escepticismo de los activistas y los comentarios de un régimen que no se cansaba de repetir «Egipto no es Túnez», tratando de aportar pruebas sobre las diferencias entre uno y otro país.

El 17 de enero, siguiendo la estela del tunecino Sidi Bouzid, un hombre de 49 años se inmolaba ante el Parlamento egipcio. Al caso de Abd el-Manam Hamda, que sería tratado de loco por el régimen, siguieron otros. En menos de 24 horas, se produjeron al menos tres inmolaciones, que llegaron a la decena durante los siguientes días. Una mujer se prendió fuego en Alejandría, presuntamente por motivos familiares. Mohamed Farouk, un abogado de cincuenta años, intentó emular a El-Manam Hamda incendiándose ante el Parlamento, al día siguiente del primero. Fue atendido con rapidez y sufrió pocas quemaduras, lo que hizo que en pocas horas le dieran el alta. Por su parte, Ahmed Hesham el-Sayad, de 25 años, murió en Alejandría tras sufrir quemaduras de tercer grado en el 95% de su cuerpo. Algunas fuentes hablaban de más casos frente al Parlamento y el régimen, visiblemente nervioso, los acusaba de locos reincidentes con instintos suicidas y minimizaba el incremento de las inmolaciones. El Ministerio del Interior pasó circulares a las gasolineras alertando de que se prohibía la venta de combustible a particulares en envases. El ambiente

siguió candente en las redes sociales, a pesar de que el escepticismo era la nota predominante entre los activistas de toda la vida.

Dieciocho días

El 25 de enero

«¿Acaso existen revoluciones convocadas y con un horario previsto?» Con frases como ésta los activistas mostraban su escepticismo ante el hecho de que las marchas preparadas para finales de enero tuvieran algún tipo de repercusión más allá de la habitual. «Los de siempre, gritando como siempre y huyendo de las porras de la policía, como siempre», decían. Varios grupos políticos llevaban un tiempo organizando una convocatoria para el 25 de enero, Día Nacional de la Policía. La efeméride recuerda la matanza de cincuenta oficiales de policía en Ismailiya, en 1952, a manos de las fuerzas coloniales británicas. Mubarak elevó la relevancia de la festividad, pero sesenta años más tarde la imagen de la policía era ya muy diferente. Convertida en el símbolo de la represión del régimen, era uno de los emblemas más odiados y temidos por todos los egipcios.

El estruendo por la caída de Ben Ali en Túnez había dado alas a la convocatoria, aunque la mayoría de activistas se mostraban escépticos sobre sus posibilidades de éxito. En los círculos militantes era casi motivo de broma. Las redes sociales, lle-

nas de llamamientos generalmente centralizados por los grupos de apoyo al mártir policial Khaled Said, ayudaron a calentar el ambiente las horas previas, pero nadie esperaba lo que estaba por venir.

Activistas de Kefaya, del grupo del 6 de abril, del nacionalista Wafd, los trotskistas Socialistas Revolucionarios, Jóvenes por la Justicia y el Cambio o la Asociación Nacional por el Cambio, entre otros, se habían estado reuniendo durante las semanas previas para intentar encontrar un difícil consenso en los lemas y la organización de las marchas. Coincidieron en que éstas debían ser lo más descentralizadas posibles para dificultar la represión policial. Y, en cuanto a las reclamaciones, llegaron al acuerdo de centrarse en cinco, que resumían la lucha política de los últimos años: poner fin a la ley de emergencia y liberar a todos los presos políticos sin delitos de terrorismo; acabar con la pobreza, reduciendo el déficit y aumentando el salario mínimo a 1200 libras mensuales vinculado al coste de la vida, y aumentando también la prestación de desempleo a un mínimo de 500 libras. También exigían la detención y juicio de las figuras emblemáticas de la corrupción, con expropiación y redistribución de los bienes robados, así como la disolución del Parlamento surgido del fraude electoral de noviembre. El último punto pedía el juicio a los responsables de la muerte de los alejandrinos Khaled Said y Sayed Bilal. Uno de los lemas que se acordó fue el de «Pan, libertad y dignidad humana», pero éste fue rápidamente revocado por una calle más ambiciosa políticamente, sin voluntad de tutelas, que lanzaría el popular «Pan, libertad y justicia social», grito que se convirtió en uno de los principales *leitmotivs* del levantamiento.

Una de las ausencias destacadas de aquella convocatoria fue, sin embargo, la de los Hermanos Musulmanes. En una decisión no exenta de polémica interna, los islamistas se desvincularon parcialmente de las marchas y se prestaron a observarlas desde la barrera. Essam el-Erian, portavoz del grupo, anunciaba dos días antes de la movilización que el grupo participaría de manera simbólica en las protestas ante los tribunales de El Cairo, con algunos de sus miembros. Lo harían sólo de forma individual como miembros de la Asociación Nacional por el Cambio, la coalición creada en torno a Baradei, y tampoco impedirían la participación a los jóvenes del grupo islamista que lo desearan, siempre y cuando respetaran las propiedades estatales y no atacaran al cuerpo policial, que era calificado de «institución y símbolo nacional» por los líderes de la Hermandad. Pero los Hermanos Musulmanes rechazaron lanzar convocatorias propias. Incluso durante la misma jornada del 25 de enero, El-Erian salió a desmentir los informes policiales que acusaban a la Hermandad de participar en las marchas contra el régimen. Los Hermanos Musulmanes no formaron parte de aquella primera jornada como grupo, pero sí que diversos miembros lo hicieron a título individual, especialmente los jóvenes. Partidos de izquierda como el Tagammo, considerados por algunos como la «oposición del régimen», también rechazaron participar. Los grupos islamistas más radicales, como los populares salafistas, se opusieron frontalmente a cualquier manifestación e instaron a sus feligreses a no tomar parte en actividades que, a su entender, ayudaban a desestabilizar el país.

Pero los grupos políticos acabarían siendo lo de menos en aquella jornada. Al poco de comenzar las primeras marchas, los partidos se difuminaron sin señas entre una masa que despreciaba las siglas. Tal y como se había acordado, varias columnas salieron no sólo en El Cairo, sino que también lo hicieron en las principales ciudades del país. En la capital, hubo manifestaciones en Dar el-Salam, Imbaba, Boulak Dakrour, en la plaza Mostafa Mahmoud, en la *corniche* del Nilo frente a Maspero o frente al Colegio de Abogados y la Corte Suprema, entre otros. En Alejandría, se organizaron varias marchas por la ciudad en los barrios de Assafra, Mancheia o Bacús. En Assiut, la policía detuvo a 18 participantes, pero no pudo impedir que una manifestación terminara tomando las calles de la ciudad. Cientos de personas se encontraron en Ismailiya y en la ciudad de Suez,

mientras que cinco mil participantes se reunían en la obrera Mahala el-Kubra y en Mansoura. Cifras similares se registraron en las calles de la agrícola Kafr el-Sheikh o en Port Said, y también en Banha salieron algunos centenares. Una manifestación contra la pobreza y la represión se convertía, en pocas horas, en un clamor contra el régimen de Mubarak. La policía, que había sido alertada por los organismos internacionales y que se sabía observada con lupa después de los hechos de Túnez, no tenía muy claro cómo contener sin el uso de la fuerza bruta unas protestas que crecían de forma exponencial. No sabían hacerlo de otra manera. Y la gente estaba perdiendo el miedo.

Las marchas en El Cairo se fueron dispersando por las calles y, a medida que eran atacadas por los matones policiales, los manifestantes se reagrupaban en la céntrica plaza Tahrir. Allí, a media tarde, se concentraron unos pocos miles que, sobre todo, centraron sus gritos en contra del ministro del Interior, Habib el-Adly, y el hijo heredero de los Mubarak, Gamal. Un grupo de manifestantes intentó acceder al Parlamento, muy próximo a la plaza y completamente sitiado por las fuerzas antidisturbios del cuerpo de policía. Éstas respondieron, primero a pedradas, después con salvas disuasorias y, viendo que los manifestantes no cedían, disparando las primeras bombas lacrimógenas y usando cañones de agua. Entonces, las fuerzas policiales ganaron unos metros para hacer un cordón a la entrada de Tahrir, mientras la gente expresaba su voluntad de mantenerse en la plaza. Algunos llamaban a mantenerse firmes, a invitar a familiares y amigos a unirse e informaban de cómo habían ido las convocatorias en otras ciudades. En muchas de éstas, los retratos de Mubarak o los anuncios propagandísticos del régimen habían sido arrancados por las masas rabiosas. En Tahrir, se hizo desaparecer un gran anuncio de la juventud del régimen, mientras muchos manifestantes escribían a mano lemas y reclamos en carteles improvisados con los que se paseaban por la plaza. La palabra «revolución» comenzó a extenderse como un reguero de pólvora. «Si en Túnez ha llevado un mes,

debemos estar preparados para una larga lucha», afirmaban. Aunque su número apenas sobrepasara las veinte mil personas, la fuerza simbólica de aquella protesta era enorme.

Cada vez más gente se añadía a la concentración y las redes de telefonía empezaron a fallar en la explanada. Las compañías tenían órdenes del régimen de cortar la señal en los alrededores y otros puntos clave para aislar la protesta y evitar el efecto llamada. Hatem Dweidar, director ejecutivo de Vodafone en el país, así lo admitiría ante la prensa.

A medianoche, cuando varios miles de personas aún se encontraban concentradas, las fuerzas centrales de seguridad iniciaron una gran ofensiva, sobre todo a base de gas lacrimógeno, para desalojar Tahrir. En poco menos de media hora, la explanada había sido prácticamente vaciada y las persecuciones se extendían a las calles contiguas. Habían desalojado la plaza, pero la revolución ya estaba en marcha.

El viernes de la ira

Durante los días 26 y 27, las manifestaciones continuaron en todo el país. Varias ciudades que no habían acogido marchas el Día de la Policía, se añadieron entonces a la convocatoria revolucionaria. Las protestas habían sido, ahora sí, prohibidas por el régimen, que alertaba de que no permitiría más demostraciones populares en las principales ciudades ya que éstas «comprometen la seguridad pública». El régimen avisaba de que emprendería acciones legales contra quienes quisieran manifestarse. El controvertido ministro Habib el-Adly desconcertó a la opinión pública cuando declaró a la prensa local que las manifestaciones no les habían sorprendido y, en un guiño hacia Occidente, afirmó cínicamente que habían sido permitidas por el régimen. Mientras las calles estallaban en contra de la dictadura, la televisión pública emitía documentales de animales e imágenes fijas sobre el río Nilo.

Alejadas de los focos, las primeras muertes llegaron desde la ciudad de Suez, donde tres personas perdieron la vida en enfrentamientos con las fuerzas policiales. Mustafa Reda era el nombre de la primera víctima mortal a manos policiales de aquella revolución, seguido por Soliman Saber y Gharib Abd el-Aziz, todos fallecidos el día 26 en Suez, que se convertiría en uno de los epicentros de la revuelta, sobre todo en el barrio de Arbaeen. Como se demostraría con posterioridad, la policía había recibido la aprobación del Ministerio para disparar munición real contra las masas desde las azoteas de las comisarías, retirar armamento de los centros policiales sin cumplir con los procedimientos habituales e infiltrar a miembros armados entre los manifestantes. Suez hacía honor a su leyenda, forjada en la resistencia y lucha contra la ocupación británica, por la soberanía del Canal de Suez y contra la invasión israelí. La ciudad sufría ahora los efectos de la corrupción del régimen y la contratación masiva de mano de obra asiática, que no hacía más que empeorar las condiciones de desempleo de los habitantes. Algo que, en enero de 2011, los empujó a salir furiosos a la calle. El viejo Hafez Salama, jeque religioso y líder de la resistencia popular de Suez durante la guerra de octubre de 1973, se convertiría en un nuevo símbolo del levantamiento de la ciudad, ahora contra Mubarak y su régimen policial.

Las muertes de Suez dejaron claro a muchos que aquello iba en serio. La policía, cada vez más nerviosa, se dedicaba a secuestrar manifestantes. El día 26, se hablaba de cerca de 500 detenidos sólo en El Cairo y unos 700 en todo el país. Algunos de ellos ilustres, como el periodista Mohamed Abd el-Qados, presidente del Comité de Libertades del Colegio de Periodistas y cercano a los Hermanos Musulmanes, o Wael Ghoneim, directivo de Google-Arabia y, hasta entonces, uno de los administradores secretos del grupo de Facebook de «Todos somos Khaled Said», punto de encuentro de convocatorias en la Red. El día 27, se anunciaba la detención de tres decenas de figuras destacadas de los Hermanos Musulmanes, entre las que se encontraban Essam el-Erian y Mohamed Mursi, detenido pocas horas después de defender las protestas en la BBC árabe. Los Hermanos Musulmanes, al comprobar el éxito de las convocatorias, ya no dudaron en sumarse y exigir reformas al presidente. Reformas que, para los islamistas, se centraban en la disolución del Parlamento elegido en noviembre y la celebración de unas nuevas elecciones limpias, así como la derogación de la ley de emergencia. Mientras tanto, la web presidencial y la del Ministerio del Interior eran *hackeadas* por activistas, a la vez que la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores era apedreada por un grupo de manifestantes. Los sublevados convocaban nuevas concentraciones y llamaban a marchas masivas para el viernes siguiente, 28 de enero, después de la oración.

El régimen, inquieto por el desarrollo de los acontecimientos, decidió interrumpir las comunicaciones. El día 27 por la tarde, comenzaron a producirse los primeros cortes. Primero se entorpecieron los servidores de Twitter y luego los de Facebook, como paso previo a la paralización total de las líneas de Internet, primero, y de telefonía móvil, después. Aunque las líneas no parecían técnicamente afectadas, los servicios de todos los proveedores se encontraban parados. Alrededor de las siete de la tarde, Reuters confirmaba los cortes en la red; poco después lo hacía Associated Press. Sólo funcionaban las líneas de telefonía terrestre que muchos egipcios rescataron del olvido durante aquellos días. El régimen quería detener la comunicación y la difusión viral de grabaciones que mostraban los abusos policiales: desde las órdenes a un conductor de metro para que pasara por encima de los manifestantes a la resistencia de un joven a los cañones de agua policiales. Pero ya era tarde; las convocatorias ya habían circulado.

Aquel 28 de enero, decenas y decenas de miles de personas decidieron salir a las calles de todo Egipto para reclamar la caída del presidente Mubarak y exigir justicia social. En El Cairo, las autoridades habían ordenado cerrar las estaciones de metro que daban a la plaza Tahrir, que se convertiría en un objetivo

simbólico de la lucha entre manifestantes y régimen en la capital. Las fuerzas policiales blindaron todos los accesos a la explanada y rechazaron las marchas que intentaban acceder para hacer oír su voz. Así arrancaron los enfrentamientos. Lluvia policial de gases lacrimógenos, que en pocas horas pasarían a ser perdigones e incluso munición real contra las piedras de los ciudadanos. La mayoría de los proyectiles utilizados eran de fabricación estadounidense, e informes gubernamentales posteriores revelaron que el Ministerio había usado gases lacrimógenos caducados, a pesar de tener conocimiento de su expiración.[1] Luchas encarnizadas se reproducían en los accesos a la plaza, dejando imágenes espectaculares de los combates entre manifestantes y fuerzas de seguridad sobre los puentes del río Nilo. Las estampas se repetían en las principales ciudades del país. Egipto estaba en guerra directa contra su temido y odiado cuerpo policial.

Los choques se alargaron durante horas en las localidades egipcias más importantes. Ante la imposibilidad policial de controlar la ira popular, a las 15.30 el régimen anunciaba, a través de la televisión pública, la imposición de un toque de queda en las principales urbes sublevadas. De seis de la tarde a siete de la mañana, estaba prohibido caminar por las calles de Suez, Alejandría y las dos provincias del Gran Cairo. Un Mubarak acorralado lanzaba a sus tropas militares a las calles para aplicar la resolución, y las fuerzas policiales se batían en retirada con el rabo entre las piernas. Aunque esa misma noche también se registraron algunos incidentes e, incluso, se quemó un tanque en la plaza Tahrir, la aparición del Ejército fue recibida con entusiasmo por buena parte de los ciudadanos, deslumbrados por las imágenes patrióticas de las victorias militares del pasado. «El pueblo y el Ejército unidos en una sola mano», gritaban las masas. Pero la popularidad castrense no terminaría de calmar la ira popular, que se cebó contra casi un

1 «Laynet teqady el-haqai'q: El-dajleya atlaqet qanabel montaheya el-salahya helal thawra», *Shorouk News*, 02-01-2013.

centenar de comisarías y miles de furgonetas policiales en todo el país, que fueron tomadas por las llamas aquella noche. Cientos de personas habían perdido la vida en los enfrentamientos de aquel viernes. Los registros oficiales, silenciados durante semanas, acabaron hablando de 840 muertos, la mayoría provenientes de barriadas populares y con orígenes humildes. Otros informes apuntaban a cifras muy superiores.

El toque de queda parecía una broma. Los manifestantes intentaron asaltar, sin éxito, la sede del Ministerio del Interior, la de Asuntos Exteriores y la televisión pública, defendidas ya por las fuerzas militares. Se incendió la mastodóntica sede del Partido Democrático Nacional, en el Nilo cairota. Una hora después de que se anunciara el toque de queda, la televisión pública anunciaba que el fuego había tomado el edificio. El incendio duró días, con la estructura abandonada a su suerte por unos bomberos que se negaron a apagar el símbolo. La imagen se repitió en las principales ciudades del país. Decenas de centros penitenciarios vivieron sublevaciones o fueron asaltados por familiares y vecinos con el objetivo de liberar a los presos. Entre esa noche y los siguientes días, cerca de veintitrés mil de los ochenta mil prisioneros encarcelados por el régimen lograron escapar de las prisiones. Entre ellos, se encontraban 34 líderes de los Hermanos Musulmanes, detenidos por razones políticas en la cárcel de Wadi Natroum dos días antes, incluidas algunas figuras de la Hermandad como Mohamed Mursi o Essam el-Erian. Sin embargo, algunos denunciaron que la fuga de reclusos respondía a un plan del régimen para extender el caos en el país y que difundirían vídeos mostrando la pasividad policial ante las huidas. La versión oficial, sin embargo, sería que todo era una planificación de Hamás y Hezbolá para tumbar al Gobierno.

Alrededor de la medianoche, Mubarak se dirigió a la nación. El presidente afirmaba haber entendido el mensaje legítimo de algunas protestas pero alertaba de que «la línea que separa la libertad y el caos es muy fina» y que detrás había al-

guien que movía los hilos, en alusión a los Hermanos Musulmanes. Mubarak no tenía intención alguna de dimitir, pero planteaba un cambio gubernamental y anunciaba su pretensión de designar a un vicepresidente. Pero era claro al transmitir que las transformaciones serían mínimas, afirmando ante las cámaras que «continuaremos nuestras reformas políticas, económicas y sociales para una sociedad egipcia libre». Es decir, seguirían con la misma hoja de ruta.

Al día siguiente, Mubarak nombraba al jefe de los servicios secretos, el controvertido Omar Suleiman, como nuevo vicepresidente y encargaba al hasta entonces ministro de Aviación Ahmed Shafiq la formación de un nuevo Gobierno. Con la policía en el ojo del huracán, este nuevo ejecutivo no incluiría al polémico Habib el-Adli en la cartera del Interior. Era el mensaje de Mubarak al pueblo. Por primera vez en sus treinta años de mandato, nombraba a un vicepresidente y, colocando a Suleiman, daba a entender que la sucesión del poder no sería en favor de su hijo Gamal. Además, el jefe de inteligencia, el torturador en jefe, era la apuesta preferida por parte del Ejército y Estados Unidos. Los gestos de Mubarak serían apoyados públicamente incluso por Hillary Clinton, que defendía que Suleiman era el hombre que debía liderar la transición; pero no serían suficientes para un pueblo que exigía la renuncia del presidente.

La república de Tahrir

Los manifestantes no parecían querer volverse a casa. A pesar del toque de queda impuesto en todo el país, miles de jóvenes hicieron caso omiso y trasnocharon en la plaza Tahrir. En el resto de ciudades, las protestas también continuaron. Las estructuras creadas de forma espontánea se fueron consolidando paulatinamente en manos de unos revolucionarios que tenían clara la fuerza simbólica de ese emplazamiento. Y es que Tahrir (en árabe, «la plaza de la liberación») representaba, estratégicamente, todos los poderes del país.

A pocos metros de la plaza se encuentra el poder político, encarnado por el Parlamento y la sede del Consejo de Ministros. También está allí el poder regional, con la sede de la Liga Árabe, así como el simbólico poder colonial, con las embajadas estadounidense y británica, además de la sede histórica de la Universidad Americana de El Cairo. Por otro lado, Tahrir es el centro del poder administrativo, con el impactante edificio de estilo soviético de la Mogaama, y el corazón económico del país bombea en la sede del Banco Central y las principales sucursales bancarias del país. También allí se concentra el poder histórico, con el famoso Museo Egipcio. Por último, la plaza es el núcleo del poder turístico, rodeada por los más destacados hoteles de la capital. En su centro, se alza una glorieta, el colapso de la cual provoca aún más problemas en el siempre caótico tráfico de El Cairo. En una ciudad de 25 millones de habitantes, los pocos kilómetros cuadrados que rodean Tahrir simbolizan el corazón del país entero.

Durante esas jornadas, la plaza se llenó de un espíritu cooperativo que era impensable unos días atrás. Allí, y aunque fuera de manera temporal, se rompieron barreras sociales, económicas o religiosas con vistas a construir un nuevo Egipto. La necesidad de abastecimiento de alimentos o agua hizo surgir la necesidad de cooperar y organizarse, aunque los comités de seguridad fueron la forma de colaboración más necesaria dada la alta presencia de policía infiltrada. En este punto, la alta capacidad de organización de un grupo como los Hermanos Musulmanes tuvo un rol claramente destacado, pero también las donaciones de pequeños mecenas. En los barrios de las principales ciudades, los vecinos también se vieron obligados a organizar comités populares, principalmente para suplir la ausencia policial. Pero aunque la extensión de un supuesto caos era una de las amenazas empleadas por el régimen, los casos de robos o las violaciones de la ley fueron muy limitados y no se generalizaron;

algunos de éstos llevaban, además, el sello policial. Los manifestantes retuvieron a agentes que estaban saqueando el emblemático Museo Egipcio o intentando sembrar el caos por las calles de las poblaciones más importantes. El país estaba por otras cosas. Durante los días siguientes, mareas de personas ocuparon la plaza desafiando las amenazas militares. El día 29, por ejemplo, cazas F16 sobrevolaron Tahrir rompiendo la barrera del sonido y atemorizando a los ciudadanos. Los medios oficiales, tras días intentando ocultar los acontecimientos con las imágenes idílicas del río Nilo, afirmarían ahora que los manifestantes eran mercenarios que cobraban cien dólares y comían menús de KFC a cambio de quedarse en la plaza. Algunos aseguraban que eran militantes de Hamás y Hezbolá, y otros que eran drogadictos que practicaban orgías o que no había un solo egipcio entre los acampados. La gente, sin embargo, lo tenía claro: no abandonarían Tahrir hasta que el régimen cayera.

El nuevo vicepresidente convocó a las fuerzas políticas a un diálogo y urgió a poner fin a las protestas, pero éstas prosiguieron. El diálogo era rechazado, por el momento, por las fuerzas de la oposición. La situación se volvía cada vez más insostenible y tenía visos de alargarse después de la primera semana de protestas. El Ejército, que parecía querer contener la embestida y dejar que ésta desgastara sólo al presidente, alertaba que no pensaba disparar sobre los manifestantes, aunque no dejaba claro cuál era su posicionamiento. Mientras tanto, en Tel Aviv, se hablaba de preocupación por los acontecimientos. «Creemos que Egipto saldrá de ésta», afirmaba un ministro israelí en *Time* antes de añadir que «no creo que sea el momento adecuado para democratizar el mundo árabe».[2] Estados Unidos, por su parte, caminaba entre discursos ambiguos que apoyaban a los manifestantes pero reafirmaban su vínculo con el presidente. La situación parecía haberlos cogido desprevenidos mientras preparaban un plan de salida.

2 «Israel has faith Mubarak will prevail», *Time*, 28-01-2011.

El primero de febrero por la tarde, Mubarak volvió a dirigirse a la nación con un discurso paternalista que forzaba a los egipcios a elegir entre «la estabilidad o el caos» en «estos días dolorosos por los que atravesamos». El dictador prometía no ansiar mantenerse en el cargo, pero que se encargaría antes de dirigir la transición. También aseguraba que llevaría a cabo la reclamada reforma de los artículos 76 y 77 de la Constitución en cuanto a las limitaciones para presentar candidatura a las presidenciales, pero sus palabras llegaban tarde y fuera de lugar. Antes de despedirse, sin embargo, subrayó: «Ésta es mi nación y en esta tierra moriré [...] será la historia la que nos juzgará». El mensaje, retransmitido con un proyector en la plaza Tahrir, fue recibido con ira por unos manifestantes que exigían la renuncia inmediata del presidente. A pesar de todo, una pequeña parte de éstos también parecían querer dar un voto de confianza al *rais* y esperar a que convocara elecciones. En pocas horas, cambiarían radicalmente su punto de vista al comprobar que el régimen no parecía tener solución. Pocos minutos después del discurso, tuvieron lugar los primeros enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente en Alejandría. Los activistas afirmaban que los atacantes no parecían partidarios afines a ninguna facción política. Llegaba así la «batalla del camello».

La Batalla del Camello

Al día siguiente del discurso de Mubarak, la plaza se despertaba a medio gas. Muchos manifestantes habían abandonado Tahrir a medida que llegaban informaciones que indicaban que las columnas de apoyo al presidente estaban alcanzando el centro de la ciudad. Pero cuando se acercaba el mediodía en El Cairo, los revolucionarios no pudieron dar crédito a lo que veían sus ojos. Grupos de pretendidos guías turísticos venidos de las Pirámides de Guiza vacías de turistas, empezaron a atacarles a lomos

de camellos y caballos. Los jinetes fueron desarmados, pero eso sería sólo el principio de una batalla campal que enfrentó a grupos de civiles en el corazón de la capital y que se prolongó durante más de 24 horas, dejando cientos de heridos y al menos tres muertos. Los supuestos partidarios del *rais* aparecían en la plaza armados con palos, cuchillos y piedras que servían de armamento para la batalla. Muchos terminaron declarando haber sido expulsados de las cárceles y actuar a sueldo del régimen. Decenas de periodistas internacionales fueron acosado por matones, ante la indiferencia de las fuerzas castrenses. Mientras tenían lugar estos enfrentamientos, el Ejército egipcio optó por no intervenir y abandonar sus posiciones dejando que ambos grupos solucionaran la disputa entre ellos. Mientras los *baltageya*, los matones del régimen, atacaban a los manifestantes, Ismail Etman, portavoz militar, llamó a los jóvenes a terminar con la protesta para «mirar por el futuro y por nuestro país».[3]

Posteriormente, 24 hombres de negocios cercanos al Partido Democrático Nacional serían procesados bajo la acusación de haber planificado el ataque y de haber contratado a cientos de mercenarios, encargados de poner fin a la acampada de Tahrir. Entre ellos, se encontraban Fathi Sorour, portavoz del Parlamento; Safwat al-Sherif, presidente del Senado y secretario general del Partido Democrático Nacional; el propietario de cerámicas Cleopatra, Abu el-Einen; o el *showman* televisivo Mortada Mansour, que había incitado a los partidarios de Mubarak a desalojar a los manifestantes. Pero la jugada no les salió del todo bien. Las imágenes del asalto a la plaza volvieron a dar impulso a las protestas, que se repitieron de forma masiva en los siguientes días. Además, aparecieron entonces nuevas formas de sabotaje al régimen. Los polémicos conductos que transportaban gas natural a Israel por debajo de los precios de mercado serían saboteados por primera vez el 5 de febrero. La

3 «Egypt army wants protests ended», Al-Jazeera, 02-02-2011.

acción se repitió una quincena de veces durante los meses siguientes, boicoteando así uno de los acuerdos más polémicos del régimen de Mubarak con la entidad sionista. El pacto establecía que Egipto vendía el gas a un precio fijo, por debajo de las tarifas internacionales, gracias a un contrato según el cual supliría a Tel Aviv anualmente con 1700 millones de metros cúbicos de gas natural, el equivalente a un 40% de las fuentes energéticas de Israel. Este acuerdo sin precedentes, que beneficiaba a un reducido grupo de hombres de negocios muy bien situados en ambos gobiernos, provocaba la pérdida anual de 714 millones de dólares a la economía egipcia.

El régimen siguió haciendo concesiones menores: renovó a toda la cúpula directiva del Partido Democrático Nacional, incluido Gamal Mubarak, y concedió un aumento del 15% de los sueldos y pensiones de los funcionarios estatales. También anunció la liberación de 37 presos políticos, entre los que estaban algunas figuras de los Hermanos Musulmanes y el directivo de Google Wael Ghoneim. Cientos de prisioneros seguían, sin embargo, entre rejas. Mientras tanto, el acoso a periodistas y activistas pro derechos humanos continuaba.

Estados Unidos, por su parte, no lograba clarificar su visión errática de las circunstancias. Mientras desde Washington trataban de aproximarse a la narrativa del cambio democrático, el enviado especial de la Casa Blanca para afrontar la crisis, el veterano diplomático Frank Wisner, apoyaba el 5 de febrero la continuidad de Mubarak en la presidencia durante el período de transición. La Casa Blanca tuvo que salir del paso afirmando que Wisner hablaba a título individual, provocando una extraña y confusa situación.

La caída de un faraón

Al mismo tiempo que el vicepresidente Omar Suleiman expresaba en televisión que los egipcios no estaban preparados para la democracia,[4] el 6 de febrero los Hermanos Musulmanes abandonaban el boicot a las negociaciones y anunciaban su participación en una rueda de conversaciones con el vicepresidente y ex jefe de los servicios secretos. El diálogo político llegaba con una situación enquistada; la libra había caído 1,3 puntos y el Estado se veía obligado a vender con urgencia 843 millones de dólares en bonos del tesoro para rescatar la economía. Mohamed Mursi y M. Saad el-Katatni fueron los representantes que la Hermandad envió al encuentro, contradiciendo el acuerdo de la oposición, que el grupo islámico también había ratificado, de supeditar el diálogo a la renuncia del presidente.

A la salida de la reunión los islamistas mostrarían una «grata sorpresa» por la actitud de Suleiman, allanando el camino del pacto. Fuentes oficiales hablaron incluso de la consecución de acuerdos respecto a la reforma constitucional o la ley de emergencia. De esta forma, la Hermandad —que no quería sacar el pie de la calle para poder seguir presionando— se distanciaba de nuevo de las protestas y emprendía el sendero pactista.

Alejadas de los despachos, las protestas seguían con fuerza en la calle. Las marchas reunían a un gran número de gente, a pesar de que entraban ya en la tercera semana. Los intentos del régimen y de la patronal de volver de forma gradual a la normalidad topaban con la oposición de un pueblo enervado. Al reabrirse las oficinas y las fábricas, los trabajadores abandonaron la calle y trasladaron sus exigencias a sus puestos de trabajo. El 9 de febrero, la bola de nieve de las movilizaciones obreras arrollaba con todo. Miles de empleados fabriles paraban la producción en Helwan, incluyendo cuatro fábricas militares; los trabajadores del transporte público de El Cairo iban a la huelga mientras constituían el primer sindicato libre desde el inicio de la revolución; tres mil mecánicos de los ferrocarriles cortaban el paso de los trenes reclamando mejores condiciones de seguridad; las mujeres de la limpieza se sublevaban en el barrio acomodado de Mohandesseen pidiendo incrementos de sueldo, mientras otros obreros iban a la huelga en lugares como Kafr el-Dawwar y Kafr el-Zeit. 1500 obreros del algodón en Mahala detuvieron la producción, y seis mil trabajadores de la Autoridad del Canal de Suez se manifestaron por las calles de Port Said, Suez y Ismailiya. Quinientos centros de atención primaria de la Media Luna Roja se declararon en huelga contra la dirección corrupta de la misma, y 250 periodistas se reunieron para exigir unas nuevas elecciones en el sindicato profesional, después de que el año anterior éstas hubieran sido manipuladas. Los abogados rodearon los juzgados reclamando el fin del régimen. Y esto era sólo la punta del iceberg. Los casos se multiplicaban hora tras hora. La situación era ingobernable .

Al día siguiente, 10 de febrero, los rumores sobre la caída del *rais* iban en aumento. La cúpula militar se reunió, extrañamente sin la presencia de Mubarak, mientras algunas filtraciones apuntaban a que la CIA afirmaba que el presidente renunciaría al cargo esa misma noche y que incluso su esposa, Suzanne, ya había abandonado El Cairo. El comunicado del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas no fue muy revelador, aunque encomendaba a todos a preservar el país. El *rais*, sin embargo, sólo realizó un nuevo comunicado televisivo en que, con tono paternalista, afirmaba su compromiso verbal de dejar el poder en pocos meses y delegaba algunos poderes en Omar Suleiman. La respuesta de la plaza Tahrir fue la misma: suelas de zapato contra el presidente para mostrar el rechazo a un discurso del todo insuficiente. Sería el último.

Al día siguiente, a media tarde, y con las calles una vez más tomadas por las masas, el vicepresidente Suleiman aparecía

4 Entrevista a Omar Suleiman en el canal ABC, el 6 de febrero de 2011.

ante las cámaras para anunciar lo que el pueblo egipcio llevaba dieciocho días esperando: «En estas difíciles circunstancias por las que está atravesando el país, el presidente Hosni Mubarak ha decidido dimitir del cargo de presidente de la República y encargar al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas la administración de los asuntos del país. Que Alá nos ayude».

La revolución después de Mubarak

Los militares:
de «El pueblo y el Ejército de la mano» al *Kazeboon*

La Junta Militar toma el poder

El mismo 11 de febrero, la televisión pública egipcia emitía el tercer comunicado del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas desde el inicio de la revolución. Mohsen el-Fangary, su portavoz, era el encargado de leer un discurso que acababa con el mediatizado saludo militar en memoria de los mártires del levantamiento popular. «El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas envía su más sentido pésame a las almas de los mártires que han dado su vida por la libertad y la seguridad de su país», afirmaba en una frase que sólo interrumpió para ponerse militarmente la palma de la mano sobre la frente.

Aquella imagen conmocionó al país. El Ejército se rendía a los revolucionarios y les extendía un sentido homenaje al más puro estilo castrense. Las imágenes del saludo de Fangary se mezclaban en el imaginario de la gente, gracias sobre todo al trabajo de los medios, con las de soldados sosteniendo bebés

en sus manos u otros miembros del Ejército que habían dejado sus armas para unirse a los manifestantes, quienes los paseaban a hombros como si fueran toreros salidos de una corrida. Así se rememoraban episodios históricos épicos y se defendía el carácter nacional de las Fuerzas Armadas. Todo era de color de rosa. Parecía que el romance entre el pueblo y el Ejército, sintetizado en el grito de «El pueblo y el Ejército unidos en una sola mano» era imposible de romper; las Fuerzas Armadas eran proyectadas local e internacionalmente como las auténticas salvadoras de la revolución.

Sin embargo, aquella imagen no ocultaba el papel confuso jugado por las Fuerzas Armadas durante el levantamiento popular. El mismo 28 de enero, cuando las tropas militares tomaron las calles en sustitución de la policía, aquéllas reprimieron las protestas de igual o peor forma. A raíz de ello, aquella noche grupos de manifestantes prendieron fuego a un tanque militar en el mismo corazón de la plaza Tahrir. Las Fuerzas Armadas también habían intentado por activa y por pasiva el desalojo de la explanada, y habían sido excesivamente condescendientes y pasivas ante el ataque de los matones en la Batalla del Camello. De hecho, mientras la plaza era atacada por los partidarios del régimen, habían pedido públicamente a la gente que abandonara el espacio. La Policía Militar también había perpetrado el asalto a oficinas de grupos de derechos humanos y casas de activistas para echar un vistazo a sus ordenadores, practicando detenciones e intimidaciones que, en algunos casos, habían terminado en denuncias de tortura. Investigaciones posteriores de un comité gubernamental, silenciadas por las autoridades, revelaron un papel aún más activo del Ejército en la detención y apremio de manifestantes y en la desaparición de un gran número de ciudadanos en controles de carretera, especialmente en el sur de la capital egipcia.[1] Cerca de un millar de personas fueron denunciadas como desaparecidas por sus familiares durante el levantamiento popular, sin que volvieran a sus casas tras la renuncia de Mubarak. Según este informe, de ochocientas páginas, varios ciudadanos murieron durante su detención a manos de las Fuerzas Armadas y fueron enterrados en fosas comunes al no haber podido ser identificados. La investigación apuntaba también a la participación militar en la muerte por tortura de al menos un manifestante detenido en la plaza Tahrir, y se sugería su posible participación en la muerte de 68 presos, como mínimo, que habían escapado de la prisión de Fayoum. Las Fuerzas Armadas también habrían ordenado la liberación de prisioneros en, por lo menos, la ciudad de Suez. Pero estas informaciones fueron escondidas durante meses a una opinión pública que siguió cegada un tiempo por el discurso de la unión con el Ejército y creyendo que los militares habían salvado al pueblo de las garras del «mubarakismo».

Esta lectura también obviaba otro hecho básico. Y es que el Ejército era el pilar central de un régimen nacido sesenta años atrás, con la sublevación de los oficiales libres, y que se transformó hasta llegar a los tiempos de Mubarak. Egipto vivía bajo un régimen militar desde que, en julio de 1952, un grupo de oficiales sacaran los tanques a la calle para derribar al rey Farouk, a quien acusaban de ser un títere del poder colonial británico. Desde entonces, el país se había sustentado sobre el poder del Ejército, y sus cuatro presidentes —Naguib, Nasser, Sadat y Mubarak— provenían de las filas castrenses.

La caída de Mubarak volvió a poner en primer plano de la escena política a una cúpula militar hasta entonces omnipresente pero invisibilizada y, sobre todo, inteligentemente relegada a un segundo plano. A pesar de los orígenes militares del propio dictador, sus apariciones públicas siempre se realizaban vestido de civil, por lo que las imágenes en la prensa y televisión de las reuniones de los cabecillas militares ya implicaban un cambio enorme en un imaginario colectivo

1 Algunos detalles del informe serían revelados por el periódico egipcio *Shorouk* y por el británico *The Guardian*.

claramente afectado por el endulzamiento cinematográfico y mediático de las antiguas proezas épicas, algunas bastante discutibles.

El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, la institución a la que Mubarak había legado su poder, había sido creado por Sadat en 1973 a raíz de los preparativos de la cuarta guerra árabe-israelí, la conocida como «Guerra de Octubre» o «del Yom Kippur». Compuesto por una veintena de altos oficiales militares, este organismo normalmente siempre había sido presidido por el jefe de Estado, situación que cambió durante la revolución. El 10 de febrero, este órgano se reunió sin la presencia de Mubarak, auspiciando rumores sobre un posible golpe militar en el país.

La cúpula militar estaba, además, claramente tutelada por Washington. Desde los acuerdos de Camp David, recibía una inyección de más de 1300 millones de dólares anuales de ayuda directa, sin control político, provenientes de Estados Unidos para mantener la estabilidad en la zona. Sólo las aportaciones norteamericanas al Estado sionista de Israel superaban este monto. Cerca de cuarenta mil millones de dólares en ayuda militar habían viajado de Washington a El Cairo desde 1979, año de los acuerdos, indicador del paternalismo estadounidense sobre la cúpula militar egipcia.

La Junta estaba formada esencialmente por oficiales de la vieja guardia, la mayor parte de los cuales bien entrados en los sesenta, a las puertas de la jubilación o en edad de jubilarse. Al frente, se encontraba el mariscal Hussein Tantawi, ministro de Defensa del *rais* desde 1991. El mariscal había entrado en escena cuando Mubarak se sacó de encima al incómodo Abd el-Halim Abu Ghazala, quien se rumoreaba que podía disputarle el cargo. Tantawi estaba hecho de otra pasta y tenía, a la caída del *rais*, 76 años, de los cuales llevaba veinte trabajando codo con codo con Mubarak: y se convertía así en el ministro que más tiempo había durado en el cargo desde la creación del Egipto moderno. Según una información revelada por Wikileaks, oficiales del Ejército y autoridades norteamericanas definían a Tantawi como «el perro faldero de Mubarak» y una persona de edad «reticente a los cambios».[2] Según el embajador estadounidense, su única obsesión era mantener el statu quo militar hasta el fin de sus días. «Arcaico, inflexible y fijado en su punto de vista», fueron algunos de los adjetivos empleados en los documentos para definir a este oficial con «poca ambición política».

El segundo integrante de la cúpula militar, Sami Anan, era, a pesar de su formación soviética, el hombre de Washington. Con 64 años de edad, formaba parte de la vieja guardia, pero también era el personaje del momento para los Hermanos Musulmanes, que lo veían como una figura incorruptible y una apuesta de futuro para la transición. Cuando el pueblo egipcio estalló, Anan curiosamente se encontraba en Estados Unidos. Allí solía viajar para negociar la millonaria ayuda económica de Washington al Ejército egipcio y, a la caída del *rais*, siguió manteniendo contacto casi a diario con sus interlocutores estadounidenses. Por eso, muchos creían que él era el auténtico hombre fuerte del consejo militar. Calificado como un «tipo duro», modesto y sensato, se llegó a rumorear que podría incluso presentarse a las presidenciales, lo que al final no hizo. Anan era habilidoso. El 10 de febrero, ya retornado de su viaje a Estados Unidos, realizó una oportuna aparición en la plaza Tahrir, donde se le atribuyeron algunas declaraciones según las cuales afirmaba que los militares se habían negado a obedecer las órdenes presidenciales de disparar contra los manifestantes. Evidentemente, eso le hizo ganarse la empatía de una buena parte de los revolucionarios, que llegaron a publicar folletos alabando su honestidad durante la temporada en que el romance entre Ejército y revolución todavía se mantenía.

2 Cables 08CAIRO2091 y 08CAIRO524_a.

La República de los Generales

El Ejército disponía de una fuerza aproximada de 486 000 hombres, la más potente del mundo árabe, que se nutría de jóvenes de todo el país reclutados para el servicio militar obligatorio. Pero el verdadero poder de las Fuerzas Armadas no se encontraba en su capital humano, ni mucho menos en su desfasado poder militar. Sus garras se expandían por los cuatro rincones del Estado egipcio gracias a la denominada «República de los Generales».[3]

En el período 1954-1962, cerca de 1500 oficiales militares fueron nombrados para altos cargos de la sociedad civil. Sadat intentaría civilizar un poco la Administración durante su mandato, pero la entrada de Mubarak volvió a hacer crecer el número de carteras y puestos de responsabilidad civil en manos de militares. Defensa, aviación civil, producción militar y desarrollo local eran cargos ministeriales siempre en manos castrenses, mientras que otras como transportes, comunicaciones, medio ambiente y solidaridad también solían tener ministros militares. Las subsecretarías o las direcciones generales de los ministerios solían caer de la misma forma en manos de oficiales retirados, así como la dirección de empresas públicas. Desde 1990 hasta la caída de Mubarak, entre el 50 y el 80% de los gobernadores locales provenían del sector militar, más un 20% adicional procedente de los cuerpos policiales o las agencias de seguridad. Sumando los cargos locales menores (alcaldías, direcciones de distritos, vicepresidencia de provincias, etc.), se calcula que no menos de dos mil oficiales jubilados formaban parte de la estructura administrativa local del país. Y la lista seguía: en las universidades, las agencias de investigación científica, los consejos nacionales de juventud, los consejos de radio y televisión... En definitiva, miles de oficiales retirados configuraban el mapa de poder real de la sociedad egipcia. Sus pensiones, de alrededor de 500 dólares mensuales, se podían multiplicar fácilmente por diez veces gracias a su participación económica en la vida civil. Se aseguraban así jubilaciones doradas, seguridad económica, un relativo control político del país y una extensa red de ingresos económicos para el entramado de las Fuerzas Armadas. Estaban por todas partes.

Las Fuerzas Armadas eran, además, el único estamento público alejado del control administrativo. Aunque un departamento especial del Ministerio de Finanzas se encargaba de los presupuestos del Ejército, esta información era del todo confidencial y un auténtico secreto de Estado. Ningún cuerpo civil tenía la potestad de preguntar sobre los gastos militares. De hecho, la continuidad de este blindaje sería uno de los puntos calientes de debate de la transición política en el país y una línea roja infranqueable.

La corrupción militar tampoco era monitorizada por nadie. Sólo el presidente tenía derecho a supervisar las acciones de las Fuerzas Armadas. La Agencia para el Monitoreo Administrativo era la entidad encargada de controlar la corrupción en el país. En los tiempos de Mubarak, ésta siempre había estado bajo control militar, basado en el principio de fidelidad extendido en el país. En definitiva, casi todas las piezas del pastel eran controladas directa o indirectamente por miembros de un estamento castrense claramente desideologizado en comparación con la época nasserista. El régimen, de hecho, había comprado su silencio.

En 1989, Mubarak destituyó al ministro de Defensa, Abd el-Halim Abu Ghazala, debido a una historia de corrupción. Ghazala revendía en Irak y Afganistán parte del armamento que Egipto recibía gracias a los acuerdos de Camp David. Muchos analistas coincidieron en ver ésta como una destitución política. Ghazala era un hombre de una enorme popularidad, tanta que podía llegar a eclipsar al propio *rais,* por lo que muchos creyeron que Mubarak había destapado los documentos

3 Yezid Sayigh: «Above the State: The Officers' Republic in Egypt», Carnegie Middle East Center, 1-09-2012 [*online*].

secretos del ministro para quitárselo de encima. De hecho, su nombre sonó como posible rival electoral del *rais* en las presidenciales de 2005, tres años antes de que perdiera la vida a causa de un cáncer. Sea como fuere, todo el mundo coincidió en que, tras su destitución, la aureola de la cúpula militar cambió de forma radical. Mubarak, con la obsesión de afianzar su control sobre el país, inició una reforma del régimen y más concretamente del Ejército, desde los rangos en sí hasta la influencia que éstos tenían.

A partir de entonces, el Ejército jugaría a la ubicuidad y entremezclaría la república militar con la esfera civil. En 1991, esto representó un punto de inflexión del país hacia el clientelismo y los privilegios. Este nuevo período marcaría y transformaría, especialmente, a la cúpula militar, a la que se habían prometido nuevas cuotas de poder y jubilaciones doradas en instituciones civiles, a cambio de abstenerse de su participación activa en política. Era el llamado «subsidio de lealtad», que implicaba especialmente a los altos rangos y que instaló en el Ejército la promoción basada en el clientelismo. Y es que los cargos políticos eran una parte jugosa del pastel, pero no representaban todo el pastel.

La entrada de Egipto en el consenso de Washington y los dictados del FMI, con la liberalización del mercado egipcio y la privatización de empresas estatales, permitieron que el Ejército controlara aún con más fuerza la economía a través del nombramiento de oficiales para los consejos de administración de dichas empresas, que seguirían en manos militares y privatizarían sus ganancias. Esta práctica aportó enormes riquezas a los altos rangos castrenses. Este proceso iniciado en 1991 llevó a los oficiales a sentarse al frente de los consejos de administración de los *holdings* de transporte, electricidad, agua, saneamiento, gas natural o petróleo, y a tener un amplio control sobre los sectores públicos asociados, como la construcción, la vivienda, el desarrollo agrícola y el turismo. El Ejército, de hecho, controlaría cerca del 85% del terreno estatal no

explotado en virtud de una ley que le convertía en su defensor como garante de la defensa nacional. A menudo, sin embargo, estas tierras terminaban siendo explotadas como inversiones económicas en beneficio militar. Incluso se llegó a crear una agencia específica para esta finalidad. Entre 1991 y 2011, hasta 24 «ciudades» o urbanizaciones fueron levantadas por la industria constructora en manos militares, que alojó allí a más de cinco millones de civiles, explotaciones turísticas o *resorts* aparte. Todo era posible. Madinat Nasr, la costa norte o Sidi Crir fueron algunos de los casos más clamorosos de este proceso de enriquecimiento castrense.

La enorme riqueza de los militares se concentraba sólo en unas pocas manos. En concreto, en un 15% de los altos cargos, según informaría a Reuters un general retirado del Ejército.[4] Mientras un oficial de élite podía hacer millones de dólares y acceder a la red de negocios de las Fuerzas Armadas, un oficial de rango medio o bajo apenas percibía 2500 libras al mes, unos 300 euros, tras el cobro de los extras e incentivos; el clasismo estaba fuertemente instalado. El Ejército ya no era aquella organización que, en tiempos de Nasser, había significado una oportunidad de ascenso en la escala social para las clases desfavorecidas. El acceso a la Universidad Militar, por ejemplo, era imposible para aquellos jóvenes cuyos padres no tuvieran un diploma universitario. El sistema de complejos exámenes de acceso conllevaba que éste prácticamente sólo fuera asequible a jóvenes con capacidad para pagar escuelas privadas. Además, la promoción entre el personal de tropa no debía nunca exceder el 10% de los nuevos oficiales y éstos nunca podían llegar a cargos superiores a los de capitanía. Las redes de lealtad eran esenciales para el nombramiento de unos u otros en posiciones clave de poder. La golosa administración del Canal de Suez estaba bajo control del personal de las Fuerzas Armadas, así

4 «Special report: In Egypt's military, a march for change», Reuters, 10-04-2012.

como también se hicieron con el mando del entonces monopolio de las telecomunicaciones y la telefonía fija a través de la empresa Telecom. Muchos pasaron directamente a ser propietarios de estas empresas privatizadas. Los militares nombrados por los órganos directivos de estos *holdings* podían fácilmente llegar a cobrar sueldos de entre 16 000 y 83 000 dólares mensuales. Beneficios que podían convertirse en millones si jugaban bien sus cartas. La cúpula militar vivía, literalmente, montada en el dólar.

Los oficiales también dominaban una extensa red de fábricas y empresas que se habían mantenido hasta entonces bajo control estatal. La presencia militar estaba por todas partes: desde las estaciones de gasolina Wataneya al agua embotellada Safi pasando por los cigarrillos Cleopatra; de televisores a pesticidas pasando por verduras, pasta alimentaria u hostelería. Prácticamente cualquier cosa era susceptible de tener participaciones de la industria castrense, aunque el monitoreo de ésta era un tema tabú. Las cifras globales son todavía, a día de hoy, una incógnita. La mayoría de informes hablaban de un sector que podía representar entre un 25 y un 40% del producto interior bruto del país. Según informaciones militares, sólo uno de los múltiples *holdings* que controlan, el Proyecto de Servicio Nacional, que agrupa a cuatro empresas, había logrado un beneficio de 1300 millones de dólares entre 1990 y 2011. Otros informes hablaban de una rentabilidad cercana a los 200 millones de dólares anuales para los negocios militares.[5]

Uno de los *holdings* más relevantes era la Organización Árabe para la Industrialización (AOI, por su nombre en inglés), que agrupaba a doce fábricas y más de deiciséis mil trabajadores.[6] El 70% de su producción tenía un destino civil,

5 Sarah El-Deeb: «Egypt's military generals defend their business», Associated Press, 28-03-2012.

6 «Profile: The Arab Organization for Industrialization», *Egypt Independent*, 05-09-2012.

mientras el restante 30% provenía del mantenimiento de material bélico y la producción de pequeña maquinaria de guerra. Creada en 1975 como una de las principales productoras armamentísticas del mundo árabe, a partir de los acuerdos de paz de Camp David y del compromiso estadounidense de suplir anualmente con 1300 millones de dólares al Ejército egipcio, el *holding* se reconvirtió a la industria civil y empezó a producir televisores y receptores de satélite, y consiguió asimismo licencias para fabricar los coches coreanos Kia o los franceses Peugeot, aunque su gran éxito fue la fabricación anual de diecisiete mil *jeeps* Cherokee. A pesar de ser financiada públicamente a través del Ministerio de Defensa, su labor se encontraba fuera del monitoreo público y alejada del control parlamentario. Con unas ventas anuales de 430 millones de euros, el beneficio anual de la AOI se situaba en torno a los 60 millones de euros.

Siempre por encima de la ley, los negocios de los militares gozaban de importantes exenciones fiscales y otros beneficios exclusivos. Los trabajadores, que no estaban sujetos a los ya de por sí precarios derechos laborales y sindicales del conjunto del país, cobraban en muchas de estas fábricas entre 17 y 28 dólares mensuales. En algunos casos, sin embargo, se denunciaron casos de trabajadores que ni siquiera recibían un sueldo al haber sido empleados a cambio de lo que debía ser su servicio militar obligatorio. Auténticos tiburones del mercado, algunas fábricas contrataban obreros del sudeste asiático como mano de obra.

¿Victoria popular o golpe de Estado silencioso?

La entrada de Egipto en el neoliberalismo agresivo condujo al país, en definitiva, a la acentuación de una oligarquía de claro signo militar. De hecho, la política de clientelismo y lealtad de un Ejército concentrado más en los negocios que en las prácticas bélicas llevó a que éste perdiera su capacidad operacional; su cúpula, claramente envejecida y encabezada por un mariscal

de 76 años, era reacia a los cambios y la modernización. Todo en virtud de la estabilidad institucional. Así lo interpretaron las autoridades estadounidenses en varios documentos revelados por Wikileaks que hablaban de un Ejército vetusto, que «ya no está preparado para combatir». Según los documentos filtrados, los diplomáticos norteamericanos valoraban que «el Ejército egipcio no es la fuerza profesional que muchos consideran. Está hinchada y su núcleo, entregado tras el mecenazgo de Mubarak. Su formación es inconexa, el mantenimiento del equipo, profundamente inadecuado y es dependiente de Estados Unidos en la financiación logística».

Pero, a pesar de los astronómicos beneficios, los generales estaban inquietos. La entrada en el Gobierno del «clan Gamal» ponía en jaque el equilibrio de poderes dentro del Ejército. El tema de la herencia había levantado ampollas en la cúpula militar. El proceso de liberalización ponía en el punto de mira los negocios militares, y los excesos de Gamal Mubarak «y sus amigos» no eran bien vistos por la vieja guardia. Para muchos, el hijo del *rais* era como un niño consentido sin capacidades políticas y su hipotético acceso al poder podía poner fin a las hasta entonces alternadas presidencias militares. Gamal jugaba para muchos el papel del heredero irresponsable y era visto como alguien que sólo beneficiaba a sus amigos. Y lo hacía de una forma tan descarada que rompía las reglas no escritas de la corrupción estatal. Esas corruptelas, siempre presentes en el régimen, llegaban a unos niveles de evidencia pública tan grandes que ponían en peligro la estructura misma del Estado militar.

La agresividad del proceso de liberalización económica encabezado por el grupo de Gamal también preocupaba a los militares. Varios documentos desclasificados por Wikileaks apuntaban en este sentido. La embajadora estadounidense en El Cairo señalaba en 2008, en un documento filtrado, que la profundización en las reformas era interpretada por los militares «como una amenaza» a sus posiciones económicas. El mismo

mariscal Tantawi era citado en 2008 en otro informe prácticamente en el mismo sentido. Los intentos de aplicar el neoliberalismo al pie de la letra, como querían Gamal y compañía, eran percibidos como una amenaza al reparto del pastel en manos de los militares. Pero su poder era aún muy grande.

De hecho, las primeras reacciones del *rais* tras el levantamiento popular parecían querer calmarlos. Mubarak trató de convencer a las Fuerzas Armadas de que descartaba la opción Gamal, poniendo sobre la mesa el nombre del prestigioso y temido jefe de inteligencia Omar Suleiman, en un claro gesto hacia Washington y los dinosaurios del régimen. El nombramiento del ex comandante de la Aviación Ahmed Shafiq como primer ministro también podía leerse como una concesión a ese Ejército inquieto. Fue por eso que, desde el primer momento, todo el mundo vio claro que en la reacción de la cúpula militar estaría la clave de todo. A la caída del *rais*, fueron numerosas las figuras que se plantearon si lo que estaba pasando era una victoria popular o un golpe de Estado silencioso. Los movimientos militares, que se aceleraron políticamente a raíz del encuentro de la Junta Militar el 10 de febrero sin el *rais*, daban lugar a este tipo de suspicacias; el Ejército sacrificaba a Mubarak para salvar al régimen.

Sea como fuere, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas tomó el poder del país de forma efectiva aquel 11 de febrero, después del histórico discurso de Omar Suleiman. Al día siguiente, el general Fangary volvió a aparecer en la televisión pública para emitir el comunicado número 4 de la Junta Militar, en que afirmaba que los militares se comprometían con el proceso de transición civil democrática. Pero Fangary también hizo un llamamiento a respetar la legalidad vigente, un claro pilar del régimen, y, lo más significativo, a respetar todos los acuerdos internacionales. Un guiño de cara al vecino Israel y la Casa Blanca. Tantawy se reuniría ese mismo día con el primer ministro Ahmed Shafiq «para devolver la vida a la normalidad lo más rápido posible». Lo primero que hicieron fue reclamar a

los revolucionarios que volvieran a sus casas. Como muestra de buena voluntad y de capacidad financiera, el Ejército mismo entregaría dos mil millones de dólares al Gobierno egipcio y concedería un préstamo de mil millones más al Ministerio de Finanzas. De entrada, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas rechazó ceder el poder de la transición a ninguna entidad civil o mixta. Éste había sido el caso de Túnez, pero los militares egipcios no querían imitar ese ejemplo. Ellos estaban al cargo. En un principio, prometían ceder el poder en seis meses. Pero no fue así.

La consigna era clara. Estabilidad. Retorno a la normalidad. Nosotros nos encargamos. No sería un camino fácil.

El pacto de la transición

Para dirigir la transición y controlar el pulso de la calle, los militares gozaron de una alianza política de hierro con los que, hasta entonces, se habían presentado como sus principales adversarios. La sombra de un acuerdo bajo la mesa, tutelado por Washington, entre militares e islamistas, entre el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y los Hermanos Musulmanes, entre una de las instituciones más seglares y una de las más religiosas de todo el país, planeó sobre todo el proceso de transición. Era una alianza aparentemente antinatural, pero la única posible para dos potencias políticas temerosas de verse desgastadas por la presión popular latente en la calle. Una no quería perder comba en el nuevo régimen que vendría y la otra estaba deseando saborear el poder tantas décadas negado.

La desconfianza mutua, sin embargo, marcó todo el período de transición. El 10 de febrero, un día antes de la renuncia del dictador, Essam el-Erian alertaba de su miedo a un posible golpe de Estado. En el recuerdo de los islamistas estaba la confrontación con el nasserismo, en la década de 1950, y el golpe de Estado militar en Argelia de 1992. Un recuerdo que sobrevolaría y condicionaría las complejas relaciones entre militares y Hermanos Musulmanes. A pesar de todo, destacadas figuras de la Hermandad se esforzaron en recordar que el escenario de 2011 poco o nada tenía que ver con el de 1952 y rechazaron la definición de golpe de Estado planteada por algunos medios, en un esfuerzo por garantizar la continuidad de ese matrimonio de conveniencia. Un enlace que se había gestado justo antes de la caída de Mubarak: diez días antes, el 1 de febrero, los Hermanos Musulmanes reconocían negociaciones con el Ejército para deponer al entonces todavía presidente y mostraban públicamente su confianza en que serían las Fuerzas Armadas las que harían caer al *rais*. Pero la primera gran muestra pública de este gran acuerdo se dio con el referéndum de reforma constitucional.

Los militares anularon la Constitución el 15 de febrero. Con el fin de afianzar el control sobre la transición y solucionar el conflicto legal producido por el vacío de poder, la Junta Militar propuso rápidamente una reforma constitucional que les otorgara los plenos poderes necesarios para salir adelante y liderar el proceso. El ideólogo de la reforma sería el general Mamdouh Shahin, responsable de los asuntos legales del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas.

No había pasado ni una semana de la caída del *rais*, cuando 31 organizaciones de derechos humanos criticaron que el comité creado para redactar la reforma de las disposiciones constitucionales encargada por la Junta Militar no cumplía la función de reflejar la diversidad de la sociedad egipcia. En el mismo, compuesto por ocho figuras, participaban destacadas figuras del antiguo régimen, algunas de las cuales ya habían reformado la Constitución en 2005 y 2007, bajo el mandato de Mubarak. Entre los grupos de oposición sólo figuraba el nombre de los Hermanos Musulmanes.

En paralelo a este proceso, la calle seguía presionando por un cambio revolucionario, exigiendo la dimisión del Gobierno de Ahmed Shafiq, nombrado por el dictador depuesto. Su re-

nuncia llegaría el 3 de marzo, tras un histórico debate televisivo en el que el periodista Hamdy Kandil y el escritor Alaa el-Aswany pusieron contra las cuerdas al jefe del ejecutivo. En su lugar, se colocó a un tecnócrata, Essam Sharaf, que no tardaría en ser calificado de títere de los militares por las fuerzas revolucionarias. La calle seguía estallando contra el régimen policial y la misma noche de la dimisión de Shafiq decenas de sedes policiales fueron asaltadas en todo el país por jóvenes activistas, que destapaban así la destrucción sistemática de documentación policial. Un mar de papeleo triturado llenaba las comisarías. La documentación salvada pudo poner de manifiesto el control total que se tenía sobre cualquier tipo de actividad pública e incluso privada, ya fuera política o no. Listados de nombres seguidos por vagas descripciones, cedés llenos de información aparentemente banal eran el ejemplo gráfico del seguimiento total y paranoico que la policía hacía de la población egipcia. Pero mientras la calle palpitaba, en los despachos se aceleraba el maquillaje de la Carta Magna.

La reforma constitucional, según denunciaban los revolucionarios, desenterraba la vieja Constitución de 1971 y avalaba las leyes del antiguo régimen para el período transicional. Pero lo más relevante era, quizá, que otorgaba poderes casi absolutos a la Junta Militar. En virtud de la reforma del artículo 56, ésta no sólo se reservaba el poder ejecutivo sino también el legislativo, así como el derecho de nombrar cargos públicos, especialmente el primer ministro y los miembros de su Gobierno.

El resto de cambios se centraban en ocho puntos, la mayoría de los cuales serían claves en el transcurso del proceso. Entre las más destacados, la reforma del artículo 76, que facilitaba la participación en las elecciones presidenciales de las candidaturas independientes (no adscritas a ningún partido), mientras que el 75 añadía nuevos requisitos a estas candidaturas. Agregaba, por ejemplo, el origen egipcio puro del candidato: hijo de egipcios sin dobles nacionalidades y casado con una persona también de nacionalidad puramente egipcia. En otro

artículo relevante, la reforma del artículo 88, se devolvía el control judicial total sobre el proceso electoral. El artículo retornaba, en definitiva, a su redactado original antes de que Mubarak suprimiera de forma polémica el control judicial de las elecciones de 2006 en su lucha contra los jueces. La Constitución también hacía desaparecer de manera misteriosa algunos artículos del texto de 1971 relacionados con la justicia social. Los artículos 13, 17, 23 y 44 sobre el derecho al trabajo, el acceso a la salud y el seguro social, el aumento del nivel de vida y el establecimiento de un salario mínimo no aparecían en el nuevo redactado. Tampoco algunos artículos referentes a la solidaridad social, la igualdad de oportunidades o la familia como base de la sociedad.

Aparte de estos cambios, el corazón de la vieja Constitución seguía inalterado, lo que provocó la crítica del frente revolucionario. Estas fuerzas políticas pidieron el voto contrario a la reforma y exigían una nueva Carta Magna redactada desde cero. Incluso el ex secretario general de la Liga Árabe, y pieza importante de la cara amable del antiguo régimen, Amr Moussa, pidió el voto contrario a la reforma. Algunas figuras del antiguo régimen también expresaron su rechazo a las enmiendas, aunque con el claro objetivo de poner palos en las ruedas de todo proceso de cambio.

Tanto los militares como las fuerzas islamistas, encabezadas por los Hermanos Musulmanes, se posicionaron a favor de la misma. Otros grupos islamistas como Gamaa Islamiya pedían el voto favorable a la reforma, mientras que algunas organizaciones salafistas repartían panfletos por las calles de El Cairo pidiendo el voto en favor de la reforma para «hacer frente a los enemigos del islam». Las formaciones islamistas, incluida la Hermandad, serían acusadas de distribuir bolsas de comida y comprar votos en zonas de clases sociales desfavorecidas en los días previos a la votación. Los *sheyjs* utilizaron los escaparates de los *minbars* de las mezquitas o los canales de televisión para pedir el voto a favor de la reforma, y el uso de la

amenaza del miedo religioso estuvo presente incluso en las colas de las votaciones. De forma kafkiana, el Ejército, una de las instituciones aparentemente más seglares del país, se aliaba sin problemas con las fuerzas religiosas para pasar la prueba de la reforma constitucional.

El 19 de marzo, 45 millones de egipcios fueron consultados en las urnas sobre su posición respecto a la citada reforma. Con un clima de optimismo mediático generalizado, las imágenes de las largas colas mitigaban las denuncias de irregularidades, que fueron claramente menores a anteriores y también futuras citas. Al final, la participación se situó en un 41,2%. De estos, un 77,2% de los votantes (14,2 millones de personas) expresaron su apoyo a la reforma, mientras que un 22,8% la rechazó.

Los resultados, bastante lógicos dado el poco tiempo de preparación y el desconocimiento generalizado del texto aprobado, abrían el camino al liderazgo militar de la transición y suponían el primer revés para buena parte de las fuerzas revolucionarias seglares, que veían por primera vez como el camino que quedaba por recorrer sería largo y tortuoso. Ésta sería probablemente la otra victoria de la Junta Militar y las fuerzas islamistas. Los resultados bajaron a las fuerzas revolucionarias seglares de la nube en que la revolución las había colocado y, a la vez, les ponía frente al principal obstáculo a superar en todo el proceso de transición.

En apariencia, tras el posicionamiento de las fuerzas islamistas se encontraba el miedo a que una reforma integral de la Constitución llevara a una rebaja del papel de la *sharia* islámica, especialmente en el conflictivo artículo 2. Pero una visión con más perspectiva apunta a que detrás parecía construirse un acuerdo más estable de cara a la transición, en especial respecto a los Hermanos Musulmanes que, de esta manera, ponían sobre la mesa la primera fractura entre las fuerzas políticas de Tahrir. Pero este acuerdo bajo mano con los militares, firme en buena parte de las medidas políticas, se tambaleó en algunos

momentos por la histórica desconfianza mutua y los cambios de timón de una y otra parte.

Para las fuerzas revolucionarias, la derrota de la reforma constitucional y, con ello, la vinculación de la transición a los militares, fue uno de los pasos en falso más graves de toda la revolución. Así se ponía sobre la mesa el mapa del «proceso de democratización» de los militares, la transición y la fractura política provocada por la entrada en escena de los partidos y sus intereses divergentes. Si durante el mes de marzo las fuerzas revolucionarias habían sido capaces de seguir presionando hasta forzar la dimisión del Gobierno de Ahmed Shafiq, el último nombrado por Mubarak, a partir de entonces la calle perdió el pulso político del momento. Sin una maquinaria electoral de la que sólo el antiguo régimen y los Hermanos Musulmanes disponían, la resaca del fracaso en el referéndum duraría bastante entre las fuerzas revolucionarias, que se vieron abocadas a aceptar unas reglas del juego y una dialéctica impropias. Las fuerzas islamistas eran conocedoras de que el tiempo jugaba en su contra y que debían aprovechar el empuje del proceso y, sobre todo, la imagen que habían cultivado de oposición víctima del régimen. Eso tenía que darles rédito electoral a corto plazo. Militares e islamistas trazaban juntos el camino de la transición.

Khairat Shater: el hombre de la transición

El 3 de marzo, la cárcel de Tora acogía otro momento histórico del proceso. Entre gritos de *Allahu akbar* y a favor del Ejército, eran liberados Khairat Shater y Hussein Malek. «Ahora es nuestro turno para reformar el país», gritaría Shater a la salida del centro penitenciario después de cinco años entre rejas. Como si se tratara de un partido de golf. Era su turno.

Shater y Malek no eran presos islamistas comunes. Encarcelados por el famoso caso de las milicias de El-Azahar, estos

prominentes hombres de negocios eran considerados los cerebros económicos de los Hermanos Musulmanes. Shater, que había pasado cerca de doce años en las cárceles del régimen de Mubarak, era conocido como el «ministro de Finanzas» de la formación y, junto con Malek, sus empresas eran el centro del entramado económico de los Hermanos Musulmanes. Una prolífica carrera empresarial que comenzó en 1986 con la creación de Salsabeel, la compañía de informática clausurada por la policía de Mubarak en 1992 y que los acabó llevando por primera vez a las cárceles del régimen. Después vendría la diversificación del negocio, con ramificaciones en Turquía, Catar o Arabia Saudí. Muebles, ropa, leche y hasta la construcción de autobuses en un imperio que, una vez Shater fuera de la cárcel, se extendería también a los supermercados Zad, administrados por uno de sus hijos.

Los Hermanos Musulmanes criticaron que la liberación de ambas figuras se diera por razones de salud y no fruto de una amnistía, pero responsabilizaron de ello directamente al Ministerio del Interior, descargando explícitamente de toda responsabilidad a los militares con los que apenas acababan de iniciar el romance. La luna de miel entre los Hermanos Musulmanes y la Junta Militar estaba en sus albores. Pese a que los islamistas se quejaron de que la excarcelación de Shater y Malek fuera por motivos de salud, este hecho no hizo más que dejar al descubierto la razón del mismo. Ambas figuras mantuvieron una frenética actividad política y profesional durante todo el período transicional que poco concordaba con su pretendido deterioro físico. Además, mientras cientos de presos políticos tardarían meses en salir en libertad, los destacados líderes de la Hermandad musulmana abandonaron la prisión a escasas tres semanas de la caída de Mubarak. Veinte días después, también sería sacado de prisión Osama Suleiman, otro hombre de negocios vinculado financieramente a la Hermandad, condenado por el régimen por blanqueo de capitales a favor de los islamistas, aunque él negara pertenecer al grupo.

Todos los analistas coincidían. Pese a ocupar sólo una vicepresidencia de la formación, Shater era el poder en la sombra de la Hermandad. El «hombre de hierro», como algunos diplomáticos lo llamaban. El «ingeniero» (*el-Mohandees*), como a él le gustaba que lo apodaran. Padre de diez hijos y reacio a aparecer en los medios, Shater iba, por lo general, vestido de manera informal, evitando corbatas y americanas y con una camisa desabrochada, a pesar de su devota barba. «Un ingeniero que hizo fortuna comerciando con el textil y los muebles, desarrollando una habilidad especial para trabajar con inversores extranjeros.» Así lo definió la americana *Foreign Policy*, quien lo calificaría como una de las cien mentes pensantes del 2011.

Mubarak lo había puesto entre barrotes, afirmaban los expertos, para evitar que pudiera dirigir cómodamente los pasos de los Hermanos Musulmanes. Todos apuntaban a que era él, y no el guía supremo Badie, quien lideraba la formación. Incluso desde dentro de la prisión, había sido el punto de contacto del régimen. Una vez en la calle, Shater realizó una limpieza dentro de la Hermandad.

El proceso de reforma no hacía más que culminar la evolución que los Hermanos Musulmanes venían haciendo en los últimos tiempos, en especial después de la elección de la nueva Oficina de Orientación, a principios de 2010. Durante los meses posteriores a la renuncia de Mubarak todo se aceleró. Shater se libró de algunas de las figuras reformistas, incómodas para el hombre de negocios. Gente como el doctor Abd el-Meneim Abu el-Fotouh, el abogado y escritor Mokhtar Noah, el profesor de universidad Mohamed Habib, el ex director de la web Ikhwan Online Abd el-Galil Xarnoubi o el incómodo Thaurat Kherbawy, que publicaría varios libros destapando los pretendidos secretos de la formación. La nueva dirección llevó también a la dimisión del, hasta entonces, portavoz de la Hermandad en Occidente, Kamal Helbawy, que se volvió un crítico feroz de las decisiones de los Hermanos Musulmanes bajo la dirección oculta de Shater, que a su vez lo acusó de loco.

Este proceder generó lógicas disputas internas que provocaron, entre otras cosas, que grupos de jóvenes abandonaran la formación y fundaran colectivos políticos que llegarían a alinearse electoralmente con grupos de la izquierda seglar.

La guerra abierta de los renegados de la Hermandad contra Shater y la formación era férrea. Algunos de ellos, como el ex miembro del Consejo de la Shura, Abd el-Sattar el-Meligi, terminarían acusando al grupo de hacer pactos con elementos del antiguo régimen para tomar el poder. El-Meligi, que había sido expulsado de la Hermandad en 2008, también denunció que Shater hacía negocios con dinero de la formación. Mohamed Habib, que había sido apartado de la dirección en la reforma de 2010, culpó a los Hermanos Musulmanes de pactar con Omar Suleiman el abandono de la plaza Tahrir a cambio de la liberación de Shater.

Pero Shater sería, para muchos, el hombre de la transición. En contacto permanente con Anne Paterson, la embajadora estadounidense en El Cairo, Shater estaba detrás de cada una de las constantes delegaciones diplomáticas que la Hermandad envió a Estados Unidos para calmar la preocupación de la Casa Blanca y los empresarios norteamericanos. Su trabajo se extendió al resto de delegaciones diplomáticas, como la británica o las europeas, inquietas por el aumento de influencia de la formación islamista. No era nada nuevo. Ya en 2005 Shater había publicado una carta en el periódico británico *The Guardian*, bajo el título «No deben temernos».[7] En ella defendía que un cambio democrático podía aportar un renacimiento social y económico al país.

Las delegaciones de los Hermanos Musulmanes llegaron a recibir prácticamente rango diplomático tras la caída de Mubarak. El Departamento de Estado norteamericano daba órdenes para que los enviados del grupo islamista no cumplieran los

7 Khairat El-Shater: «No need to be afraid of us», *The Guardian*, 23-11-2005 [*online*].

protocolos habituales de seguridad en los aeropuertos e incluso los militares ayudaban a la Hermandad a convencer a Estados Unidos. «Están cambiando día a día y se están volviendo más moderados», argumentaba el general Mohamed el-Assar en el Instituto para la Paz de Washington.[8] Tras la renuncia del *rais*, Shater quería dejar claro que la visión del islam defendida por los Hermanos Musulmanes enlazaba directamente con los valores del capitalismo de libre mercado y que se respetarían todos los acuerdos internacionales, sobre todo aquellos con el Estado de Israel. Que no había nada que temer. Y a fe que lo consiguió.

«Tienen más que ver con el republicano Tea Party que con Al-Qaeda», afirmaba Avi Ascher en un reportaje en la revista *Salon*.[9] La economía en manos de los Hermanos Musulmanes se calculaba que podía suponer entre un 22 y un 28% del total del país, según un informe realizado a primeros de 2012 por el doctor Salah Gouda. Khairat Shater, en una entrevista con Reuters, afirmaría que había que concretar el concepto de «justicia social». Para ello, defendió que era necesario un tiempo en el que había que apostar por fortalecer la inversión privada a fin de alcanzar, según afirmaba, «la legitimidad necesaria» para sacar adelante los cambios. Shater, además, rechazaba de forma tajante aumentar los impuestos, especialmente a los más ricos, ya que aseguraba que tenían que atraer a inversores extranjeros. Así marcaba con claridad el camino de sus prioridades. Antes los negocios que las escuelas. Antes las carreteras y los conductos de gas que los hospitales y los centros de atención médica. Al fin y al cabo, los Hermanos Musulmanes veían en la lucha contra la pobreza más una expiación religiosa que un resultado necesario de las políticas económicas.

8 La conferencia entera del general El-Assar se puede consultar en Internet: www.c-spanvideo.org/program/EgyptsP

9 Avi Asher-Schapiro: «The GOP Brotherhood of Egypt», *Salon*, 26-01-2012 [*online*].

El mismo Hassan Malek no tenía problemas en afirmar que las políticas económicas de Mubarak eran buenas y que el único problema era la «descarada corrupción» y «la extendida política del favoritismo».[10] Malek llegó a alabar sin tapujos las políticas liberalizadoras del ministro de Comercio e Industria Rachid Mohamed Rachid, describiéndolas como buenas para captar capital extrajero. «Rachid entendió muy bien cómo atraer inversión extranjera y sus decisiones en el campo fueron acertadas», aseguró Malek a Reuters, hablando del mismo Rachid que sería juzgado y condenado a varias penas que sumarían más de veinte años de prisión por malversación de fondos públicos. Una condena que no cumplió al convertirse en prófugo de la justicia huyendo del país, vía Dubái, durante los dieciocho días de levantamiento contra Mubarak.

Hassan Malek crearía posteriormente, bajo el paraguas de la Hermandad, la Sociedad Egipcia para el Desarrollo Empresarial, que se convirtió en la práctica en una especie de patronal en la sombra. A la sombra de la Hermandad, evidentemente, aunque el propio Malek se encargaría de destacar que sólo un 20% de los empresarios eran miembros del grupo islamista. Desde la presidencia de esta sociedad, él fue uno de los principales defensores de poner fin a las discusiones y la inestabilidad política, que «no hacen más que erosionar la imagen de la sociedad egipcia».

Los Hermanos Musulmanes sellaron con estos acuerdos económicos la base de su alianza con los militares. Para Estados Unidos, la Hermandad, al ser la única formación verdaderamente organizada sobre el terreno, era el único aliado político que consideraban razonable. Y lo necesitaban para superar la maraña de la revolución y devolver el país a la estabilidad previa al 25 de enero. Todo en virtud de la llamada «rueda de

10 «Egypt Brotherhood businessman: manufacturing is key», Reuters, 28-10-2011.

producción». El inmovilismo de las políticas, sobre todo económicas, era uno de los primeros pilares del acuerdo entre ambas fuerzas para frenar el ímpetu verdaderamente revolucionario. La liberación de Shater y Malek, y el subsiguiente control de la Hermandad por parte de éstos, fue el pacto estratégico necesario para garantizar la continuidad en el período de transición. En cambio, la reforma económica que los hombres de negocios pedían era la lógica libertad comercial de la que no habían disfrutado hasta el momento. Malek reclamaba el derecho de poder crear grandes *holdings* y conglomerados empresariales que hasta entonces no habían sido permitidos por la monitorización del régimen. No anhelaban nada más, en definitiva, que poder disfrutar de una pieza más grande del pastel hasta ahora prohibido. El político, claro, pero sobre todo el económico.

Los acuerdos satisfacían a todos. Gustaba de puertas afuera y daba crédito a los militares de puertas adentro. Los Hermanos Musulmanes sólo tuvieron que afrontar alguna guerra interna para reafirmar el control de Shater y poco más.

Que el pueblo pidiera «Pan, libertad y justicia social» era lo de menos.

La rueda de la producción

«Estoy muy contento porque Egipto está tomando el camino correcto hacia la democracia y el gobierno civil.» Eran palabras de Robert Gates, secretario de Defensa de Estados Unidos, en su primera visita a Egipto desde la caída de Mubarak, el 23 de marzo de 2011.[11]

En el mismo momento en que Gates aterrizaba con este mensaje de optimismo en el aeropuerto de El Cairo, el Gobierno egipcio anunciaba el redactado del decreto ley número

11 «Gates in Egypt for talks on Libya conflict», *Ahram Online*, 23-03-2011.

34. Según el mismo, se penalizaban las huelgas, protestas, asambleas, manifestaciones y sentadas que interrumpieran el funcionamiento de las empresas de propiedad privada o estatal, y que afectaran a la economía y la productividad. Las penas podían llegar hasta los tres años de prisión y el medio millón de libras egipcias de multa para los trabajadores condenados. También había condena de cárcel y hasta cincuenta mil libras para aquellos que hicieran llamamientos a la insumisión.

El ministro de Justicia, Mohamed Abd el-Aziz el-Gindy, afirmaría que la nueva ley era una decisión necesaria «para proteger a Egipto de la contrarrevolución», refiriéndose a las protestas obreras, que definía como «un programa planeado de sabotaje, destrucción e interrupción de los negocios».[12] El-Gindy, intentando defender una propuesta de ley claramente impopular, sorprendió a todos afirmando que el decreto no pretendía ir contra el derecho de huelga o de manifestación, sino que quería controlar que éstos «no afectaran a la producción».[13]

Las demandas obreras y, sobre todo, la interrupción de la llamada «rueda de producción» preocupaba a los militares. Tan solo tres días después de la caída de Mubarak y ante la masiva movilización del funcionariado, que reclamaba el fin de la brecha salarial, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas emitía el comunicado número 5, en el que denunciaba el impacto negativo que las continuas protestas tenían en la economía. Los militares pedían de forma explícita colaboración a los trabajadores para hacer volver el país «a la normalidad». El coronel Mahmoud Nasr, asistente en asuntos financieros del ministro de Defensa y miembro de la Junta Militar, era contundente en este sentido: «El pueblo es el responsable de lo que está su-

12 «Wazir el-aadl: tagrim el-ehtegagat hadefho hemayet Misr men el-thawra el-moddada», *El-Youm el-Sebaa*, 26-03-2011.

13 «Anti-strike law does not ban protests and strikes, says justice minister», *Ahram Online*, 27-03-2011.

cediendo. ¿Por qué los egipcios no trabajan? ¿Por qué? Se han concentrado en demandas políticas y se han olvidado de que tenemos que comer».[14] Mientras tanto, la Junta Militar se negaba a aplicar las diversas resoluciones judiciales que exigían la derogación de los contratos de venta de empresas estatales realizados durante la década de los noventa. Los tribunales habían decretado la nulidad legal de la privatización de numerosas empresas vendidas en ese período. Los primeros en recibir una sentencia revocatoria fueron los centros comerciales Omar Effendi, durante el mes de mayo, y posteriormente les seguirían las fábricas textiles de algodón de Tanta y Shebeen el Kom. Otras que recibieron sentencias similares fueron la fábrica Nasser de máquinas de vapor, la Sociedad Árabe para el Comercio Exterior o una decena más de compañías para el desarrollo agrícola, entre otras. A pesar de los dictados judiciales, la falta de voluntad política para aplicarlas frenó en seco la renacionalización de estas empresas, convirtiendo las decisiones de los jueces en papel mojado.

«Lucharemos por nuestro proyecto económico. No abandonaremos esta lucha. Hemos sudado durante treinta años por ello y no permitiremos que nadie lo destroce ahora. No dejaremos que nadie se acerque a los proyectos de las Fuerzas Armadas.» El mensaje era claro. Las palabras eran del general Mahmoud Nasr, consejero del ministro de Defensa en asuntos económicos.[15] Nasr se refería al imperio construido por el Ejército egipcio y que representaba entre el 20 y el 40% de la economía del país. La auténtica joya de la corona. Una línea roja que nadie podría cruzar.

Los militares acusaron a las protestas obreras de inoportunas, egoístas, responsables de la recesión y, además, de ser un complot urdido en contra del país. Una semana después de la

14 «El-aaskary: mashrooetna aarq wazaret el-defaa...wlan nesmah lel-dawla bel-tadajel fiha», *Shorouk News*, 27-03-2012.

15 *Ibíd*.

dimisión del dictador, el diario *Al-Masry al-Youm* responsabilizaba, sin aclarar las fuentes, a tres destacadas figuras del régimen de Mubarak de las movilizaciones de trabajadores en el sector público con el objetivo aparente de extender el caos. La misma teoría fue recogida días después por los Hermanos Musulmanes, que acusaron a personalidades importantes del antiguo régimen de estar detrás de las reclamaciones laborales. Essam el-Erian, líder célebre de la Hermandad, afirmó que las movilizaciones ponían en peligro el consenso nacional y reclamó comprensión con los militares. «Patriotismo y sabotaje no van juntos», afirmaría la Hermandad respecto a las llamadas a una huelga general. Se crearon campañas como «Contrátame en su lugar» para amenazar a los huelguistas con ser remplazados por gente sin trabajo.

La «rueda de producción» se convirtió en el gran mantra del régimen militar que trataba de despojar de contenido a la propia revolución. El término se convirtió en motivo de broma en las redes sociales. «Los egipcios se rebelaron para cambiar una vieja rueda de producción porque era represiva, generadora de pobreza, ignorancia y enfermedades», sintetizó a la perfección el periodista Wael Gamal en un artículo en el diario *Shorouk*. «Los egipcios se rebelaron para construir una nueva rueda de producción que defienda sus intereses y los de sus hijos.» Gamal era contundente y claro en su artículo: «Lo que llevó a los revolucionarios a sublevarse en origen era precisamente que la antigua rueda de producción no les beneficiaba, ya que aportaba frutos para unos pocos en detrimento de la mayoría […]. Una rueda de producción que funciona para unos pocos a costa de la mayoría está condenada al choque, la desaceleración y el fracaso, ya que no es democrática, equitativa ni eficiente».[16] Pero esto no parecía importar a los militares. Ni tampoco a los islamistas.

16 Wael Gamal: «Elshaab yurid aagala entag okhra», *Shorouk*, 26-04-2011 [*online*].

La ley contra las movilizaciones obreras fue aprobada finalmente el 6 de junio. Ese mismo día, cinco empleados de la compañía Petrojet eran detenidos en las puertas del Ministerio del Petróleo y transferidos a los tribunales militares, acusados de «aglomeración» y «obstrucción al tráfico», debido a la acampada que unos 300 obreros llevaban a cabo a las puertas de la sede ministerial para pedir contratos fijos y la readmisión laboral de compañeros despedidos de manera injustificada. Los cinco empleados de Petrojet fueron las primeras víctimas de la ley y, el 1 de julio, se los condenó a una pena de un año de prisión, conmutada por la falta de antecedentes. Era sólo el principio. La represión, sin embargo, no detendría las protestas. Durante la primera mitad del año 2011, Egipto vivió 956 movilizaciones, de las cuales 338 fueron acampadas y 158 huelgas. En sólo seis meses, casi se duplicaban las cifras de todo el 2010. Era uno de los períodos más prolíficos en reclamos obreros de las últimas décadas. Los trabajadores seguirían exigiendo la mejora de sus condiciones de vida.

Doctrina del *shock*

Las Fuerzas Armadas dibujaron un panorama catastrófico tras la caída de Mubarak. Aseguraban que la deuda estatal alcanzaría los veinticuatro mil millones de dólares en el verano de 2012 (un 8,7% de la producción estatal esperada) y hablaban de pérdidas medias de dos mil millones de dólares mensuales de las reservas de divisas internacionales en el Banco Central. Mientras tanto, el Gobierno se gastaba más de veinte mil millones de dólares en apuntalar la moneda. Las inversiones y el turismo huían del país.[17] Algunas informaciones apuntaban a que la revolución había provocado el cierre de unas dos mil

17 Sharif Abd el-Qoddos: «Egypt's Looming Economic Shock Doctrine», *The Nation*, 02-04-2012 [*online*].

fábricas y Egipto se colocaba entre los países que más difícilmente conseguirían devolver sus deudas. El FMI describió la situación como «desesperada».

Ante tamañas circunstancias, el Gobierno reclamó la necesidad de conseguir once mil millones de dólares para evitar una crisis en la balanza de pagos. La solución propuesta era pedir un préstamo de 3200 millones al Fondo Monetario Internacional y otro de 2200 millones al Banco Mundial, que abrieran las puertas a nuevas inversiones y ayudas de los países del Golfo, Europa y Estados Unidos. Con un lenguaje neocolonial, Robert Zoellick, presidente del BM, afirmaría que las ayudas buscaban «modernizar» la economía egipcia.[18] En paralelo, se negociaba con la Unión Europea la inclusión de Egipto en la zona de influencia del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, una organización creada en los años noventa por la UE para incentivar la inversión privada y construir economías de libre mercado en la Europa del Este posterior a la caída del muro de Berlín. Egipto se plegaba de nuevo a los deseos de los que habían diseñado y dirigido la economía que tantos catastróficos resultados sociales había producido. Aunque las instituciones negaban tener ninguna agenda, los detalles de los condicionamientos políticos a la ayuda económica se fueron desvelando claramente continuistas. Los préstamos venían directamente avalados por el G8 que, reunido a finales de mayo en la localidad francesa de Deauville, acordaba un paquete bianual de ayudas de veinte mil millones de dólares a Túnez y Egipto. La situación importaba a Occidente; las grandes potencias lo tenían claro: debía afianzarse la alianza con estos países al precio que fuera. Occidente ayudaba a Egipto por miedo. «Si nos equivocamos, si fallamos en apoyar a estos países, nos arriesgamos a dar oxígeno a los extremistas que basan sus aspiraciones en las frustraciones de la gente», afirmaría David Cameron.

18 Binyiamin Appelbaum: «World bank offers Aid to Egypt and Tunisia», *The New York Times*, 24-05-2011.

Y no hablaba así porque sí. Entre abril y mayo, los medios occidentales habían publicado un gran número de crónicas que destacaban el ascenso de los grupos salafistas en el Egipto posterior a Mubarak. En pocas semanas, grupos vinculados a esta corriente islamista fueron acusados de arrancar una oreja a un presunto proxeneta, asaltar tiendas donde se vendía alcohol, manifestarse contra gobernadores por su condición de cristianos o incluso profanar santuarios sufíes por su aproximación mística y supersticiosa al islam. En Imbaba, se produjeron enfrentamientos entre islamistas y coptos, mientras que, también a primeros de mayo, las agencias de noticias internacionales dieron publicidad a la celebración de una oración de unos pocos cientos de salafistas, en el barrio cairota de Abasseya, por el alma de uno de sus miembros: el recientemente asesinado Bin Laden. Los hasta entonces diseminados grupos de la corriente islamista, de hecho, comenzaron a unirse para hacer un frente común. A finales de abril, se había anunciado la creación del primer partido salafista bajo el nombre de Partido de El-Nour, en la ciudad de Alejandría, donde el movimiento era más numeroso. Esta formación nacía bajo el paraguas de la Llamada Salafista, una agrupación que reunía a buena parte de los defensores de esta corriente desde los años setenta. Los salafistas —unos reformistas islámicos que pretenden el retorno y la imitación de los tiempos de los primeros seguidores del profeta y que suelen ser señalados como la cuna del terrorismo islámico— atemorizaban a un Occidente que seguía demasiado empeñado en no querer comprender los detalles de la complejidad local. El propio régimen militar había colaborado en generar ese miedo en Occidente, abriendo la puerta al regreso de los egipcios yihadistas dispersados en el extranjero. Gamaa Islamiya anunciaba a finales de marzo que tres mil supuestos yihadistas egipcios vinculados a la formación y exiliados en lugares como Chechenia, Afganistán o Bosnia, volvían al país después de que las autoridades, bajo control militar, hubieran levantado sus órdenes de captura. Los militares también liberaron a primeros de marzo a

varias figuras del islamismo armado, como los primos El-Zomor acusados de planear el atentado que acabaría con la vida del presidente Sadat en 1981. Incluso Mohamed el-Zawahiri, hermano del considerado sucesor de Bin Laden y actual líder de Al-Qaeda, sería temporalmente liberado durante aquel mes de marzo de 2011. Cerca de dos mil prisioneros islamistas fueron excarcelados durante los meses siguientes, generando el miedo a un ascenso integrista, que se convertiría entonces en la mejor arma de los militares para defender en el ámbito internacional la necesidad de una ayuda económica para el país.

Se negocia el préstamo

La deuda anunciada por el régimen militar, 11 000 millones de dólares, era muy similar al capital de las grandes fortunas del régimen —que algunas estimaciones situaban próximas a los 12 000 millones— que habían huido del país desde el estallido de la revolución del 25 de enero. Futuras informaciones hincharían de forma exponencial esta cifra y hablarían de 134 000 millones de dólares evadidos.[19] Los activistas señalaban que la situación era producto de la ineficiencia del Gobierno militar y no, como decía el Ejército, responsabilidad de las protestas y huelgas en el sector obrero. Las peticiones egipcias de control y repatriación de esos fondos eran obviadas por las autoridades occidentales. El Reino Unido encabezó la lista de países que hicieron oídos sordos a las peticiones de repatriación y congelación de fondos evadidos, mientras que algunas figuras, como el antiguo ministro de Inversiones, Mahmoud Mohieldin, estaban protegidas por la inmunidad diplomática ofrecida por su cargo en el Banco Mundial como coordinador de la Agenda del Milenio de la entidad.

19 «Egypt calls on Western countries to return smuggled funds», *Egypt Independent*, 24-11-2012.

El 11 de abril una primera delegación del FMI visitaba El Cairo invitada por las autoridades. Un mes después la portavoz del Fondo, Caroline Atkinson, oficializaba la petición, y el 5 de junio alcanzaba un acuerdo para un plan de préstamo a doce meses. El Fondo Monetario Internacional volvía a poner los pies en el Egipto pos-Mubarak. Como si nada hubiera pasado. En junio, 67 organizaciones de doce países árabes publicaban un comunicado en el que responsabilizaban a las políticas del FMI de «promover de forma sistemática modelos de injusticia económica que han llevado al empobrecimiento y la marginación a importantes segmentos de la población», y denunciaban la ayuda condicionada impuesta por esta institución. La sociedad civil propuso otras alternativas, que no fueron escuchadas por los militares. «Eliminar la deuda egipcia» fue una campaña popular de alcance internacional, inspirada en los casos de Argentina, Ecuador o el Irak ocupado, que reclamaba una auditoría integral de la deuda pública con el objetivo final de la condonación de la deuda externa del país. A finales de 2011, la CIA calculaba que ésta se situaba en torno a los 33 740 millones de dólares, aunque informaciones del Banco Central de Egipto la elevaban a 34 900 millones. Según el Banco Central, se pagaban aproximadamente 3400 millones de dólares anuales en intereses. Para los activistas, la condonación de esta deuda, que triplicaba el dinero reclamado por el Gobierno militar para evitar la crisis de la balanza de pagos, era la solución al fin de la injerencia extranjera «y el fin del legado del antiguo régimen». Pero los militares desterraron ésta y otras propuestas. Algunas apostaban por retirar los subsidios energéticos a las grandes industrias pero mantener las ayudas a los pobres y pequeños usuarios, mientras otras hablaban de aplicar un impuesto único sobre el patrimonio a las grandes propiedades.

Tras meses de debate, caracterizados por la opacidad del Gobierno, en enero de 2012 la Junta Militar presentó formalmente la solicitud para un préstamo de 3200 millones de dólares. Los peces gordos del FMI afirmaban que habían aprendido

la lección de las revueltas árabes. «Los números no dan la imagen completa y debemos fijarnos en lo que se esconde detrás», afirmaría Lagarde. Pero las políticas seguirían siendo las mismas. La Junta Militar siguió repitiendo las grandes líneas económicas del régimen de Mubarak marcadas por el consenso con Washington. El Gobierno presentó al Fondo Monetario un borrador que no difería en exceso de esta línea: obsesión por reducir el déficit, poca imposición fiscal, y pocas o nulas políticas para generar empleo o redistribución de capitales. El nuevo programa rescataba incluso la terminología clásica y hablaba otra vez de «ajustes estructurales», planteaba la derogación de los subsidios energéticos y alimentarios, abordaba la acentuación de los impuestos al consumo y, por otra parte, se obviaba la propuesta de impuestos progresivos vinculados a la renta. El FMI exigía consenso político para sacar adelante las reformas exigidas y fue así que el préstamo se convertiría en motivo de lucha política entre militares e islamistas. Sin debatir las políticas de fondo, éste sería utilizado como carta de intercambio político entre unos y otros.

La mano de hierro de los juicios militares

La madrugada del 25 al 26 de febrero, miembros de la policía militar y de las fuerzas especiales del Ejército entraron disparando al aire en la plaza Tahrir. Lo hicieron pegando a los activistas con palos de madera y desmontando la acampada que reclamaba, por aquel entonces, la dimisión del Gobierno de Ahmed Shafiq, el último nombrado por Mubarak. Durante las persecuciones por las calles del centro de la ciudad, los militares apagaron el alumbrado público mientras disparaban salvas y golpeaban a los jóvenes acampados. Hubo varios detenidos, la mayoría de los cuales denunciaron haber sufrido torturas en un garaje del Consejo de Ministros. Según informaron algunos de ellos, allí se les forzó a gritar vivas al presidente Mubarak

mientras algunos manifestantes recibían descargas eléctricas. Después de aquellos incidentes, el Consejo Militar debería salir del paso pidiendo perdón y afirmando que había sido «sin querer» y cosa de unos «elementos irresponsables» dentro del cuerpo militar. No hacía ni dos semanas de la caída del dictador Mubarak.

Entre los detenidos, se encontraba el activista Amr el-Beheiry, quien en pocos días sería sentenciado a cinco años de prisión por un tribunal militar. Beheiry, que ya había pasado anteriormente por la cárcel a raíz de la insurrección de Mahala en 2008, fue acusado de atacar a un oficial del Ejército y romper el entonces todavía vigente toque de queda. Su juicio duró pocos minutos, sin defensa, después de que el tribunal denegara la petición del acusado de ser representado por un abogado propuesto por su familia.

El de Beheiry fue uno de los primeros juicios militares sobre la población civil desde la caída del *rais*. Su situación inspiró la campaña contra los juicios castrenses a civiles, una de las más importantes luchas de los revolucionarios egipcios en la época de la Junta Militar. Tras la supuesta caída del régimen, la lucha contra la represión seguía centrando los esfuerzos de los activistas. El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas empleó el arma de la justicia militar para tratar de reprimir y controlar el período transicional. Lo hizo con mano de hierro. Y desde un principio. El 24 de mayo, el coronel Adel Mursi reconocía que, en sólo dos meses en el poder, la Junta Militar había juzgado a 8030 civiles. Cuatro meses después, el 29 de agosto, la propia justicia militar admitiría haber procesado a cerca de doce mil civiles desde el inicio del levantamiento popular. En concreto, eran 11 879 las personas que habían pasado por la justicia castrense, caracterizada por la falta de garantías jurídicas. En sólo seis meses, estas cifras superaban a los juicios de este tipo realizados durante los cuarenta años anteriores. El Ejército lo justificaba afirmando que la mayoría habían sido procesados bajo acusaciones criminales de desórdenes, violación, posesión de

armas y destrozos a la propiedad, así como por haber roto el toque de queda vigente en el país. Todo bajo el argumento del pretendido colapso del aparato policial provocado por la rabia popular. Unas explicaciones que la mayoría de grupos de derechos humanos veían insuficientes para aplicar la excepcionalidad jurídica. La celeridad y firmeza que se aplicó para juzgar a miles de civiles contrastaba con la debilidad de la justicia, en este caso ordinaria, contra las figuras del antiguo régimen acusadas del asesinato de revolucionarios durante las protestas.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya había alertado en 1993 respecto a su profunda preocupación por los juicios militares a la población civil. «Los tribunales militares no deben estar facultados para juzgar asuntos que no se refieran a los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones», afirmaba el informe. En 2002, el Comité volvía a alertar a Egipto acerca de esta práctica. Los juicios militares vulneraban varios de los preceptos considerados básicos para un veredicto justo y presentes en la legislación internacional suscrita, sobre el papel, por el propio Gobierno egipcio. El Centro Hisham Mubarak, en un documento realizado en colaboración con la campaña «No a los juicios militares contra población civil», destacaría que esta práctica era un riesgo para el período transicional ya que «amenazaba con hacer regresar la aplicación de la justicia selectiva inherente al régimen de Mubarak» y, con ella, «la creación de un régimen incluso peor que el anterior».[20]

Muchos civiles fueron juzgados por el simple hecho de «faltar al respeto a las Fuerzas Armadas» o participar en movilizaciones políticas no reconocidas. Algunos casos eran casi kafkianos. En marzo de 2011, por ejemplo, se condenaba a tres años de prisión a Ashour Mohamed por habérsele encontrado

20 *Yaumiat taht hokm el-aaskar. Waqa'e entehakat w mohakamat el-madaneen emam el-mahakem el-aaskareya baad el-thawra*, Markez Hisham Mubarak Lelqanun, El Cairo, 2011.

con una hoja de afeitar durante un toque de queda. Otros tenían razones más políticas. El 10 de abril, el joven bloguero Maikel Nabil recibió una pena de tres años de prisión por un tribunal militar. La causa: el artículo «El Ejército y el pueblo nunca fueron de la mano», que el activista había publicado en su blog criticando a las Fuerzas Armadas. Mamdouh Shaheen, miembro de la Junta Militar, reconocía en julio que «se considera que cualquier persona que escribe sobre las Fuerzas Armadas sin un consentimiento escrito del comandante general ha cometido un delito y su caso es transferido a la Fiscalía Militar». Shaheen debió aclarar posteriormente que sólo eran condenadas aquellas personas que rompían «el secreto militar». De hecho, el 22 de febrero, Ismail Etman, jefe del Departamento de Asuntos Morales del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, había enviado una circular a los editores de los principales diarios del país ordenándoles que no publicaran ninguna información relativa a estos cuerpos sin la autorización previa de la inteligencia militar y del Departamento de Asuntos Morales de las Fuerzas Armadas.

Violencia militar: palo sin zanahoria

Nueve días después de la caída del dictador Mubarak se producía la primera víctima mortal del régimen militar. Una anciana moría en Suez tras el intento de desalojar por la fuerza una acampada de transportistas en el puerto de la ciudad. Una semana después, el 28 de febrero, se publicaba en Internet un vídeo que mostraba cómo la policía militar practicaba la tortura, con porras eléctricas, sobre un mar de detenidos, todos ellos medio desnudos y tumbados en el suelo con los ojos vendados. Durante las siguientes semanas, otras grabaciones y denuncias similares saldrían a la luz. Era un goteo incesante. «Los vídeos pueden ser fabricados», respondió Hamdy Badeen, jefe de la Policía Militar, sobre las imágenes. «En todo caso, remítame

alguno de estos ejemplos o pruebas de las que habla», afirmó amenazando a un periodista.

La represión militar fue una constante para frenar todo ímpetu de retomar y continuar la revolución. El régimen castrense se desplegaba con fuerza para reprimir cualquier movilización y reproducía, como si nada, los viejos vicios del antiguo régimen. Siguiendo las palabras en Al-Jazeera del periodista y también antiguo coordinador general de Kefaya, Abd el-Halim Qandil, parecía que la Junta Militar gobernara el país «para un período vengativo y no transicional».[21] Esto se evidenció el 9 de marzo cuando las fuerzas militares llegaron a practicar agresiones sexuales sobre un grupo de dieciocho chicas revolucionarias y lo revistieron con el duro eufemismo de «pruebas de virginidad». Los militares justificarían esa acción. El general El-Sisi, jefe de inteligencia militar, afirmó en una entrevista que las pruebas se habían practicado por el bien de las jóvenes, para evitar que fueran violadas y para defender a los soldados de las acusaciones de estupro. Otro oficial declaró a la prensa que «estas chicas detenidas no son como su hija o la mía […] y además ninguna de ellas resultó ser virgen».[22]

La extensión de la represión provocó que, poco a poco, los gritos contra los militares crecieran de forma exponencial y, con ello, el nerviosismo de la Junta. En el mes de julio, ésta emitiría un duro comunicado en que aseguraba que utilizarían todos los medios legítimos para acabar con la ocupación de la plaza Tahrir y las protestas en el país, que calificaban de «desviaciones del camino pacífico que afectan a los intereses del pueblo y obstruyen los servicios públicos».[23] El mariscal Fangary hizo un llamamiento a que «los ciudadanos honorables se opongan a las manifestaciones que obstruyen la vida ordinaria». El régimen militar, en una esquizofrenia creciente, volvió a hablar de la presencia de «traidores» y «enemigos del país» en un comunicado a finales de julio. Los Hermanos Musulmanes, en pleno romance con el cuerpo militar, también tomaron parte en esta estrategia de desprestigio a través de sus medios de comunicación. Ikhwan Online, la plataforma electrónica oficial de la Hermandad, no dudaba en utilizar el calificativo de *baltageya* para calificar a los manifestantes de Tahrir, afirmando de forma taxativa que «la calle rechaza la participación» en protestas contra la Junta Militar, incluso antes de que éstas tuvieran lugar o definiéndolas como «una violación a la democracia y un intento de torcer la voluntad del pueblo». El miembro de los Hermanos Musulmanes Safwat Hegazy llegó a pedir que «los revolucionarios de verdad se marchen de la plaza para así poder distinguirlos de los alborotadores». El canal 25 de enero, vinculado a la Hermandad, acusó a los manifestantes de ser matones a sueldo del Partido Democrático Nacional de Mubarak y, en una intervención telefónica, un político reclamó la aplicación de la *sharia* «a estos jóvenes que están destrozando el país».

En septiembre, con una impresionante ola de movilizaciones laborales azotando el país de arriba a abajo y con el resurgimiento de las protestas en favor de la causa palestina que provocarían el asalto de la embajada israelí en El Cairo, los militares rompieron sus promesas y volvieron a renovar la ley de emergencia. El general Mamdouh Shaheen justificaría esta polémica decisión afirmando que lo que vivían las calles de Egipto eran «actos de terrorismo».[24] El primer ministro, Essam Sharaf, afirmó que ésta era necesaria para «proteger la revolución de los intrusos y los aprovechados».[25] Los Hermanos Musulmanes, así como otras formaciones políticas, acataron la

21 Tertulia televisiva en el canal Al-Jazeera, el día 19 de junio de 2012.

22 «Egyptian general admits "virginity checks" conducted on protesters», CNN, 31-05-2011.

23 Comunicado del 12 de julio de 2012.

24 «Renewed Emergency Law raises fears of coming crackdown», *Egypt Independent*, 13-09-2011.

25 «Sharaf: Tfaail el-taware' lehemayet el-thawra men 'el-mosi'in w el-dojala'», *Al-Masry al-Youm*, 20-09-2011.

nueva prolongación de la ley en una reunión con el general Sami Anan, a cambio del compromiso militar de acelerar el proceso de elecciones y definir algunos detalles de la ley electoral. A la salida del encuentro, el Ejército hizo firmar a los presentes una hoja con los puntos de encuentro que expresaba explícitamente el «pleno apoyo al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas» y «el reconocimiento de la protección de la revolución y el proceso de transferencia del poder al pueblo». Kefaya estalló con furia y definió el acuerdo como una traición de la clase política a la lucha popular contra el régimen de Mubarak.

Pero pocos días después de aquella reunión, la sangre volvió a ser derramada en las calles del país. Uno de los episodios más cruentos de este período llegó el 9 de octubre, cuando una manifestación de coptos acabó en el centro de El Cairo con una auténtica masacre en la que perdieron la vida 25 personas, más de la mitad de las cuales por la brutal embestida de los tanques. En un ambiente de total descontrol, las fuerzas militares entraron en los estudios y cortaron las emisiones de las cadenas Al-Horra y 25TV, mientras la televisión pública alimentaba el discurso sectario atacando a los coptos, a quienes acusaba de matar con piedras, cócteles molotov y armas de fuego a soldados egipcios. Aquéllos fueron conocidos como los «incidentes de Maspero», nombre que recibe el edificio de la televisión pública frente al cual se produjeron los hechos. Los militares llevaron ante la justicia militar a 28 personas acusadas de los incidentes. Entre ellas, como si se tratara de una broma de mal gusto, al joven activista Mina Daniel, muerto a manos de los militares durante los incidentes. El tribunal llamaba a declarar como imputado a una de sus víctimas mortales.

La calle arde

A principios de noviembre, un grupo de seis ONG rechazaba reunirse con el régimen militar, al que negaba toda legitimidad.

Incluso el Parlamento Europeo dio un toque de atención a la Junta y reclamó el fin de los juicios militares. Ésta, por su parte, se negó a perseguir la participación de elementos del antiguo régimen en las elecciones, como habían acordado con las fuerzas políticas en la reunión de octubre. Se calculaba que cerca de 1500 miembros del antiguo PDN de Mubarak planeaban concurrir a los comicios previstos para finales de año, ya fuera en nuevas listas o como candidatos individuales. Esto representaba no menos del 12,5% de las candidaturas aprobadas. Algunos miembros de la antigua dictadura se reciclaron, incluso, en listas de formaciones islamistas como el salafista El-Nour o el de Libertad y Justicia, la formación creada por los Hermanos Musulmanes. El policía Abd el-Maqsoud Afifi, después de cuatro décadas en el cuerpo de policía y de haber servido como ayudante del ministro del Interior, llegó a crear el partido El-Asalah, de inspiración salafista. Los activistas hicieron campañas para señalar a estos políticos, llamados popularmente *fulul* (restos del antiguo régimen). Entre otros, crearon la web «emsekflol» (atrapa el *fulul*) y se hicieron barridos para descolgar la propaganda de estos candidatos en las principales ciudades. Un miembro del grupo 6 de abril sería juzgado por un tribunal militar por marcar la presencia de *fululs* en unos carteles electorales.

Al llegar a finales de año, la tensión era máxima. El descontento hacia los militares era enorme y las demandas de cambio político eran ya ineludibles. Las Fuerzas Armadas no sólo no habían cumplido la promesa inicial de transferir el poder a una entidad civil en menos de seis meses —éste era el menor de sus crímenes—, sino que gobernaban el país como si fuera un cuartel militar. Éste era el grito que se podía escuchar cada vez más en las calles de Egipto.

Los Hermanos Musulmanes parecían ansiosos por un cambio de poder. Khairat Shater, destacada figura de la formación, hablaba a finales de noviembre del deseo de crear un gobierno de coalición. La Hermandad intentó crear una alianza electo-

ral potente en este sentido, la Alianza Democrática, aunque el fracaso fue evidente cuando de las 34 formaciones iniciales más de la mitad desaparecieron en las siguientes semanas. Al final, sólo quedarían once grupos menores y la Hermandad se presentaría prácticamente sola. Uno de los que, extrañamente, se mantuvo en la alianza fue el nasserista Karama, liderado por Hamdin Sabahi, un teórico adversario histórico. Shater argumentaría que la responsabilidad del fracaso de esta coalición era del antiguo régimen, puesto que había creado una cultura de egoísmo político, precisamente uno de los principales males de los que también sería acusada la Hermandad. Algunas formaciones dimisionarias señalaron al grupo islamista por haber roto los acuerdos respecto a la representación dentro de la coalición.

La Hermandad había anunciado repetidamente en febrero que no ansiaba la mayoría electoral ni el control de más de un tercio del Parlamento. Así se habían expresado varios líderes, que parecían querer calmar los miedos de las fuerzas liberales. Estas palabras serían repetidas por el guía supremo, Mohamed Badie, en abril. «Si los miedos de las fuerzas políticas son fundados, ¿por qué no competimos por el 60, 70 u 80% de los escaños? Sabe Dios que si decidiéramos hacerlo, lograríamos un 75% del Parlamento. Pero no lo haremos», fueron sus palabras a la prensa.[26] Sólo dos semanas después, el porcentaje aumentaba. La formación anunciaba su intención de competir por entre un 45 y un 50% de los escaños. A finales de octubre, el porcentaje era ya del 100%, englobados dentro de la coalición electoral encabezada por los Hermanos Musulmanes.

A una semana de las primeras elecciones parlamentarias desde la caída de Mubarak, las fuerzas revolucionarias convocaron nuevas movilizaciones. Reclamaban la transferencia del

26 «Badie: lan nataqadam lel-re'asa...w nastatiaa hasad 75% men maqaeed el-shaab lakenena sanenafes aala el-telt», *Al-Masry al-Youm*, 13-04-2011.

poder de manos militares a una entidad civil antes de la primavera. Aunque la convocatoria inicial surgió de las fuerzas seglares y progresistas (inicialmente a través de la página *Segunda revolución de la ira*), en los días previos formaciones políticas islamistas, encabezadas por los Hermanos Musulmanes y algunos grupos salafistas intentaron capitalizar las protestas. Este hecho fue utilizado por medios del régimen como el oficialista *El-Ahram*, que dijo que Hermanos y salafistas habían tomado la plaza, aunque en realidad más de 38 formaciones de todo el espectro político habían anunciado su participación antes, incluso, que las fuerzas islamistas.

Pero la confrontación de estas últimas con los militares no anhelaba ir tan lejos como planteaban los grupos revolucionarios. Planteaban que la exigencia de la salida militar del poder debía aplazarse: «Abordaremos la permanencia de los militares en el poder más adelante», afirmaba Essam el-Erian, miembro de los Hermanos Musulmanes. Su lucha personal, lo que los había lanzado a la calle, era la derogación del polémico decreto supraconstitucional conocido como «Documento Silmi». El 15 de noviembre, el viceprimer ministro Ali el-Silmi distribuía un texto titulado «Declaración por los Principios Fundamentales del Nuevo Estado Egipcio», que caía como una bomba a escasas dos semanas del inicio de las primeras elecciones legislativas. Éste planteaba 22 principios que debían prevalecer sobre la futura Constitución. Entre ellos, se validaba el blindaje de la cúpula militar, que según el redactado seguiría constitucionalmente sin ser monitorizada por una institución elegida por el pueblo. Sus presupuestos tampoco serían discutidos públicamente. «El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas es el único responsable de aquellos asuntos relacionados con las Fuerzas Armadas, incluyendo la discusión de su presupuesto, que será incluido como una simple figura en el presupuesto estatal anual», afirmaba dicha declaración.

Pero lo que más indignaba a los islamistas era que el documento planteaba que un 80% de los miembros de la futura co-

misión encargada de la redacción constitucional no serían elegidos por el Parlamento. El texto, es decir, la Junta Militar, marcaría el origen de estos candidatos. Y las fuerzas islamistas se daban cuenta de que, de esta forma, se cuestionaba su más que probable éxito electoral y se atacaban los fundamentos del pacto político alcanzado de cara al referéndum constitucional de marzo de 2011. En aquel momento, el acuerdo había sido que la Constitución sería redactada por una comisión surgida del Parlamento. Pero los militares, en el enésimo movimiento errático de esta transición, parecían estar decididos a dar un nuevo paso en falso y provocar la salida a la calle de las fuerzas islamistas. Éstas dieron un margen a los militares para derogar el texto y el 17 de noviembre el mismo Silmi se reunió con miembros de diversas formaciones políticas sin alcanzar ningún tipo de acuerdo. Así fue como, aquel viernes 18 de noviembre, acabaron teniendo lugar las movilizaciones. El gabinete de Sharaf intentó calmar la tensión afirmando que se volvería a hablar del texto después de las elecciones, pero la tensión ya se había apoderado de todo Egipto.

Elecciones sobre un charco de sangre

El viernes 18, nuevamente miles y miles de egipcios volvieron a llenar las plazas y calles del país en una de las manifestaciones más numerosas desde la dimisión del presidente Hosni Mubarak. Las demandas se mezclaban; por un lado, se pedía la derogación del Documento Silmi, defendida por las fuerzas islamistas, y, por otro, se alzaba la petición de que el Ejército transfiriera el poder antes de abril, exigida por el resto de fuerzas revolucionarias.

Un ambiente relajado, incluso festivo por momentos, dominaba la emblemática plaza Tahrir. La imagen cambió diametralmente en tan sólo 24 horas. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, la policía cargó contra los pocos grupos de acampados que habían decidido pasar la noche en la plaza. Lo hizo, como era habitual, con brutalidad. Nada indicaba que sucedería nada especial; la policía acabaría echando a los acampados y poco más.

Pero nueve meses después de la marcha del dictador, los ánimos estaban encendidos. La acción policial provocó un rápido e inesperado efecto llamada, los enfrentamientos fueron en aumento y los manifestantes llegaron incluso a asaltar una furgoneta policial en medio de la plaza. Los jóvenes consiguieron sacar a las fuerzas de seguridad de la explanada, y éstas fueron reforzadas por miembros de la Policía Militar. Los enfrentamientos se mantuvieron durante días en una calle contigua, la Mohamed Mahmoud, que sería rebautizada como «Calle de los ojos de la libertad». Decenas de activistas perderían la vista total o parcialmente a causa de las heridas de escopeta y balines de las fuerzas policiales. Entre ellos, se popularizó la figura de Ahmed Harara, un dentista que había perdido la vista en un ojo durante los hechos del 28 de enero, en la lucha contra la dictadura de Mubarak, y que ahora perdía parte de la vista del otro en los altercados con el régimen militar.

Motocicletas reconvertidas en improvisadas ambulancias transportaban a los heridos hacia los hospitales de campaña organizados por médicos y enfermeros voluntarios, mientras grupos de vendedores hacían su agosto dispensando protecciones contra los gases utilizados por las fuerzas de seguridad. Los manifestantes denunciaron que estos gases eran más nocivos que los empleados anteriormente, lo que puso en alerta a los grupos de derechos humanos. Sus investigaciones pusieron de relieve que Egipto había adquirido siete toneladas de gas lacrimógeno proveniente de Estados Unidos. El origen era la empresa Combined System y el tipo de gas, CR, calificado como altamente nocivo. Se preveía que en las semanas siguientes debían llegar a Egipto veintiuna toneladas más de este producto, pero los trabajadores del puerto de Suez se negaron a descargar la mercancía del primer convoy al descubrir el destino de éste,

provocando una pequeña sublevación en el puerto que fue aplaudida por los revolucionarios de todo el país.

La plaza y Egipto volvían a latir con fuerza. La ola revolucionaria se extendía con rapidez. Los incidentes de Tahrir se replicaron solidariamente en otras ciudades. En Alejandría, se produjeron enfrentamientos a las puertas del Departamento General de Policía, en el barrio de Smouha. Allí se producirían las dos primeras víctimas mortales de la nueva ola revolucionaria. Poco después, se confirmaba la primera muerte en la plaza Tahrir, por arma de fuego, mientras la noticia de una cuarta víctima mortal llegaba desde la ciudad de Suez.

Mientras el responsable de seguridad de Alejandría afirmaba que los manifestantes estaban pagados, el ministro del Interior, Mansur el-Essawi, añadía más leña al fuego al defender la legalidad del gas utilizado y negar que la policía hubiera disparado contra los manifestantes. Sin embargo, las imágenes de la brutalidad policial se difundían como la pólvora en las redes sociales. Entre ellas, se encontraban grabaciones en que la policía prendía fuego a una motocicleta para luego acusar a los activistas de provocar disturbios, u otras más crueles en que se mostraba que las fuerzas policiales recogían el cuerpo de un hombre muerto y lo apilaban junto a un montón de basura. Los doctores de los hospitales de campaña denunciaron, incluso, infiltraciones policiales para atacar a los manifestantes heridos.

Al mismo tiempo, Hamdi Badeen, miembro del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, volvía a encender los ánimos con sus declaraciones a la televisión pública. Aseguraba que los militares no tenían nada que ver con los incidentes y afirmaba, contradiciendo todos los testimonios audiovisuales, que ningún soldado había pisado la plaza en los últimos dos meses.[27] Los militares sostenían también que muchos de los vídeos que

27 «Badin: El-shorta el-aaskareya lam tatawayed bel-Tahrir...w el-shorta el-madaneya heya el-maso'la», *Al-Masry al-Youm*, 24-11-2011.

circulaban por la red eran sesgados y no transmitían la complejidad de la situación. Volvían al discurso de siempre. El general Mohsen Fangari apareció en televisión hablando de agendas extranjeras para sumir el país en el caos, mientras reprimía a las fuerzas políticas.[28] El militar denunciaba intereses extranjeros argumentando que «los miles que puede haber en la plaza no representan a los ochenta millones de egipcios». Las elecciones, eso sí, no se moverían del calendario, aunque Fangari amenazó con la continuidad militar si la situación no se estabilizaba. «Todo el mundo busca la silla; nadie busca el beneficio de Egipto y su futuro», afirmó.

Mientras la mayoría de fuerzas políticas se dedicaban a condenar el uso policial de la violencia y cancelaban sus campañas electorales, las fuerzas islamistas, obsesionadas por la cita con las urnas, se desentendían de lo que había sucedido en la plaza. «Nosotros nos fuimos el viernes por la tarde», afirmaría Mohsen Radi, miembro de los Hermanos Musulmanes, antes de concluir que «hay gente que quiere pescar en aguas turbias».[29] A pesar de la proximidad de las elecciones, la Hermandad descartaba aplazar las votaciones. De hecho, mientras Gamaa Islamiya llegó a denunciar que todo era una conspiración para aplazar las elecciones y crear el caos, los salafistas de El-Nour acusaron a los partidos liberales y seglares de provocar los incidentes para ganar así la legitimidad que, afirmaban, no alcanzarían en las urnas. La obsesión por los comicios era evidente. Mohamed Badie, guía supremo de los Hermanos Musulmanes, describiría los enfrentamientos como «un intento de alterar la boda», en referencia a las elecciones. Por su parte, Khairat Shater, el hombre fuerte de la formación, afirmaría que los manifestantes de Tahrir «buscan el caos» y que «hay que enfrentarse

28 «El-fangary: Qoua siasia tetebni ayendat jargeya leasqot Misr...w el-intejabat fe mawaaedha», *Al-Masry al-Youm*, 20-11-2011.

29 «El-islamiyun yeba'raun nafshom men ahdaz el-Tahrir: Ensarrafna men el-midan masa' el-yomaa», *Al-Masry al-Youm*, 20-11-2011.

a todos los intentos de interrumpir el proceso democrático y la postergación de las elecciones parlamentarias».[30]

La fractura era evidente. Grupos de manifestantes expulsaron de la plaza a Mohamed Beltagy, uno de los líderes de los Hermanos Musulmanes, a quien acusaron de colaboración con los militares. Una enorme pancarta mostraba un decálogo de normas «para la buena convivencia en la plaza». Nada de partidos ni de candidatos: «La plaza no es un lugar para hacer campaña electoral».

La situación era tensa. Amnistía Internacional hizo público un dosier en el que afirmaba que «las autoridades militares han aplastado las esperanzas de los manifestantes del 25 de enero».[31] El ministro de Cultura, Emad Abu Ghazi, presentó su dimisión por la represión ejercida contra los manifestantes. Además, cerca de 250 diplomáticos egipcios mostraron su preocupación, reclamaron la transferencia del poder y exigieron el fin del ataque a los activistas.

Los militares, sin embargo, intentaron reaccionar. Dos días después de comenzar los incidentes, mientras las calles del país seguían incontrolables, la Junta aprobaba la reclamada ley para aislar electoralmente a las figuras del antiguo régimen. No había ni tiempo material ni instrumentos para detener la participación en unas elecciones que estaban previstas en menos de una semana. Sabedores de que eso no sería suficiente, se presentó la dimisión en bloque del controvertido Gobierno de Essam Sharaf. Primero presentó la renuncia el ministro del Interior, Mansour Essawy, y posteriormente lo hizo el resto del gabinete. El anuncio fue recibido con indiferencia en la plaza Tahrir, donde los manifestantes, que aseguraban que el Gobierno era «un títere en manos de los militares», mantenían las protestas.

30 «Fi zekraha el-ula...mawqaf el-Ijwan fi ahdaz Mohamed Mahmoud [...]», *El-Bedaiah*, 19-11-2012.

31 «Las autoridades militares han "aplastado" las esperanzas de los manifestantes del 25 de enero», *Amnistía Internacional*, 22-11-11.

Al día siguiente, con los enfrentamientos aún en marcha, el mariscal Tantawi realizó una aparición pública en que confirmaba la celebración de elecciones presidenciales para junio de 2012, poniendo así fecha a la transferencia de poder. Tantawi, en una afirmación cuanto menos extraña por lo inesperada, planteó la opción de convocar un referéndum para decidir esa transferencia antes de los plazos planteados. «El Ejército está dispuesto a volver a los cuarteles inmediatamente si el pueblo así lo quisiera en un referéndum», decía en una declaración que fue vista más como una amenaza contra los revolucionarios que como una propuesta real.

Pero ni el cambio de Gobierno ni la aparición de Tantawi calmaron los ánimos en la calle. El viernes 25 de noviembre, a tres días de las elecciones, se convocaron marchas en todo el país contra el régimen militar. Partidarios del Ejército organizaron una concentración en El Cairo contra «el complot judeomasónico, proestadounidense y proisraelí», pero apenas reunieron a unos pocos miles de seguidores y esto, además, bajo la acusación de tener manifestantes a sueldo. En Tahrir, las fuerzas revolucionarias volvieron a hacer acto de presencia mientras las refriegas con la policía continuaban en la calle Mohamed Mahmoud.

La Junta Militar volvió a intentar calmar la situación pidiendo perdón. «El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas expresa su pésame y sus más profundas disculpas por las muertes de los mártires, hijos leales de Egipto, durante los recientes acontecimientos en la plaza Tahrir.» La Junta aprovechó también para reafirmar nuevamente que las votaciones seguirían su calendario y que se harían en dos días para aumentar la participación. Las urnas llegaron a Egipto entre el humo del gas lacrimógeno y la sangre de los enfrentamientos entre policía y jóvenes revolucionarios. Las elecciones serían un paréntesis en una lucha que había dejado 42 muertos en todo el país.

Las urnas entre el caos

Las elecciones llegaron a Egipto rodeadas de un ambiente convulso que era de todo menos propicio para la primera experiencia democrática desde la caída del dictador Mubarak. A tres días de las votaciones, el Ejército había construido un muro en el centro de la capital para detener los encontronazos entre policía y manifestantes.

Las elecciones eran vistas por los militares como una válvula de escape para salir del embrollo de los disturbios. Y se forzó la votación, aunque la mayoría de partidos habían parado sus campañas. Según palabras del mariscal Tantawi, los egipcios iban a las urnas «por imperativo militar». La tensión entre la clase castrense era evidente. «Estamos en una guerra, no permitiremos ningún tipo de presión», habría afirmado el mariscal en una reunión con periodistas antes de los comicios. Las elecciones se celebraron en tres rondas desde el 28 de noviembre de 2011 hasta el 11 de enero de 2012. Cada ronda, en la que se repartían las provincias del país, disponía de una primera y una segunda vuelta para los candidatos que no habían alcanzado mayoría suficiente en la primera. 6591 candidaturas individuales más 590 listas concurrían para la elección de 498 escaños en el Consejo del Pueblo (Mayles el-Shaab), la cámara baja del Parlamento egipcio. Los diez asientos restantes serían escogidos, según marcaba la ley, por la Junta Militar. A dedo.

El sistema electoral, a pesar del enorme analfabetismo y la corta trayectoria democrática del país, seguía siendo extremadamente complejo y caótico y sólo reflejaba ligeras modificaciones respecto a la época Mubarak. La composición de la cámara aún conservaba la extraña distribución de escaños nasserista entre campesinos, obreros y profesionales. Una distribución más simbólica que efectiva. Además, de los 498 diputados de la cámara, una tercera parte surgían de candidaturas individuales, fueran independientes o miembros de un partido,

mientras que los otros dos tercios lo formaban diputados de listas cerradas. La continuidad del sistema de candidaturas individuales, criticado largamente por incentivar el caciquismo y los pucherazos, generó el rechazo de una buena parte de las fuerzas políticas. También las islamistas, que acabaron accediendo a mantener el sistema dual por la presión, aseguraban, de la Junta Militar y a cambio de que los candidatos individuales pudieran actuar bajo el paraguas de una formación política. A la larga, esto no sería un tema superfluo. Las listas debían estar compensadas, en presencia y orden, según la distribución profesional parlamentaria antes comentada y debían tener, como mínimo, una mujer entre los representantes. Sin especificar la posición, eso sí, lo que hacía que la mayoría ocupara las últimas posiciones y, por tanto, no tuvieran muchas opciones de acceder al Parlamento.

Varias figuras de la Junta Electoral destacaban por su papel ambiguo o incluso proactivo en los anteriores procesos electorales de la era Mubarak. El propio Departamento de Asuntos Electorales del Ministerio del Interior seguía dirigido por el coronel Mohamed Refaat, que se mantenía en el cargo desde el cual había supervisado los polémicos procesos electorales de 2005 y 2010. La Junta Militar sólo aceptaría la supervisión electoral internacional a última hora, permitiendo la entrada de poco menos de media docena de organismos de monitorización. Pero con ese austero despliegue, su presencia parecía más una herramienta legitimadora que un instrumento práctico de verificación. El Centro Carter, encabezado por el ex presidente estadounidense, fue el principal de estos grupos de monitoreo. Pero contando con tan sólo cuarenta trabajadores para cubrir miles de colegios electorales, su impacto era mínimo.

Las votaciones comenzaron aquel 28 de noviembre y se extendieron durante más de un mes por todo el país. Los militares se mostraban exultantes. Empleando la mística bélica, el miembro de la Junta Ismail Etman comparaba el esfuerzo cas-

trense para llegar a esas elecciones con el de la guerra de 1973 contra Israel. Ni el evidente caos organizativo, ni las irregularidades registradas, ni el tenso entorno en que se desarrollaron parecían impedir que los militares se sintieran orgullosos de haber alcanzado el objetivo de llamar a las urnas. Utilizadas como una arma política, la Junta Electoral jugaría con las cifras de participación afirmando que eran las más altas «desde los tiempos de los faraones». Primero se habló de un censo de 17,5 millones de egipcios, pero luego se calculó una participación sobre una base de 13 millones. Evidentemente esto hizo bailar las cifras. Si en un principio ésta era de un 62%, después se redujo al 52%, para luego volver a inflarla, sin demasiada credibilidad, al 59%. Finalmente, de 80 millones de egipcios, 27 habrían emitido un voto válido.

Los militares no querían que las denuncias cruzadas de irregularidades manchasen la fiesta de la democracia. Muchos hoteles enviaban circulares a los trabajadores para que votaran a formaciones liberales ya que, afirmaban, los islamistas reventarían el negocio. Grupos islamistas eran acusados de poner autocares para los votantes y de repartir paquetes de alimentos, o incluso simples mantas para combatir el frío, en barrios populares para garantizarse el voto. El mercado del voto llegaba a la cifra de 500 libras y el magnate Sawiris bombardeaba a sus clientes de Mobinil con mensajes de propaganda de su partido Egipcios Libres. La práctica más extendida fue, sin embargo, la difusión de propaganda en las puertas de los colegios, sobre todo por parte de partidarios de los Hermanos Musulmanes. El 5 de diciembre, las votaciones se reanudaron a pesar de que los juzgados habían ordenado detener el proceso en, al menos, cuatro demarcaciones. Los tribunales ordenaron también repetir las votaciones en Qena y anularon los resultados en Mansoura, mientras que en Sohag se produjeron manifestaciones denunciando el fraude electoral. Algunos partidos, como los liberales Egipcios Libres, anunciaron su boicot a las elecciones al Senado por «la falta de seriedad en el trato de las

irregularidades».[32] Pero, evidentemente, poniéndolas en una balanza respecto a las sufridas en 2010 todo parecía poca cosa, y los medios, y sobre todo la comunidad internacional, dieron por bueno el proceso. «Las irregularidades registradas no afectan al resultado global», afirmarían los responsables de las votaciones repitiendo viejos esquemas.

La tensión e imprevisión de una campaña caótica se hizo palpable otra vez durante el recuento. En algunos distritos, se tuvo que detener la apertura de urnas por la enorme tensión. Éste fue el caso, por ejemplo, del distrito uno de El Cairo, donde el recuento se debió retomar con presencia militar. Las filtraciones provocaron que Abd el-Moez Ibrahim, presidente de la Comisión Electoral, reclamara a los jueces mantener en secreto los escrutinios hasta que se publicaran oficialmente. No importaba, el aparato electoral de los Hermanos Musulmanes era capaz de dar, casi al momento, cifras prácticamente exactas a las que se acabarían haciendo oficiales días después.

Estas filtraciones confirmaban lo que más tarde terminaría siendo oficial. Un claro ascenso del poder de las fuerzas islamistas, cuyos resultados se aproximaban al control del 75% del primer Parlamento después de Mubarak. Los resultados mostraban una cómoda victoria de los Hermanos Musulmanes, que con un 44,9% de los asientos se acercaba a la mayoría absoluta. Con un 25%, los salafistas de El-Nour afianzaban su popularidad creciente; mientras que el nacionalista Wafd (7,5%) y el liberal Bloque Egipcio[33] (6,7%) serían el tercer y cuarto grupo con mayor representación.

Evidentemente, la futura composición del Parlamento, con el ascenso islamista como punto caliente, inquietaba a Occidente. Era un cambio de interlocutores evidente. Incluso más

32 «Hezb el-masriin el-ahrar yqataa intijabat el-shura aatradhan aala tayawzat initjabat mayles el-shaab», *Shorouk News*, 09-01-2012.

33 Coalición conformada por partidos como Egipcios Libres, el Partido Socialdemócrata, el sufí Liberación o el Partido Nacionalista Progresista.

de lo que algunos esperaban. Pero los militares estaban dispuestos a calmar a quien hiciera falta y a dejar claro quién marcaría el ritmo de la transición. En medio de las votaciones, un representante de la Junta Militar se reunió con nueve corresponsales extranjeros para hacerles entender que el Parlamento no lideraría el proceso de transición, ni siquiera la redacción de la futura Constitución. Era un paso más en el *putsch* militar a un Parlamento aún por formar y el eco del Documento Silmi planteado sólo un mes antes.

Y no sería el único gesto. El 28 de diciembre, entre la segunda y tercera ronda de votaciones, el Ejército egipcio anunció un préstamo de mil millones de dólares al Banco Central para apuntalar la maltrecha moneda. Con esto, el Ejército no sólo ponía de manifiesto que la economía egipcia hacía aguas, sino que también mostraba que las finanzas militares escondían una enorme e inexpugnable cueva de tesoros. Si lo que debía ser una simple institución estatal había sido capaz de dar con tanta facilidad mil millones, parecía inimaginable lo que se escondía detrás. Pero lo que ese préstamo certificaba es que, pasara lo que pasara en las urnas y por mucho que los militares se apartaran de la vida política, la suya sería una voz esencial en la transición.

La clase castrense no fue la única que trató de calmar a Occidente. Mohamed Mursi, presidente del brazo político de los Hermanos Musulmanes, el Partido Libertad y Justicia, se reuniría con el senador estadounidense John Kerry durante el transcurso de las votaciones para garantizarle que la Hermandad respetaría todos los acuerdos y pactos internacionales. La reunión se repitió un mes más tarde, esta vez con William Burns como representante del Departamento de Estado norteamericano. Un episodio más de los esfuerzos islamistas para que el romance con la Casa Blanca funcionara.

Pero del mismo modo que las votaciones habían introducido un paréntesis en los enfrentamientos del centro de El Cairo, tan pronto las urnas se clausuraron éstos volvieron a hacer acto de presencia. Pocas horas después de que se cerraran los colegios electorales de la primera ronda, el 29 de noviembre, las peleas volvían al corazón de la capital: 88 heridos, según los primeros recuentos, en extraños choques entre civiles en la plaza Tahrir. Mientras el escrutinio tenía lugar, moría Ahmed Badawi, de 39 años; sería la víctima número 43 de los incidentes en la calle Mohamed Mahmoud. Y se rompía el paréntesis de paz.

Militares *kazeboon*

El 16 de diciembre, pocas horas después de que se cerraran los colegios electorales en la segunda vuelta, la lucha volvía a la plaza Tahrir. La situación era muy gráfica. Mientras en los distritos electorales de nueve provincias los delegados del Ministerio y los partidos se dedicaban a recontar boletos, el centro de El Cairo estallaba en peleas entre la Policía Militar y los jóvenes manifestantes.

Un grupo de activistas llevaban cerca de un mes acampados a las puertas del Consejo de Ministros como muestra de su rechazo al nombramiento como primer ministro de Kamal el-Ganzouri, quien sustituía al dimisionario Essam Sharaf. El nuevo jefe de Gobierno volvía al mismo cargo que ya había ocupado quince años antes bajo el mandato de Hosni Mubarak, y —siguiendo una vez más los dictados financieros internacionales— procedió a la privatización de 115 empresas públicas, una cifra sólo superada por la Administración de Ahmed Nazif. Ganzouri formaba un ejecutivo continuista, repitiendo doce carteras del Gobierno del dimisionario Sharaf, incluidas dos que seguían siendo intocables desde la era Mubarak. También resultaba polémico el nombramiento como ministro del Interior del general Mohamed Ibrahim, famoso entre los activistas, entre otras cosas, por haber dirigido a la fuerza policial en la brutal masacre de la calle Mostafa Mahmoud que, en diciembre de 2005, había provocado la muerte de no menos

de treinta refugiados sudaneses tras el desalojo policial de una acampada de protesta.

El Gobierno no había podido reunirse en el edificio cercano a la plaza Tahrir, y ocupado por los grupos de jóvenes, desde el 22 de noviembre. Un chico de 19 años, Ahmed Sorour, había muerto atropellado por una furgoneta policial y 32 acampados habían caído enfermos supuestamente envenenados por comida en mal estado. Los manifestantes denunciaron que detrás había una mano policial. Familiares del joven muerto denunciarían que la policía había intentado sobornarles para que desestimaran hacer una autopsia.

La madrugada del 16 de diciembre, tras el cierre de los colegios electorales, los enfrentamientos estallaron cuando un joven, miembro de los ultras de El-Ahli, principal equipo de fútbol del país, era retenido y golpeado por las fuerzas militares que defendían el edificio. Esto dio pie al intento de la Policía Militar de desalojar por la fuerza la acampada. Se había encendido de nuevo la mecha de los disturbios. Los enfrentamientos se mantuvieron a lo largo de toda la jornada. Al día siguiente un brutal ataque militar sorprendió a los manifestantes y les obligó a huir corriendo de Tahrir. Los soldados entraron en la plaza disparando munición y prendiendo fuego a las pocas tiendas que quedaban. Miembros del partido El-Adl denunciaron que su sede había sido atacada por militares, que también serían acusados de prender fuego a edificios públicos, para luego responsabilizar a los activistas. Además, las fuerzas castrenses asaltaron también algunos de los balcones desde los que varias televisiones por satélite registraban lo que estaba sucediendo.

Pero pese al intento militar de silenciar la emisión, un vídeo tuvo cobertura mundial: grupos de diez policías militares golpeando a manifestantes tendidos en el suelo o reclamando clemencia mientras otros oficiales disparaban con sus pistolas hacia la muchedumbre. Otras imágenes mostraban a militares mezclados con policías directamente orinando sobre los manifestantes desde lo alto de las azoteas. Pero otra estampa, en concreto, fue la que daría la vuelta al mundo. Ésta no era otra que la de la policía arrastrando a una chica, golpeándola y saltándole encima mientras su torso quedaba medio descubierto. Una imagen que conmocionó a la opinión pública: en pocas horas, más de dos millones de personas ya la habían visto en las redes sociales.

El ataque llegaba pocas horas después de que el primer ministro asegurara que no había violencia en las calles y que existía una contención máxima por parte de las fuerzas de seguridad. Para entonces, ya habían muerto ocho personas y más de 300 habían resultado heridas. Ganzouri afirmó que lo que sucedía en la calle no era la revolución sino un ataque contra ésta, volviendo a señalar a elementos extranjeros infiltrados en el movimiento. George Ashak, uno de los líderes del grupo Kefaya, contestaría con fuerza: «El discurso de Ganzouri recuerda a los de Mubarak y no merece ni que lo comentemos». Cinco miembros del recientemente constituido Consejo Asesor de la Junta Militar dimitieron inmediatamente.

A pesar de la existencia de un gran número de evidencias gráficas, los militares se mantuvieron en sus trece. El ataque a la chica sería justificado por el general Abd el-Meneim Kato, quien por aquel entonces se presentaba como asesor de la Junta Militar, antes de incendiar la arena política afirmando que «a los manifestantes deberían quemarlos en los hornos de Hitler».[34] El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas acabaría por tener que desentenderse del general Kato e impedir que hiciera las funciones de asesor de la Junta. Ésta respondería a los comprometidos vídeos emitiendo su propia versión en forma de vídeo-comunicado, en el que intentó criminalizar a los manifestantes mostrando unas pocas imágenes de gente lanzando cócteles molotov. Era su respuesta a quince muertos y cientos de heridos, ninguno de ellos militar ni policía. Sin embargo, entre los muer-

34 «Burn Egyptians in Hitler ovens: General», Presstv, 20-12-2011.

tos sí se encontraba Emad Efat, un apreciado clérigo islámico de la universidad de El-Azhar y cercano a los revolucionarios, que murió a causa de un disparo de bala. Entre las víctimas mortales también hubo algunos miembros de los ultras de El-Ahli, como el joven Mohamed Mostafa. Los seguidores del equipo empezaron a entrar con fuerza en la arena política.

Por su parte, los activistas reunieron las mentiras de los militares en una grabación, difundida por el colectivo de vídeoactivismo Mosireen, bajo el nombre de *Kazeboon* («mentirosos»). Las imágenes corrieron como la pólvora por todo el país en las siguientes semanas en una exitosa campaña de contrapropaganda al régimen militar, con proyecciones en el espacio público.

Como de costumbre, los militares intentarían calmar los ánimos haciendo anuncios cuanto menos singulares. Esta vez prometieron pensiones vitalicias y peregrinaciones a La Meca para los familiares de los mártires de la revolución. Pero nada frenaría las protestas, excepto nuevos muros de hormigón, cuatro en total en varias calles del centro de la ciudad, que cada vez iba tomando más la forma de un laberinto que los revolucionarios se dedicaron a colorear con vistosos grafitis. Las elecciones ese mismo día celebraban la vuelta de la segunda ronda. La fiesta de la democracia ya podía continuar de nuevo.

El nuevo Parlamento

La felicidad de la Junta Militar parecía total. Habían vuelto a salirse con la suya sacando adelante unas elecciones convulsas y recibiendo la aprobación occidental. A los temores sobre el ascenso islamista, la Junta respondía asegurando que éstos no dirigirían solos la transición. La hoja de ruta se seguía a rajatabla. A casi un año exacto del levantamiento, los militares habían logrado constituir un nuevo Parlamento y lo habían revestido de una aparente pátina democrática. El coste humano,

junto con una dirección política errática que llevaba el país al hundimiento, parecían lo de menos.

A dos días de constituirse el Parlamento, el mariscal Tantawi volvió a dar un nuevo ejemplo de condescendencia faraónica. Como muestra de alegría, anunciaba la liberación de 1959 civiles encarcelados por los tribunales militares, lo que no dejaba de representar poco más que una pequeña parte de los más de doce mil que habían sido procesados desde que la Junta había tomado el poder casi un año antes. Y éste no sería el único regalo de los militares. Aprovechando la proximidad del 25 de enero, decidieron abrir las puertas a la importación de carne desde Sudán para lograr abaratar el coste de la carne y provocar satisfacción en la población. Era una táctica habitual del régimen de Mubarak, que se volvía a repetir en los tiempos de la Junta Militar. El 23 de enero, el mismo día en que se abría la legislatura en el Parlamento, Tantawi aparecería en televisión para anunciar el ansiado fin de la ley de emergencia vigente en el país desde 1981. Según sus palabras, la derogación se haría efectiva a partir del 25 de enero, pero de hecho no sería más que una reducción de competencias. Tantawi afirmaba que la ley se seguiría aplicando en casos de vandalismo, un concepto ambiguo que llevó a muchas especulaciones entre los grupos de derechos humanos. Durante los meses siguientes, se desempolvaron los puntos más oscuros de la citada ley, llevándola de nuevo a una aplicación de facto.

Los 508 diputados de la nueva cámara baja juraron sus cargos a 48 horas del primer aniversario del 25 de enero, día del levantamiento popular que había provocado la dimisión del dictador Hosni Mubarak. Ese mismo 23 de enero se constituía el primer Parlamento desde la revolución. Los alrededores de la sede parlamentaria se habían repintado, para esconder las evidencias de que, pocos días antes, se habían dado duras batallas entre manifestantes, militares y fuerzas policiales. Allí se reunieron entonces los partidarios de las fuerzas islamistas, que no querían perderse el histórico momento en

que sus grupos políticos tomarían posesión de la mayoría de la cámara.

Pero el Parlamento mostró, desde el principio, signos de la enorme desorganización propia de la transición egipcia. Más allá de la airada discusión que se produjo sobre si la sesión debía pararse para las pertinentes oraciones islámicas, la cámara se incendió en un debate más propio de una disputa de café que de un Parlamento, cuando se anunció que dos candidatos pretendían disputar a los Hermanos Musulmanes la presidencia de la cámara. Lo hicieron sin tener claro al menos si recibirían el apoyo de su partido, como así fue. Pero la propuesta arrancó una lluvia de encendidos reproches entre los diputados, incluidos algunos miembros del extinto Partido Democrático Nacional de Mubarak y escindidos de la Hermandad. La pelea fue estéril, sobre todo cuando después se confirmó que el 80% de la cámara apoyaba el nombramiento de Mohamed Saad el-Katatni como presidente del nuevo Parlamento.[35] Era la primera vez en los 188 años de historia del Parlamento egipcio que éste estaba presidido por un miembro de una formación islamista.

De los 508 diputados sólo nueve eran mujeres, el 1,8% del total. Cuatro de ellas, nombradas a dedo por la Junta Militar; tan sólo cinco habían salido de las urnas. Entre éstas, destacaba la figura de Azza el-Garf, representante de los Hermanos Musulmanes, quien en la investidura del Parlamento ya había aplaudido que la nueva cámara pudiera limitar aún más las condiciones de divorcio. Era sólo la avanzadilla de una parlamentaria que reclamaría después levantar la prohibición de la mutilación genital femenina y que negaría la existencia del acoso sexual en las calles de Egipto. Sus polémicas palabras incomodaron incluso a sus compañeros de partido, obsesionados por dar una imagen moderada de cara a Occidente.

35 Katatni, miembro de los Hermanos Musulmanes, formaba parte del grupo de detenidos por Mubarak durante el alzamiento popular de 2011 y fue liberado de la prisión de Wadi Natroum el Viernes de la Ira, el 28 de enero.

Se iniciaba así una legislatura que sería más corta de lo esperado, pero que dejaría una imagen más propia de una película de humor que de una institución como la que pretendía representar aquella Cámara. Lo que más se repetía eran las constantes intervenciones del presidente llamando al orden, pidiendo silencio o que sentaran los poco disciplinados representantes. En pocas semanas, trascendieron imágenes de un parlamentario que pedía permiso para ir al lavabo, otro que afirmaba no poder sentarse en la silla porque había un clavo mal clavado que le había roto el pantalón o un diputado salafista que se echaba una siesta mientras otro jugaba con el móvil. Katatni llegó a intentar convencer a un parlamentario de que debía calmarse y callarse ofreciéndole un caramelo marca Halls y, en otra sesión, el diputado Ismail Mamdouh se levantó de repente para hacer una llamada a la oración desde la cámara. Las esperpénticas sesiones, seguidas en directo por la población a través del canal Mayles el-Shaab, fueron erosionando la imagen del Parlamento a una velocidad increíble. Éste, además, también demostró sus prioridades. Una de las primeras propuestas de los parlamentarios salafistas fue pedir de manera urgente una ley que prohibiera los sitios web pornográficos en el país, «que difunden el diablo entre grupos de la sociedad egipcia». La Cámara aprobaría la propuesta, pero ésta nunca sería aplicada por el elevado coste que tampoco podía garantizar que los jóvenes egipcios no acabaran consumiendo sexo por Internet. Mientras tanto, el Parlamento inhabilitaba a un diputado durante diez sesiones y le prohibía salir del país por haber faltado al respeto al mariscal Tantawi.

Varios escándalos rodearon a diputados de la segunda fuerza, los supuestamente conservadores de El-Nour. Uno de ellos, Anuar el-Balkimi, generó polémica con una operación de cirugía estética, algo que no ligaba con la ortodoxia salafista de su partido. El diputado argumentó que se la había hecho por las consecuencias de un asalto armado a su coche, pero el cirujano que le operó desvelaría que se trataba de una cuestión de co-

quetería, forzando al parlamentario a dimitir del escaño y abandonar el partido. El-Balkimi, además, también sería motivo de debate por su supuesto matrimonio con la bailarina de danza del vientre Sama el-Masri, quien le reclamó el divorcio al descubrir que el diputado tenía otro matrimonio en secreto. Otro salafista, Ali Wani, fue incluso condenado por indecencia después de que lo encontraran manoseándose con la que él afirmaba era su sobrina en las afueras de El Cairo. Después se descubrió que la joven, de 19 años, no era familiar del diputado.

Fuera como fuese, el nuevo Parlamento carecía de poder. La Junta Militar seguía teniendo fuerza de veto sobre las leyes emitidas por la Cámara e, incluso, mantenía poderes legislativos que le permitían pasar por encima del Parlamento. Por si quedaba alguna duda de quién pretendía dirigir el país durante los siguientes meses, el Ejército emitió un paquete de nuevas leyes sólo cuatro días antes de que aquél se formara. Sin embargo, si de algo servía aquella Cámara era para certificar un nuevo equilibrio de fuerzas en la arena política egipcia.

Un nuevo balance de poderes

El Parlamento no sólo era caótico. Más allá de poner de manifiesto el lento pero imparable ascenso de las fuerzas islamistas, era prácticamente inútil. El poder seguía en manos de las Fuerzas Armadas, que se negaban a ceder a la Cámara ni siquiera el derecho a formar un nuevo Gobierno. Por eso, la lucha de los Hermanos Musulmanes con la Junta Militar se centró en la reclamación de formar un ejecutivo de su confianza. Exigían que poder hacer valer su mayoría en las urnas, descafeinada en la práctica. La relación entre militares y la Hermandad, con la legitimidad alcanzada por los islamistas en las convulsas elecciones, sufrió un nuevo viraje.

Los militares no parecían dispuestos a ceder. Al menos, no a cambio de nada. Los Hermanos Musulmanes planteaban cómo abordar una amnistía militar a cambio del traspaso. Varios embajadores llegaron a hacer de intermediarios para convencer a los islamistas de los beneficios del perdón, mientras la Hermandad parecía no cerrarse en banda al tema. El líder de los Hermanos Musulmanes Safwat Hegazi apostaría por este perdón en un debate televisivo, afirmando que no veía problema en garantizar la impunidad del Ejército a cambio de que éstos aseguraran la transferencia de poder.[36] Los islamistas llegaron incluso a plantear a los familiares de los mártires de la revolución una compensación económica a cambio de olvidar los procesos judiciales, y trataron de abordar el comprometido tema del blindaje presupuestario de las Fuerzas Armadas para acercar posturas con la Junta. El miedo entre las filas islamistas a que se pudiera repetir un escenario argelino en Egipto, con un golpe militar contra unas fuerzas islamistas vencedoras en las urnas, flotó en el aire durante meses. Y parecía condicionar claramente las políticas de la Hermandad en este complejo equilibrio de poderes.

Pero ambas fuerzas parecían querer ignorar al resto de actores políticos. Sin embargo, la respuesta de la calle era otra. El primer aniversario de la revolución del 25 de enero llegó dividido entre los que celebraban los cambios logrados, y los que denunciaban el secuestro del proceso y exigían pasos más decididos hacia las demandas de los jóvenes. Pero la conmemoración también puso de manifiesto la ruptura total de la Hermandad con la juventud revolucionaria. En pocos días se repitieron varios enfrentamientos entre los defensores de los islamistas y los revolucionarios seglares. La insoportable presión popular forzó la marcha de los partidarios de la Hermandad de Tahrir el día 25. Era el preludio de los enfrentamientos que se darían en la plaza el siguiente viernes 27. Los choques se repetirían pocos días después, el 31, a las puertas del Parlamento, cuando seguidores de los Hermanos Musulmanes impidieron que una mani-

36 Tertulia televisiva en el canal Dream TV, el 14 de julio de 2011.

festación de estudiantes se aproximara al edificio. El balance de las peleas fue de 71 heridos y una decena de detenidos.

La ruptura era cada vez más evidente. El enfrentamiento estaba servido.

Masacre en el campo de fútbol

El 2 de febrero se conmemoraba el primer aniversario de la famosa Batalla del Camello. Y parecía que alguien quería celebrarlo. La noche antes, el equipo cairota de El-Ahli visitaba el estadio de El-Masri, en Port Said. El sorprendente resultado, en que los locales batieron al todopoderoso Ahli por 3 a 1, fue lo de menos. Al finalizar el partido, un joven saltó con una bengala al césped para celebrar la histórica victoria del equipo local. En pocos segundos, y ante una incomprensible pasividad policial, cientos, primero, y miles, después, siguieron los pasos del joven invadiendo el campo. Los jugadores de El-Ahli corrieron hacia el vestuario mientras un grupo, supuestamente de aficionados locales, se dirigía impunemente hacia lo que parecía su premeditado objetivo: los aficionados ultras del equipo rival, El-Ahli. A pesar del odio histórico y el enfrentamiento entre ambas aficiones, casi nadie vio en ello una simple pelea deportiva.

«La policía estuvo tres cuartos de hora sin hacer nada, viendo cómo nos atacaban; antes de eso no se decidió a actuar. Para entonces, muchos de mis amigos ya habían muerto o estaban gravemente heridos.» Así expresaba su testimonio un joven ultra, sin querer revelar su nombre a los medios.[37] Perdieron la vida 74 aficionados y más de 180 resultaron heridos en la masacre. Las imágenes posteriores revelarían que, además, los aficionados de El-Ahli habían permanecido acorralados en las gradas después de que alguien sellase las puertas de salida. De

37 Declaraciones recogidas telefónicamente por el autor.

las cuatro puertas, tres estaban selladas y la cuarta abría hacia adentro, bloqueando una salida de emergencia en masa. Otras imágenes revelarían que algunos autores del ataque se cambiaban de ropa una vez dentro del estadio y que, mientras tenía lugar el linchamiento, al responsable de las luces del estadio no se le ocurrió nada mejor que apagarlas. Todo indicaba que alguien había planificado aquella matanza.

La Junta Militar decretó tres días de luto nacional y la junta directiva de la Federación de Fútbol dimitió y canceló todas las competiciones oficiales. El ministro del Interior amenazó con reinstaurar de inmediato la entonces recién derogada ley de emergencia, mientras los aficionados y la junta directiva de El-Masri negaban su participación en los hechos. La tensión entre la capital y la ciudad portuaria se calentó a raíz de estos hechos. Los vecinos de Port Said denunciaron que todo era un sucio complot en su contra y hablaron de agravio regional. Un mes después de la masacre, los vecinos bloquearían los accesos a Port Said y organizarían una marcha encabezada por una pancarta en la que reclamaban la independencia de la ciudad.

Todos buscaban responsables y chivos expiatorios. El mariscal Tantawi, en tono misterioso, se preguntaba por qué todo el mundo «había callado tanto tiempo delante de esta gente».[38] Aunque, en un principio, los Hermanos Musulmanes responsabilizaron por igual a ultras y policía, su nueva posición política como primera fuerza del Parlamento les llevó a cambiar el discurso. Entonces alimentaron la teoría del complot mubarakista con la historia de Mahmoud el-Sayed. Éste, que habría participado en los hechos, afirmaba en una grabación que dos ex miembros del PDN de Hosni Mubarak, estrechamente vinculados a su hijo Gamal, habían contratado a 600 personas en la ciudad de Damieta, a cambio de 150 libras por cabeza, para atacar a los aficionados. La declaración grabada de El-Sayed

38 Declaraciones a los periodistas recogidas por el canal El-Nahar TV, el 1 de febrero de 2012.

provocó un asalto popular al café propiedad de uno de los imputados, pero posteriormente el mismo Sayed sería incapaz de mantener su declaración ante la fiscalía y la historia acabó siendo borrada de las investigaciones.

Tras los hechos parecía encontrarse el odio cocinado entre el Ministerio del Interior y los aficionados al fútbol, los populares ultras. Varios indicios señalaban que miembros del cuerpo policial estaban alertados de que algo así podía suceder y, en lugar de prevenir los incidentes, se produjeron repetidas irregularidades en las maniobras de seguridad ordinaria previstas. Por ejemplo, la desaparición del responsable de las llaves del estadio, el incumplimiento del plan de despliegue de las fuerzas policiales o la ausencia de los rutinarios registros a los aficionados de El-Masri, que sin embargo sí se realizaron a los periodistas encargados de cubrir el partido.

La confrontación entre los ultras de los equipos de fútbol y la policía se remonta a 2009, cuando seguidores de El-Ahli y Zamalek fueron detenidos poco antes de un derbi en el que se esperaba que los aficionados llevaran a cabo acciones a favor de la causa palestina y lanzaran consignas contra el sionismo. Desde entonces, la relación sería de odio mutuo y constante confrontación hasta que llegó la revolución. En ésta, los aficionados habían participado en un principio a título individual, sobre todo en los enfrentamientos callejeros con las fuerzas de seguridad, pero más adelante su participación resultaría clave en momentos específicos. En torno a los jóvenes ultras, de hecho, se había desplegado una cierta aureola de heroísmo antipolicial porque, en los cada vez más habituales choques, solían tener un protagonismo destacado. Éste fue el caso del asalto a la embajada israelí, en septiembre de 2011, que vino precedida por duros enfrentamientos entre policía y seguidores de El-Ahli en el estadio de El Cairo. El nombre de los ultras también se encontraba vinculado al principio de los disturbios ante el Consejo de Ministros del mes de noviembre, cuando la policía propinó una brutal paliza a un ultra *ahlawy* que estaba jugando al fútbol en

los alrededores de una garita policial. Los cánticos de los aficionados contra el cuerpo policial, en los que acusaban a los agentes de ser estudiantes fracasados convertidos en corruptos y en los que los desafiaban con no acatar sus órdenes, se convirtieron en *hits* revolucionarios. La hipótesis de que la masacre hubiera sido una venganza policial no parecía descabellada.

Al día siguiente de la matanza, los enfrentamientos entre manifestantes y policía volvieron a producirse en varias ciudades del país. En El Cairo, los manifestantes trataron de poner cerco al Ministerio del Interior, a quien responsabilizaban de los hechos. Las peleas se prolongaron durante días en el centro de la capital y en otras provincias, situando al cuerpo policial de nuevo bajo el punto de mira. En esta ola de enfrentamientos murieron dieciséis personas, once en los alrededores del Ministerio del Interior y cinco más en la ciudad de Suez. Los heridos se contaban por cientos.

Mientras tanto, el Parlamento realizaba kafkianas sesiones sobre el tema. El 6 de febrero, se discutió sobre las palabras del ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, quien aseguraba que la policía no había disparado contra los manifestantes. Cuando el diputado Abu Hamed, del partido de los Egipcios Libres, sostuvo un cartucho empleado por la policía, la mayoría islamista lo acusó de mentiroso e, incluso, otro diputado intentó arrebatarle bruscamente las pruebas. El presidente del Parlamento, Katatni, le retiró la palabra en más de una ocasión y obvió varias peticiones para debatir sobre la violencia policial. Pero eso no sería todo. Mohamed Mostafa, un parlamentario salafista, denunciaría entre aplausos que los participantes en las protestas iban colocados de fármacos y recibían 200 libras por día. Otro diputado cercano al régimen militar, Mostafa Bakri, propuso instaurar una ley que prohibiera las manifestaciones por un período de cuatro meses, mientras afirmaba que los que atacaban el Ministerio eran extranjeros «como el señor Baradei», en alusión al Premio Nobel egipcio. La Junta Militar, por su parte, volvió a salir al paso hablando de agendas ocultas y de un nuevo

complot internacional. «Aquellos que odian Egipto intentan abrir una brecha entre los jóvenes de la revolución, el Ejército y la policía», afirmarían los militares en un comunicado.[39] Volvían así a demostrar poca capacidad política. Como de costumbre, intentaron calmar la calle ofreciendo acciones políticas fuera de lugar y no reclamadas en ese momento. En este caso, establecieron el calendario para las candidaturas a las elecciones presidenciales. El Ejército seguiría presionando en la línea de acelerar el proceso de democratización orgánica del país.

Mientras parlamentarios y militares parecían empeñados en desviar la atención y buscar manos ocultas, nadie quería enfrentarse a la reestructuración del Ministerio del Interior. Ésta era una reclamación esencial de la revolución, que parecía clave para poner fin a lo que se volvieron choques periódicos en las calles. El abogado nasserista y asesor de la Junta Militar Sameh Ashour parecía tenerlo más claro: «Depuración policial o caos».

Impunidad ante todo

El 13 de julio, Ibrahim Eissawi anunciaba cambios importantes en la policía. El Ministerio del Interior hacía efectivo el mayor movimiento de cargos de la historia. Cuatro mil oficiales eran transferidos a departamentos en los que no tendrían contacto directo con el público. También informó de que se apartaba del servicio a 505 tenientes generales y a 82 coroneles. Entre ellos, se encontraban 27 acusados del asesinato de manifestantes en enero de 2011. Entre los transferidos internos del Ministerio había también 54 oficiales acusados de matar a participantes en las protestas. Los movimientos se aplicarían a partir del primero de agosto de ese año.

39 «El-mayles el-aala lel-qouat el-mosalaha: aala kafa el-qoua el-wataneya w el-siaseya wad el-fetna w hemaya mo'asasat el-dawla», *Shorouk*, 03-02-2012.

Y lo que era un aparente lavado de cara se quedó en eso. Amnistía Internacional denunciaría que el Ministerio no dejaba claro si se habían resuelto ya las denuncias de abusos que pesaban sobre estos oficiales, temiendo que más que una reforma este movimiento fuera una salida segura para los policías inculpados. Y es que buena parte de los policías retirados de servicio eran oficiales cercanos a la edad de jubilación, por lo que su marcha no hacía más que facilitar la elusión de responsabilidades.

Pero el problema continuaba entre los que permanecían en el cuerpo. Khaled Gharaba, quien se había hecho famoso en la provincia de Gharbeya por reprimir de forma brutal las movilizaciones obreras de Mahala el-Kobra de 2008, era ahora nombrado nuevo director general de Seguridad en Alejandría. Gharaba ya había sido promocionado por Habib el-Adly en 2010, cuando fue nombrado director de Seguridad del sector Este de Alejandría, cargo desde el cual dirigió la represión contra los manifestantes en enero de 2011. A pesar de su currículo, durante su presentación todavía se definió como el garante del cambio que la policía experimentaba tras la revolución. En su nuevo cargo, seguiría hostigando a las movilizaciones populares, con la muerte de al menos dos activistas durante las protestas y con una especial obsesión por perseguir a los grafiteros alejandrinos.

La indignación estalló también cuando se conoció la promoción de Wael Komi, jefe del Departamento de Investigaciones de la comisaría alejandrina de Raml-Thani. Komi recibiría un cargo mejor aún, con aumento de sueldo incluido, a pesar de estar encausado por la muerte de 37 manifestantes durante las protestas de enero de 2011. Los casos eran innumerables. Responsables de la muerte de activistas en la provincia de Beheira también se beneficiaron de diferentes promociones. El general Tareq el-Rakaybi, procesado por un caso de corrupción financiera, fue ascendido a asesor del ministro. El general Refaat Qomsan, que había dirigido el fraude electoral en tiempos de Mubarak y encabezado la cacería de militantes y grupos de

música *heavy metal* de los años noventa, también se ganaba un asiento como ayudante del ministro.

Declaraciones vacías sin voluntad política, modificaciones mínimas de la legislación y juego de sillas entre los oficiales. La voluntad de cambio era menos que escasa. Pero si en algo se demostraba la inmovilidad total era en los juicios al cuerpo policial. Dos años después del levantamiento popular, aún no había habido sentencias firmes contra ninguno de los 164 oficiales de policía acusados de la muerte de más de 840 manifestantes durante la revuelta de 2011. De los 35 juicios, sólo 26 habían terminado, 21 de ellos en absolución para 115 oficiales de policía.[40] Las sentencias restantes incluían trece sentencias suspendidas (es decir, que no se harían efectivas) y la condena de cinco oficiales de policía a diez años de prisión. Pero se dieron *in absentia*, es decir, con la ausencia de los encausados que, evidentemente, no cumplirían su pena. Cuando los oficiales reaparecieron, las sentencias fueron apeladas y los juicios repetidos de nuevo. De los 164 policías encausados, sólo Tamer Sami Refaat, un oficial del distrito de Madinat Nasr, pasó por la cárcel. Cinco años de prisión y diez mil libras de compensación a la familia por la muerte de una mujer que miraba los enfrentamientos desde el balcón de su casa durante los hechos del 28 de enero de 2011.

El doble rasero parecía evidente. El 7 de marzo de 2012, el mismo día en que el Tribunal Superior Militar condenaba a dos civiles a penas de muerte por el homicidio de un soldado durante el levantamiento popular, un tribunal de El Cairo absolvía a tres policías acusados de la muerte de dos manifestantes. Entre los oficiales absueltos, se encontraba El-Sunni, un oficial que anteriormente había sido el primer policía condenado por la muerte de revolucionarios. En otro caso, los tribunales le habían condenado *in abstentia* a la pena capital por la muerte de 23 manifestantes en Zawhia el-Hamra. La publicitada sentencia sería revocada una vez el policía fugitivo se entregó a las autoridades. El juicio se reanudó de nuevo en otro tribunal y El-Sunni fue declarado, después, inocente de los mismos cargos.

40 «State crimes remained unpunished: the Interior Ministry is above the law and the Public Prosecution is missing in action», Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR).

La ira de los familiares de los mártires, que se hizo patente con varias ocupaciones de la plaza Tahrir y repetidas escaramuzas con las fuerzas policiales, era enorme. Los únicos gestos más o menos claros de las autoridades se habían dado hacia la compensación económica a los parientes de las víctimas, con ayudas de cerca de 250 dólares mensuales. Muchos familiares de mártires, sin embargo, denunciaron retrasos en los pagos y problemas varios para cobrar las indemnizaciones prometidas. Mientras tanto, las fuerzas islamistas trataban de convencer a varios familiares para que retiraran las denuncias y aceptaran compensaciones económicas a cambio.

Incluso en lo que podían haber sido juicios ejemplarizantes de cara a la galería, la justicia reculaba. El caso de la muerte bajo custodia policial de Khaled Said, que muchos consideraban que había sido la chispa de la revolución de enero de 2011, tampoco fue una excepción. Tras meses de informes alterados, aplazamientos indefinidos y demás trifulcas judiciales, el 26 de octubre de 2011 los dos policías encausados por la muerte de Said recibían sentencias de siete años de cárcel. La sentencia consideraba que lo que había sucedido era un homicidio involuntario, en ningún caso tortura premeditada, y, por tanto, la pena era mucho menor de lo que esperaban los familiares del joven. En el caso del salafista Sayed Belal, muerto semanas antes del estallido revolucionario, se absolvía a algunos oficiales mientras se condenaba *in absentia* a cadena perpetua a cuatro oficiales desaparecidos.

Como si nada hubiera cambiado, 24 horas después de que se emitiera la sentencia por la muerte del joven alejandrino, Egipto volvía a tener un nuevo Khaled Said. Essam Atta, un joven civil de 23 años condenado a dos de prisión por la justicia

militar, moría en la prisión de Tora. Atta habría sido golpeado por los celadores después de intentar infiltrar una tarjeta SIM telefónica dentro de la celda. El muchacho habría sido sodomizado con conductos de agua introducidos por su boca y su ano hasta provocarle la muerte. Como de costumbre, la dirección de la prisión afirmó que el joven había muerto por consumo de drogas, a pesar de la denuncia unánime de los grupos de derechos humanos. Ese mismo día, otro chico, el estudiante Moatez Anwar, moriría después de que dos policías le dispararan hasta cinco veces, mientras él estaba en un coche con sus amigos en la población de Cheikh Ziad.

A pesar de las muchas evidencias, los responsables policiales se negaban a reconocer que los abusos que se producían fueran sistemáticos. Mantenían que el cambio estaba en curso. Pero se hacían homenajes a policías encausados en casos de abusos de autoridad y en la Academia de Policía aún mantenían, sintomáticamente, la imagen del ex ministro Habib el-Adli. Como si nada hubiera cambiado.

Un régimen que se defiende

Que la caída del presidente Mubarak no había tumbado al régimen se hizo más que obvio en los juicios a la policía y a las figuras del mubarakismo. No se trataba solamente de juzgar a un régimen a partir de su propia legislación, sino que se encomendaba a la misma policía encausada la tarea de recopilar pruebas, y a una justicia cargada de jueces favorables al régimen, la misión de emitir sentencias contra aquellos que los habían colocado en el cargo y aupado profesionalmente durante décadas.

El 9 de febrero de 2011, todavía bajo el mandato de Hosni Mubarak, se había ordenado la creación de un comité para la investigación de los sucesos de enero. A pesar de las buenas intenciones, el comité fracasó al no tener poderes específicos para citar a testigos, incluidos los policiales, ni para realizar registros ni investigaciones a fondo. De hecho, las conclusiones del informe, publicadas el 14 de abril de ese año, reconocían no haber conseguido que las Fuerzas Armadas les dieran una lista detallada de los detenidos. La investigación no había llegado ni a visitar poblaciones más allá de las grandes ciudades del país. No puso ni un pie en el Alto Egipto, aunque allí se documentó la muerte de manifestantes durante los dieciocho días. La comisión había sido, por tanto, un auténtico fracaso. Así lo denunciaron grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional.

En julio de 2011, Suez estallaba en cólera después de que los tribunales decidieran liberar a diez policías acusados de la muerte de manifestantes. Entre ellos, se encontraba el francotirador Mohamed Saber, de quien la defensa aportó grabaciones que demostraban su participación en los hechos. El veredicto llevó a que cientos de personas cortaran la autopista de El Cairo y ocuparan las calles del barrio de los Arbaain, de donde consiguieron expulsar a la policía. En el juicio de Suez, en que se consideraba la participación de diez policías y de un hombre de negocios con sus tres hijos en la muerte de veinte manifestantes, entre el 25 y 29 de enero de 2011, los tribunales hicieron caso omiso de las continuas peticiones de la defensa solicitando que se aceptaran las pruebas grabadas de la implicación de los acusados en el caso, tampoco hicieron visionados completos de las pruebas aceptadas a trámite.

Grupos de derechos humanos denunciaron que la Fiscalía actuaba de forma sesgada a favor del cuerpo policial o del régimen en general. En algunos casos, no aceptaban pruebas claras, en otros no reclamaban a tiempo los peritajes pertinentes o los estudios forenses. En algunos, llegaron incluso a darle la vuelta a la tortilla y convirtieron a los acusados en acusadores y a la acusación en defensa. En general, eran lentos e ineficaces en el procesamiento de los acusados de matar a revolucionarios. De hecho, el fiscal ni siquiera pidió extraer las balas de los cuerpos de los manifestantes para hacer un peritaje. Abd el-Maged Mahmoud, el fiscal general, se acabaría defendiendo

señalando al Ministerio del Interior. Según afirmaba, éste no le había transferido pruebas ni le había permitido investigar a los encausados policiales en varios casos en que la Fiscalía lo había reclamado. La fiscalía lanzaba pelotas fuera.

El Ministerio del Interior se negó a facilitar la lista de funcionarios en servicio en las cercanías de puntos calientes durante los enfrentamientos de enero de 2011. Además, hizo desaparecer por completo las filmaciones de las cámaras de seguridad de su propiedad en los lugares donde se habían producido muertes. De hecho, la destrucción de pruebas llevó a que el general Hussein Musa, director del sector de telecomunicaciones de las unidades centrales de seguridad, fuera condenado a dos años de prisión revocables a cambio de una fianza de cinco mil libras. Ésta era la pena por haberse deshecho de todas las grabaciones de las comunicaciones entre las unidades antidisturbios durante los incidentes de enero que hubieran podido ser clave para esclarecer la muerte de los 846 manifestantes.

En el caso de la matanza del estadio de Port Said, la destrucción de pruebas se dio antes de que la fiscalía se presentara. En cuanto a los mártires de enero de 2011, los médicos forenses dejaron que se perdieran las evidencias cuando permitieron el entierro de los cuerpos sin haber practicado las investigaciones protocolarias pertinentes y sin haber retirado las balas policiales de los cuerpos. De hecho, los médicos amenazaron a los familiares de los muertos con medidas legales si exigían practicar autopsias, y en la mayoría de los casos no se realizaron. También se denunció la manipulación de informes en los que se cambiaba la razón del fallecimiento de los manifestantes, poniendo por asfixia en lugar de por bala. Algunos habían pasado por las manos del doctor Sibai Ahmed Sibai, el mismo forense que había tergiversado los informes de la muerte de Khaled Said. Sibai sería reemplazado posteriormente por el médico Ihsan Kameel, pero a estas alturas los procedimientos para exhumar los cuerpos ya eran muy complicados. En otras situaciones —como con las víctimas de los ataques policiales de noviembre de 2011 en la calle Mohamed Mahmoud o con los hechos del Consejo de Ministros de mayo de 2012— se produjo la misteriosa desaparición de las balas de los cuerpos de los manifestantes. Y cuando se encontraba una bala, se concluía que no se podía saber de dónde provenía aunque el calibre fuera del mismo empleado por el cuerpo policial.

En la matanza de Maspero, el 9 de octubre de 2011, murieron 27 personas. Según los médicos, al menos ocho de ellas fallecieron por disparos de bala en el pecho o en la cabeza. Pero según los informes forenses no se podía determinar el tipo de armamento dada la desaparición de la munición, lo que permitió a la justicia competente determinar que el autor era desconocido, a fin de reforzar la teoría de que una mano oculta lo estaba maquinando todo desde la sombra y, básicamente, absolver al régimen militar de las acusaciones. A pesar de la existencia de numerosas grabaciones, emitidas incluso por televisión, los tribunales absolvieron a los tres soldados acusados de arrollar con los tanques a 26 manifestantes coptos. Mientras tanto, se condenaba a dos activistas a tres años de prisión por haber tomado armamento del Ejército durante las mismas peleas.

El juicio del siglo

«He puesto mi vida al servicio de la nación y no me puedo quedar callado ante las campañas de desprestigio a las que estoy siendo sometido.»[41] El 6 de abril de 2011, dos meses después de su dimisión, Mubarak enviaba un mensaje grabado desde su retiro en la ciudad balnearia egipcia de Sharm el-Sheikh. En él, afirmaba ser víctima de un complot para desprestigiar su imagen y, mientras aseguraba no tener nada que esconder, se ofrecía a colaborar con la justicia egipcia.

41 Mensaje grabado por el dictador Hosni Mubarak y difundido por el canal Al-Arabiya, en abril de 2011.

Ni una semana después, el 12 de abril, la fiscalía ordenaba su detención y la de sus hijos, durante quince días, para investigar su participación en la muerte de manifestantes y otros delitos vinculados a la corrupción. Mubarak, lejos de cumplir sus recientes promesas, eludía la orden judicial de captura ingresando en el lujoso hospital de Sharm el-Sheikh a causa de una supuesta crisis cardíaca. Los medios locales, incluidos los oficialistas, lo tenían claro: Mubarak fingía.

Éste sería sólo el principio de un periplo que llevó al ex presidente a rehuir constantemente las decisiones judiciales referentes a su detención. Del balneario del Mar Rojo, sería trasladado a un hospital militar en el que también disfrutó de todos los lujos: piscina y sauna propias, fisioterapeuta privado, un lujoso gimnasio y libertad de movimiento en un cautiverio de 500 metros cuadrados, durante el que incluso recibió la visita de familiares, figuras públicas y destacados líderes de países del Golfo, incluido el emir de Kuwait, llegando a hacer de anfitrión a destacadas figuras del Ejército. Nada parecido a una detención penitenciaria ordinaria como la que padecían la mayoría de reclusos del país. De allí, Mubarak era enviado en helicóptero de forma regular a las sesiones de lo que sería calificado en el país como «el juicio del siglo». Su estado de salud parecía un secreto de Estado, como en los tiempos de su mandato, y estaba sujeto a la siempre activa rumorología egipcia. En un año, pasaría de estar muerto a estar en peligroso estado de coma y, después, a estar fresco como una rosa quejándose del devenir del país. A primeros de febrero, después de la masacre del estadio de Port Said, el Parlamento de mayoría islamista ordenó su traslado a la prisión de Tora, aunque éste tardó en hacerse efectivo. Mientras tanto, el ministerio, en plena crisis económica, se gastaba más de seiscientos mil euros en acondicionar a todo lujo un pabellón entero del hospital penitenciario para recibir la visita del *rais*.

Decenas de miles de civiles sufrían los rigores de la justicia militar, pero el dictador Mubarak gozaba de todas las garantías

de un tribunal civil. Y, además, de una justicia que, en definitiva, había sido hecha a su medida. El juicio empezó a bombo y platillo el 3 de agosto de 2011, con dos casos sobre la mesa y más de once encausados. Mubarak, el ex ministro del Interior Habib el-Adli y seis de sus más cercanos colaboradores dentro del aparato policial, se sentaban en el banco de los acusados por la muerte de 846 manifestantes durante el levantamiento de enero de 2011. Entre sus asesores, estaban Hassan Abd el-Rahman, jefe de los Servicios de Seguridad estatales y acusado de la destrucción de documentos policiales; Ahmed Ramzi, jefe de las unidades antidisturbios, e Ismail Shaer, jefe del Departamento de Seguridad de El Cairo y uno de los principales responsables de la tortura policial.

Por otra parte, también se juzgaban varios casos de corrupción vinculados a la compra de influencias en favor del fugitivo Hussein Salem, el más relevante de los cuales relacionado con la polémica venta de gas natural a Israel. Salem, entonces refugiado en una España donde la justicia lo protegía, y los dos hijos de Mubarak serían los demás encausados del proceso.

Aquel 3 de agosto de 2011, la imagen del dictador Mubarak tumbado en una camilla médica tras la reja de los acusados daría la vuelta al mundo. Era una imagen histórica: el *rais* era juzgado en la sede de la Academia militar que hasta hacía pocos meses había llevado su nombre. Era la primera vez que un máximo dirigente de una dictadura árabe era juzgado por un tribunal nacional competente. Pero aquella no sería la única estampa de la jornada. El más que cordial saludo con el que los máximos responsables militares y policiales obsequiaron a los acusados, al frente de los cuales se hallaba el ex ministro del Interior Habib el-Adli, arrojaba serias dudas respecto a la complicidad aún existente entre el antiguo régimen y el todavía vigente. Y esa sensación iría en aumento.

Y es que el juicio se convirtió, desde el principio, en un circo para calmar a las masas. Con retransmisión en directo de la televisión pública incluida, partidarios y detractores se enzar-

zaban en continuas peleas a las puertas de la academia. Dentro, el desbarajuste no era menor. Decenas de descoordinados abogados defensores gritaban y trataban de hacerse oír, peleándose por quién agarraba el micrófono. No faltaron en ese juicio momentos cómicos. Un abogado llegó a reclamar que se analizara el ADN del ex presidente, puesto que afirmaba que aquél era un doble y que Mubarak había muerto hacía cuatro años. La desunión de un, en general, pobre equipo de abogados también fue clara. En enero de 2012, llegaron a la pelea física en el mismo tribunal, cuando el juez les pidió que redujeran el equipo a sólo ocho miembros para agilizar los procedimientos. Sin embargo, éste era el mejor grupo de letrados que se había podido reunir con los escasos recursos de los familiares de los mártires y la limitada solidaridad de los grandes bufetes del país, de los que sólo destacaba el nasserista Sameh Ashour. Mubarak, por su parte, recibió la aprobación para ser defendido por un equipo de abogados provenientes de Kuwait, liderados por Farid el-Deeb, que sería descrito en las redes sociales como «el abogado del diablo».

A principios de septiembre, declararon los testigos estrella del juicio, por lo menos por su morbosidad. Primero comparecieron el general Sami Anan y el mariscal Hussein Tantawi, máximos responsables de la Junta Militar. Ambos se reunieron, en las horas previas a la comparecencia, con James Mattis, que encabezaba una delegación del Ejército de Estados Unidos de visita en Egipto. La sesión cambió de horario extrañamente y sin previo aviso, lo que impidió que bastantes abogados pudieran asistir a la misma. Era la primera vez que el mariscal se cruzaba con el dictador depuesto y, según los testimonios, Tantawi evitó la mirada de Mubarak, que yacía postrado en la celda. El mariscal eludió hacer cualquier ataque al régimen, respondió con evasivas y reforzó la teoría de que la revolución había sido un complot extranjero. Los abogados de la acusación, además, no tuvieron derecho a preguntar.

Pocos días después, aparecería en el tribunal el ex jefe de los servicios secretos egipcios, el influyente Omar Suleiman. Ésta era su primera aparición pública desde que anunciara la dimisión de Mubarak en febrero de 2011. Una ausencia significativa del que estaba considerado como uno de los individuos más influyentes no sólo del país sino de la región entera. Durante el juicio, defendió la idea de la conspiración y de un acuerdo entre beduinos del Sinaí y miembros de Hamás para introducir combatientes en el país que luego serían vistos en la plaza Tahrir. Las exposiciones de Tantawi y Suleiman iban en la línea de una defensa que mantenía que todo había sido un complot urdido por potencias extranjeras. Por su parte, Suzzane Mubarak, esposa del ex dictador, se dedicó a amenazar a Estados Unidos con desvelar secretos si la justicia atacaba a su marido e hijos. Afirmaba que haría públicos los nombres de los ministros que hacían de espías para Washington en el Gobierno egipcio.

El 22 de febrero, se celebraba la última sesión y el juicio quedaba visto para sentencia, tras haber contado con 1536 testigos en 46 sesiones, durante los diez meses que duraron los procedimientos. Más de 72 000 documentos, incluyendo informes forenses e investigaciones de la fiscalía, formaron parte del papeleo del juicio. Ironías del destino, el faraón Mubarak se presentaba ante el juez por última vez en el preciso momento en que los rayos solares iluminaban el rostro del faraón Ramsés en el complejo de Abu Simbel, un espectacular fenómeno que sucede dos veces al año. Lo hacía recitando poesía: «Mi nación, aunque injusta, sigue siendo amada por mí», declamaría ante el juez.[42]

El veredicto fue anunciado cuatro meses después, en medio de la campaña electoral de las presidenciales. El 2 de junio, el juez Ahmed Rifaat hacía públicas las sentencias: Mubarak y el ex ministro del Interior Habib el-Adli eran condenados a «ca-

42 «Mubarak lel-mahkama: Belady w en yaret aala aazizo a ahly a an danaoo aalian karaam», *El-Youm el-Sabaa*, 22-02-2012.

dena perpetua» por no haber impedido la muerte de manifestantes durante la revuelta. Los jueces afirmaban no tener pruebas suficientes para determinar su responsabilidad, pero los culpaban de haber conocido los delitos y no haber hecho nada para evitarlos. Una resolución que muchos analistas calificaban de débil jurídicamente y que podía caer fácilmente después de las apelaciones de la defensa. El concepto de «cadena perpetua», además, era falso. La ley egipcia mantiene que una pena no puede superar los 25 años.

Pero lo más polémico estaba por venir: la sentencia incluía la absolución de seis de los principales responsables de los servicios de seguridad del Estado por la muerte de manifestantes. A pesar de tener un caso de 72 000 páginas, el juez destacaba «la falta de pruebas concluyentes, en especial las referentes a los informes del médico forense y los del Ministerio del Interior».[43] Los servicios secretos también serían acusados de falta de colaboración. Otra vez se repetía la historia y el régimen se protegía a sí mismo. Aunque los informes forenses habían indicado que las lesiones de los mártires habían sido provocadas por armas policiales, se manifestaban «graves deficiencias» en las pruebas presentadas, que no ayudaban a llegar al autor original del delito. Se afirmaba que las conexiones telefónicas descifradas no aportaban datos para condenar a los encausados y que no había «pruebas técnicas concluyentes de que las lesiones descritas en los informes forenses sean resultado de las armas policiales», aunque en todos los casos el calibre coincidía con el empleado por el Ministerio del Interior.[44] Ante la manipulación y destrucción masiva de pruebas, las bases jurídicas se mostraban débiles con testigos poco sólidos. Mubarak, además, sería absuelto de las acusaciones de corrupción junto con sus hijos, Gamal y Alaa, y junto con el fugitivo con pasaporte español Hussein Salem. Los jueces se amparaban en

43 «Motahemen jarey qafes el-eteham», *Shorouk News*, 04-06-2012.

44 *Ibíd*.

la prescripción de unos delitos que se habían producido diez años antes, en pleno mandato del *rais*.

«Te queremos presidente; la absolución está por llegar», publicaban los partidarios de Mubarak en las redes sociales. Mubarak era un hombre condenado: cinco meses después de que lo ordenara el Parlamento egipcio, el ex dictador era transferido a la lujosa unidad privada del hospital de la prisión de Tora. Según algunas filtraciones, el *rais* se negó durante largo rato a bajar del helicóptero simulando falsos desfallecimientos. Aunque no estuvo demasiado tiempo allí: en menos de un mes, fue nuevamente trasladado al hospital militar de Maadi, en El Cairo, a petición de su médico.

La histórica sentencia al dictador provocó sentimientos contradictorios y encendió la indignación en las calles del país a medida que se iban conociendo los detalles de la misma. «Da luz verde a la futura represión policial», aseguraba Human Rights Watch, mientras Amnistía Internacional también era clara: «No hace plena justicia».[45] En plena campaña electoral, dicha sentencia tenía todos los visos políticos habidos y por haber. De tan política carecía de sustentación jurídica, según alertaban los expertos. Las apelaciones podrían acabar tumbando con facilidad sus frágiles argumentos.

Dicho y hecho. En enero de 2013, el Tribunal de Casación aceptaba las apelaciones presentadas por Mubarak y Adli, y ordenaba repetir el juicio por la debilidad jurídica de la sentencia. «Ser conocedor del delito no convierte ni en criminal ni en cómplice», afirmaba con rotundidad la resolución. Los encausados tendrían una segunda oportunidad. Para darle una nueva pátina, el tribunal también aceptaría las apelaciones presentadas por la fiscalía del Estado, entonces ya en manos de los Hermanos Musulmanes, que reclamaba la repetición del juicio también para los nueve encausados restantes. Se respon-

45 «La sentencia contra Mubarak no hace plena justicia», *Amnistía Internacional*, 02-06-2012.

sabilizaba a los jueces de no haber tenido en cuenta varias pruebas presentadas por la fiscalía y de que el juicio sólo había tenido en cuenta los hechos de la plaza Tahrir, obviando los del resto de la República. Así, parecía que se podía aplicar nueva justicia a los responsables del Interior y a los hijos de Mubarak. Pero había una trampa implícita: el nuevo juicio se basaría en los mismos cargos y las mismas pruebas claves de las sentencias anteriores. Organizaciones de Derechos Humanos, como la Iniciativa Egipcia por los Derechos Individuales, alertaban del riesgo de repetir la vista sin cambiar «el aparato judicial y de seguridad establecidos para proteger el régimen de Mubarak y evitarles cualquier responsabilidad».

El circo
de las urnas presidenciales

Una luna de miel en peligro

Cuando Khairat Shater, el hombre fuerte de los Hermanos Musulmanes, salió de la cárcel el 3 de marzo de 2011, prometió tres cosas: que los Hermanos Musulmanes no buscarían la mayoría en el Parlamento, que no perseguirían la formación de Gobierno y, finalmente, que ninguno de sus miembros aspiraría a la presidencia del país. Ninguna de las tres promesas fue respetada.

El 31 de marzo, la Hermandad volvía a romper su palabra. El mismo Khairat Shater sería presentado como candidato a las presidenciales. «El futuro del país es más importante que cualquier pronunciamiento que hayamos hecho con anterioridad», afirmaba sin concesiones Mohamed Badie, guía supremo de la formación islamista. «No lo hago por mí, lo hago por el país », corroboraba Shater.

El anuncio llegaba después de una tensa semana con la Junta Militar que había estado a punto de dinamitar el pacto de la

transición. En marzo, la tensión entre la Junta y los Hermanos Musulmanes se hizo por primera vez evidente. La luna de miel pasaba por su primera gran crisis, por lo menos de forma aparente. Por un lado, islamistas y militares habían fracasado en el intento de encontrar un candidato de consenso para las presidenciales. Durante semanas, sonó el nombre de Mansour Hassan, presidente del Consejo Asesor de la Junta, pero el propio candidato acabaría desvinculándose. Mansour acusó a la Hermandad de jugar con él y provocar su retirada. Pero la verdadera lucha era por la formación del gobierno y la redacción constitucional. Los Hermanos Musulmanes hacía semanas que reclamaban, como grupo con mayor representación parlamentaria, el derecho a formar gobierno, pero todos los intentos habían fracasado y topado con el inmovilismo militar, que parecía receloso de las intenciones islamistas. Los militares llegaron a amenazar al presidente de la cámara, Mohamed el-Katatni, con disolver el Parlamento si la Hermandad retiraba la confianza al Gobierno Ganzouri. La clase castrense también parecía perder la paciencia frente a una comisión redactora que era incapaz de avanzar los primeros artículos sin provocar una aparatosa crisis entre sus miembros.

El 25 de marzo, los Hermanos Musulmanes dispararon un comunicado incendiario en el que atacaban al Gobierno, acusándolo de crear falsas crisis de suministros y alimentos y de fracasar en su misión de recuperar los capitales evadidos por el antiguo régimen; también señalaba a los militares que lo protegían. «¿Se trata de un intento de abortar la revolución y jugar con la desesperación de los ciudadanos respecto a la capacidad de alcanzar los objetivos revolucionarios, o estamos ante un deseo de practicar el fraude en las elecciones presidenciales?», afirmaba el texto.

La Junta no tardaría en responder. El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas alertaría a través de un inteligente comunicado: «Pedimos a todo el mundo que aprenda de las lecciones de la historia, para aprender de los errores del pasado y evitar

que se repitan». Los militares aseguraban que cualquier insinuación respecto a la falta de integridad de las futuras elecciones carecía de fundamento y alertaban sobre el peligro de cuestionar así a las instituciones estatales.

La tensión era palpable y la crisis, evidente. La amenaza de que se pudiera dar el escenario argelino, con un golpe de Estado militar, o la repetición de un ataque castrense sobre la Hermandad crecía en el país. Los mismos militares lo habían insinuado en su comunicado cuando hacían referencia a las «lecciones de la historia». Algunos, sin embargo, afirmaban que todo era puro teatro. Los militares jugaban con varias cartas sobre la mesa que ponían nerviosos a los islamistas. Por un lado, la amenaza de disolver el Parlamento a través del Tribunal Constitucional; por otro, la todavía inestable situación jurídica de la Hermandad. A mediados de febrero, la abogada y diputada del Partido Socialdemócrata Sanaa al-Said exponía en el Parlamento que la formación seguía sin haber legalizado su existencia un año después de la caída de Mubarak, exigiendo una disolución judicial de la misma.

La candidatura de Khairat Shater se presentaría en este contexto, a causa de la desconfianza respecto a la estrategia de las Fuerzas Armadas. Al menos así lo afirmaría posteriormente Saad el-Katatni, por entonces presidente del Parlamento, en una entrevista.[1] Pero mientras unos veían en ello un nuevo y rocambolesco pacto entre la Junta y los islamistas, el gesto no parecía más que un instrumento político de la Hermandad para presionar a la Junta Militar. Esto es lo que se desprende de las palabras de Helmi el-Gazar, miembro del Consejo de la Shura de los Hermanos Musulmanes, a la prensa. «Retiraremos a Shater si nos dan el Gobierno», llegó a decir.[2]

1 «D. Saad el-Katatni el-morashah le-re'aset el-horreya w el-aadala: hadehe asbab el-saddam bein el-ijuan w el-mayles el-aaskari», *Al-Masry al-Youm*, 17-10-2012.

2 «Fidio: el-Gazar: Snaragaa qarar tarshih el-Shater iza salem el-aaskary el-hokoma lel-ijuan», *Shorouk News*, 02-04-2012.

De hecho, la decisión no generaba, ni mucho menos, unanimidad dentro de la formación, y varios integrantes, como Mohamed Beltagi o Saad el-Hoseini, se mostraron contrarios. Kamal Helbaui, durante años portavoz de la formación en Occidente, presentaría su dimisión a raíz de la candidatura de Shater. «Hay que ser consecuentes con lo que se promete», afirmaría visiblemente enojado en televisión.[3] Varias voces habían mostrado la voluntad de que la formación apoyara al doctor Abd el-Meneim Abu el-Fotouh, que había sido expulsado oficialmente de la Hermandad por, precisamente, querer participar en las elecciones. La candidatura de Shater levantó ampollas entre parte de la juventud, que se expresaría rompiendo la fuerte disciplina interna. Un grupo de jóvenes llegó a organizar una manifestación a las puertas de la sede de los Hermanos Musulmanes en el barrio de Moqatam y montó un escenario diferenciado del resto de la formación en alguna de las manifestaciones masivas en la plaza Tahrir de aquellos días.

Era evidente que la postulación de Shater caía como una bomba, a poco más de una semana de que se cerrara el plazo para presentar candidaturas. Pero no sería la única. Omar Suleiman, el influyente jefe de los servicios secretos del régimen de Mubarak, conocido como el «torturador en jefe» por los círculos activistas, y último y único vicepresidente del dictador depuesto, también flirteaba con la idea de presentarse a las elecciones. A pesar de su largo currículum, se mostraría como un «opositor interno» al régimen de Mubarak. Así lo afirmó en una entrevista a Reuters: «Que fuera jefe de los servicios secretos o vicepresidente por unos días no significa que fuera parte de la institución contra la que los ciudadanos se rebelaron».[4]

Tras meses desaparecido, se dejaba querer. Primero jugaba con el rumor de su candidatura, para después hacer público un comunicado en el que anunciaba de forma definitiva que no se

3 Declaraciones a la televisión Dream TV, el 31 de marzo de 2012.

4 «Egypt's former spy chief says not backed by army», Reuters, 08-04-2012.

presentaba. Y dos días más tarde, volvía a anunciar lo contrario después de que un grupo de partidarios, encabezados por un polémico presentador televisivo, organizaran una marcha en su apoyo en El Cairo. Aunque, en realidad, la asistencia a la marcha fuera discreta, el hombre fuerte de la CIA en El Cairo, el reconocido como mejor aliado de Tel Aviv en Oriente Próximo, anunciaba su candidatura a las elecciones presidenciales egipcias afirmando que se debía al pueblo. «La petición que me han hecho es una orden y como soldado no las desobedezco nunca», declaró. Sus seguidores tuvieron que correr entonces para recoger las treinta mil firmas necesarias para participar en la contienda electoral.

Era evidente que la noticia había logrado el efecto deseado. Los Hermanos Musulmanes parecían preocupados por la reaparición del jefe del espionaje de Mubarak. Shater aseguraba a los medios que «la candidatura de Suleiman es un insulto a la revolución». Encima de la mesa volvía a ponerse una posible estrategia para restaurar el régimen en la figura de Suleiman, algo que ya se había planteado con anterioridad y que ahora, de nuevo, recobraba fuerza. Suleiman no dejaba de ser la carta que los mismos Estados Unidos y Tel Aviv habían planteado durante el levantamiento popular de enero de 2011. Los Hermanos Musulmanes tenían miedo a que la jugada de póquer que habían preparado les saliera mal. Shater, que técnicamente había sido excarcelado por hipotéticas razones de salud, necesitaba de una amnistía jurídica para poder participar en las elecciones. Los Hermanos Musulmanes, atemorizados y desorientados, necesitaban poner sobre la mesa una carta de recambio.

Ésta no sería otra que Mohamed Mursi, entonces presidente del Partido Justicia y Libertad.

Aislamientos polémicos

Los Hermanos Musulmanes habían pasado, en una semana, de jurar y perjurar que no presentarían a ningún presidenciable y de expulsar a aquellos miembros que querían hacerlo, a tener dos nombres en la lista. La Hermandad entregó la candidatura de Mursi a contrarreloj y a punto de cerrarse el registro. Oficialmente se hizo como «medida de precaución», pero Mursi se ganaría rápidamente el apodo de candidato «rueda de repuesto» o «sustituto». Ni él mismo parecía creérselo del todo. Essam Hashish, miembro del Consejo de la Shura de la Hermandad, llegaría a afirmar que Mursi había vuelto a casa llorando el día que la oficina de orientación de la formación le había nombrado presidenciable.[5]

No eran los únicos en registrarse en el último momento. En esas últimas horas, se presentaron hasta siete candidaturas de un total de veintitrés. Era el final de una carrera electoral que había llegado a tener hasta 900 precandidaturas, algunas de lo más pintorescas. Desde Ali Seif, el hombre que afirmaba que Egipto necesitaba un macho vigoroso, hasta la mujer que afirmaba que Egipto necesitaba una buena madre, pasando por un presidenciable que se plantó frente a la sede de la Comisión Electoral con una Harley-Davidson o Mahfouz Asali, quien se dio a conocer con la única propuesta de legalizar el consumo de hachís y crear el partido de los «fumadores de hachís y la mafia egipcia». Incluso Saad el-Soghayer, un famoso cantante de la irreverente música *shaabi*, se postularía organizando una fiesta frente a la sede de la Comisión Electoral y mostrando su voluntad de concurrir a las elecciones. Aseguraba tener casi el doble de las firmas necesarias y ponía así de relieve los, a su entender, estúpidos criterios de la Comisión Electoral. De hecho, fuentes cercanas afirmaron que el presidente Mubarak, al ver los rostros de los candidatos a las presidenciales, exclamó: «Si les dieran un quiosco de tabaco a éstos, lo arruinarían».[6] Pero el dictador no se estaba refiriendo a estos precandidatos tan singulares.

Los nombres finales de los que presentaron los papeles indispensables para concurrir a las elecciones de mayo a la presidencia de Egipto —las primeras sin Mubarak— fueron veintitrés. A falta de veinte minutos para que se cerrara el plazo, Omar Suleiman aportó las firmas necesarias: las habían recogido, aparentemente, en poco menos de 48 horas. Taufiq Okasha, el polémico presentador televisivo que había apadrinado mediáticamente la candidatura, anunciaba que se habían recopilado cifras «astronómicas» de apoyo a Suleiman en pocas horas. Sólo en la provincia de Alejandría, según el *showman*, se habían reunido 33 000, aunque afirmaba que los movimientos islamistas habían destruido una tercera parte. Esta impactante candidatura de última hora provocaba que el Parlamento de mayoría islamista intentase emitir una propuesta de ley a contrarreloj para apartar de las elecciones a todos aquellos que hubieran ocupado cargos de responsabilidad en el régimen durante los últimos diez años. Unos parámetros que también podían ser aplicados a otros candidatos, como el ex primer ministro Ahmed Shafiq, que había presentado su postulación discretamente, comparada con el estruendo provocado por el jefe de inteligencia. Y es que las urnas de las primeras elecciones sin Mubarak corrían el riesgo de encontrarse con los nombres de las dos cartas que el propio dictador había empleado para detener la revuelta popular.

Una semana después, la Alta Comisión Electoral volvía a incendiar la arena política cuando anunciaba que se apartarían de la carrera diez candidaturas. La controvertida ley marcaba que los candidatos tenían que recoger treinta mil firmas

5 «Special report: How the Muslim Brotherhood lost Egypt», *Egypt Independent*, 25-07-2013.

6 «Yaumiyat Mubarak fe el-markez el-aalamy w kawalis el-mahkama w qa'iaa w sur motheqa tensher leawelo marra rassedha shahs molaseq lel-rae's el-sabeq», *Al-Watan*.

de quince provincias diferentes o tener el apoyo de treinta diputados o, en su defecto, ser los representantes oficiales y legítimos de un partido con representación parlamentaria. Además, los presidenciables debían tener más de cuarenta años, haber nacido en tierra egipcia y demostrar que ningún miembro de su familia disponía de ninguna nacionalidad que no fuera la egipcia.

Cinco candidatos fueron apartados por conflictos sobre su representatividad dentro de los partidos que supuestamente encabezaban; dos, porque las firmas válidas presentadas al final eran insuficientes; y otro, por haber evitado el servicio militar. Dos candidatos más eran arrinconados, sorprendentemente, por sus antecedentes penales, aunque éstos eran fruto de su papel como opositores al régimen supuestamente depuesto. Un último candidato, el que generaría más polémica, sería alejado de la carrera electoral por la supuesta nacionalidad estadounidense de su madre. Pese a que los candidatos tenían 48 horas para apelar, todas sus reclamaciones fueron rechazadas.

Entre los descalificados, se encontraban los dos elefantes que habían trastornado el clima político en aquella última semana: Shater y Suleiman. Omar Suleiman sería descalificado por tener 46 000 firmas de catorce provincias y no de quince, como reclamaba la controvertida ley electoral. Le habían faltado sólo 31 firmas en la provincia de Assiut para pasar el corte. Khairat Shater, que no pudo aportar pruebas de su amnistía por el caso de las milicias de El-Azahar, y Ayman Nour, por razones similares sobre su encarcelamiento en época de Mubarak —cuando fue encarcelado por atreverse a competir en las presidenciales de 2005—, eran descalificados por sus antecedentes penales. Kafkianamente, después de la revolución, ambos pagaban el precio de haberse opuesto al régimen en teoría depuesto.

Pero si alguna de estas descalificaciones trajo cola, fue la del jeque salafista Hazem Salah Abu Ismail. Este antiguo telepredicador había demostrado ser el precandidato con más popularidad en la calle, donde los carteles con su rostro y el lema «Viviremos con dignidad» habían llenado las paredes de plazas y avenidas. Sus partidarios habían logrado recoger cerca de 150 000 firmas de apoyo a su candidatura, una de las que más parecían incomodar tanto a islamistas como a las fuerzas militares. De hecho, su aparición sería vetada en los canales públicos por el propio ministro de Información. Pero, a principios de abril, se había destapado la supuesta nacionalidad estadounidense de su madre, lo que no sólo afectaba a su credibilidad como populista opositor del modelo occidental y norteamericano, sino que también lo apartaba legalmente de la carrera electoral. Abu Ismail lo negó en un principio, aunque más adelante afirmó que su madre sólo había llegado a poseer una carta verde.[7] El tema se convirtió en casi una razón de Estado, ante las extrañas y contradictorias informaciones que provenían de las autoridades estadounidenses. El 12 de abril, el Tribunal Administrativo de El Cairo indicaría que faltaban pruebas concluyentes sobre la nacionalidad estadounidense de la madre del candidato que impidieran la participación de Abu Ismail en las elecciones. Pero, a pesar de que la justicia se mostró incompetente para determinar la ciudadanía de la progenitora del jeque salafista, la Comisión Electoral decidió ilegalizar su candidatura y apartarlo de la carrera electoral.

Esto indignó a sus numerosos y fervientes partidarios, que decidieron organizar una acampada cerca de la sede del Ministerio de Defensa reclamando su readmisión. Éste sería el escenario de nuevos enfrentamientos sangrientos, a tres semanas de las elecciones, cuando en un intento de desalojarlos se presentaron allí grupos de individuos armados. Once personas murieron a consecuencia de este ataque, algo que no hizo sino deteriorar aún más la imagen del régimen militar. Otra vez, la tensión llegaba a su punto álgido a las puertas de unos comicios.

Pero la intransigencia de la Comisión con estos precandidatos no fue tal en otros casos. El 24 de abril, la Junta Militar

7 Permiso de residencia para Estados Unidos.

aprobaba, contra todo pronóstico, la propuesta de ley presentada por el Parlamento egipcio sobre el aislamiento político de las figuras del antiguo régimen. Según ésta, se descalificaba también al candidato Ahmed Shafiq, quien había ejercido la cartera de Aviación y había sido el último primer ministro del *rais* Mubarak. Pero la Comisión Electoral, 24 horas después, aceptó sus apelaciones, que se remitían a una revisión de inconstitucionalidad de la misma ante los tribunales, y no le aplicó la nueva legislación. Essam Sultan, el diputado responsable de la ley, afirmó que la decisión de la Junta Electoral era una auténtica vergüenza y un escándalo cargado de irregularidades. Ahmed Shafiq volvía a estar en la carrera electoral. El régimen tendría a su candidato en las urnas.

La coherencia de las decisiones de la Comisión Electoral era, cuanto menos, discutible. Las urnas incluirían finalmente a trece candidatos, tras la poda hecha por la Comisión y la retirada de uno de los presidenciables. De éstos, no más de cinco parecían entrar en las quinielas. Los intentos de encontrar una candidatura revolucionaria única para las presidenciales habían fracasado y, por tanto, el voto revolucionario quedaría dividido en las urnas. También se fraccionarían el voto islamista, que tenía tres nombres en las urnas, o el continuista, con al menos dos posibles representantes.

La Comisión Electoral dispone

Farouk Sultan era el presidente de la Comisión Electoral que había dispuesto este mapa en las urnas. Un antiguo oficial del Ejército, con más de doce años de carrera en la justicia militar, que Mubarak convirtió en jefe de justicia de la Corte Constitucional Suprema en 2009. Aquella acción fue entonces analizada como un intento de controlar la institución y allanar el camino a la sucesión en el poder de su hijo Gamal. Bajo su mandato también se produjeron las ampliamente criticadas intervenciones judiciales de las elecciones a los sindicatos profesionales. Ahora encabezaba una controvertida Comisión Electoral que debía supervisar las urnas de las primeras elecciones sin el *rais* Mubarak. Las primeras desde la revolución. Las primeras de la nueva era.

Su nombre era polémico, pero no era el único. Entre los seis miembros, se encontraban figuras destacadas de la judicatura mubarakista, algunos con cargos relevantes durante la adulteración de anteriores votaciones. Uno de los miembros, Ahmed Khafaji, había sido el responsable de la politizada sentencia a cinco años de prisión contra el opositor Ayman Nour, en 2005. Ahora, la Comisión apartaba al candidato del partido Ghad de la carrera electoral basándose en aquella controvertida sentencia. El secretario general de la Comisión, Hatem Bagato, había sido la mano derecha del controvertido ministro de Justicia Mahmud Marie, acusado de alterar las elecciones de 2005 y atacar de forma arbitraria a los jueces independientes del régimen. De hecho, sobre Bagato pesaba una petición ante la corte administrativa reclamando su exclusión de la Comisión. Pero la sentencia no llegó a tiempo y éste pudo finalmente ejercer su cargo.

La Comisión, además, gozaba del blindaje del artículo 28 de la reforma constitucional, según el cual ésta se encontraba por encima de la judicatura: no se veía obligada a hacer caso de otras sentencias judiciales y sus decisiones eran inapelables. De hecho, varias sentencias judiciales habían reclamado detener las elecciones o chocaban con algunas de sus decisiones, pero el blindaje de dicho artículo permitió mantener la hoja de ruta. Este polémico punto provocó varias movilizaciones de las masas populares en la calle, incluidos los Hermanos Musulmanes que, ahora, parecían desconfiar de la Junta Militar. Pero la Hermandad, de hecho, protestaba por un artículo que ellos mismos habían ayudado a aprobar en el referéndum constitucional de marzo de 2011. Sin embargo, cuando la luna de miel con el poder militar tenía pinta de peligrar, les sobrevino el miedo de que se les volvieran las tornas.

La Junta Militar, mientras tanto, urgía a los electores a votar e incluso empleaba tanques con carteles y megáfonos para promover la participación en los comicios. Se esforzaban por el éxito de las votaciones y sacaban pecho. «Las elecciones presidenciales serán un ejemplo que el mundo entero podrá observar», afirmaba, satisfecho, el mariscal Tantawi.[8] Y alertaban en un comunicado de «la importancia de aceptar los resultados de las elecciones, ya que no hacerlo sería enfrentarse a la voluntad del pueblo».[9] Una voluntad que debía expresarse en la primera vuelta, los días 23 y 24 de mayo.

Las encuestas vaticinaban unos resultados ajustados y difíciles de prever. Semanas antes de los comicios, todo parecía apuntar a una segunda vuelta entre el ex secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, y el ex miembro de los Hermanos Musulmanes, Abd el-Meneim Abu el-Fotouh. Uno representaba la cara amable del continuismo de un candidato que afirmaba ser «un opositor interno» de un régimen que le había forjado políticamente; y el otro era un antiguo dirigente de los Hermanos Musulmanes que había buscado complejas alianzas con polos opuestos del espectro político, desde liberales seglares a salafistas, barriendo simpatías dentro de la propia Hermandad que lo había expulsado. Pero las aspiraciones de ambos se vieron claramente afectadas por la celebración, el 10 de mayo, del primer debate presidencial televisado de la historia de Egipto. Lejos de ayudarles a promocionarse ante el electorado, la imagen de ambos candidatos limitándose a lanzarse acusaciones el uno al otro erosionó sus expectativas de voto. Y esto alertó al resto de presidenciables: los debates programados para las semanas siguientes serían cancelados por los concejales de campaña con extrañas excusas.

8 «Tantawi: intijabat el-re'asa satkon namodhyan yashad leho el-aalam», *Al-Masry al-Youm*, 16-05-2012.

9 Mensaje número 10 del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas.

El tercero en discordia era el candidato de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi, que intentaba medrar pese a su falta de carisma y su aureola de candidato en reserva. Los analistas preveían una caída importante de la popularidad de la Hermandad, pero estaba por ver cómo reaccionarían sus generalmente disciplinadas bases. El problema era que buena parte de éstas reclamaba que se retirara la candidatura y se apoyara la de Abu el-Fotouh. Incluso Mostafa Khamish, miembro del Consejo de la Shura de la Hermandad, lo exigiría afirmando que «Mursi es una mala elección».[10] Se produjeron dimisiones dentro del partido y la Hermandad congeló la afiliación a varios miembros por su apoyo público a Abu el-Fotouh, entre ellos a cincuenta jóvenes de Beni Suef. Pero Khairat Shater y la Hermandad no podían dar su brazo a torcer y mostrar debilidad política. Y Mursi llegaría finalmente a las urnas.

El cuarto candidato no sería otro que el último primer ministro de Mubarak, Ahmed Shafiq, que representaba la versión más clara y evidente del continuismo en las urnas, con cerca de 25 casos de corrupción en los juzgados. Y en quinta posición estaba Hamdeen Sabahi, que buscaba rentabilizar la histórica popularidad, sobre todo rural, de la imagen de Gamal Abd el-Nasser como principal baza electoral. Sin embargo, se pasó toda la campaña negando tener la intención de aplicar políticas clásicamente nasseristas, como eran la expropiación de tierras, la nacionalización de la industria o la confrontación con Israel.

Sea como fuere, los egipcios iban a ir a las urnas sin tener demasiado claro cuáles iban a ser las competencias del futuro presidente al que estaban votando. Los militares, con la redacción de la Constitución atascada, no habían hecho pública a tiempo la disposición adicional de la reforma constitucional que debía estipular el papel del nuevo presidente.

10 «Brotherhood leader supports Abouel Fotouh, calls for dropping Morsy», *Al-Masry al-Youm*, 14-05-2012.

Una primera vuelta manchada por la duda

Cuatro días antes de que comenzaran las votaciones, Hatem Bagato, secretario de la Comisión Electoral, hizo una de esas declaraciones que provocaban hilarantes titulares en la prensa: «Los muertos no votarán en las próximas elecciones».[11] Menos de 24 horas después, familiares de mártires de la revolución denunciaban la presencia de sus muertos en el censo electoral. En Alejandría, figuraba el nombre de Khaled Said, el joven torturado hasta la muerte por la policía durante el verano de 2010, mientras que en El Cairo aparecía el de Mina Daniel, muerto a manos del régimen militar en octubre de 2011. En Suez, también descubrieron el nombre de varios mártires del 28 de enero de 2011.

Aquello era tan sólo el inicio. Los Hermanos Musulmanes rompieron la jornada de reflexión organizando 25 mítines electorales y fletando hasta cuatro líneas de autocares gratuitos en la ciudad de Alejandría para, afirmaban, «solucionar el conflicto del transporte en la ciudad». Curiosamente, lo hicieron en campaña electoral y con enormes retratos del presidenciable Mursi a ambos lados de los vehículos. Los mismos días de las votaciones se denunciaron irregularidades, la mayoría vinculadas a la compra, coacción y manipulación del voto. Casi todas iban dirigidas contra miembros de los Hermanos Musulmanes y los dos candidatos considerados continuistas: Ahmed Shafiq y Amr Musa. Algunos liberados políticos fueron detenidos repartiendo propaganda y boletos sellados dentro de los colegios, y otros fueron arrestados con decenas de papeletas intentando hacer la práctica del voto masivo. El precio de la papeleta oscilaba entre las 50 y las 150 libras. En Tanta, se detuvo a cuatro policías ejerciendo ilegalmente el voto, mientras miembros de la campaña del nasserista Hamdeen Sabahi delataban la presencia de papeletas con votos favorables a su candidato lanzadas por las calles de Qena. La Comisión se dedicó a calificar de «leves» las irregularidades, mientras que los Hermanos Musulmanes, retomando la retórica del antiguo régimen, afirmaron que eran «errores que no afectan al resultado final».

Con una participación que rondó el 43%, las urnas mostraron la fragmentación del voto y colocaron en segunda ronda al candidato de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi, y al continuista Ahmed Shafiq, con un 25 y un 24 por ciento de los votos respectivamente. Con un crecimiento espectacular de última hora y contra todo pronóstico, los seguía muy de cerca el nasserista Sabahi, con un 21% de los escrutinios. Abu el-Fotouh y Amr Moussa (18 y 11% respectivamente) certificaban su fracaso con unos resultados bastante discretos. Los Hermanos Musulmanes, a pesar de seguir siendo la formación con más fuerza, notaban el desgaste político de los últimos meses. En poco más de cinco meses desde las parlamentarias, la Hermandad perdía cerca de la mitad de los votos en todo el país y más de 2/3 partes en ciudades consideradas feudos islamistas como Alejandría.[12] Sin embargo, seguía siendo el grupo con más presencia.

Los resultados, que chocaban a muchos y contradecían todos los sondeos previos, confrontaban en la segunda vuelta a la Hermandad y el antiguo régimen. Grupos de jóvenes revolucionarios tomaban las calles denunciando la presencia de Shafiq en esta segunda vuelta e incluso atacaban la sede electoral del candidato en ocho provincias. En Monufeya, donde Shafiq había sacado más votos, los revolucionarios denunciaron haber encontrado carnés de identidad falsos dentro de sus oficinas. Ayman Nour, el postulante aislado por la Comisión Electoral, lo tenía claro: «Nos han puesto una trampa para que saliera Shafiq». Mientras tanto, el reconocido tertuliano Hamdy Kandil era

11 «Dead citizens will not vote in Egypt presidential elections: Electoral Commission», *Ahram Online*, 19-05-2012.

12 En el ámbito estatal, pasaron de los 10 138 134 votos en las parlamentarias a los 5 764 952 en la primera vuelta de las presidenciales.

más contundente: «Los revolucionarios no deberían reconocer los resultados electorales y deberían boicotear la segunda vuelta hasta que no se aplique la ley de aislamiento político».[13]

Hamdeen Sabahi y Amr Moussa reclamaron parar las elecciones hasta que se aclararan algunas denuncias. Una de ellas exigía que los tribunales se definieran acerca de la descalificación de Shafiq, siguiendo la ley de aislamiento político emitida por el Parlamento, porque entonces se encontraba todavía pendiente de sentencia. La otra pedía investigar la denuncia presentada por el oficial de policía Abd el-Rahman Mansour Nashar, según la cual el Ministerio del Interior habría emitido novecientos mil carnés de identidad para emitir votos a favor de Ahmed Shafiq.[14] Según las cifras oficiales, el candidato nasserista había quedado fuera de la segunda vuelta por una diferencia de setecientos mil votos. La denuncia de Nashar no parecía, por tanto, una irregularidad menor ni «errores que no afectan al resultado final».

El antiguo régimen y la Hermandad, cara a cara

Mohamed Metwali, vicepresidente primero del Tribunal de Casación y miembro de la Comisión Electoral, anunciaba el 28 de mayo que no se aceptaban las apelaciones presentadas por los candidatos. Aunque había dos casos en los tribunales que socavaban la legitimidad de los resultados, la Comisión Electoral, inmune a la judicatura en virtud del artículo 28 de la reforma constitucional, decidía seguir adelante con el proceso. Metwali oficializaba de esta manera una segunda vuelta entre Ahmed Shafiq y Mohamed Mursi. O lo que era lo mismo:

13 «Qandil: Al-aaskary aaml ded el-thawra w aala el-thawar el-asrar aala aadm eyra' yola el-aada», *Shorouk News*, 05-06-2012.

14 «Belagh yetahem dhobatan betazuir 900 alf sut lesaleh Shafiq», Al-Arabiya, 26-05-2012.

entre el candidato reserva de los Hermanos Musulmanes y el hombre que Mubarak había nombrado primer ministro para poner fin al estallido popular de la revolución egipcia. Curiosamente, Metwali ya había formado parte del comité electoral mubarakista que había avalado el fraude generalizado, con una decena de muertos incluidos, de las elecciones de diciembre de 2010. Después de una revolución que había costado la vida a más de 800 personas, avalaba de nuevo unas elecciones bajo régimen militar.

La confrontación electoral entre Shafiq y Mursi significaba la reanudación de la endémica confrontación entre el régimen y su oposición islamista. Una rivalidad que volvió a poner en la palestra una auténtica guerra sucia subterránea. Aún pendiente del curso legal de la demanda para inhabilitarlo en virtud de la ley de aislamiento político, Ahmed Shafiq presentaba una agresiva campaña, marcada por la falta absoluta de propuestas concretas y una evidente abundancia de retórica antiislamista.

«Sacrificaré mi vida para liberar a Egipto de los Hermanos Musulmanes.» Así de contundente se mostraba un belicoso Ahmed Shafiq durante la campaña. En un encuentro en la Cámara Americana de Comercio, prometía mano dura: «Restauraré la seguridad en treinta días a base de ejecuciones y fuerza bruta».[15] En pocos días, definió a los Hermanos Musulmanes como una formación sectaria y mentirosa y los acusó, sin aportar pruebas, de querer vender el Canal de Suez a Catar, de matar manifestantes durante el levantamiento popular y de tener preparadas milicias armadas para una hipotética guerra civil. En un acto repleto de cinismo, llegó a tildarlos de continuistas por haber hecho varios pactos políticos con Mubarak.

Mientras tanto, se rodeaba de la influencia de miembros del antiguo Partido Democrático Nacional. «Nunca voy a negar que Mubarak es un modelo a seguir», afirmaría en otra oca-

15 David D. Kirkpatrick: «Egyptian Is Counting on Worries of Elites», *The New York Times*, 27-05-2012.

sión. Los principales líderes de la campaña en las provincias mostraban vínculos directos con el extinto PDN y las principales figuras mediáticas del régimen se convertían en sus más firmes defensores en los medios. El caudillo Abd el-Rahim el-Ghul, quien en 2010 había propuesto una ley al Parlamento para poder disparar a los manifestantes, era uno de sus principales aliados en la provincia de Qena. El-Ghul no tendría vergüenza de reconocer su vínculo con el mubarakismo y, en un mitin de apoyo al candidato, se mostraría orgulloso de ser el padrino de los *fulul* (las figuras del antiguo régimen).

Pero Shafiq, un militar que había ocupado la cartera de Aviación entre 2002 y 2011, había sido el primer ministro nombrado por Mubarak el 31 de enero para poner fin a la sublevación popular. Bajo su breve mandato, se protagonizó el ataque a manifestantes en la plaza Tahrir conocido como «la Batalla del Camello», la destrucción sistemática de documentación policial y tuvo lugar la ingente fuga de capital estatal y de figuras del régimen buscadas judicialmente. La justicia estudiaba, para entonces, más de 24 denuncias de corrupción contra el presidenciable, entre las que se encontraba la presunta venta fraudulenta, cuando era ministro de Aviación, de terreno estatal en beneficio de la familia del *rais* y otros hombres de negocios. «Yo me limitaba a firmar papeles», declararía cínicamente durante la campaña.[16]

Al otro lado del cuadrilátero, se encontraba el candidato reserva de los Hermanos Musulmanes. Mohamed Mursi, con un perfil más bien bajo, era precisamente acusado por sus detractores de no ser más que un títere en manos de la formación en la que militaba desde la década de los setenta. Después de no haberlo conseguido en 1995, debido a la razia del régimen contra los Hermanos Musulmanes, en 2000 entraba en el Parlamento y se convertía en portavoz parlamentario de la Hermandad. Allí empezó a forjar su carrera política como opositor que, en 2006, le llevó a estar siete meses detenido junto con 500 miembros más de la formación islamista. En enero de 2011, en pleno estallido revolucionario, volvería a la cárcel de Wadi Natrum, de donde sería liberado a raíz de los hechos del 28 de enero. Algo que sus detractores usarían en su contra, afirmando que la fuga había sido preparada por miembros de Hamás y que el presidenciable había eludido a la justicia.

Los Hermanos no se quedaron de brazos cruzados ante los ataques de Shafiq y acusaron al régimen de intentar revivir la candidatura de su rival, de quien pedían la exclusión electoral, mientras arremetían contra los medios de comunicación como los grandes responsables de una «mentirosa campaña contra la Hermandad». Pero, frente al perfil bajo de Mursi, su candidatura se apoyó en los ochenta años de experiencia organizativa de los Hermanos Musulmanes y, sobre todo, en el proyecto del Nahda, el Renacimiento. Un documento de 81 páginas que exponía las bases para crear un Estado democrático moderno de referencia islámica y que exponía las bases para «el empoderamiento de la sociedad», «el proceso de liderazgo local» o «el desarrollo humano integral». La mayoría de propuestas resultaban poco concretas o inalcanzables a medio plazo, por lo que levantaban las suspicacias de muchos analistas. Los propios Hermanos Musulmanes hablaban de un plan a veinte o treinta años vista. Ante las críticas, Mursi se comprometió a lograr un programa concreto de 64 puntos en cien días.

La Hermandad, necesitada de alianzas para batir a Shafiq en las urnas, volvió a llamar a todas las puertas. Con el voto islamista casi asegurado, retomó el discurso revolucionario para seducir a los opositores seglares del antiguo régimen y hacer un guiño a la Junta Militar, al mismo tiempo. A primeros de junio, en plena campaña para la segunda vuelta, utilizaron el Parlamento para plantear una mejora de sueldo de los miembros del Ejército que preveía un aumento de hasta cuatro veces el salario base.

16 «Bel-fideo: Shafiq: Duri kan tauqiaa ooqoud biaa el-ard lenayli Mubarak dun taadilha», *Shorouk News*, 14-05-2012.

Ante la dicotomía de las urnas y el retorno a las antiguas argumentaciones, el voto del miedo se extendió por el país. Los egipcios se veían forzados a escoger «entre dos demonios», como afirmaban en las redes sociales. «El mejor entre los malos», era el principal argumento escuchado en las calles mientras se extendían las llamadas de muchos activistas a votar a Mursi, «mordiendo un limón», para evitar que Shafiq accediera a la presidencia. El voto del miedo también funcionaba en favor de un Shafiq que recogía votos entre buena parte de las minorías coptas y de las clases acomodadas, recurriendo a la fobia al islamismo político y a la inseguridad en las calles. También el sector turístico le mostraba su apoyo, a través de la Federación Egipcia de Cámaras de Turismo, ante lo que creían una amenaza para sus negocios.

Golpe de Estado por ley

A dos días de las votaciones, el Tribunal Constitucional lanzaba una nueva bomba política. A falta de 48 horas para que empezaran las votaciones, la alta instancia judicial declaraba la inconstitucionalidad de la ley de aislamiento político a las figuras del antiguo régimen. Así ratificaba que Shafiq estaría en las urnas. La misma institución, certificando lo que algunos calificaron como un «golpe de Estado judicial», también reclamaba la disolución del Parlamento por la inconstitucionalidad de los 161 asientos conseguidos por el irregular sistema de listas individuales, lo que representaba un tercio de la cámara. La policía tomaba el Parlamento e impedía que ningún diputado tomara posesión, aunque fuera simbólica, de su escaño. El poder legislativo volvía a caer en manos del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, quien volvía a certificar que no ansiaba el poder. «Éste ha vuelto a nosotros por la fuerza de la ley», afirmaban fuentes militares a la agencia MENA.

El Tribunal Constitucional se encontraba presidido ni más ni menos que por Farouk Sultan, el mismo juez que encabezaba la controvertida Comisión Electoral. Farouk jugaba a dos bandas para dinamitar la escena política de nuevo, a pocas horas de las decisivas elecciones. Nour Sobh Darwish, autor de la demanda que había conducido a la disolución del Parlamento, sembraba la duda al afirmar no entender nada de lo que pasaba. Sostenía que, aunque la demanda estuviera a su nombre, él nunca había pedido esa pena ni había llevado la demanda al Tribunal Constitucional.[17] Miembros de los Hermanos Musulmanes afirmarían que ya habían alertado desde un principio de la inconstitucionalidad de la ley, pero que ésta había sido defendida por la Junta Militar. Así se expresaría el secretario general del Partido Libertad y Justicia Ahmed Mahmoud en Suez.[18] De hecho, los islamistas habían aceptado, en noviembre de 2011, la propuesta de ley electoral ante la concesión militar de que las listas individuales podían ser llenadas con candidatos del partido.

A las puertas de las votaciones, los temores de los islamistas parecían confirmarse. El veredicto anulaba los resultados de las convulsas elecciones parlamentarias de cinco meses atrás y, sobre todo, dejaba a los Hermanos Musulmanes sin el, hasta entonces, estéril y único bastión de poder, mientras que daba vía libre al antiguo régimen para mantenerse en las urnas posrevolucionarias. No obstante, las leyes del antiguo régimen, ejecutadas por jueces del antiguo régimen, no tenían poder para desacreditar a sus actores políticos. Decenas de miembros de las juventudes de los Hermanos Musulmanes reclamaron la retirada de su candidato, pero la dirección decidiría que Mursi siguiera su carrera en las urnas para «proteger la revolución», según palabras del guía supremo Mohamed Ba-

17 «Saheb daaua hal el-barlaman le al-masry al-youm: Lam atlob ma qadet beho el-dostoreya...Ejtanasemtaha leal-ga' el-hokm», *Al-Masry al-Youm*, 20-06-2012.

18 «Nae'b ijuani: Akadna lel-aaskary mondo el-bedaya aadm dostoreya qanun intijabat», *Shorouk News*, 14-06-2012.

die. Un visiblemente satisfecho Ahmed Shafiq, por su parte, calificaba de histórico el veredicto que, afirmaba, ponía fin a «una época de venganzas».

Los militares volvían a tener la sartén por el mango de cara a las elecciones. El terremoto había llegado 24 horas después de que otra polémica decisión judicial volviera a restaurar algunos de los poderes de la discutida ley de emergencia, derogada un mes atrás y que gobernaba el país desde la llegada de Mubarak en 1981. Diecisiete organizaciones de derechos humanos denunciaron que esto era la prueba de que Egipto seguía viviendo bajo un régimen militar, puesto que la ley permitía la persecución de los delitos de opinión, manifestación o huelga. Con las urnas a punto de abrirse, incluso los aliados norteamericanos parecieron inquietarse. El secretario de Defensa estadounidense, Leon Panetta, alertaba a Tantawi a través de una llamada telefónica de la necesidad de avanzar rápidamente en la transición, destacando que Estados Unidos seguiría «monitorizando el proceso».

En medio de un revuelo total, Egipto iba a las urnas sin Parlamento, sin Constitución y sin saber qué competencias tendría el futuro presidente. Pero con la idea clara de que los militares seguirían tutelando el camino.

Tensión en las urnas

A las puertas de un colegio electoral en Minya, un matrimonio se divorciaba después de que ella hubiera votado por Mursi y él lo hubiera hecho por Shafiq. Un retrato de la tensión política en la que se encontraba el país durante la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias. Los días 16 y 17 de junio de 2012, cincuenta millones de egipcios volvían a ser llamados a las urnas para elegir al primer presidente desde la revolución. El Gobierno declaraba festivos para los funcionarios las jornadas de votaciones y dejaba volar el fantasma de las multas de cien

libras para los abstencionistas, con el objetivo de incentivar la asistencia a los colegios electorales. Poco después, como la participación que se estaba anunciando era muy baja, se extendió durante dos horas más el período de voto.

En varios colegios electorales se registraron enfrentamientos entre los partidarios de uno y otro candidato. En algunos casos, las fuerzas del Ejército encargadas de la protección de los colegios se vieron obligadas a intervenir, incluso interrumpiendo el curso de las votaciones y utilizando armas de fuego. En total, hasta ocho provincias registraron enfrentamientos de última hora entre los seguidores de ambos presidenciables. Las fuerzas policiales denunciaron el intento de asalto a tres colegios, mientras el alcalde de un pueblo de la provincia de Sohag era detenido tras amenazar con un arma de fuego a los partidarios de Mursi. Ambas campañas se acusaron mutuamente de compra de voto y fraude electoral. Aparecieron cerca de un millar de paquetes de papeletas, previamente marcadas, en beneficio de ambos candidatos en diversos colegios.

Como si fuera motivo de broma, Hatem Bagato, secretario de la Comisión Electoral, llegaba a definir como «ingenio egipcio» la estrategia de emplear a niños menores de edad que acompañaran a los votantes para comprobar que éste ejecutaba el voto que había vendido a un candidato. La gran ocurrencia de la jornada, y motivo de gran número de rumores, sin embargo, fueron los bolígrafos con tinta que desaparecía, que facilitaban la manipulación de las papeletas. En varios colegios se descubrieron algunos y se encendió la alarma del fraude programado. El polémico presentador televisivo defensor del régimen, Taufiq Okasha, afirmaba que los Hermanos Musulmanes habían importado 180 000 de estos bolígrafos desde la India y que los repartían en las colas de votantes según el perfil. Cuatro horas después, la tinta desaparecía. La Comisión Electoral pediría al Ministerio del Interior que distribuyera cincuenta mil bolígrafos e invitaría a los votantes a hacer uso del bolígrafo «oficial».

Pero, una vez más, las irregularidades serían minimizadas y se aseguraría que no afectaban al resultado final. Incluso cuando la delegación de monitorización del ex presidente estadounidense Jimmy Carter emitió sus valoraciones, muchos medios resaltaron que el informe daba el visto bueno al proceso. Lo hacían a pesar de que lo que decía dicho informe era que no se habían detectado irregularidades destacables, pero que, ante todo, no se había tenido capacidad para hacer un verdadero juicio sobre las votaciones, puesto que el seguimiento había sufrido unas restricciones «sin precedentes».[19] El centro había enviado noventa observadores de 36 países para monitorizar los cerca de diez mil colegios electorales. Según reconocían, no pudieron superar el monitoreo parcial ni mil de ellos; ni un diez por ciento del total.

El 17 de junio por la noche, se cerraban los colegios electorales. Mientras se iniciaba el recuento, la Junta Militar remachaba por enésima vez el clavo de la transición. Una vez los egipcios ya habían expresado su voto, daban a conocer las competencias del futuro presidente. Se anunciaban, también, nuevas disposiciones constitucionales que les reservaban el poder legislativo durante un período cercano a los cinco meses y volvían a blindarse con todas las competencias relacionadas con el Ejército. El nuevo presidente tendría poderes para formar Gobierno, ratificar y rechazar leyes y declarar la guerra, pero sólo después de la aprobación del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el artículo 60, la Junta Militar también se reservaba el derecho de tutelar la redacción de la Constitución, y no sería hasta que ésta estuviera escrita cuando se formaría un nuevo Parlamento.

Definido como un «golpe de Estado» por los generalmente comedidos Hermanos Musulmanes,[20] el fantasma de la permanencia militar en el poder volvía a planear sobre Egipto. Inquietaba incluso al Pentágono y la Casa Blanca, que alertaban a sus socios egipcios sobre el rumbo de la transición. E incluso jugaba freudianamente en las mentes de los propios militares. El general Mohamed el-Assar tuvo un pequeño lapsus durante la rueda de prensa en que el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas presentaba la citada reforma y aseguró que no se cansaría de afirmar que los militares traspasarían el poder a finales del próximo enero. Alguien intentó advertirle del error —eso eran siete meses— y, entre las risas de los soldados y el asombro de algunos periodistas, el general corregiría. «Me refería, evidentemente, a finales de junio» afirmó con una sonrisa de compromiso.

19 «The Carter Center Releases Preliminary Statement on Second Round of Egypt's Presidential Election», The Carter Center, 19-06-2012.

20 «El-ijuan tsef el-aalan el-mokmel bel-enqelab...w taw'aked: Mayles el-shaab qa'em», *Al-Watan*, 18-06-2012.

Una semana al borde del precipicio

A las cuatro de la madrugada, con el recuento todavía en curso en varias provincias, los Hermanos Musulmanes anunciaban su victoria electoral. «Agradezco a Alá esta victoria, que es la de todos los egipcios», declaraba Mursi en rueda de prensa. Los islamistas clamaban haber superado por menos de un millón de votos a Ahmed Shafiq: 12,7 millones de papeletas frente a los 11,84 millones del aspirante continuista.

Pero la candidatura del ex primer ministro afirmaba disponer de unos números bastante diferentes y se mostraba convencida de que su presidenciable superaba al islamista por más de medio millón de votos. «Estamos preparados, más allá de los aspectos jurídicos, para afirmar que Ahmed Shafiq será el próximo presidente de Egipto», aseguraba Ahmed Sarhan como portavoz de la campaña.[21] Por «aspectos jurídicos», se refería a los recursos en curso, en los que los partidarios del candidato continuista

21 «Hemlet Shafiq: ladina bianat taw'aked tqadem morashehna benosf milion sut», *Al-Masry al-Youm*, 19-06-2012.

reclamaban la anulación de cerca de dos millones de votos a Mursi. Yahia Qadri, abogado de la campaña, afirmaba haber exigido a la Comisión «anunciar la victoria oficial de Shafiq o forzar la repetición de las votaciones en las provincias donde hay recursos».[22] Ambos candidatos se proclamaban vencedores y se negaban a reconocer su derrota o, lo que era peor, la victoria de su rival. Durante una semana, las acusaciones cruzadas de fraude no hicieron más que añadir más tensión a un ambiente ya cargado. La Comisión Electoral anunciaba el análisis de las cerca de 400 denuncias presentadas por los dos candidatos; 220 provenían de la campaña de Shafiq y 140 de la de Mohamed Mursi. Los Hermanos Musulmanes trataban de reenamorarse de la calle y presionaban al Ejército con nuevas movilizaciones en la emblemática plaza Tahrir, organizando autocares desde todas las provincias para denunciar el nuevo decreto de la Junta. Después de meses atacando a través de sus medios y portavoces, e incluso tras presentar denuncias judiciales en su contra, la Hermandad lanzaba un guiño a las fuerzas revolucionarias seglares y gritaba extraños vivas en las redes sociales a grupos como el 6 de abril o los Socialistas Revolucionarios.[23] Además, el presidenciable conseguía recibir el apoyo de un buen número de caras visibles de entre estos revolucionarios seglares. Gente como el periodista y fundador de Kefaya, Hamdy Kandil; el escritor Alaa el-Aswani; el fundador del 6 de abril, Ahmed Maher; o uno de los creadores de la web en apoyo del mártir Khaled Said, Wael Ghoneim, formarían parte de lo que sería llamado «el Frente Nacional». Aquellas voces destacadas habían arrancado algunas promesas a Mursi en una reunión en el hotel Fairmont, a los pies de las torres Nile City. Entre ellas, la formación de un Gobierno de coalición nacional.

22 «Mohami Shafiq yotaleb el-oolia lel-re'asa beaalan fauzo aw aada bel-entajabat», *Al-Masry al-Youm*, 20-06-2012.

23 «El-ijuan tawaga el-tahia le 6 abril w el-eshterakeen el-thawreen aabr el twitter», *El-Ahram*, 23-06-2012.

Desde las calles, los Hermanos Musulmanes amenazaban incluso con una nueva revolución si los resultados colocaban a un continuista en la presidencia. Paralelamente, los partidarios de Shafiq organizaban una concentración de apoyo a las Fuerzas Armadas en un barrio acomodado de El Cairo. La tensión aumentaba cada vez más a medida que se acercaba la hora de anunciar los resultados. Y la psicosis colectiva, también. El diario oficialista *El-Ahram* alertaba de que se acercaban «las 48 horas más peligrosas de la historia» del país.[24] Mohamed el-Baradei avisaba de que el país estaba al borde de la explosión. Los tanques protegían las casas particulares de ambos candidatos, mientras la policía y el Ejército decretaban el estado de alerta máxima y desplegaban todos los efectivos disponibles. Las fuerzas de seguridad pedían a los cuerpos consulares que cerraran sus sedes, muchas empresas daban fiesta a sus trabajadores y las calles, en estado de paranoia total, se quedaban desiertas a medida que se acercaba la hora del anuncio. Más que unos resultados electorales parecía que se iba a anunciar una declaración de guerra.

A las tres de la tarde del 23 de junio, con un retraso de varias horas, los representantes de la Comisión Superior Electoral comparecieron en rueda de prensa para hacer públicos los resultados oficiales finales. Estos eran muy similares a los anunciados por la Hermandad la misma noche de las votaciones: con 13 230 000 votos (51,7%), Mohamed Mursi se convertiría en el primer presidente civil de la historia del país. Sólo 900 000 votos de diferencia separaban al islamista del comandante de aviación Ahmed Shafiq, quien alcanzaba un 48,2% de los votos y guardaba un tenso silencio tras el anuncio oficial.

Ahmed Shafiq abandonaría el país para ir a Abu Dhabi ni dos días después de que se anunciaran los resultados. Se marchaba a uno de los santuarios adonde habían huido buena parte de las grandes figuras del antiguo régimen y donde parecían

24 «Ajtar 48 saaa fi tarij Misr», *El-Ahram*, 20-06-2012.

cocerse las conspiraciones del continuismo: los Emiratos Árabes. Pocos días antes, se había instalado allí otro personaje, el siempre enigmático Omar Suleiman, cuya misteriosa muerte se anunciaría poco más de un mes más tarde. Shafiq huía, a pesar de tener a sus espaldas hasta 24 causas pendientes en los juzgados. Sus partidarios afirmaban que se tomaba unas merecidas vacaciones y que pensaba en hacer la Omra, una visita religiosa a la ciudad de La Meca. Sus detractores argumentaban que se iba sin rendir cuentas a la justicia y con un equipaje de 7110 kilos que no había sido inspeccionado por las autoridades.

Shafiq guardaría silencio durante meses. Sólo lo rompería a mediados de octubre, cuando la batalla jurídica en su contra se intensificó, para reclamar que él era el legítimo vencedor de las elecciones y que tenía documentos que así lo demostraban.[25] Afirmaba haber estado callado «por el bien de Egipto», pero que no se quedaría de brazos cruzados ante las agresiones de los Hermanos Musulmanes. Según sus seguidores, que realizaron una intensa campaña en las redes, Mursi había sido nombrado presidente gracias a un acuerdo entre la Junta Militar y Khairat Shater, negociado durante toda la semana pero cerrado a contrarreloj. Una llamada de última hora de Shater a Tantawi habría sido la explicación del largo retraso de la rueda de prensa en que se anunciaron los resultados. Las acusaciones de Shafiq fueron tildadas, por miembros de la Hermandad, de «alucinaciones», desacreditando por completo las teorías del ex presidenciable.

Más allá de las denuncias de Shafiq, diversas informaciones apuntaban a que los resultados electorales se sabían desde cuatro días antes de su anuncio, un retraso que dio lugar a muchas suspicacias. La gran incógnita era saber el motivo de ese retraso y qué había detrás. Oficialmente, era el estudio de las denuncias presentadas por las candidaturas. Algunas fuentes

25 «Bel-fidio...baad taymid hesabteho: Shafiq yotaleb el-nae'b elaam beltahqiq fi natae'y intijabat el-re'asa», *El-Bedaiah*, 22-10-2012.

demostraban que la Comisión Electoral había recibido fuertes presiones y había pasado por crisis internas, incluida la amenaza de algunos miembros de presentar su dimisión. Ésta evaluó seriamente la posibilidad de repetir la votación en, al menos, tres provincias donde se habían detectado irregularidades, pero acabó desestimando la propuesta porque, según palabras de uno de sus integrantes, «bajo ningún concepto» se podían aplazar los resultados.[26]

Tras bambalinas, parecía librarse una batalla política sin igual a tres bandas. Un triunvirato entre los Hermanos Musulmanes, la Junta Militar y la Casa Blanca parecía querer redefinir la ruta, antes de dar ningún paso en falso en la tensa transición. Una maratón de encuentros y llamadas telefónicas precedieron al anuncio de los resultados, en unas negociaciones que podrían haber llegado a tener la mediación del diplomático Mohamed el-Baradei. Hillary Clinton lo habría ido supervisando todo personalmente desde Washington, presionando a la Junta Militar para marcar el camino de la llamada transición. Y, en esta senda, Washington había dado, al menos, el visto bueno a la presidencia de los Hermanos Musulmanes. Una decisión que generó tensiones internas en Estados Unidos, por dar el poder a una formación islamista, pero que en realidad no hacía más que jugar una vez más a la diplomacia política a favor de lo que consideraban, por entonces, sus intereses. Los análisis yanquis consideraban a la Hermandad como el grupo mejor organizado y popular después del régimen y, por tanto, indicaban que era la salida más estable al zarandeo político provocado por la caída de Mubarak. La Casa Blanca apadrinaba una transferencia del poder que añadía un nuevo punto en el gran pacto de la transición entre militares y Hermanos Musulmanes.

El 29 de junio, Mohamed Mursi se dirigía a la plaza Tahrir para jurar simbólicamente el cargo de presidente ante el esce-

26 «El-mostashar Jefagy Yokashef: Baad aada`el-layna aradu ta'yil aalan fawz Morsi», *Shorouk News*, 18-10-2012.

nario iconográfico de la revolución. Lo hacía rodeado de decenas de guardias de seguridad y con un discurso cargado de emotividad. «La sangre de los mártires ha hecho crecer el árbol de la libertad», afirmaba antes de descubrirse el pecho desafiante y afirmando que no tenía miedo de nadie más que de Dios. La plaza irradiaba éxtasis. Bajo el intenso sol, las lágrimas caían por las mejillas de los partidarios del islamista Mursi, que nunca habían soñado con ver a un hermano musulmán como presidente del país. «Ahora todo el mundo me escucha», afirmaba retador: «No hay mayor poder que éste».

Dieciséis meses después de la caída de Mubarak, el régimen militar simbolizaba el traspaso de poder. Un período de tiempo que casi triplicaba el medio año prometido inicialmente, pero que aparentaba poner fin a casi sesenta años continuados de Gobierno militar: del 23 de julio de 1952 al 30 de junio de 2012. 84 años después de que Hassan el-Banna creara una de las más importantes organizaciones islamistas del mundo moderno, los Hermanos Musulmanes afrontaban el momento más crucial de su formación. Mursi olvidaría rápidamente su compromiso con el Frente Nacional, adquirido en el hotel Fairmont de las torres Nile City. No se volvería a reunir con ellos y los acuerdos alcanzados, empezando por la creación de un Gobierno transicional de coalición, serían completamente enterrados.

Por el contrario, una de las primeras personas en felicitar al nuevo presidente sería Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, que afirmaría que «Egipto está ahora preparada para ser ayudada».[27] A pesar de la felicidad, la tensión también era evidente. Mursi se veía obligado legalmente a jurar el cargo ante los miembros del Tribunal Constitucional que acababan de disolver el Parlamento de mayoría islamista. Mursi no sonreía, pese a la importancia del momento. No era el único incómodo. Cinco jueces habían amenazado

27 «Lagarde tells Morsi IMF ready to support Egypt», *Ahram Online*, 30-06-2012.

con boicotear la investidura. Era un presagio de la tensa relación que el presidente tendría con la cúpula judicial. A una semana de la investidura, el mandatario intentaría devolver al Parlamento su acción legislativa, pero toparía nuevamente con el muro de una judicatura todavía bajo control mubarakista.

Pero la primera embestida de Mursi tuvo otro objetivo. El 2 de julio, en una de sus primeras acciones como presidente, aprobaba un aumento del 15% de las jubilaciones a los miembros de las Fuerzas Armadas. Abría así el camino para uno de los momentos claves de la transición egipcia.

Egipto bajo los Hermanos Musulmanes

Un nuevo mapa

Si algo parecía marcar la ola revolucionaria de los países árabes era el aumento de la influencia de los Hermanos Musulmanes, y sus ramificaciones, como nueva potencia política regional. En Túnez, era la rama local de la Hermandad, El-Nahda, liderada por Rashid el-Ghannouchi, la que tomaba el poder, mientras que, en Marruecos, Justicia y Desarrollo ponía un pie y medio en el Gobierno. La formación también ganaba peso político en lugares como Kuwait o Libia y mantenía el pulso con el rey Abdallah en Jordania. En Siria, la lucha de poder dentro de la dividida oposición no ensombrecía el importante peso de los Hermanos Musulmanes. Incluso en el caso palestino, el ascenso de la Hermandad permitía a Hamás dejar de sentirse acorralada, favoreciendo un hasta hace poco impensable proceso de reconciliación con Fatah y su histórica adhesión a la Organización de Liberación Palestina (OLP).

El ascenso de la formación marcaba un nuevo mapa político en la zona. Temporal y transicional, pero claramente en auge. Este incremento iba claramente ligado a una alianza tácita con una potencia en aumento, Catar. El pequeño emirato parecía ser el que más rédito político estaba sacando de la llamada Primavera Árabe. Un país sin influencia histórica, pero que con la segunda renta per cápita más elevada del planeta se había convertido, en los últimos años, en un actor importante del tablero de Oriente Próximo, certificado por un papel cada vez más destacado en la toma de decisiones de la Liga Árabe. Desde que, en 1995, Hamad bin Khalifa al-Thani depusiera a su padre en un golpe de Estado incruento, el joven emir lideró una auténtica revolución política en el país y la región. Una revolución iniciada en 1996 con la creación de la plataforma televisiva Al-Jazeera —que, a raíz de las revueltas árabes, sería cada vez más acusada de control informativo— y potenciada con los innovadores proyectos educativos, artísticos, científicos o deportivos como la Qatar Foundation, la instalación en Doha de campus de las más influyentes universidades internacionales o la organización del Mundial de Fútbol de 2022. Al-Jazeera, convertida en vocero de la política exterior del poder catarí, sería cada vez más señalada por los grupos activistas, que la acusaban de haber hecho un viraje político en favor del nuevo régimen político.

«Los cataríes ven a la Hermandad como un vehículo transmisor para expandir su influencia en la zona», afirmaba el analista político Ghaneim Nusebieh. El pequeño emirato había acogido a figuras vinculadas estrechamente a los Hermanos Musulmanes, como el líder de Hamás Khaled Meshal o el padre espiritual de Al-Jazeera, el egipcio Yussef el-Qardawi, antiguo miembro de la Hermandad y aún muy cercano a la misma.

En los meses que siguieron a la caída de Mubarak, se anunciaron generosas ayudas de los tres principales países del Golfo. Diez mil millones de dólares desde Catar, cuatro mil desde Arabia Saudí y tres mil desde los Emiratos Árabes. Todos tenían condicionantes políticos, pese a que ninguno de ellos cuestionaba el lugar de Estados Unidos en la región. Arabia Saudí y los Emiratos, cuyas promesas de ayuda económica nunca llegarían a concretarse, exigían la protección de las figuras del antiguo régimen depuesto. Catar, por su parte, prometía inversiones en Egipto para asegurar que el proyecto local de los Hermanos Musulmanes no fracasara. El primer ministro catarí, Bin Jassim al-Thani, afirmaba que el emirato no permitiría que Egipto entrara en bancarrota.[1] Y por si quedaba alguna duda, entre otros, el jeque Youssef el-Qardawi alertaría que no seguir la hoja de ruta de la Hermandad pondría en peligro la ayuda económica catarí al país.[2] Más de quince mil millones de euros en ayudas e inversiones en los seis primeros meses de Mursi como presidente, que vería como el 8 de enero de 2013 se doblaba la ayuda inicial de 2500 millones de dólares para reponer las agotadas reservas de divisas egipcias, al borde del colapso.

Catar, por su parte, veía en la formación islamista el mejor aliado para hacer frente geoestratégicamente a la intocable Arabia Saudí, que sentía como una amenaza el ascenso de una corriente islamista como los Hermanos Musulmanes porque podía poner en peligro la supremacía wahabi-saudí en el mundo suní. *El-Sharq el-Awsat*, diario vinculado a la familia real saudí, atacó con ferocidad el nombramiento de Mursi como presidente y alertó de forma un tanto vaga sobre los supuestos vínculos de esta formación con Irán. No se podía olvidar tampoco que Riad, capital del reino, era una firme aliada económica y política de la práctica totalidad de dictaduras de la región, las cuales garantizaban el equilibrio de poderes deseado por los saudíes. De hecho, la alianza era casi personal. Arabia Saudí no sólo acogió con los brazos abiertos al dictador tunecino Ben Ali, sino que también lo hizo con el yemení Saleh, que sería opera-

1 «Qatari PM says won't let Egypt go bankrupt», *Egypt Independent*, 15-01-2013.

2 «El-Qardawy: el-tasuit be la yofaqed Madr 20 miliar dolar men Qatar», *Al-Masry al-Youm*, 14-12-2012.

do en Riad y pudo vivir a todo lujo, bajo el auspicio de una monarquía saudí que antes ya había dado acogida el somalí Siad Barre, el ugandés Idi Amin o el paquistaní Nawaz Sharif, entre otros. Además, Arabia Saudí encabezó la contrarrevolución armada en Bahrein y apoyó al rey Abdullah de Jordania en su lucha política contra los Hermanos Musulmanes jordanos. El difunto emir Nayef, hasta hace poco ministro del Interior, era conocido por su odio a la Hermandad. En 2002, publicaba que «la Hermandad ha destruido el mundo árabe» y lamentaba haberle dado apoyo anteriormente en su lucha contra el panarabismo nasserista.

El miedo a que el ascenso de la Hermandad sacudiera a las monarquías del Golfo provocó la persecución casi enfermiza por parte de las autoridades locales, especialmente en los Emiratos Árabes. Durante el 2012, la policía emiratí procesó a 94 personas acusadas de formar parte de células ilegales de los Hermanos Musulmanes que intentaban deponer el régimen y las acusaba, incluso, de crear una rama armada. A principios del 2013, un grupo de treinta detenidos recibiría cargos bastante similares. El jefe de policía de Dubái era uno de los más activos opositores de la Hermandad. Los definía como «un grupo de pecadores, el final de los cuales está cerca», mientras afirmaba que la revolución egipcia había sido financiada por Irán.[3] En febrero de 2013, los Emiratos lanzaban la cadena El-Ghad en lo que era visto como un intento de contrarrestar a la catarí Al-Jazeera. En Kuwait, también se dispararía la alarma. El presidente del Centro de Estudios kuwaití alertaba de la preocupación del Gobierno local sobre el papel de los egipcios en el país y amenazaba con despedir a todos aquellos que trabajaran en «lugares sensibles» del aparato estatal.

Miembros de los Hermanos Musulmanes acusaron a las autoridades de los Emiratos Árabes de financiar a la oposición.

3 «Dhahy Jalfan: La aman lel-Ijuan...w el-morshed tayeya yozon enho saykon jalifa», *Al-Masry al-Youm*, 09-01-2013.

Varias figuras del antiguo régimen egipcio huyeron del país y se establecieron en los Emiratos, junto con hombres de negocios egipcios que trataban de eludir a la justicia. Entre ellos, se encontraba el propio Ahmed Shafiq, último primer ministro del régimen de Mubarak y adversario electoral de Mursi en las presidenciales del verano anterior, o el jefe de la inteligencia egipcia, Omar Suleiman, que moriría extrañamente un mes después de aterrizar en Dubái.

Mursi jubila a Tantawi

Seis semanas después de jurar el cargo, Mohamed Mursi emprendía una inesperada embestida. El 12 de agosto, se anunciaba una reforma integral de la cúpula militar. El presidente jubilaba de golpe a los dos hombres fuertes de la Junta, el mariscal Tantawi y el general Anan, y redibujaba por completo el mapa del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Además, y quizás sería el movimiento más relevante de todos, el mandatario anulaba la declaración constitucional hecha por los militares justo antes de las elecciones y se restituía todos los poderes presidenciales de la antigua Constitución aún vigente. De esta manera, el presidente Mursi lograba todos los poderes, casi absolutistas, 44 días después de haber llegado al palacio presidencial.

La carambola política levantaba dudas sobre si se trataba de un golpe islamista a la Junta Militar o si, por el contrario, no era más que otra escenificación del pacto de transición entre el Ejército y la Hermandad. La noticia sorprendía. Llegaba pocos días después de que Tantawi hubiese sido confirmado como ministro de Defensa en el que sería el primer Gobierno formado por los Hermanos Musulmanes. Diez días antes, la Hermandad presentaba un ejecutivo encabezado por un antiguo funcionario del Ministerio de Riego, Hisham Qandil, en relevo de Kamal el-Ganzouri. El nuevo Gobierno incluía a 29 tecnó-

cratas, cuatro miembros de los Hermanos Musulmanes, un islamista moderado de El-Wasat y otro del salafista El-Hadara. Era un Gobierno que ignoraba claramente el acuerdo de Mursi con las fuerzas revolucionarias, alcanzado en el mes de junio —poco antes de ser proclamado vencedor de las elecciones—, para formar un ejecutivo transicional de coalición. Aunque no fueran mayoría, los analistas afirmaban que el ejecutivo mostraba una clara tendencia proislamista. La cartera de Defensa, sin embargo, seguía en manos del mariscal Tantawi.

¿Qué había sucedido en esos escasos diez días para que se produjera este cambio? El 5 de agosto, tres días después de anunciarse el nuevo Gobierno, un ataque armado en el paso fronterizo de Rafah provocaría la muerte de 16 policías egipcios. El incidente sólo mostraba por enésima vez la incompetencia de un Ejército que no había sabido impedir un asalto del cual habían sido alertados por los informadores de los servicios secretos. Además, volvía a poner sobre la mesa la incapacidad militar para controlar la seguridad en la península del Sinaí, donde desde hacía meses se escuchaban noticias sobre ataques de grupos yihadistas escondidos en las montañas de la zona. Estos incidentes inquietaban, y mucho, a Tel Aviv y Washington.

La agresión de Rafah resucitó las tensiones entre los Hermanos Musulmanes y la cúpula militar. Algunos elementos intentaron señalar una pretendida responsabilidad de la Hermandad al acusar a Hamás de estar detrás del ataque. Los funerales de los policías se convirtieron en protestas que cargaron contra el nuevo Gobierno e impidieron al presidente dar el pésame a los familiares. El mandatario se sintió humillado y pensó que todo era una estrategia de desprestigio. Los incidentes, además de demostrar la incompetencia de una envejecida cúpula militar, ponían de relieve la necesidad de reconfigurar unas relaciones deterioradas. La primera víctima política de ese ataque fue Mourad Mouafi, jefe de la inteligencia egipcia, bien considerado por Occidente y que muchas fuentes apuntaban como el posible relevo natural de Tantawi, pero que no presentaba un perfil con el que los islamistas se sintieran cómodos. Junto con Mouafi, el 8 de agosto caían también el jefe de seguridad de la provincia de El Cairo, el jefe de la Guardia Republicana y el gobernador del Norte del Sinaí.

Cuatro días después, se anunciaba la reestructuración global de la cúpula militar. Lejos de buscar la confrontación, Mursi prometía en un discurso televisado respetar la independencia del poder castrense y extendía la mano a la colaboración mutua. El Pentágono afirmaba que el movimiento no les cogía de imprevisto, dando a entender que era un gesto que esperaban desde hacía días,[4] mientras que el general Mohamed el-Assar afirmaba que había sido fruto de las negociaciones entre el presidente y el mariscal Tantawi.[5] La única pequeña arista de la jugada la insinuaba la extraña dimisión del coronel Hussein Ruweini, uno de los jefes militares más beligerantes con los Hermanos Musulmanes y que abandonaba la Junta Militar sin querer dar explicaciones. Pero su silencio, que se extendía a todo el Ejército, seguido del encuentro entre Mursi y los mismos Anan y Tantawi al día siguiente de la decisión, parecía anunciar que la carambola había sido cautelosamente trabajada y negociada. Al menos en apariencia.

Tantawi y Anan habían sido jubilados, pero se les convertía en consultores del presidente. Además, se les condecoraba con el Collar del Nilo y la medalla de la República, los más altos honores de Estado, lo que era interpretado como una muestra de la voluntad de protección y no persecución judicial de las figuras militares. Por último, se asignarían a Tantawi y Anan unas prestaciones de 2800 y 2200 euros mensuales, respectivamente, algo que estaba fuera de la legislación ordinaria para este tipo de condecoraciones.

4 «US unsurprised by Egypt army reshuffle», BBC News, 14-08-2012.

5 «Al-Aassar lereuters: Qarar el-ra'es behala Tantawy lel-tqaaed baad mosharwat maaho w maa el-mayles el-aaskary», *Sout belady. Shorouk News*, 13-08-2012.

Mursi también jubilaría a otras figuras militares y les otorgaría jugosos cargos altamente lucrativos para disfrutar de un plácido retiro. Entre otros, el comandante saliente de la Marina de Guerra, Mohamed Mimish, sería puesto a cargo del Canal de Suez. El comandante de la fuerza de Defensa Aérea, Abd el-Aziz Seif, se convirtió en presidente de la Organización Árabe para la Industrialización y Reda Hafez, jefe de la Fuerza Aérea, era nombrado ministro de Producción Militar.

Lejos de la confrontación, Mursi daba una salida más que airosa a una cúpula militar que sobrepasaba los setenta y que eludía así afrontar ante la justicia los excesos de la transición. Además, en ningún momento se cambiaba la lógica del poder militar de la Junta ni parecía modificarse la estructura. Los recambios surgían de entre altos mandos castrenses, algunos de ellos considerados cercanos al mariscal y su entorno. Abd el-Fattah el-Sisi, jefe de la inteligencia militar desde la caída de Mubarak, mediador entre el Ejército y la Hermandad durante la etapa transicional y uno de los miembros más jóvenes de la Junta, se convertía en ministro de Defensa y jefe del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. El comandante del III Ejército de Campaña, Sedky Subhi, era nombrado jefe de Estado Mayor. Mohamed el-Assar, una de las caras públicas de la Junta Militar por sus apariciones televisivas, fue promocionado como asistente del nuevo ministro de Defensa y encargado de conducir las relaciones con Estados Unidos, con quien guardaba buena afinidad.

El nombre de El-Sisi levantaba suspicacias entre los círculos activistas. Su nombre se había hecho famoso por su defensa de las «pruebas de virginidad» practicadas por el Ejército a chicas manifestantes en la plaza Tahrir, en marzo de 2011. Por otro lado, sería acusado sin pruebas claras de ser miembro de la Hermandad debido a su supuesta religiosidad y un hipotético vínculo de parentesco con un antiguo militante islamista. Más allá de eso, era evidente que la reestructuración militar era un primer paso para una reforma a largo plazo del Ejército. Varias fuentes diplomáticas confirmaban el interés de los islamistas en

procesos de transición marcados por la reconciliación y el reciclaje militar basado en la amnistía. Miembros de la Hermandad mostraron su interés por la figura de Narcís Serra y su libro sobre la transición militar en el caso español, que explicaba cómo los soldados españoles habían vuelto a los cuarteles, editado por la Universidad de Cambridge. Aunque los militares no acabarían de volver a los cuarteles con la remodelación de agosto de 2012, el cambio en el Ejército egipcio, bajo la atenta mirada norteamericana, estaba en curso. Siete meses después de la reforma, en marzo de 2013, miembros de la Hermandad serían aceptados por primera vez en la historia para el reclutamiento en la clase 109 de la Academia Militar. Un hecho hasta entonces imposible, por el férreo control seglar y supuestamente no partidista de la estructura castrense, y que levantó fuertes suspicacias entre una oposición que temía el control islamista de la institución.

Pero en las decisiones de aquel 12 de agosto Mursi no sólo intentaba afrontar la reforma, al menos estética, de la cúpula militar. Aunque en su momento pasaría más desapercibido, el presidente también colocó a Mahmoud Mekki como vicepresidente, en un gesto que parecía buscar cierta complicidad con las fuerzas revolucionarias. Mekki guardaba cierta popularidad por su liderazgo entre los jueces reformistas que habían plantado cara a Mubarak en 2005. Pero su nombramiento era, en realidad, la primera piedra de lo que sería el nuevo y decisivo frente de batalla de los Hermanos Musulmanes: la reforma de la judicatura, aún bajo control de buena parte de los jueces mubarakistas que habían perseguido durante años a los movimientos islamistas y a los miembros de los Hermanos Musulmanes. Ante el nombramiento de Mekki, el Club de Jueces empezó a sentirse amenazado y alertó de que no permitiría ningún tipo de interferencia. Mursi plantearía a sus asesores una purga de la judicatura mubarakista aplicando una jubilación forzosa de los jueces a los sesenta años, pero Mekki, temeroso de la reacción de éstos, le paró los pies al mandatario pidiéndole una purga

más gradual. Éste sería el inicio de una de las batallas que marcaría una nueva etapa de la transición egipcia.

Dos meses más tarde, el presidente volvió a la carga. El 11 de octubre, tres días después de cumplirse los cien días de Mursi en la presidencia, se anunciaba la destitución del fiscal general Abd el-Maguid Mahmoud y su nombramiento como embajador en el Vaticano. La judicatura mubarakista hizo frente común contra una decisión que calificaban de «farsa» y la oposición seglar, a quien Mursi había obviado de todo diálogo, se mostraba recelosa frente a las intenciones del presidente y apelaba a respetar la legalidad vigente. Las calles estallaban por primera vez con ira contra el Gobierno de los Hermanos Musulmanes y se producirían enfrentamientos violentos en el centro de El Cairo entre partidarios y detractores de Mursi. Los Hermanos Musulmanes se veían obligados a rectificar y confirmar que Abd el-Maguid seguiría en su cargo, por lo menos de forma momentánea, cuarenta y ocho horas después de destituirlo. La Hermandad había perdido la batalla, pero no se resignaba a perder la guerra y esperaría unas mejores condiciones para la embestida.

El ataque a Gaza y el decreto constitucional

El 14 de noviembre, el Ejército sionista de Israel perpetraba en Gaza el asesinato selectivo de Ahmed Jabbari, líder de las brigadas de Izzeddin el-Qassam, el brazo armado de Hamás. Jabbari era considerado uno de los individuos más influyentes en la Franja. Una decena de personas, incluidos dos niños, morían a consecuencia del ataque. Tel Aviv afirmaba que ésa era la respuesta al lanzamiento desde Gaza, en menos de veinticuatro horas, de cerca de cien misiles Katiuska y Grad de corto alcance sobre terreno israelí.

Éste sería el inicio de la llamada «Operación Pilar de Defensa», una ofensiva militar israelí que volvería a dejar la Franja de Gaza bajo el asedio de las bombas. Una vez más, el ataque llegaba a las puertas de unas nuevas elecciones legislativas al Keneetz israelí, previstas para el mes de enero siguiente. Desde 2003, no había habido campaña electoral israelí que no hubiera sido precedida por un ataque a la Franja. Cuatro campañas marcadas por la sangre. Y que daban sus resultados. A raíz de la ofensiva, tanto el primer ministro Benjamín Netanyahu como el jefe de Defensa Ehud Barak aumentaban un 20% su popularidad en una ofensiva que, según las mismas encuestas, contaba con el apoyo del 84% de la población de Israel.

La pieza clave del rompecabezas palestino-israelí parecía estar en El Cairo. Mohamed Mursi se convertiría en el pivote de las negociaciones entre Hamás y Tel Aviv para imponer un alto el fuego en la Franja. Un parón que sería anunciado el 21 de noviembre por el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Mohamed Kamel Amr, y la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton. La paz llegaba 150 muertos y cientos de heridos después del inicio de las hostilidades, hacía una semana. Mursi se convirtió, a ojos de la prensa y la comunidad internacional, en el héroe de aquella nueva tregua. Ésta llegaba un mes después de la polémica carta en que Mursi se dirigía a su homólogo israelí, Shimon Peres, como «apreciado amigo», manifestándole la voluntad de «mantener y reforzar las cordiales relaciones que felizmente existen entre ambos países». Tel Aviv, que empezaba a valorar los beneficios de tener un interlocutor islamista y próximo a Hamás en El Cairo, alababa la figura del presidente egipcio. En las semanas posteriores, el Ejército egipcio intensificó el ataque a los túneles de contrabando que trataban de mitigar el bloqueo impuesto en la Franja de Gaza. Egipto inundó, durante los meses siguientes, cientos de estos túneles que representaban la vía de acceso de cerca del 30% de la economía y el 80% de la alimentación de Gaza. Con este nuevo escenario geopolítico, Hamás ni alzaba la voz ante un ataque que ni el mismo Mubarak se había atrevido a abordar con aquella intensidad. La contraprestación pondría

en la mesa de negociaciones a Hamás y Tel Aviv, con mediación egipcia, con el objetivo de redefinir el alivio del asedio.

El *Haaretz* israelí llegaría a hablar de Mursi como del «hermano de Israel».[6] «El esfuerzo constructivo de Mursi para detener la violencia es una agradable sorpresa», afirmaría el presidente israelí Shimon Peres. Las alabanzas sionistas se extendían a la Casa Blanca y el resto de la prensa internacional. Egipto acababa además de cerrar un preacuerdo con el FMI por el préstamo de 3600 millones de euros. Mursi era, prácticamente, el hombre de moda. Incluso la revista *Time* lo calificaba como el hombre más importante de Próximo Oriente.[7] Un día después de anunciarse la tregua, y creyéndose reforzado por las alabanzas internacionales, Mursi retomaba su embestida interna. Yasser Ali, portavoz de Presidencia, hacía pública una nueva declaración constitucional, según la cual se volvía a destituir al fiscal general y por la que el presidente se otorgaba nuevos poderes que lo situaban por encima del control judicial. El mandatario blindaba así de toda posible disolución tanto el Senado como la controvertida comisión encargada de redactar la Constitución, a quien daba dos meses más para terminar el texto. Además, forzaba la repetición de los juicios a los responsables de la muerte de manifestantes durante la revolución. En un tiempo récord, el presidente hacía jurar el cargo al nuevo fiscal general, Talaat Ibrahim Abd Allah.

Si bien buena parte de las decisiones podían tener una base revolucionaria y podían recibir incluso la aprobación de los grupos seglares, el artículo dos de la declaración levantaba suspicacias en la arena política. Éste afirmaba que todas las declaraciones, anuncios y leyes promulgadas por el presidente desde el 30 de junio hasta el establecimiento de un nuevo Parlamento y la aprobación de una nueva Constitución «serán

6 Zvi Bar'ei: «Mohammed Morsi, Israel's brother», *Haaretz*, 21-11-2012 [*online*].

7 Revista *Time*, diciembre de 2012.

definitivas y vinculantes y no pueden ser apeladas de ninguna manera ni ante ningún organismo». Mursi, además, emitía el anuncio sin haberlo consultado con las fuerzas de la oposición, a pesar de haberse reunido con ellas pocos días antes de la emisión del decreto. La desconfianza frente a lo que la oposición seglar veía como unas poco claras intenciones encendían la mecha. El mandatario parecía querer dinamitar cualquier transición inclusiva y ponía la directa.

El efecto del anuncio se trasladó con rapidez a las calles de todo el país. Los juzgados de varias provincias cerraron sus puertas y el Club de Jueces llamó a una huelga indefinida hasta la revocación de las decisiones. Mientras la Hermandad organizaba muestras de apoyo en El Cairo, incluso antes de conocerse el contenido de la reforma, en las principales ciudades del país surgían protestas contra lo que eran considerados «dejes dictatoriales» del nuevo presidente. La Hermandad estaba en el punto de mira. Al menos 28 oficinas y sedes de los Hermanos Musulmanes y de su brazo político, el Partido Libertad y Justicia, fueron asaltadas durante esa jornada o en las inmediatamente posteriores. Los enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente adquirieron tintes sangrientos en varias poblaciones. Por primera vez desde la Batalla del Camello, grupos de civiles se enfrentaban violentamente en las calles. Las peleas eran especialmente intensas en las poblaciones del Delta, haciendo sobrevolar el fantasma de una guerra civil sobre la opinión pública. Este espectro se extendió a los medios occidentales con unas declaraciones del diplomático Mohamed el-Baradei a la revista alemana *Der Spiegel,* en la que alertaba de los riesgos de un conflicto armado en el país si los grupos moderados no tomaban la palabra.[8]

La muerte de Islam Masoud, un adolescente de quince años, durante los enfrentamientos en la ciudad agrícola de Da-

8 «ElBaradei Speaks Out against Morsi: "Not Even the Pharaohs Had So Much Authority"», *Spiegel Online*, 26-11-2012.

manhour, se convertiría en un ejemplo de la ruptura en que se encontraba el país. Mientras los Hermanos Musulmanes reivindicaban la filiación del joven a los grupos islamistas, sus familiares y otros activistas defendían su pertenencia a los grupos de oposición, de los que sus parientes eran miembros con carné. La madre del difunto, incluso, se negaría a recibir el pésame de la mujer del presidente Mursi, en medio de una tensión tan grande que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla.

La insurrección provocada por el anuncio constitucional volvió a poner el escenario político en la misma dicotomía de siempre y consiguió hacer más evidente que nunca la división confesional de la arena política egipcia. Mientras las fuerzas islamistas apoyaban las decisiones del presidente y las calificaban de «victoria revolucionaria», las fuerzas seglares las tildaban de un ataque a la separación de poderes, ante lo que consideraban el intento de reinstaurar una nueva dictadura. Los islamistas, en algunos casos reconvirtiendo los sermones de las mezquitas, acusaban a los manifestantes de ser herejes mubarakistas, mientras que éstos afirmaban que Mursi quería erigirse en el nuevo faraón «por la gracia de Alá». Essam el-Erian, destacada figura de la Hermandad, declaró que las manifestaciones, que habían llenado a rebosar la plaza Tahrir, los alrededores del palacio presidencial y varias ciudades del país, eran puro Photoshop y que éstas no sobrepasaban las veinticinco mil personas en total.[9] Khairat Shater aumentaba la cifra a cuarenta mil, pero alertaba que ellos, los islamistas, eran «el pueblo y la mayoría».[10]

Dos días después del anuncio constitucional, la oposición seglar se reuniría en un frente para plantar cara al decreto presidencial. Encabezado por Mohamed el-Baradei, Amr Moussa

9 «El-Aarian: mozaharat moaardy el-rae's ams fotoshop», *El-Bedaiah*, 05-12-2012.

10 «Al-Shater: We are the people, we are the majority», *Daily News Egypt*, 08-12-2012.

y Hamdeen Sabahi, éste recibió el nombre de Frente de Salvación Nacional y aglutinó a la práctica mayoría de las formaciones seglares de oposición, incluyendo a los históricos Tagammo o Wafd, la Coalición Socialista Popular y a varias formaciones nasseristas. La presencia de un batiburrillo político en que el único hilo conductor era la idea del laicismo político, incluyendo a algunos miembros del antiguo régimen como el propio Amr Moussa —que defendía de manera indirecta a una judicatura indiscutiblemente corrupta—, generó una dirección política poco clara y disputas políticas. Éstas no sólo fueron utilizadas por las fuerzas islamistas para atacar a la oposición y acusarla de forma simplista y cínica de representar los intereses del mubarakismo. También abrieron la puerta a un suave regreso de una cierta nostalgia respecto al antiguo régimen. Aquella unión sólo puso de relieve las debilidades de la oposición, demasiado cargada de viejos tics y con problemas clasistas que les impedían constituirse como una alternativa real; todavía se veía incapaz de mantener un discurso propio e innovador que se desmarcase de manera decidida del mubarakismo.

Mientras tanto, el presidente defendía el carácter temporal y revolucionario de las decisiones, mientras legitimaba su lucha contra los «jueces corruptos que representan al régimen criminal».[11] El mandatario intentaba calmar los ánimos e invitaba a los grupos políticos a una ronda de negociaciones para tratar de salir de la crisis. Pero las fuerzas seglares anunciaron su boicot al encuentro hasta que no se derogara la declaración, algo que la Hermandad no estaba dispuesta a aceptar a priori. El enfrentamiento político se situaba en un callejón sin salida.

11 «Mursi: Qarar 22 nofember bedayet el-qasas el-haqiqi ledoma' el-shohada'», *Al-Masry al-Youm*, 22-11-2012.

Una Constitución que se aprueba de madrugada

La declaración de Mursi iba más allá de la lucha contra la fiscalía y la judicatura mubarakista. Uno de sus principales objetivos era la protección de la comisión redactora de la Constitución, la cual llevaba meses en un atolladero. Las fuerzas seglares habían acusado a los islamistas de intentar controlar la comisión redactora, mientras que aquéllos afirmaban tener una voluntad dialogante y responsabilizaban a los seglares de entorpecer sin motivo la redacción del texto. Desde que la comisión se constituyera en el mes de marzo, se encadenaba una crisis tras otra sin que el escrito pareciera avanzar. La primera comisión sería disuelta en primavera por falta de consenso en su formación, abriendo una nueva batalla política para la creación de una segunda comisión que vería la luz a mediados de junio por la presión militar para sacar el texto lo antes posible. Mientras la comisión discutía entre tensiones los artículos constitucionales, los tribunales alertaban de la posible disolución judicial de la asamblea.

El 2 de diciembre, se esperaba que los tribunales emitieran un veredicto sobre la disolución de la comisión. Pese a que los asesores presidenciales creían que no había base jurídica para ésta, los Hermanos Musulmanes decidieron blindarla con la declaración del 21 de noviembre, basada en el miedo y la sensación casi paranoica de persecución de los islamistas. La Hermandad temía un nuevo golpe de Estado por parte de la judicatura en contra de Mursi y la comisión redactora de mayoría islamista, al estilo de lo sucedido durante las elecciones presidenciales.

Pocos días antes, el presidente habría recibido informaciones que apuntaban a un encuentro de hombres de negocios vinculados al antiguo régimen en un hotel de lujo de la capital con el objetivo de trazar un mapa para desestabilizar el Gobierno. Una filtración que se añadía a los rumores entre bastidores que apuntaban a una inminente movilización de los jueces mubarakistas contra Mursi. Cierto o no, aquella noticia fue tomada en

serio por la Hermandad, que decidía contraatacar blindándose de la justicia con una declaración constitucional cocinada en secreto en el palacio presidencial y que no hacía más que alimentar las desconfianzas de los sectores seglares.

La resistencia en las calles y juzgados en contra de Mursi forzó a la comisión redactora a apretar el acelerador. Era el camino para salir de la crisis. Aunque la declaración les daba dos meses más de margen, el borrador del texto sería aprobado con nocturnidad y alevosía en una maratoniana sesión, una semana exacta después de que se anunciaran las nuevas disposiciones. Un estéril debate que duró 16 horas, en que uno tras otro se aprobaron sin oposición los 236 artículos de la futura Carta Magna egipcia.

A pesar de todo, las fuerzas seglares seguían haciendo frente a la comisión. De los cien miembros de la misma, 26 dimitieron acusándola de un control islamista no representativo de la pluralidad de la sociedad. Once nombres fueron reemplazados mayoritariamente por nuevos representantes islamistas para asegurarse el quórum necesario. La prisa de la comisión se hizo evidente a lo largo de la aprobación. De madrugada, 16 miembros tumbaron el artículo 139, referente al modo de elección del primer ministro. El presidente de la comisión, Hossam el-Gheriany, hizo repetir la votación de forma irregular bajo la amenaza de que el rechazo de dicho punto implicaría aplazar la sesión 48 horas. La urgencia para sacar un redactado de aquella reunión hizo que recapacitaran acerca de su voto y, entonces, sólo cuatro miembros mostraron su rechazo a un artículo que se añadía, como todos los demás, al borrador.

Los Hermanos Musulmanes recurrirían a su gran aliado de la transición para la aprobación del texto final. Los dos miembros de las Fuerzas Armadas fueron de los pocos representantes de las estructuras seglares del Estado que no boicotearon la fracturada comisión constitucional. La votación llegó justamente 24 horas después de que la asamblea cerrara la negociación de los artículos referentes a las Fuerzas Armadas, los

cuales consolidaban las principales demandas del Ejército recogidas en el polémico Documento Selmi. Un texto que, a finales de 2011, había supuesto la oposición y movilización en la calle de la mayoría de fuerzas políticas, encabezadas por los Hermanos Musulmanes. Entonces lo habían considerado una perpetuación militar en el poder. Ahora, las necesidades políticas eran otras y se incluían en la Carta Magna. El borrador garantizaba que el ministro de Defensa siguiera siendo militar, así como la no monitorización parlamentaria de los presupuestos del Ejército y la creación de una estructura no escogida directamente por el pueblo para controlar los asuntos militares y la seguridad nacional. El artículo 198, además, abría la puerta a los polémicos juicios militares contra población civil, en casos que «perjudiquen a las Fuerzas Armadas».

El texto mantenía el artículo 2 en lo que se refería a la *sharia* islámica. Tras meses de confrontación en la comisión, finalmente se respetaba que «los principios de la *sharia* son la principal fuente de legislación»; el mismo redactado vigente desde 1980. Una vaga expresión que no convencía a los grupos salafistas, que forzaron el añadido del artículo 219 que especificaba, de forma general, qué se entendía por esos principios. La Constitución garantizaba un modelo presidencialista parlamentario, pero muchos críticos denunciaban que todavía daba muchos prerrogativas al presidente y socavaba la separación de poderes, otorgándole la capacidad de nombrar cargos como el fiscal general, los miembros del Tribunal Constitucional o los encargados de las instituciones de monitorización y de supuesto control independiente de las autoridades. El texto despertaba las críticas de las organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, al ignorar los derechos de las mujeres y limitar los derechos fundamentales, incluida la libertad de culto, los derechos sindicales o la libertad de expresión, que no acababan de quedar definidos.

Los partidarios de la nueva Constitución organizaron una demostración de fuerza dos días después; la primera de envergadura desde el inicio de la crisis. Cientos de miles de ciudadanos se reunieron a las puertas de la Universidad de El Cairo defendiendo el carácter democrático de un presidente elegido en las urnas. Desde las provincias, llegaron cientos de autocares organizados por las diferentes corrientes islamistas. Miles de manifestantes sostenían fotos y pancartas de apoyo a Mursi, mientras desde el escenario general no paraban de repetirse consignas a favor de la *sharia* y el despertar islámico del país. Líderes de la Hermandad llegaron a afirmar que la movilización había aglutinado a mucha más gente que las marchas contra el presidente Mubarak.[12] Mientras tanto, Mursi anunciaba la convocatoria de un referéndum para aprobar el texto de cara al 15 de diciembre. La batalla estaba servida.

La guerra por la Constitución

El 2 de diciembre, el Tribunal Constitucional declaraba un paro indefinido de sus actividades. Su presidente denunciaba presiones y hablaba de «intentos de asesinato psicológico» por una movilización sin incidentes de los partidarios de los Hermanos Musulmanes a las puertas de la Corte, en apoyo al borrador constitucional y al presidente Mursi. Los manifestantes temían la posible sentencia del Tribunal pidiendo la disolución de la comisión constitucional, que debía fallarse ese mismo día. El enfrentamiento entre la justicia y el presidente seguía calentando la arena política en Egipto. Miles de letrados anunciaron su intención de boicotear la supervisión del referéndum constitucional. El Club de Jueces, la organización de jueces más representativa del país y aún liderada por el mubarakista Ahmed el-Zend, encabezaba el desafío al mandatario. Éste aseguraba estar tranquilo y contar con los casi diez mil jueces necesarios para supervisar las votaciones. De hecho, éstas acabarían

12 Declaraciones hechas en una tertulia del canal Al-Nahar TV.

realizándose en dos jornadas, el 15 y el 22 de diciembre, para solventar la falta de jueces. A esta confrontación, se añadía la de los periodistas, que iniciaron una huelga contra el borrador constitucional en la prensa escrita y los canales de televisión. Mursi, poco a poco, se iba quedando solo. En aquellas semanas, cinco asesores del presidente presentaron su dimisión. Entre ellos, se encontraba Rafiq Habib, el único líder copto de los Hermanos Musulmanes. En los tres meses siguientes, hasta siete asesores más presentaron su dimisión del cargo por desavenencias con la Hermandad. El presidente de la televisión pública estatal también anunciaría su renuncia por «la forma de dirigir el país», así como cuatro miembros del Comité Nacional de Derechos Humanos.

La resistencia contra la declaración de Mursi volvió a poner de manifiesto la desconfianza mutua entre fuerzas seglares e islamistas, esquizofrénica por momentos, y volvió a polarizar en estos términos el escenario político. De hecho, la Hermandad acabaría presentando una querella ante los tribunales contra los líderes de la oposición El-Baradei, Moussa y Sabahi, por «incitar a los egipcios normales a sublevarse contra la legitimidad y el presidente».[13]

Precisamente, el miedo islamista a un golpe de Estado contra Mursi llevó a una masacre a las puertas del palacio presidencial el 5 de diciembre. Partidarios del mandatario atacaron una acampada de opositores a las puertas del palacio de Ettehadeya, poniendo en marcha unos disturbios que se alargaron durante toda la noche y convirtieron la zona en un escenario de guerra callejera, con lluvias de piedras y cócteles molotov incluidos. Varias grabaciones mostraron el uso de armas de fuego por parte de ambas facciones en unas peleas que dejaron varios cientos de heridos y media docena de muertos, entre ellos el periodista El-Hosseini Abu Deif. Los enfrentamientos se extendieron a otros lugares del país y se trasladaron, también, a la casa natal del presidente en la población de Zagazig. En El Cairo, estos choques se prolongaron durante toda la noche, hasta que el Ejército decidió desplegar sus fuerzas en torno al palacio.

13 «Egypt probes alleged incitement to oust Morsi», Al-Jazeera, 28-12-2012.

La tensión política era máxima. La Hermandad se negaba a reconocer a los opositores como tales y denunciaba un intento de golpe de Estado contra la legitimidad del presidente. El vicepresidente del partido, Essam el-Erian, tildaba a los manifestantes de «alborotadores políticos» y contrarrevolucionarios y hacía llamadas a sus partidarios a salir a la calle a «detener a los *baltagueya* que acampan frente al palacio presidencial».[14] «¿Qué culpa tienen las plantas?», llegó a gritar en un arrebato ecologista el jefe supremo de la Hermandad, Mohamed Badie, en una rueda de prensa haciendo referencia a los destrozos en la calle. En esa rueda de prensa, los Hermanos Musulmanes denunciaron con fotografías la muerte de miembros de su formación. Familiares de algunos de esos «muertos» reivindicados como islamistas denunciaron que seguían con vida y que eran, de hecho, opositores a Mursi. Por otro lado, parientes de víctimas reales de la violencia en el palacio denunciaron haber recibido ofertas económicas para afirmar que el fallecido era de filiación islamista. Varios manifestantes acusaron a los Hermanos Musulmanes de haber montado cámaras de tortura en las inmediaciones del palacio, que serían reportadas por la prensa local. Los medios debatirían la existencia de milicias islamistas armadas, mientras que el ex hermano musulmán Thaurat Kharbaui volvía a denunciar, con vagas pruebas, la existencia de la llamada «Organización Secreta», creada por Omar el-Tilmisani en la década de los setenta y que ofrecía entrenamiento militar a entre diez mil y cien mil jóvenes. Los rumores sobre la existencia de estas unidades y su posible salida a escena centraron el debate

14 Declaraciones hechas en el canal Misr 25, el 5 de diciembre de 2012.

político durante semanas, bajo la acusación a los Hermanos Musulmanes de querer llevar a cabo un golpe armado contra el proceso democrático.

Al día siguiente de los hechos del palacio, Mursi apareció ante la nación en un discurso televisado en que abrió la puerta al diálogo. Sin embargo, no dejaría escapar la oportunidad de atacar a la oposición, hablando de manos y agendas ocultas para desestabilizar el Gobierno y criticando a las fuerzas políticas por financiar a los manifestantes para provocar los disturbios. En actitud amenazadora, y señalando con el dedo a la audiencia, definió la democracia como un proceso en que «la minoría debe someterse a la opinión de la mayoría». Mursi sólo se mostraba abierto a una modificación insípida del decreto y se manifestaba firme en la decisión de mantener la fecha del referéndum, que parecía una prioridad para las fuerzas islamistas. La oferta de diálogo sería rechazada por la oposición, que seguía exigiendo la derogación total del decreto y el aplazamiento del referéndum constitucional como paso previo a dicha negociación. Las vías de diálogo parecían rotas. Incluso cuando, el 9 de diciembre, Mursi accedió a una reforma parcial del decreto, la oposición continuó negándose a escuchar las llamadas al diálogo porque calificaba esas modificaciones de insustanciales. Ni las presiones norteamericanas, que podían permitir entender esa reforma parcial del decreto de Mursi, ni los intentos de las Fuerzas Armadas, a cuatro días del referéndum, de sentar a todas las partes a dialogar dieron fruto. A pesar de todo, a 72 horas del inicio de la consulta, el Frente de Salvación Nacional terminó anunciando que desconvocaba el boicot a las urnas. «Viendo que nuestra reclamación de posponer la votación no será efectiva, emplazamos a todos los egipcios a votar en contra de la Constitución», afirmaba el portavoz del frente, Hussein Abd el-Ghani, en rueda de prensa.

Egipto volvía a ir una vez más a las urnas en un clima crispado y con las calles encendidas. En la ciudad de Alejandría,

un sermón político del jeque Ahmed Mahalawi desembocaba en nuevas peleas entre fuerzas islamistas y seglares a las puertas de la principal mezquita de la ciudad. La disputa provocó una batalla campal en que tres coches fueron quemados y cerca de una veintena de personas resultaron heridas en el centro de la población. Poco antes de que las urnas se abrieran, la policía desplegaba sus fuerzas antidisturbios para poner fin a unos enfrentamientos que se habían alargado durante casi 16 horas en la ciudad mediterránea. Los incidentes se repetirían una semana después, a pocas horas de que se volvieran a abrir las urnas para la segunda vuelta del referéndum, mientras varios autocares de los Hermanos Musulmanes eran presa de las llamas.

El plebiscito se veía amenazado por la falta de rigor en la supervisión judicial de las votaciones debido al boicot de los jueces. En algunos colegios, se denunció la ausencia de magistrados o incluso su sustitución irregular por simples funcionarios o profesores de primaria. Coacción en el voto, práctica casi sistemática del voto masivo, colegios que publicaban los resultados antes de tiempo, obstáculos para la participación de la minoría copta... Irregularidades que también fueron denunciadas por más de un centenar de ONG, que llegaron a comparar las elecciones con las de los tiempos de Mubarak. El Frente de Salvación Nacional denunciaría «fraude al por mayor» y exigiría una lista detallada de los jueces que supervisaban los comicios. Sólo en la primera vuelta, el grupo opositor presentó 4000 quejas, 1400 de las cuales fueron calificadas de graves.[15] Siguiendo el guión habitual, los Hermanos Musulmanes reconocieron algunas irregularidades pero afirmaron que éstas no afectaban al resultado final. El texto recibiría una aprobación más ajustada de la esperada: un 63,83% frente al 36,17% del rechazo y una participación de sólo el 32,86%. De hecho, sólo

15 «El-enqaz el-watani totaleb beyra tahqiqat naziha w nayeza fe aktar men 4 alf shakaua w 1500 mahdar haual entehakat el-estefta'», *El-Bedaiah*, 16-12-2012.

un 20% del electorado y un 12% de la ciudadanía habían apoyado la que sería la futura Carta Magna del país. Las urnas aprobaron el redactado islamista bajo mínimos, pero las calles no mostraron su apoyo a un proceso enquistado.

En menos de diez días, sería juzgado el primer civil por tribunales militares, siguiendo las disposiciones de la nueva Constitución. Adel Massad, un profesor de 41 años de Damietta, era condenado a seis meses de presidio por un tribunal castrense bajo la acusación de haber agredido a un soldado el día del referéndum cuando acompañaba a su padre ciego a votar. Cuatro días después, el fotógrafo y activista Mohamed Sabri se convertiría en el segundo caso; las fuerzas militares lo habían detenido sacando fotos en una zona fronteriza del Sinaí. Los efectos de la nueva Carta Magna se empezaban a concretar en su peor versión.

La Constitución se había aprobado con una participación mínima, un país dividido y un presidente en el ojo del huracán. La exigua victoria del sí en las urnas, pese a no solucionar nada, daba un pequeño respiro al presidente y a la Hermandad. Un paréntesis que sería efímero y que se vería roto con la llegada de un nuevo 25 de enero. En el segundo aniversario de la revolución, las calles se volvieron a llenar de marchas y movilizaciones, que señalaban esta vez al Gobierno del presidente Mursi y lo acusaban de dejes dictatoriales y de querer erigirse en el nuevo faraón de Egipto. Los enfrentamientos volvieron a dejar cerca de nueve muertos en la ciudad de Port Said. La ciudad portuaria había estallado a causa de las sentencias judiciales que condenaban a 26 jóvenes a penas de muerte, a raíz de la masacre de los aficionados de fútbol de El-Ahli, un año antes. De los nueve oficiales de policía encausados, sólo dos recibieron penas mínimas. Mursi acabó aplicando el estado de emergencia y el toque de queda en toda la provincia, y se entregó a las fuerzas militares para que controlaran la situación.

Mientras la oposición seguía negándose a sentarse con el presidente, a primeros de febrero algunos activistas afirmaban

que se estaba emprendiendo la oleada de detenciones políticas más importante en doce años, doblando las 475 detenciones de la revuelta de Mahala de 2008. Según denunciaban grupos de derechos humanos, los arrestos se focalizaban en los niños de la calle. El Centro Nadim para el tratamiento de las víctimas de la violencia registraba que en los primeros once meses del Gobierno de Mursi se habían detectado 359 casos de tortura y 217 muertes a manos policiales.[16] En los primeros seis meses de poder, se presentaron 24 denuncias en los juzgados contra periodistas y opositores políticos por difamación del presidente, tres de las cuales habían sido tramitadas directamente por la misma Presidencia. Esto representaba seis veces más el número de denuncias de este tipo presentadas en los treinta años de Gobierno de Mubarak, y sumaban más que las querellas de este estilo presentadas en toda la historia del país desde que, en 1909, se creara este tipo de penalización.[17] El activista Alaa Abd el-Fattah se convertía de nuevo en símbolo de los cambios kafkianos de la nueva época. Encarcelado en 2008 por defender la independencia judicial de los ataques de Mubarak, sería procesado en la era Mursi por supuestamente difamarla.

Asimilando el antiguo régimen

El Holding de Aeropuertos y Navegación Aérea, dependiente del Ministerio de Aviación, contrataba a primeros de febrero a un recién graduado llamado Omar Mohamed Mursi. El nombramiento seguramente no hubiera trascendido nunca a no ser porque Omar era, de hecho, el hijo del presidente. La

16 «Bel-asma'...el-Nadim yokashef 359 hala taazib w 217 qatil berosas el-shorta jelal 11 shahran men hokm Mursi», *El-Bedaiah*, 26-06-2012.

17 *Yarema ehana el-ra'is, yarima nizam mostabed*, El-Shabaka el-aarabeya lemaalomat hoqoq el-ensan, El Cairo, 2013.

designación en el puesto llegaba un mes después de producirse movimientos en la dirección de la empresa estatal; y, según aseguraban algunas informaciones, se había hecho vulnerando los procesos habituales e impidiendo que otros egipcios pudieran presentarse a una plaza de trabajo que no había sido anunciada en ningún lugar. Los medios atacarían con dureza dicho nombramiento. Pocos días después, Omar anunciaba su renuncia al puesto, pese a asegurar haber pasado todas las pruebas, y se hacía la víctima afirmando que su sueldo era 66 veces inferior al que los medios estaban publicando. «Ya sabía que sería atacado, pero la pregunta es: ¿dónde puedo conseguir un trabajo en mi querido Egipto?», escribía en las redes sociales.[18]

Las fuerzas de oposición miraban con recelo y denunciaban que, lejos de romper y reformar, la Hermandad intentaba asimilar las estructuras del antiguo régimen todavía vigente. En pocos meses, los Hermanos Musulmanes debían copar cerca de catorce mil puestos de responsabilidad en las estructuras del Estado con personas de su confianza. En el mes de septiembre, el presidente había reformado la dirección de diez provincias. En casi la mitad de ellas ponía a un miembro de la formación, mientras que en las restantes colocaba a militares, profesores universitarios o asesores jurídicos para evitar las críticas. Parecía pura fachada. En la mayoría de los casos, estos gobernadores no miembros de la Hermandad se verían eclipsados por extrañas vicepresidencias en manos islamistas. Ahí estaba el ejemplo de Alejandría, donde el hermano musulmán Hassan el-Brens ejercía de gobernador de facto ante la completa invisibilidad de Atta Abbas, el gobernador oficial. Varias reestructuraciones posteriores irían aumentando el peso de la Hermandad en las provincias.

18 «Morsy's son rejects airports company job amid criticism», *Egypt Independent*, 17-02-2013.

El cuerpo policial se sublevó también contra el presidente Mursi cuando éste decidió destituir al ministro del Interior Ahmed Gamal el-Din, después de las diferencias surgidas entre ambos en las anteriores semanas durante los disturbios provocados por la declaración constitucional. Los islamistas acusaban al Ministerio de excesiva permisividad con los manifestantes e insinuaban una implicación indirecta en el asalto a las 28 sedes de la Hermandad y el palacio presidencial del 5 de diciembre. Según los Hermanos Musulmanes, Gamal el-Din se había negado a proteger las sedes y desalojar el palacio presidencial cuando se lo había pedido el presidente. Ante la falta de confianza, sería reemplazado por el coronel Mohamed Ibrahim. El cambio no sentó bien dentro del cuerpo policial, que inició una revuelta que provocó que una decena de provincias se declararan nuevamente en huelga policial, ocasionando el cierre de sesenta comisarías en todo el país y la clausura temporal de al menos siete sedes centrales de seguridad. Al final, la protesta sería apaciguada momentáneamente con un acuerdo según el cual el Ministerio accedía a comprar cien mil rifles para distribuir entre los miembros del cuerpo.

La Hermandad también sería acusada por las fuerzas sindicales de intentar controlar la antigua estructura sindical del régimen. Pocos días después del anuncio constitucional, el presidente Mursi hacía público el establecimiento del decreto 97, por el que se ordenaba la jubilación forzosa a los sesenta años de los miembros directivos de la Federación Egipcia de Sindicatos (ETUF, por su acrónimo en inglés). Esta decisión dejaba sin presidencia a más de la mitad de las secciones sindicales de la federación. El decreto establecía que la mayoría de cargos serían relevados a dedo por el ministro de Trabajo, el miembro de la Hermandad Khaled el-Zahari, facilitando así el nombramiento de unas 150 personas cercanas a los Hermanos Musulmanes en varias posiciones de los 24 sectores sindicales de la unión. Lejos de reformar el esqueleto sindical, se intentaba asimilar la antigua estructura. El ministro del Trabajo, El-Zahari,

afirmaría sin rubor ante la prensa que los obreros «no entienden de política».[19]

Casos similares se dieron en otros espectros de la Administración. El escándalo por el envenenamiento de 580 estudiantes de la centenaria universidad religiosa de El-Azhar fue aprovechado por los Hermanos Musulmanes para forzar la dimisión del rector Osama el-Abd y estrechar el cerco al imán Ahmed el-Tayeb, nombrado por Mubarak, en lo que fue denunciado como un intento de la Hermandad para controlar la influyente institución religiosa. Mientras tanto, el Consejo de la Shura reavivaba la lucha islamista contra la judicatura con la emisión de una ley para la reducción de la jubilación forzosa de los jueces de los setenta a los sesenta años, lo que provocaría una nueva lucha abierta con los tribunales y la dimisión del ministro de Justicia, Ahmed Mekki. La ley podía provocar el retiro de cerca de trece mil jueces en todo el país. En diciembre, una ola de dimisiones sacudió la televisión pública, que denunciaría las presiones de la Hermandad sobre la línea editorial para dar una mala imagen de las protestas contra Mursi. Por ejemplo, el redactor de *Ahram Online*, Hani Shokrallah, explicó que había sufrido *mobbing* laboral hasta que se retiró de la redacción. Otro caso se dio a raíz de la presión ejercida por el Consejo de la Shura contra el jefe de redacción de *El-Gomhoreya*, ordenando su destitución tras publicar una noticia sobre el procesamiento jurídico de la antigua cúpula militar. Los trabajadores del Ministerio de Cultura denunciaron prácticas similares cuando el ministro Alaa Abd el-Aziz destituyó a los cargos directivos de la Organización Egipcia del Libro, el sector de Bellas Artes, la Biblioteca y Archivos nacionales y la Ópera de El Cairo. Sería precisamente la presión sobre la Ópera la que llevaría a los artistas a acusar de control islamista al Ministerio de Cultura, con una acampada durante el mes de junio de 2013,

19 «Fidio el-azhary: El-oomal la yaarafun el-siasa», *Shorouk News*, 15-03-2013.

frente al edificio ministerial que se extendió, al cabo de unas semanas, a la ciudad de Alejandría.

Los Hermanos Musulmanes no parecían tener intención de reformar ni de reestructurar las antiguas instituciones; y, si no era necesario, ni siquiera de enfrentarse al antiguo régimen. Varios ministerios vieron como en tiempos de Mursi diversas figuras del mubarakismo volvían a sus puestos de trabajo como si nada. También el presidente de la Unión de Industrias, Galal el-Zorba, mostraría su satisfacción con las políticas de la Hermandad. Abu el-Enein, uno de los principales hombres de negocios del *rais* y fervoroso defensor del antiguo régimen, asistió desde la fila de honor a la misma toma de posesión del presidente Mursi, mostrando su admiración por el programa económico planteado por los islamistas. El-Enein no era un mubarakista cualquiera. Su nombre se encontraba en la lista de las 24 figuras del antiguo régimen encausadas por la Batalla del Camello, acusado de organizar a los grupos que fueron a atacar a los manifestantes de Tahrir en febrero de 2011.

No era extraño. Los islamistas evitaban, hasta donde podían, abrir más frentes. A medida que las calles se rebelaban en su contra, intentaron buscar alianzas donde fuera. Mientras dinamitaban los cargos intermedios y directivos, los Hermanos Musulmanes tratarían de tejer puentes estratégicos con determinadas figuras del antiguo régimen. A finales de diciembre, Mursi no tuvo problemas para nombrar a Mohamed Badawi Dessouki como senador en el Consejo de la Shura, a pesar de que éste era un conocido hombre de negocios vinculado al Partido Democrático Nacional de Mubarak, por el que había sido diputado en los Parlamentos de 2005, 2010 y 2011. Un mes después, la prensa se hacía eco del cordial encuentro de los líderes de la Hermandad con algunos destacados empresarios vinculados al régimen de Mubarak en Alejandría. Era el inicio de la época de la reconciliación.

La amnistía al antiguo régimen

El sábado 13 de abril de 2013, Mubarak volvía a comparecer ante los tribunales de la Academia de Policía. Su apariencia era completamente distinta a las anteriores, tenía buen aspecto y saludaba alegremente a sus partidarios. La sonrisa que su boca dibujaba ante las cámaras inquietaba a la opinión pública y levantó una fuerte polémica en el país. «Es una muestra de cómo las cosas han cambiado en estos dos años», afirmaría Magda Boutros, representante de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales.

Mubarak volvía a presentarse ante los tribunales después de que, el 12 de enero, el Tribunal de Casación egipcio aceptara las apelaciones presentadas por el ex dictador y por su ministro del Interior, Habib el-Adli, reclamando la repetición del juicio en el que habían sido condenados como responsables pasivos de la muerte de más de 800 manifestantes durante el levantamiento popular de enero de 2011. Era algo que los juristas ya habían alertado que podía ocurrir; la sentencia era muy débil y tenía riesgos de ser revocada. Y así fue. Como si se tratara de una ley de compensación, el Tribunal también aceptaba las apelaciones presentadas por la Fiscalía reclamando la repetición del juicio de todos los encausados. Esto incluía a los seis responsables del Ministerio del Interior absueltos en el caso de la muerte de manifestantes y los dos hijos del *rais*, Alaa y Gamal, junto con el hombre de negocios Hussein Salem, que seguía escondido en España, por las acusaciones de tráfico de influencias en el caso de la venta de gas a Israel.

Dos días después de comparecer ante los tribunales, se ponía de manifiesto el porqué de aquella sonrisa de Mubarak. El Tribunal Penal de El Cairo ordenó su liberación en el caso de la muerte de manifestantes. Según el juez, el período máximo de reclusión preventiva, de dos años, ya había expirado y, por tanto, no había ningún impedimento legal para dejarlo en libertad.

El 20 de abril, Mubarak lograría también la prescripción de la prisión preventiva en un caso de corrupción y tráfico de influencias. El *rais*, sin embargo, seguiría bajo presidio preventivo por la investigación de dos casos más. Los jueces se defendían afirmando que sólo aplicaban las leyes y que, en definitiva, éstas no se correspondían «con la situación revolucionaria».

Aunque el gran argumento para la revocación del antiguo fiscal general y el nombramiento de Talaat Abd Allah había sido el establecimiento de una verdadera justicia que hiciera honor a la revolución y procesara al antiguo régimen, la verdad era bastante más terca. En los primeros cinco meses desde que Abd Allah había ocupado el asiento de la Fiscalía, al menos una docena de ex ministros y figuras del antiguo régimen habían visto como sus sentencias judiciales eran revocadas y sus juicios forzados a repetirse. Como mínimo, ocho altas figuras del mubarakismo alcanzaron sentencias absolutorias en ese período. Otros vieron revocadas sus órdenes de prisión preventiva o anulados sus embargos de capitales.

Un mes después del nombramiento de Abd Allah, los tribunales ordenaban la repetición del juicio y la liberación preventiva del ex ministro de Información Anas el-Feky, que había sido previamente condenado a siete años de prisión por malversación de fondos públicos. Dos días antes, los magistrados habían ordenado la excarcelación del último secretario general del Partido Democrático Nacional, Safwat Sheriff, recluido bajo la acusación de enriquecimiento ilícito. Sheriff sería liberado con una fianza seis mil veces inferior a la cantidad por la que había sido procesado. Estos dos casos dieron el pistoletazo de salida a una serie de sentencias judiciales para la repetición de los juicios y la liberación de antiguas figuras del régimen de Mubarak. La lista se alargaba.

Youssef Wali, ex ministro de Agricultura, era liberado el 31 de enero tras el anuncio de la repetición del juicio por malversación de fondos públicos en el que había sido condenado a diez años de prisión. El 22 de abril, Zuhair Grana, antiguo mi-

nistro de Turismo, veía como los tribunales lo dejaban en libertad después de ordenar la repetición de la vista en que había sido sentenciado a tres años de cárcel por el otorgamiento irregular de licencias hoteleras. Un mes antes, Grana también había sido absuelto, junto con Ahmed Maghrebi, ex ministro de Vivienda, de las acusaciones de especulación y apropiación indebida de fondos públicos en la venta de terrenos turísticos a empresas de su propiedad y, dos meses antes, había sido testigo de cómo los tribunales ordenaban repetir el juicio en que había sido sentenciado a cinco años de prisión por especulación y malversación de fondos públicos en un caso similar en Ain Sokhna. Los magistrados también excarcelarían a otro ex ministro de Vivienda, Ibrahim Soleiman, tras ordenar repetir el juicio en el que había sido condenado a cinco años de cárcel. El Tribunal de Casación revocaba, en marzo, la sentencia de quince años de prisión contra el ex ministro del Petróleo, Sameh Fahmi, y el magnate Hussein Salem en el caso del enriquecimiento ilícito en la venta de gas a Israel y reclamaba la repetición del proceso contra ambos y el resto de encausados. Los tribunales también ordenarían la repetición del juicio al ex ministro de Agricultura Ibrahim Abaza y la liberación del ex ministro de Aviación Ibrahim Manaa, mientras que, en enero, Farouq Hosni, el controvertido ex ministro de Cultura, también era absuelto de los cargos de malversación que contra él pesaban. Los tribunales también revocaron los cinco años de prisión por malversación de fondos públicos contra Osama el-Sheikh, el antiguo presidente de la Unión de Radio-Televisión. El antiguo jefe de gabinete de Mubarak, Zakaria Azmi, sería liberado después de que los magistrados ordenaran revocar una sentencia de siete años de prisión por enriquecimiento ilícito. A mediados de febrero, los tribunales establecieron la repetición del juicio en el que el ex primer ministro, Ahmed Nazif, y el antiguo ministro del Interior, Habib el-Adly, habían sido condenados a cinco años de cárcel por un asunto de corrupción. Nazif sería excarcelado a finales de junio después de

que los tribunales revocaran su sentencia de tres años por otro caso de corrupción y ordenaran la repetición del juicio. El-Adli también había sigo testigo, en diciembre, de cómo los tribunales mandaban la repetición de un juicio en el que había sido condenado a diez años de reclusión. Los tribunales también revocaron en mayo la sentencia de siete años de prisión y 2000 millones de euros de multa contra el antiguo secretario de organización del Partido Democrático Nacional y magnate monopolista del acero Ahmed Ezz.

La amnistía llegó por todos lados. En diciembre, incluso los tribunales de Alejandría pidieron la repetición del juicio contra los dos policías acusados y sentenciados a siete años de prisión por torturar hasta la muerte a Khaled Said, el mártir de la ley de emergencia; y en junio de 2013 se absolvía a los 41 responsables de Interior encausados por la quema y destrucción de documentación policial a la caída de Mubarak. Los magistrados también levantaron los embargos económicos a, al menos, 23 hombres de negocios vinculados al antiguo régimen, entre los que se encontraban los hijos de Mubarak. El Tribunal Penal de El Cairo defendería políticamente la decisión: «La economía del país está en colapso y apoyar el embargo sólo servirá para empeorarlo».[20]

Pese a que acusar a la mano gubernamental en la totalidad de los casos podía ser hasta cierto punto discutible, el fracaso de la nueva Fiscalía ante el enjuiciamiento del antiguo régimen era evidente. En abril de 2012, el británico *The Guardian* denunciaba que, cuatro meses después de recibir un informe gubernamental exponiendo la participación militar en abusos cometidos durante el levantamiento de enero de 2011, Mursi no había emprendido ninguna acción para juzgar y aclarar aquellos hechos. Ante la difusión de la noticia y lejos de exigir responsabilidades, el presidente respondió promoviendo a tres

20 «Heythat elga' el-tahafez aala amual 23 reyal aamal: el-eqtesad menhar w ta'yyd el-manaa yu'ather», *Al-Masry al-Youm*, 26-03-2013.

generales al cargo de teniente general. La impunidad seguía al orden del día. Más allá de eso, los Hermanos Musulmanes hacían esfuerzos diplomáticos y jurídicos para arreglarse con las figuras del antiguo régimen condenadas por corrupción. El proceso de reconciliación con las figuras corruptas, liderado por Khairat Shater y Hassan Malek, se encontraba en la agenda de una Hermandad que se jactaba de haber recuperado, durante el mes de diciembre, cerca de 110 millones de euros en acuerdos con figuras del antiguo régimen que habían logrado, a cambio, la retirada de los cargos o sentencias en su contra. Era menos de un 0,1% del capital huido del país. La fiscalía levantaría las prohibiciones de viaje a diez de los 26 acusados en un caso de tráfico de influencias a cambio del regreso de los regalos obtenidos, y revocaría las denuncias contra las hijas de Shafiq por enriquecimiento ilícito tras el pago de 35 000 euros. El 13 de enero, Mostafa el-Husseini, procurador general de la Fiscalía de Fondo Público, anunciaba estar terminando negociaciones de reconciliación con cerca de veinte individuos procesados por corrupción. Entre los beneficiarios, se encontraba el propio ministro de Comercio e Industria del ejecutivo vigente, Hatem Saleh, acusado de monopolizar el mercado egipcio del lácteo a través de la empresa Beity. El acuerdo se saldaría por 600 000 libras, unos 64 000 euros.

El 10 de febrero, el Consejo de la Shura aprobaba la nueva ley de reconciliación, que era una modificación de la presentada un año antes por la Junta Militar. La nueva legislación pretendía la inmunidad judicial de las figuras corruptas del antiguo régimen, facilitando el retorno de los encausados fugitivos, a cambio del retorno de parte del dinero robado. Todo, sin pasar de nuevo por los tribunales. En el caso de los prófugos con sentencias firmes, se repetirían los juicios sin obligar al encausado a comparecer ante los tribunales. Los procesos serían monitorizados por un comité de carácter político, sin supervisión judicial, lo que levantaba las suspicacias de los grupos de derechos humanos.

Mostafa el-Husseini, máximo encargado del proceso, afirmaba que no había límites a la reconciliación y que el camino estaba «abierto incondicionalmente para todos».[21] El objetivo era claro: «Atraer inversores y generar confianza en la economía egipcia»; así se manifestaría un responsable del comité legislativo del Ministerio de Justicia ante la prensa local.[22] Hussein Sabour, presidente de la Asociación Egipcia de Negocios, aplaudiría con entusiasmo la iniciativa: «Es lo que llevamos tiempo exigiendo al Gobierno; los hombres de negocios necesitamos sentirnos seguros para invertir sin la amenaza de ser legalmente perseguidos». En unos términos similares se expresaría Mohamed Omran, presidente de la Bolsa, al afirmar que la reconciliación aportaría «confianza en los mercados».[23]

A primeros de febrero, el procurador general de la Fiscalía de Fondo Público anunciaba que varias figuras del antiguo régimen habían hecho ya peticiones oficiales de conciliación. Una delegación de la fiscalía egipcia se dirigió a Madrid para negociar con el fugitivo Hussein Salem, que se mostró dispuesto a entregar 2,2 millones de euros a cambio de poner fin a su persecución jurídica, con sentencias que sumaban más de veinte años de presidio. Salem afirmaba que éste era el valor de la mitad de sus propiedades, aunque sólo en evasión fiscal se le reclamaban más de seis veces esa cifra. El hombre de negocios, en intervención telefónica en un canal de televisión egipcio, mostró su agradecimiento. En dichas declaraciones describiría a Mursi como un presidente «misericordioso y justo», asegurando que rezaba por el nuevo mandatario y apoyaba el nuevo sistema surgido de la revolución del 25 de enero.

---

21 «La jotot hamra' emam el-tasaleh maa ramuz el-nizam el-sabeq fi qadeyan el-mal», *El-Ahram*, 01-02-2013.

22 «Egypt govt to facilitate return of 'fleeing' businessmen», *Ahram Online*, 13-02-2013.

23 «Ra'es el-borsa: El-mosalahat maa reyal el-aamal taaid el-theqa fi el-eqtesad», *Al-Masry al-Youm*, 22-05-2013.

El 28 de marzo, la fiscalía general borraba el nombre de Rachid Mohamed Rachid, antiguo ministro de Comercio e Industria, de la lista de monitorización jurídica después de que el ex ministro accediera a pagar un millón y medio de euros. Esto implicaba el fin de las fracasadas órdenes de búsqueda y captura y el olvido de las hostilidades jurídicas contra un hombre con varias penas, que sumaban más de veinte años de cárcel, y que era uno de los grandes ideólogos de los procesos de liberalización de la economía egipcia del clan Mubarak. Pero Rachid era, también, un personaje muy apreciado por la cúpula de empresarios que lideraban los Hermanos Musulmanes. Hassan Malek, uno de los cerebros económicos de la Hermandad, no tenía problemas en afirmar que el tipo que había acumulado más de veinte años de presidio en sentencias judiciales por varios casos de corrupción era un hombre «sabio» que «sabía muy bien cómo atraer inversores extranjeros» y que «sus decisiones en esa área eran correctas».[24] El mismo Malek reconocería públicamente estar en contacto con él y haber reclamado su regreso y amnistía. Rachid también habría mantenido conversaciones con Khairat Shater, que había llegado a aconsejar y ayudar a desbloquear negociaciones financieras en favor del nuevo Gobierno egipcio.

El FMI es la solución

A principios de 2013, los economistas dibujaban una catastrófica situación de la economía egipcia. Desde el inicio del estallido revolucionario, al menos 4500 fábricas habían cerrado sus puertas en el país dejando a cientos de miles de obreros en la calle.[25] Un informe oficial apuntaba a que 1,2 millones de egipcios habían

24 «Egypt Brotherhood businessman: manufacturing is key», Reuters, 28-10-2011.

25 «Rise in factory closures reflects Egypt's compound economic malaises», *Egypt Independent*, 26-03-2013.

perdido su trabajo en los dos años de revolución, llegando a los 3,5 millones de parados,[26] mientras que ocho de cada diez graduados universitarios no eran capaces de encontrar un empleo.[27] Eso transmitían los números oficiales. La realidad presentaba unas cifras claramente muy superiores. Según el Banco Central, en los últimos seis meses de 2012, que coincidían con los del Gobierno de Mursi, habían huido del país inversiones extranjeras por valor de 3800 millones de euros, mientras que el mercado de valores egipcio se había desplomado un 10%.[28] Uno de los sectores clave, el turismo, se iba recuperando a trompicones. Experimentaba un crecimiento del 17% respecto al 2011, pero seguía atrayendo a un 25% menos de turismo y generando un 15% menos de ingresos que las cifras de 2010.[29] Las protestas y el foco mediático internacional seguían pasando factura al país. En un extraño análisis, el Foro Económico Mundial llegaba a calificar la seguridad del turismo egipcio por debajo de países como Yemen, Chad y Pakistán. En 28 meses, desde enero de 2011, Standard & Poor's había degradado hasta 16 veces la calificación de la deuda soberana egipcia. El déficit presupuestario se calculaba que representaría cerca del 12% del PIB, lo que suponía unos quince mil millones de euros, y se calculaba que éste podía aumentar hasta los veintiún mil millones antes del fin del 2014.[30]

A principios de año, la situación ya se anunciaba extrema. En enero, las reservas del Banco Central experimentaban la

26 «Taqrir hokomi: 1,2 milion shab faqed wazifto fi aamin...w kol aamel yaaol 2 aatlin», *Al-Masry al-Youm*, 16-02-2013.

27 «CAPMAS: Unemployment reaches 3.5 million», *Daily News Egypt*, 04-03-2013.

28 «Central Bank: US$5 bn in foreign investments left Egypt in six months», *Egypt Independent*, 16-01-2013.

29 *The travel & tourism competitiveness report 2013. Reducing barriers to economic growth and job creation*, World Economic Forum, Geneva, 2013.

30 «Egypt govt raises 2012/13 budget deficit forecast», *Ahram Online*, 23-04-2013.

mayor caída en diez años, dejando las arcas a unos mínimos que sólo permitían hacer frente a las importaciones de tres meses. Las reservas tenían tres veces menos fondos que en enero de 2011. En un país en que el 70% de los alimentos eran importados del extranjero, la situación era dramática.

La única vía propuesta por los Hermanos Musulmanes a este callejón sin salida no sería otra que entregarse a los brazos del Fondo Monetario Internacional. Después de años descalificando a la institución, con intervenciones parlamentarias que criticaban la intervención extranjera de los organismos internacionales, ahora se plegaban a ella, demostrando que la oposición islamista al crédito no había sido más que un instrumento político para debilitar a Mubarak, primero, y a la Junta Militar, después. Ya en abril de 2012, antes de las presidenciales, un Parlamento mayoritariamente controlado por los Hermanos Musulmanes había rechazado las propuestas económicas del entonces Gobierno Ganzouri. Pero el repudio era claramente político y nada ideológico. Khairat Shater condicionaba el acuerdo al cambio de condiciones o a la formación de un Gobierno encabezado por la Hermandad. Se optaría por lo segundo. Tres días después del anuncio de la victoria de Mursi, el FMI se felicitaba por ello y se mostraba «preparado para apoyar a Egipto», expresando sus «ganas de trabajar de cerca con las autoridades».[31] Cuando la Hermandad formó el primer Gobierno, encabezado por Hisham Qandil, la prioridad económica fue agilizar las gestiones del crédito, que coparon las primeras reuniones del gabinete. Una semana después de formarse el ejecutivo, las instituciones egipcias pidieron un aumento del préstamo. Éste pasaba de los 3200 millones de dólares a los 4800 —de los 2400 millones de euros a los 3600—. A mediados de abril, se rumoreaba que las peticiones egipcias todavía podían aumentar un poco más. Lejos de debilitar la influencia de las instituciones económicas en Egipto, los Hermanos Musulmanes parecían sólo querer reforzarlas. Previamente a cada visita del FMI, el Gobierno de Qandil mostraba su total entrega. «La cooperación con el Fondo Monetario es el camino hacia la reforma y la aplicación de un programa económico social», afirmaría el primer ministro.

Los Hermanos Musulmanes se aferrarían al crédito como a un clavo ardiendo, rodeado de un debate de carácter religioso y moral. Bajo el Gobierno de la Junta Militar, figuras de la Hermandad como el *sheij* Sayed Askar o Mohamed Sharif Bashir habían mostrado su enérgica oposición a un crédito que consideraban una forma de usura occidental contraria a los preceptos islámicos. Una postura que sería apoyada por otras corrientes islamistas como los salafistas. Una vez en el poder, la Hermandad se esforzaba por revocar esa visión clamando que el 1,1% de intereses aplicados lo convertían en un préstamo *halal*, haciendo creer que más que intereses eran «tasas administrativas». El mismo Mursi, en un discurso en conmemoración de sus cien primeros días de Gobierno, defendería que los préstamos no eran pecado asegurando que «preferiríamos el hambre a la usura». A finales de agosto, los Hermanos Musulmanes reclamaban a la institución religiosa de El-Azhar que emitiera una fatua sobra la idoneidad del acuerdo con el FMI, mientras que el muftí de la Hermandad defendería que el crédito era *halal*. Figuras religiosas denunciaron presiones de la formación a organizaciones como el Consejo de la Shura de Eruditos Musulmanes o la Institución de la Sharia para los Derechos y la Reforma para que expresaran que el crédito estaba de acuerdo con la ley de Alá.

No sería el único momento en que religión y economía chocarían. Para combatir la falta de liquidez, el Gobierno había anunciado su intención de emitir 750 millones de euros de deuda pública a través de bonos religiosos, conocidos como *sukuks*. Fuentes gubernamentales afirmaban que. si la iniciativa prosperaba, podría reportar hasta diez veces más de líquido a las enjutas arcas estatales. A través de estos bonos, el Estado per-

31 «Lagarde tells Morsi IMF ready to support Egypt», *Ahram Online*, 30-06-2012.

mitía alquilar o hipotecar propiedades estatales, lo que levantó polémica y provocó el rechazo de la principal institución religiosa del país, El-Azahar, quien se podía ver directamente afectada por la medida. Ésta afirmaría que la ley iba contra la *sharia*, abriendo una nueva crisis política entre Presidencia y la centenaria entidad.

La oposición seglar, por su parte, seguía mostrando su falta de unidad también en el caso del FMI. Mientras los grupos de izquierda denunciaban principalmente que era inadmisible una nueva intervención extranjera, recordando los efectos de los créditos en la era Mubarak, las formaciones liberales bailaban entre una oposición blanda y un apoyo indirecto. En general, pocas voces eran capaces de alzarse con fuerza planteando las alternativas al crédito, que sólo eran defendidas por los movimientos sociales de base. De hecho, uno de los líderes de esta oposición, el diplomático Mohamed el-Baradei, llegaría a defender la necesidad de aceptar el préstamo, provocando la rabia de los activistas egipcios. Una posición que también sería defendida por el antiguo secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa. Las llamadas del nasserista Hamdeen Sabahi a cargar financieramente a las grandes fortunas se convertían en propuestas aisladas en la arena política, a pesar de su apoyo popular. Para los activistas de base, se podía prescindir de la ayuda exigiendo la condonación de la deuda, que superaba de largo los treinta mil millones de dólares, aprobando una mayor tributación fiscal e intensificando el cerco a la corrupción.

De hecho, Egipto se encontraba prácticamente acorralada por aquellas negociaciones. El acuerdo no era importante sólo en sí mismo; de él dependían otros paquetes de ayudas cuantificados en más de seis mil millones de euros. Otras informaciones hablaban de hasta once mil millones de euros en préstamos condicionados al acuerdo con el Fondo Monetario.[32]

32 Heba Saleh: «Egypt and IMF agree $4.8bn loan», *Financial Times*, 20-11-2012.

Entre éstos, se encontraban los acuerdos con el Banco Mundial, la Unión Europea y el Banco Africano para el Desarrollo, que habían supeditado sus paquetes de ayuda al cierre de las negociaciones. El FMI, por tanto, marcaba la agenda.

De la misma forma que lo había sido en tiempos de Mubarak, el crédito era ahora uno de los pilares de las relaciones establecidas con la Unión Europea y, sobre todo, con Washington. El Cairo seguía siendo una pieza clave del tablero regional de Estados Unidos y su alianza, imprescindible. En su primera visita a Egipto como secretario de Estado de la Casa Blanca, John Kerry destacaría que el acuerdo con el FMI era «crucial», exigiendo a las instituciones acelerar un compromiso que «dé confianza a los mercados».[33] Kerry se comprometía a entregar 145 millones de euros a Egipto después de arrancar la promesa a Mursi de seguir la hoja de ruta marcada por el Fondo Monetario. Y prometía 260 millones más una vez el acuerdo se cerrara. John Kerry y Estados Unidos presionaron a Mursi y al Gobierno Qandil para que aceleraran las reformas económicas planteadas por el FMI en aras de desatascar el crédito. En comparecencia ante la Cámara de Representantes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, afirmaría que el acuerdo de Egipto con el Fondo era esencial de cara a establecer las bases para continuar las negociaciones económicas entre Washington y El Cairo. Tan esencial que Victoria Noland, portavoz del Departamento de Estado, llegaría a expresar la satisfacción de la Casa Blanca con que las protestas en Egipto no obstaculizaran las negociaciones en curso entre El Cairo y el FMI a finales de noviembre.[34]

El Fondo Monetario Internacional quería garantías de que el programa de reformas saldría adelante. Exigía un mínimo consenso político que no parecía fácil de alcanzar por las dis-

33 «Kerry: etefaq Misr maa Sanduq el-Noqd el-Dawli hawel el-qard amr baley el-ahameya», *El-Tahrir*, 02-03-2013.

34 «El-Uliat el-Motahida: Saada' bel-tawasel el-etefaq bein Misr w Sanduq el-Noqd el-Dawli», *Al-Masry al-Youm*, 26-11-2012.

putas políticas internas. Occidente pedía amoldarse a unos parámetros que eran, obviamente, muy impopulares en las calles de Egipto. Los analistas *neocons* denunciaban la tibieza e indecisión de Mursi y le acusaban a él y a la Hermandad de no tener la fuerza necesaria como para sacar adelante unas medidas altamente controvertidas, que podían afectar al apoyo de la formación islamista en las calles. En Estados Unidos parecían convencidos de que la Hermandad intentaba mantener un pulso con las instituciones internacionales, ya que los Hermanos Musulmanes estaban seguros de que nadie dejaría caer a un país tan grande como Egipto. La falta de un Gobierno férreo y decidido, afirmaban, así como una dirección errática y los continuos retrasos electorales provocados por controvertidas decisiones judiciales no hacían más que aportar inestabilidad en un momento en que se reclamaba firmeza, apuntaban los analistas.

Y mientras el crédito no llegaba, el Egipto de Mursi confiaba en sus aliados regionales para salir del paso. Libia, Arabia Saudí y Turquía prometieron ayudas por valor de tres mil millones de euros; sin embargo, el gran aliado de la Hermandad seguía siendo Catar. El pequeño emirato daría préstamos por valor de unos seis mil millones de euros a un Egipto con problemas de liquidez y plantearía proyectos de inversiones millonarias en el país con el objetivo de insuflar confianza a los inversores internacionales. Éstas serían vistas con recelo por una oposición que pondría en cuestión la creciente influencia catarí en el país. De hecho, el pequeño emirato mostraba su peso creciente al conseguir tratos de favor en la adquisición de bancos y sociedades egipcias, así como la constitución del controvertido *holding* entre Qinvest y EFG Hermes, los directivos de la cual estaban siendo procesados por corrupción junto con los hijos de Mubarak. Curiosamente, la aprobación ministerial egipcia a la unión llegaba después de que Catar amenazara con aumentar de forma desorbitada los intereses de un préstamo que había prometido «sin condiciones». Mientras tanto, los

neocons occidentales afirmaban que las ayudas del Golfo en Egipto no hacían más que retrasar de forma innecesaria la aplicación de las medidas exigidas por el Fondo Monetario Internacional. Unas medidas que, oficialmente, eran como las de Catar. Sin condiciones. Pero que, en la práctica, eran como todas, condicionalmente imperiosas.

La amarga píldora de la reforma

Preguntado en un programa televisivo sobre cómo pensaba conseguir justicia social durante su mandato, el presidente Mursi haría unas enigmáticas declaraciones: «Con el amor de los unos por los otros, la solidaridad y la compasión».[35] El Fondo Monetario Internacional pretendía que Mursi hiciera lo que no había hecho Mubarak. Exigía firmeza para sacar adelante lo que el *Financial Times* describió como la «amarga píldora de la reforma».[36] El 9 de diciembre, el presidente anunciaba una reforma estructural de la legislación tributaria. Ésta provocaba un aumento radical de los impuestos sobre el consumo y una reducción considerable de la imposición sobre la propiedad. Los impuestos sobre productos como la cerveza aumentaban un 200%, mientras que sobre el tabaco lo hacían en un 50%, un 25% en el agua con gas y un 150% en la popular pipa de agua o *shisha*. El acero, el cemento o los servicios de telefonía móvil, limpieza y seguridad también veían incrementados de forma considerable sus cargas fiscales. Subían los impuestos a los créditos bancarios y los préstamos y aumentaban las penalizaciones por evasión fiscal. Mursi, sin embargo, no tocaría los impuestos a las rentas altas y multiplicaría por cuatro el umbral de la exención fiscal a las

35 «Mursi: El-aadala el-egtemaaeya tethaqeq bel-hob [...]», *Al-Masry al-Youm*, 28-07-2012.

36 Heba Saleh: «Egypt needs more then an IMF loan», *Financial Times*, 24-02-2013.

segundas residencias, protegiendo así a las grandes fortunas. Las medidas estaban claramente vinculadas al acuerdo alcanzado, dos semanas antes, entre los Hermanos Musulmanes y la delegación del FMI.

Pero, por aquellas fechas, la arena política ardía a causa de la declaración constitucional del presidente. Con un país lanzado a la calle en su contra, el miedo a que una reforma impopular le pasara aún más factura le empujó a dar un paso atrás. Al día siguiente de anunciar la reforma, el presidente Mursi hacía pública su parada temporal y llamaba al «diálogo social» sobre la misma. Esto frenaría en seco la inminente firma del acuerdo entre El Cairo y el FMI. El 21 de noviembre, ambas partes habían anunciado un preacuerdo y una semana después el Gobierno de Qandil desvelaba los detalles de la propuesta del programa.

Éste seguía los dictados propios del pensamiento único de la economía global neoliberal del cambio de siglo. El objetivo principal no era otro que la reducción del déficit, que se esperaba que alcanzaría un 5% en el curso fiscal 2016-2017. Y lo hacía, con un método nada innovador, a través de un paquete de medidas de austeridad. La principal obsesión de los economistas liberales era poner fin a unas políticas de subsidios energéticos y alimentarios que suponían unas inversiones estatales anuales de hasta quince mil millones de euros, tragándose un 27% del presupuesto anual.[37] Unas dos terceras partes de éste iban destinadas a los carburantes. Las subvenciones sólo del diesel suponían un gasto de 5700 millones de euros anuales, haciendo que los consumidores pagaran cerca de 12 céntimos de euro por un litro que en Europa se pagaba a casi un euro y medio. El Gobierno anunciaría el recorte de los subsidios energéticos a la industria pesada y a la gasolina de 95 octanos; la distribución de cartas de racionamiento para las bombonas de gas butano de uso doméstico y el aumento de los precios de la electricidad. El

37 Marwan Bishara: «Egypt, back to the future: Scoring points, making none», Al-Jazeera, 28-07-2013 [*online*].

objetivo era recortar el gasto en un 50% en los siguientes cinco años. Osama Kamal, ministro del Petróleo, anunciaba en noviembre el 85% de éxito de un programa piloto en Sohag respecto al uso de cartas de racionamiento energético y la extensión en los meses siguientes de este método por todo el país. El Banco Mundial y el FMI daban su apoyo a las medidas y se ofrecían a colaborar en la implementación del plan. Aunque el Gobierno afirmaba que el objetivo era reducir el apoyo energético a la industria y a los coches de lujo, la verdad es que los recortes también se ensañaban con los transportes y los hogares.

El Gobierno anunciaría posteriormente la creación de una cartilla de racionamiento para el acceso al pan de las familias más desfavorecidas y la aplicación de un programa piloto de dos meses en las poblaciones de Port Said y Port Fuad. Ésta era la otra demanda de las instituciones internacionales. El aumento global del precio del trigo hacía que los gastos anuales de Egipto en su adquisición hubieran pasado de los 533 millones de euros anuales de 2008 a los 2700 previstos para el año 2013.[38] A partir de ese momento, habría un límite de tres hogazas de pan por miembro de familia, lo que miles de egipcios consideraban del todo insuficiente. El fin del apoyo amenazaba rápidamente con triplicar el precio de la rebanada, haciendo planear la sombra de una revolución de los hambrientos y volviendo a poner sobre la mesa las reminiscencias de la revuelta del pan vivida por Sadat en la década de los setenta.

Pero mientras el Gobierno recortaba en subvenciones, los mismos intereses generados por los préstamos anteriores representaban también una cuarta parte de los gastos presupuestarios. Además, el ejecutivo seguía invirtiendo en gastos que enervaban a los activistas políticos. Mientras se anunciaba dicho paquete de recortes, el primer ministro Qandil informaba de la adquisición de un paquete de *software* de la casa Micro-

38 Charles J. Hanley: «Egypt's Cost Of Bread Could Triple If Subsidies End», *Huffington Post*, 28-03-2013.

soft para uso ministerial por valor de 33,5 millones de euros. Los activistas exigían coherencia y señalaban el ejemplo brasileño, que en 2005 había adoptado el uso de *software* libre para los servicios informáticos públicos. En febrero, se denunciaba la compra de 140 000 botes de gas lacrimógeno fabricado en Estados Unidos por valor de dos millones de euros. «El Gobierno hace lo mismo que hacía Mubarak, gastarse dinero de los contribuyentes para reprimir a los hijos de los contribuyentes», afirmaba Hussein Abd el-Ghany, portavoz del Frente de Salvación Nacional, la coalición de la oposición seglar al Gobierno.

Los analistas *neocons* coincidían. La aplicación de las medidas generaría inestabilidad a corto plazo y serían enormemente impopulares, pero, a su entender, eran imprescindibles para el desarrollo futuro del país. No había vuelta de hoja. Los Hermanos Musulmanes hacían suyo este mensaje y amenazaban: «Si no logramos el préstamo, habrá aún más racionamiento». Así lo aseguró Ashraf el-Arabi, ministro de Planificación y Cooperación Internacional.

A pesar de las promesas del Gobierno, la retirada de los subsidios provocó una inflación en los mercados. Entre enero y abril, ésta había crecido un 6,3% —un 7,9% si sólo se tenían en cuenta alimentos y bebidas—.[39] La inflación general para 2013 llegaba al 10,9%, aumentando las previsiones del propio FMI y superando los récords previos a la revolución del año 2010.[40] Pero la razón principal de la subida iba más allá del fin de los subsidios. Ésta estaba también vinculada a la devaluación de la libra egipcia, la moneda local. Desde la caída de Mubarak, el Banco Central había invertido más de quince mil millones de euros en apuntalar la libra, que a pesar de todo había perdido un 10% de su valor respecto al dólar. A instancias del FMI, a

39 «Egypt: inflation figures add to gloom», *Financial Times*, 11-03-2013.

40 «Sanduq el-noqd: 10,9% maadel el-tadhjam fi Masr», *Al-Masry al-Youm*, 22-05-2013.

finales de año, Egipto dejó de apoyar a la libra iniciando la subasta de moneda extranjera y favoreciendo la meteórica devaluación de la divisa local. El Banco Central realizaría una veintena de subastas de moneda en poco más de un mes.[41] Durante la primera semana, la libra se devaluaría un 3% y, entre el 31 de diciembre y el 31 de enero, bajaría un 10% su valor respecto al dólar. Mientras la devaluación buscaba favorecer la inversión extranjera, atraída por un mercado cada vez más barato a ojos de la economía global, ésta no hacía más que aumentar el coste de la vida de los egipcios, dependientes de unas importaciones que se encarecían con el nuevo cambio de divisa.

«La gente normal entiende que hay un precio que pagar por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional», afirmaba el alma de los negocios de los Hermanos Musulmanes, Hassan Malek, para justificar dichas medidas.[42] Además, alertaba de que la devaluación iría a más. La Cámara de Comercio de El Cairo aseguró que ésta había provocado un aumento del 50% en los gastos domésticos, como la electricidad o el teléfono, mientras que la industria farmacéutica anunciaba su colapso por el aumento del precio de la adquisición de químicos del extranjero. Al menos 55 fábricas cerraron puertas denunciando que el aumento del dólar las dejaba sin alternativa. Egipto también se colapsaría por una crisis energética de suministros que tendría parado al país durante más de dos meses. Cortes de carretera, cierres patronales de fábricas, colas kilométricas en las gasolineras e incluso la muerte de conductores en peleas provocadas en esas mismas filas, debido a la falta de combustible en las gasolineras, eran síntomas de una crisis que provocaba un incremento del 33% de los costes del transporte, repercutiendo de nuevo en una subida de precio de los vegetales y las legumbres. Todo, fruto del recorte de los subsidios —que haría

41 «Currency auction by Egypt's central bank nets $49.2 million», *Ahram Online*, 07-02-2013.

42 «Egypt currency has further to fall: business leader», Reuters, 17-02-203.

aflorar el mercado negro—, la falta de previsión gubernamental y la devaluación de la libra, que dificultaría aún más las importaciones.

Las reformas eran consideradas imprescindibles y la Hermandad buscó otro chivo expiatorio. El de siempre. «Basta de protestas y de ver la televisión, tenemos que construir el país», afirmaría en un discurso televisado el primer ministro Hisham Qandil.[43] Los Hermanos Musulmanes se escudaban en informes que acusaban a las protestas de estar favoreciendo la devaluación de la moneda, ignorando las subastas del Banco Central. Bajo esta premisa, volvieron a recuperar el argumento de una mano oscura detrás de las protestas obreras, a las que acusaría de ser «un invento para entorpecer el proyecto Nahda». En julio, el diario de los Hermanos Musulmanes, *Libertad y Justicia*, llegaría a afirmar que los obreros en huelga en Mahala eran agentes de la policía al servicio del antiguo régimen. «¿Cómo pueden los trabajadores tener el coraje de ir a protestar frente al palacio presidencial si no es porque alguien lo organiza?», preguntarían los partidarios del presidente en televisión. Los recientemente creados sindicatos libres denunciarían presiones del nuevo Gobierno, coacciones a la libertad sindical y el retorno, en definitiva, de las antiguas prácticas del régimen de Mubarak. Según el presidente de la Federación Egipcia de Sindicatos Libres, Kamal Abu Eita, en un año de presidencia de Mursi se había despedido a once veces más sindicalistas que en los últimos cinco años de Mubarak;[44] 650 frente a 56. Mientras tanto, el Gobierno seguía sin aplicar la ley del salario máximo y afirmaba no tener recursos para poner en práctica la del salario mínimo. En junio de 2013, Egipto volvería a ser colocada en la lista negra de la Organización Mundial de Trabajadores por, precisamente, no haber seguido las recomendaciones hechas en 2008 en materia laboral. El país hervía contra las políticas claramente continuistas de los Hermanos Musulmanes y no tardaría en explotar dando un nuevo giro al proceso de transición.

43 «Enough protests and watching TV, let's start building Egypt: Prime minister», *Ahram Online*, 04-02-2013.

44 «Abu Eita: Dostor el-Ijwan qanen serqa el-oomal w aa'sha aabd el-hady afdal men wazirhom», *Al-Masry al-Youm*, 30-04-2013.

Golpe revolucionario o revolución golpista

Tamarrod

A finales de abril, un grupo de cinco jóvenes cairotas lanzaba una campaña que marcaría un auténtico cambio copernicano en el proceso político y la revolución en Egipto. Los jóvenes, que tendrían en los periodistas Mahmoud Badr y Hassan Shahine sus caras más visibles, se encontraban discutiendo sobre cómo la revolución se hallaba en un callejón sin salida. Para ellos, ésta estaba estancada en las plazas, con unas manifestaciones en un ambiente cada vez más viciado, y coincidían en la necesidad de una nueva fórmula que ayudara a expandir la revuelta por todo el país mostrando la indignación contra el Gobierno de los Hermanos Musulmanes. La fórmula sería sencilla. Una simple recogida de firmas en que los egipcios certificaran la retirada de su confianza en el presidente. El objetivo, recoger quince millones de firmas, un millón y medio más que los votos logrados por el candidato de los Hermanos Musulmanes en la segunda vuelta de las presidenciales. Y debían hacerlo

antes del 30 de junio, fecha en la que el presidente celebraría un año en el cargo. La efeméride se conmemoraría con movilizaciones pacíficas y vistosas exigiendo la convocatoria de elecciones anticipadas.

Aquella campaña recibiría el nombre de *Tamarrod*, «rebelión» en árabe, inspirándose en una revista de oposición siria. Aunque ellos mantenían no estar vinculados a ninguna formación, algunos de sus miembros eran cercanos a grupos nasseristas y al movimiento Kefaya, que en 2005 ya había sido pionero en enfrentarse a Mubarak y su hijo Gamal. La campaña corrió como la pólvora. Diez días después de lanzarse públicamente, sus organizadores ya anunciaban haber recogido más de dos millones de firmas. Miles de jóvenes se unían, con un éxito sin precedentes, a esta iniciativa y recorrían las calles del país pidiendo las firmas de los ciudadanos indignados.

El éxito vírico de la campaña hizo que los grupos islamistas la pusieran en su punto de mira. Pocos días después de que empezara a caminar Tamarrod, el portavoz y diputado de Gamaa Islamiya, Essam Abd el-Maged, anunciaba la creación de la contracampaña *Tagarrod* (en árabe, «quitarse o liberarse de aquello que te cubre»), para recoger firmas de apoyo al cumplimiento del mandato de Mohamed Mursi. Esta propuesta también anunciaba números espectaculares de firmas recogidas. En dos semanas, hablaban de seis millones de rúbricas, aunque muchos dudaban de su veracidad, dada su escasa presencia en las calles en contraste con la de los jóvenes detractores de Mursi. Pero la confrontación iba en aumento. El 7 de junio, partidarios del presidente atacaron la sede cairota de Tamarrod con cócteles molotov, con el objetivo aparente de quemar las hojas con las firmas. Pocos días después, se registraron enfrentamientos violentos, con uso de armas de fuego incluido, en un barrio de clases populares de Alejandría, cuando un grupo de defensores del mandatario trató de poner fin a la recogida de firmas de los miembros de la campaña Tamarrod. Incidentes similares sucedieron en otros lugares de todo el país y se fueron repitiendo a lo largo

de semanas. El crecimiento de Tamarrod incomodaba enormemente a los Hermanos Musulmanes y a su entorno político.

La recogida de firmas llegó en un momento propicio y en una tierra fertilizada por la situación política y social. Los cortes eléctricos se habían convertido en el pan de cada día, así como las colas kilométricas en las gasolineras para llenar los depósitos ante la desesperación de una población que veía cómo las medidas económicas conducían a la inflación de los precios de los productos básicos sin generar nuevos puestos de trabajo. El colapso llevaba a la exasperación de los egipcios contra el Gobierno de Mursi, y ya no tenían miedo de hacer oír su voz. En el mes de mayo, coincidiendo con el lanzamiento de la campaña, Egipto registraba casi dos protestas por hora.[1] Por lo menos, eso indicaba un estudio del Centro de Desarrollo Internacional (IDC), que también afirmaba que el 63,7% de estas movilizaciones tenían una raíz laboral. A lo largo de 2012, se habían registrado más protestas obreras (3817) que en los diez años anteriores del presidente Mubarak. En tan sólo los cinco primeros meses de 2013, estas cifras habían sido ampliamente superadas, con 5544 protestas.[2] La indignación iba en aumento. Algunos datos hablaban de que, durante las primeras semanas de junio, se habían detectado más de 500 huelgas semanales en todo el país.

La dirección política de la Hermandad, monopolista e inexplicablemente incapacitada para buscar posibles consensos con las formaciones seglares, se marginaba cada vez más de la población. La confianza en las instituciones políticas estaba bajo mínimos. Según un sondeo realizado por el centro de estudios de Al-Jazeera, el 72% de los jóvenes egipcios no se sentían identificados con el Parlamento entonces vigente.[3] La oposición

1 «Report: Egypt averaged two protests an hour in May», *Egypt Independent*, 03-06-2013.

2 Mustafa Bassiouni: «Will Egypt workers pay the price again?», *El-Akhbar*, 30-07-2013.

3 «Poll: Arab youth feel alienated from politics», Al-Jazeera, 29-07-2013.

a su Gobierno hacía posible, incluso, lo que poca gente hubiera previsto meses atrás; se unían en protestas revolucionarios mayoritariamente seglares y nostálgicos del antiguo régimen que, poco a poco, iban saliendo del armario. En este ambiente, se filtraba a la prensa una condescendiente entrevista con el dictador depuesto Hosni Mubarak, en la que éste aseguraba que «la historia me verá como un hombre justo» y en la que se mostraba cínico afirmando que sufría por los pobres debido a las duras condiciones impuestas por el FMI.[4]

Los Hermanos Musulmanes intentaron, a través del proceso de reconciliación, tejer complicidades con las figuras del antiguo régimen, creyendo que esto podría ser su salvavidas político. Mientras la recogida de firmas proseguía sin parar, la justicia seguía permitiendo una veintena de absoluciones y repeticiones de juicios a ministros y jefes del mubarakismo. Incluso se liberaba a los responsables de la quema de documentación confidencial de los aparatos de seguridad, que fueron puestos en libertad el 12 de junio. Pocos días después, los tribunales ordenaban la excarcelación del ex primer ministro Ahmed Nazif, después de que los magistrados fallaran repetir el juicio por enriquecimiento ilícito por el que había recibido una sentencia de tres años de prisión. Mientras tanto, los tribunales no mostraban la misma condescendencia con el activista de izquierdas Hassan Mostafa, condenado a un año de prisión por unos débiles cargos por manifestarse contra la detención policial irregular de menores de edad en las protestas contrarias a Mursi. Pero mientras los Hermanos Musulmanes buscaban esa reconciliación y tejían puentes con las altas esferas del régimen depuesto, por el otro lado seguían su lucha solitaria para hacerse con el control de las estructuras de Estado y de la economía local, subestimando el poder de éste. No sería el único error analítico de la Hermandad en el enfrentamiento que estaba por venir.

4 «Egypt paper publishes Mubarak interview», Al-Jazeera, 12-05-2013.

Se acerca el 30 de junio

El 5 de junio, el diario oficial del Estado anunciaba que el Ministerio de Asuntos Sociales decretaba la legalización de la formación de los Hermanos Musulmanes. Según el boletín, se legalizaba, con el número de registro 644, como una organización benéfica de asistencia social y de actividad cultural y científica. Esto se producía 25 días antes de las manifestaciones convocadas pidiendo la destitución del presidente Mursi y casi un año después de que un miembro de la citada formación accediera a la presidencia del Estado. Hasta entonces, Egipto había sido presidido por un miembro de una formación alegal sin un estatus jurídico determinado.

Diez días más tarde, Mursi intentaba reaccionar a la indignación popular nombrando a 17 nuevos gobernadores. Pero con una escena política polarizada y los grupos seglares rechazando toda cartera, el cambio no podía ser muy inclusivo. Siete de estos eran miembros de la Hermandad (que pasaba a controlar diez de las 27 provincias), seis eran generales del Ejército y uno, que resultaría el más polémico, era miembro de Gamaa Islamiya. El nombramiento de Adel Khayat como gobernador de Luxor no podía haber sido más desafortunado. Khayat era miembro de una formación, Gamaa Islamiya, que en 1997 había perpetrado un ataque terrorista contra los intereses turísticos de la misma Luxor, provocando la muerte de 68 personas, incluidos los seis terroristas, y afectando enormemente a la principal fuente económica de la ciudad. Y las promesas de conversión política de los miembros de la Gamaa no habían servido de nada. El nombramiento provocó encendidas protestas en la provincia y la dimisión del ministro de Turismo Hisham Zaazou. Una semana después de su designación, Khayat presentaba también su renuncia al cargo porque, afirmaba, no quería «más derramamientos de sangre».

Los tímidos movimientos políticos del presidente parecían inútiles. El Gobierno trataba de fortalecerse acelerando un

acuerdo con el FMI que, ajeno a todo, anunciaba el desarrollo «constructivo» de las negociaciones para el cierre del deseado préstamo.[5] En paralelo, sin embargo, y a diez días de las anunciadas protestas, Tamarrod aseguraba que ya tenía los quince millones de firmas que se había propuesto y emplazaba a los egipcios a salir a la calle el día 30, de forma pacífica pero masiva, para reclamar la caída de Mursi. Al día siguiente, los partidarios del mandatario salieron a la calle para hacer su propia demostración de fuerza.

Cientos de miles de personas se concentraron en los alrededores de la mezquita de Rabaa Adaweya, en el barrio cairota de Medinat Nasr, para defender lo que calificaban como la «legitimidad democrática» del presidente, al que pedían que cumpliera con el mandato de cuatro años. Era una movilización importante, a pesar de que allí se concentraban egipcios venidos de las 27 provincias con autocares contratados por la organización. Los miembros de la campaña Tagarrod afirmaban haber recopilado medio millón de firmas durante la concentración y llegar, así, a los trece millones de rúbricas a favor de Mursi. Para los islamistas, ése era «el mejor referéndum posible en Egipto». Eran palabras pronunciadas desde el escenario por Mohamed el-Beltagi, destacada figura de los Hermanos Musulmanes, que también emplazaba a los manifestantes a defender la legitimidad del presidente «con nuestra sangre».[6] Una sangre que se derramaría esa misma tarde en enfrentamientos en la ciudad de Alejandría y que volvería a verterse, pocos días después, en la brutal batida de cientos de enfurecidos integristas suníes contra la comunidad chií de Giza, provocando la muerte de cuatro personas y la quema de cuatro casas. Un ataque que, además, fue tímidamente denunciado por unas autoridades que aprovechaban la ocasión para desautorizar al chiísmo. Ante la escalada de la tensión, las Fuerzas Armadas hicieron público un comunicado en el que alertaban de que no permitirían que el país sucumbiera al caos y entrara «en un oscuro túnel». Ante la ambigüedad del texto emitido, todas las partes se atribuirían tener al Ejército de su lado. Tamarrod defendía que las Fuerzas Armadas eran «la casa nacional» de Egipto y el Gobierno se daba prisa en afirmar la coordinación entre el presidente y el alto mando militar. Pero Mursi, que parecía convencido de que el pacto de la transición era firme y sostenido por las alianzas regionales, no escuchó el mensaje entre líneas de las Fuerzas Armadas y siguió incrementando la confrontación.

El miércoles 26 de junio, mientras en Mansoura se producían violentos choques, que dejaban al menos dos muertos, y mientras la sede de los Hermanos Musulmanes en la población natal de Mursi, Zagazig, se encontraba en llamas debido a las protestas, el presidente defendería su año en el cargo en un discurso televisado y en el que, rodeado de las principales autoridades del país, pretendió dar muestras de fortaleza. Sin embargo, mientras extendía una mano al diálogo, prometiendo una comisión para reformar la Constitución, y admitía algunos errores, con la otra golpeaba a diestro y siniestro, en algunos casos incluso mencionando el nombre de algunas figuras públicas y atacando indirectamente a potencias regionales. «Los enemigos del país» eran, a su entender, los responsables de las dificultades. Mursi defendió a la policía, pero cargó sin miramientos contra la judicatura señalando, con nombres y apellidos, a algunos de los personajes del mubarakismo que, a su entender, estaban desestabilizando Egipto. «Parece que las figuras del antiguo régimen sean ahora los más revolucionarios de todos», afirmó.

Un día antes del discurso, un hecho simbólico sacudiría los intereses de la Hermandad en todo el mundo árabe. El jeque Hamad bin Khalifa al-Thani, emir de Catar y uno de los prin-

5 «IMF points to progress in aid talks with Egypt», *Ahram Online*, 20-06-2013.

6 «El-Beltayi: Milioneya la lel-oonf aazem estefta' fi Masr [...]», *Al-Masry al-Youm*, 21-06-2013.

cipales valedores del proyecto político de los Hermanos Musulmanes, abdicaba en favor de su hijo en un movimiento histórico sin precedentes en las herméticas monarquías del Golfo. La dimisión también provocaba la salida del Gobierno de Jassim bin Jaber al-Thani, el omnipotente primer ministro y responsable de Exteriores del Gobierno catarí, que había revolucionado en los últimos años el papel regional del pequeño emirato pérsico. El jeque Tamim aún tardaría tiempo en habituarse al trono. Mursi, de golpe, se quedaba sin uno de sus principales valedores regionales a cinco días de las protestas y con su gran otro aliado, Erdogan, acosado por las protestas de la plaza Taksim de Estambul. Unas movilizaciones que, un mes después de iniciarse, todavía seguían candentes y servían de inspiración para muchos egipcios, enervados con el Gobierno de los Hermanos Musulmanes, que habían declarado la guerra al islamismo político.

El camino hacia el 30 de junio ya estaba trazado: siete personas perderían la vida esa semana en enfrentamientos en todo el país. Uno de estos sería un ciudadano estadounidense que estaba tomando fotografías de los combates de Alejandría. Su muerte provocaría el cierre de todas las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos en Egipto, mientras la Hermandad se empeñaba en afirmar que los que provocaban los disturbios en las calles eran elementos del antiguo régimen. Por si acaso, se decretaba el estado de máxima alerta tanto en el Ministerio de Salud como en los aeropuertos, se desplegaban tanques militares por toda la geografía egipcia y se construían nuevos muros de contención alrededor del palacio presidencial, en previsión de posibles ataques.

Crónica de una caída

Pese a los miedos y las amenazas, el 30 de junio millones de egipcios invadieron las calles como nunca antes lo habían hecho. Las imágenes de las protestas, que no se concentraron en una sola ciudad ni en una sola plaza y que se extendieron de forma masiva por todo el país, eran el vivo retrato del desgaste político de los Hermanos Musulmanes y del presidente Mursi en aquel año de Gobierno. Eran, sin duda, las movilizaciones más numerosas de la historia del país, mucho más que las de enero de 2011. Eso sí, carecían del espíritu idealista de aquéllas. El Ministerio del Interior daba la estratosférica e irreal cifra de entre 14 y 17 millones de manifestantes en todo Egipto.[7] Entre éstos, un extraño conglomerado de fuerzas revolucionarias pero también de partidarios de las Fuerzas Armadas e incluso nostálgicos del antiguo régimen que llegaban a pintar con nombres prerrevolucionarios algunos lugares del centro de El Cairo. Así, la estación de metro de los Mártires volvía a ser bautizada por las pintadas como estación Mubarak, mientras los manifestantes gritaban por la intervención de las Fuerzas Armadas. En este clima, incluso Ahmed Shafiq, último primer ministro de Mubarak, que había perdido en las urnas frente a Mursi, anunciaba su regreso a Egipto.[8] Lo hacía después de su exilio en los Emiratos Árabes, adonde había huido de la justicia que lo reclamaba por la investigación pendiente de 25 causas abiertas por corrupción. Miembros del cuerpo policial, que en los días previos habían llamado a la revolución contra Mursi y a la reinstauración del antiguo régimen, incumplieron el reglamento interno organizando marchas en contra del mandatario islamista y se negaron a defender las oficinas de los Hermanos Musulmanes, atacadas por iracundos egipcios. Nueve personas morían en el intento de asaltar la oficina central de la Hermandad en el barrio cairota de Moqatam, cuando partidarios de los islamistas la defendieron con armas de fuego. Aunque la mayoría de marchas destacaron por su tranquilidad, en total casi una

7 «Egypt ministers resign amid unrest», Al-Jazeera, 01-07-2013.

8 El anuncio se produjo durante una llamada en directo al canal Al-Horra, el mismo 30 de junio.

quincena de personas perdieron la vida en todo el país en los enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente. Además, se denunciaron casi un centenar de casos de acoso sexual a chicas manifestantes durante las protestas en contra de Mursi, alcanzándose así un lamentable techo en este tipo de ataques sexuales en las movilizaciones políticas del país.

Los Hermanos Musulmanes minimizaron los hechos. Presidencia afirmaba que las marchas no eran más que una muestra de las libertades democráticas existentes en Egipto y aseguraba que no habría cambios en el Gobierno. La página web del brazo político de la formación incluso publicaba, en una noticia surrealista, que las manifestaciones habían sido manipuladas y falseadas.[9] Pero la euforia de la oposición hacía que sus demandas aumentaran. Con la convocatoria de elecciones anticipadas, que era el lema con el que se había salido a la calle, ya no había suficiente. Ahora querían la dimisión del presidente. El Frente de Salvación Nacional, la coalición seglar opositora al mandatario, anunciaba la caída de Mursi mientras Tamarrod hacía público que el número final de firmas recogidas superaba los 22 millones. Los jóvenes rebeldes daban un ultimátum de tres días a Mursi para atender el clamor popular o, en caso contrario, el martes 2 de julio a las cinco de la tarde, anunciarían la desobediencia civil en todo el país. Mientras tanto, el líder nasserista Hamdeen Sabahi afirmaba que la «primavera árabe se ha convertido en una verdadera primavera»[10] y anunciaba que el pueblo estaba a la espera del «primer comunicado de las Fuerzas Armadas». Un comunicado que, de hecho, no tardaría en ver la luz.

Al día siguiente, cinco ministros presentaban su dimisión al Gobierno. Un día más tarde, lo hacía el ministro de Deportes y, 48 horas después, el de Asuntos Exteriores, Mohamed Kamel, junto con el portavoz de Presidencia, el del Parlamento y varios senadores. Los Hermanos Musulmanes cada vez estaban más aislados. Incluso la unidad de las fuerzas islamistas parecía rota. La Llamada Salafista y su partido de El-Nour, segunda fuerza política en las elecciones de diciembre de 2011, exigían elecciones anticipadas «para evitar la guerra civil».[11] En las últimas semanas, se habían mostrado condescendientes con las protestas contra Mursi. Unas movilizaciones que el portavoz del grupo, Nader Bakar, consideraría «reivindicaciones legítimas», mientras que atacaba las manifestaciones de apoyo a Mursi, que calificaba como «irresponsables».[12] El posicionamiento de la formación no estaría exento de polémica y muchos verían la mano del Ministerio del Interior y, sobre todo, la de Arabia Saudí, histórica enemiga regional de la Hermandad y estrechamente vinculada al grupo salafista. Pero éstas también respondían a las discusiones políticas surgidas entre ambos grupos que aspiraban a disputarse, en el fondo, un electorado similar y que habían provocado fuertes disensiones dentro del mismo partido salafista.

La dimisión más simbólica sería, sin embargo, la de Sami Anan. Quien un año atrás ocupara la vicepresidencia de la Junta Militar, ahora abandonaba su cargo como asesor presidencial. Pocos minutos después de hacerse pública su renuncia, el Mando General de las Fuerzas Armadas emitía un comunicado televisado en el que daba un nuevo y último ultimátum de 48 horas «a todos», para satisfacer las demandas del pueblo que, según el mismo texto, se había expresado de forma clara y pacífica en las manifestaciones del 30 de junio. El mensaje recordaba que ya habían dado un ultimátum para la reconciliación que había finalizado sin éxito ese mismo domingo. «Per-

9 «Mozaharat w hameya bewest el-balad w shaweraa el-yanebeya», *Bauaba el-horreya w el-aadala*, 30-06-2013.

10 «Sabahi: El-shaab yentazar el-bian raqam uahed lel-qouat el-mosalaha», *Al-Masry al-Youm*, 30-06-2013.

11 «El-dawaa el-salafeya w el-nour: Notaleb be intijabat ra'esia mobakera manaan le-harb ahleya», *Al-Masry al-Youm*, 02-07-2013.

12 «Nader Bakaar: Tasrihat milioneya la lel-oonf yeir mas'ola [...]», *Al-Masry al-Youm*, 22-06-2013.

der más el tiempo no hará sino aumentar la división y la lucha de la que ya advertimos y de la que seguimos advirtiendo», decían los militares. En una declaración aparentemente contradictoria, afirmaban no querer formar parte del proceso político, a la vez que aseguraban que impondrían una hoja de ruta si su reclamo no era satisfecho.

Aunque el redactado parecía bastante claro, algunos abrieron el debate sobre qué posicionamiento tomaba el Ejército. Presidencia argumentaba que la redacción del texto daba lugar a confusión y que no afectaba a la agenda presidencial. El gabinete, de hecho, trataba de dar muestras de normalidad difundiendo imágenes de un encuentro entre el general El-Sisi, jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe de Gobierno Hisham Qandil y el propio Mursi, que habría tenido lugar instantes antes de la lectura del comunicado. Pero para la oposición el mensaje era diáfano. Tamarrod, en boca de su portavoz Mohamed Bader, afirmaba que «la respuesta del Ejército a las demandas del pueblo es la culminación de nuestra campaña».[13] No eran los únicos en mostrar su satisfacción. El Ministerio del Interior confirmaba, a través de las redes sociales, su pleno apoyo al comunicado militar y alababa el éxito de las movilizaciones populares del 30 de junio. De hecho, el ministro Ibrahim, en una política de hechos consumados, boicoteaba la reunión del Consejo de Ministros mientras la policía anunciaba, por sorpresa, que desmontaba todos los muros contiguos al edificio ministerial, construidos desde los enfrentamientos de Mohamed Mahmoud de 2011. Ante la sucesión de acontecimientos, los partidarios del presidente comenzaron a hablar de golpe de Estado y movilizaron a sus fuerzas en las calles. Obama, desde Tanzania, reclamaba contención a ambas partes.

Mientras tanto, la cuenta atrás planteada por el Ejército seguía corriendo. Al día siguiente, el Tribunal de Casación

13 «Tamarrod: Esteyaba el-qouat el-mosalaha lemataleb el-shaab taklil leyehod el-haraka», *Al-Masry al-Youm*, 01-07-2013.

ordenaba la destitución del polémico fiscal general Talaat Abd Allah, nombrado por Mursi, y el retorno del antiguo fiscal nombrado por Mubarak. Abd el-Maged Mahmoud, no obstante, acabaría rechazando volver al cargo afirmando que con la sentencia se había «logrado el objetivo».[14] Paralelamente, seis personas perdían la vida en los alrededores de la Universidad de El Cairo, donde los Hermanos Musulmanes habían organizado movilizaciones de apoyo al mandatario. Mientras esto sucedía, el todavía presidente Mursi emitía un nuevo comunicado televisivo en que apelaba a la «legitimidad constitucional», que afirmaba que protegería con su vida, y conminaba al Ejército a retirar su «amenaza». Mursi, en un discurso que sonaba a última pataleta, repetía hasta 57 veces la palabra «legitimidad». «Si he defender la legitimidad con mi sangre, estoy preparado», afirmaba. Al día siguiente, volvía a reafirmarse en su hoja de ruta. Ésta pasaba por la creación de un Gobierno de coalición que hasta entonces se había visto incapacitado para formar, que se mantuviera hasta las elecciones legislativas, que prometía celebrar antes de seis meses, así como la creación de una comisión que reformara la Constitución.

Las cartas, sin embargo, parecían ya marcadas. Los gestos de Mursi, teñidos por la desconfianza de los doce meses previos de Gobierno, seguían siendo demasiado tímidos y excesivamente tardíos. A pocas horas de finalizar el ultimátum militar, las Fuerzas Armadas se desplegaban de forma generalizada por el país, cortando vías y carreteras, ocupando también la sede de la televisión pública y rodeando las protestas partidarias de Mursi en la mezquita cairota de Rabaa Adaweya. El Ejército se reunía con las fuerzas políticas del país, incluidos los líderes de Tamarrod, del salafista El-Nour o con el diplomático Mohamed el-Baradei en representación del Frente de Salvación Nacional. También con las principales instituciones religiosas encarnadas

14 «Abd el-Maged Mahmoud yaalan aatzamho el-aatezar aan mansebo knae'b aam», *Shorouk News*, 05-07-2013.

en la figura del Papa copto Tawadros II y el jeque de El-Azahar Ahmed el-Tayeb. Una notable ausencia: ningún representante del partido de Gobierno ni de sus aliados islamistas. El Ejército estaba a punto de decir su última palabra.

Fin del ultimátum

Cuando apenas pasaban cuatro horas de la finalización del plazo impuesto por las Fuerzas Armadas, el general Abd el-Fattah el-Sisi comparecía en la televisión pública. A su lado se encontraban los representantes políticos con los que se había encontrado esa mañana. Después del general, éstos mantendrían su palabra y mostrarían su apoyo a las Fuerzas Armadas. Una puesta en escena que representaba una sofisticación respecto a los sobrios discursos castrenses hasta entonces habituales. Era el esfuerzo militar para hacer creer que los errores del pasado no se repetirían. El-Sisi fue claro: Mursi había «fracasado» en «responder a las demandas globales del pueblo» y ello había provocado que el Ejército se reuniera con las fuerzas políticas y sociales allí presentes para plantear una hoja de ruta que incluía la destitución del presidente y la revocación de la Constitución. El general prometía la aceleración de un proceso de reforma constitucional que llevaría posteriormente a un proceso electoral en un corto plazo que no llegó a definir. El cargo de presidente lo ocuparía, de forma interina, la segunda institución del Estado que, según la Constitución entonces derogada, era el presidente del Tribunal Constitucional, Adly Mansour. Un completo desconocido para la opinión pública que no hacía ni 48 horas que ocupaba el cargo de jefe del Constitucional, un organismo considerado bajo control de los mubarakistas y en el que Mansour ya había sido decisivo para permitir la participación electoral de Ahmed Shafiq en las presidenciales de hacía un año. En el currículo del nuevo presidente interino también destacaban los nueve años en que había servido como asesor gubernamental en Arabia Saudí,

monarquía aliada del antiguo régimen y que se mostraría entusiasmada con la destitución militar de Mursi.

Para entonces, el presidente islamista Mohamed Mursi se encontraba ya bajo confinamiento militar, aparentemente en la sede de la Guardia Republicana, donde se concentrarían sus partidarios para darle muestras de apoyo y rechazar lo que consideraban un golpe de Estado castrense contra el presidente electo. Éste, en una filmación filtrada y proyectada ante sus seguidores, les pidió que desobedecieran el golpe mientras se afianzaba en la legitimidad de las urnas. «Todavía soy su presidente», afirmó. Pero los acontecimientos seguían su curso. Pocos instantes después de emitirse el comunicado militar, se cortaban las señales televisivas de los canales Masr-25, El-Nas y El-Hafez, fruto de una orden excepcional del Ministerio del Interior contra estas emisoras religiosas. Las fuerzas policiales asaltaban también los estudios del canal catarí Al-Jazeera y detenían a los presentadores en directo. En esa misma batida, la policía detuvo a 35 directores y propietarios de canales televisivos religiosos y a 34 líderes más de la Hermandad en todo el país. Las Fuerzas Armadas emitieron la prohibición de abandonar el país contra 270 líderes de la Hermandad, mientras la Fiscalía acababa ordenando la detención de los principales cabecillas de la formación bajo la acusación de incitar a la matanza de manifestantes. Uno de los detenidos fue Saad el-Katatni, hasta entonces presidente del Parlamento, al que un grupo de doce policías vestidos de civil arrestó en su casa al grito de «bienvenido a la nueva era de libertades».[15] El poder militar cerraba el cerco a la formación islamista. Mientras se producían estas detenciones, el abogado de Mubarak aparecía en los medios para exigir que «ahora es el momento de hacer justicia».[16] Sus intereses, y los de su influyente cliente, no tardarían en satisfacerse.

15 «Nagl el-Katatni yu'aked aataqal walado: haney'a leho w fajran lena elaataqal fi sabil watanena», *El-Bedaiah*, 30-06-2013.

16 Aparición televisiva en el canal Tahrir, el 5 de julio de 2013.

Los militares, sin embargo, negaban ninguna razia contra los islamistas y afirmaban, en un nuevo mensaje, que no permitirían que nadie insultara, provocara o abusara de los que pertenecían a la corriente islamista, a los que definía como «hijos de Egipto». El Ministerio del Interior, por su parte, también negaba estar tomando medidas excepcionales y aseguraba estar, simplemente, aplicando la legalidad vigente. Mientras tanto, las calles estallaban de alegría y se convertían en una fiesta ante la caída del presidente islamista, al entender, mayoritariamente, que lo que había sucedido no era un golpe de Estado sino una nueva etapa del proceso revolucionario. Algunos argumentaban, incluso, que ésa era la verdadera revolución. Los egipcios se volvían a plegar, una vez más, a su Ejército. Incluso la Bolsa egipcia apoyó con entusiasmo la medida y registró ganancias por valor de 1500 millones de euros en la primera media hora después del anuncio de la destitución. Ésta era apoyada por figuras de todo el espectro, desde las religiosas a las sociales y seglares, desde la histórica feminista y comunista Nawal el-Saadawy, que afirmaba que el Ejército había respondido a las peticiones de la calle, hasta el millonario liberal Naguib Sawiris, que, eufórico, anunciaba que invertiría en el país como nunca antes lo había hecho. Los militares cambiaban el eje político de la transición. Si en febrero de 2011 éste pasaba por la unión con los islamistas, ahora lo hacía de la mano de los seglares. Unos y otros se intercambiaban los papeles. Ahora, eran los Hermanos Musulmanes los que se negaban a dialogar «con los líderes golpistas», mientras que los seglares defenderían de forma férrea a los militares. Para el diplomático y premio Nobel de la Paz Mohamed el-Baradei, la destitución «corrige el camino de la revolución de enero». Éste alertaba también de que la continuidad de Mursi hubiera conducido al país hacia la guerra civil y hacia un «Estado fascista».[17] Un argumento, el de evitar el conflicto civil, que también había sido empleado por los salafistas de El-Nour y otras voces políticas para justificar la intervención. A pesar de todo, en la calle los enfrentamientos continuaban y las divisiones aumentaban. Esa misma tarde, diez personas perdieron la vida en diferentes refriegas en las provincias. Ese fin de semana, las peleas en las grandes ciudades dejarían una treintena más de muertos.

17 «El-Baradei: Kona sannzaleq ila harb ahleya w netahawel le dawla fasheya dun aazl Mursi», *Al-Masry al-Youm*, 07-07-2013.

Paralelamente, el Sinaí estallaba en lo que parecía una auténtica insurgencia islamista contra la destitución de Mursi. El 5 de julio, dos soldados murieron en un ataque armado en la población de El-Arish. El Gobierno decretó el toque de queda en el Norte de la península y el estado de emergencia en los enclaves turísticos y estratégicos de la zona. Dos días más tarde, dos ataques más en la misma población provocaban la muerte de otro soldado. Los asaltos eran casi diarios. Cuatro militares morirían una semana después en varios ataques en el Norte del Sinaí y, al día siguiente, caerían cuatro más y un civil en un asalto armado a edificios gubernamentales. El líder de la Hermandad Mohamed el-Beltagi haría unas incendiarias declaraciones, en las que llegaría a afirmar que lo que sucedía en el Sinaí era una respuesta popular a la destitución de Mursi y que «se acabará un segundo después de que el general El-Sisi se eche atrás del golpe y el presidente vuelva al poder».[18]

Más allá de si se trataba de un golpe o no, o de su popularidad, la verdad era que el propio Mursi había cavado su propia tumba con una política individualista que había levantado las suspicacias de la oposición. Y su nula capacidad de maniobra, junto con las reticencias históricas, lo habían acabado de hundir. Su salida del Gobierno o la convocatoria de elecciones anticipadas parecían puntos innegociables para la oposición, y la Hermandad, seguramente atemorizada con perder lo que tantos años les había costado conseguir, se negó rotundamente. El

18 Filmación de un aficionado colgada en YouTube: www.youtube.com/watch?v=Flng2f0NdCw

diario oficialista *El-Ahram* afirmaría que los militares habían llegado a ofrecer a Mursi un pasaje a Turquía o Libia, pero que los había rechazado. Incluso declinó la inmunidad jurídica que se le planteó. *The New York Times* también hablaría de otras ofertas hechas al entonces presidente, a través de ministros árabes hablando en nombre de la Casa Blanca.[19] Incluso el propio general El-Sisi habría intentado presionar a Mursi para que cediera el cargo de forma voluntaria. El-Sisi afirmaría que Mursi había rechazado la propuesta militar de convocar la referéndum sobre su continuidad y eso había precipitado la caída. «Dimite tú o te haré dimitir yo», le habría acabado diciendo.[20] La respuesta del mandatario fue siempre la misma, la que había dado en sus últimos discursos: «Por encima de mi cadáver». Y eso, un cadáver político, fue lo que se encontró al final del camino. Mursi se había quedado solo. Ni la Guardia Republicana, su policía personal, hizo nada para defenderlo cuando los soldados fueron a detenerlo y encerrarlo en un emplazamiento que sería una incógnita de Estado durante semanas.

La paciencia de los militares se había agotado. Ni el propio Mursi parecía querer darse cuenta de que el pacto de la transición que le había catapultado a la presidencia del país se estaba haciendo añicos. No lo supo ver venir. El propio ultimátum militar, previo al derrocamiento, le cogió por sorpresa, según sostendría el primer ministro Hisham Qandil.[21] Y cuando se quisieron dar cuenta de ello, ya era demasiado tarde. El islamista se seguía aferrando a una pretendida legitimidad democrática que, de hecho, él mismo se había encargado de dilapidar en su año de Gobierno. Aunque algunos asesores afirmaran que

19 David D. Kirkpatrick: «Mursi spurned deals, seeing military as tamed», *The New York Times*, 06-07-2013.

20 Hamza Hendawi; Maggie Michael: «Mohamed Morsi's final days - the inside story», *The Guardian*, 05-07-2013.

21 Qandil dejaría constancia de su testimonio en un vídeo colgado en YouTube: www.youtube.com/watch?v=-yd1MC0gjkc

ellos habían previsto el derrocamiento ya una semana antes, Mursi había actuado hasta el último momento como si estuviera convencido de que los militares, a quienes creía haber otorgado todo lo que habían pedido, le serían fieles. Ni siquiera con la presión de la Casa Blanca. A pesar de las desavenencias históricas, el presidente creía poder confiar en la sumisión del general El-Sisi, al que había ayudado a coronar un año antes, mientras la cúpula de la Hermandad no parecía esperar una traición tan grande al magno pacto de la transición. Obviaban un hecho fundamental: aquel había sido un pacto contranatura.

El Ejército rompe el pacto de transición

«Tenemos un ojo encima de lo que ocurre en el país y, si alguna vez el pueblo necesita a las Fuerzas Armadas, estaremos en las calles en menos de un segundo.» El jefe del Estado Mayor Sidqi Subhi ya se había pronunciado así en el mes de marzo, tres meses antes de las movilizaciones del 30 de junio. Por entonces, ya se rumoreaba sobre una posible intervención militar que sólo el tiempo acabaría por confirmar.

Para muchos egipcios, el derrocamiento de Mursi no había sido un golpe de Estado. Al contrario, era la legítima respuesta del Ejército para proteger las demandas del pueblo expresadas en la calle. Así de claro. Pero la verdad es que la relación del cuerpo militar con las movilizaciones del 30 de junio no fue tan testimonial. Las Fuerzas Armadas jugaron activamente con las manifestaciones. Primero, difundiendo exaltadas declaraciones en los medios occidentales, en las que afirmaban que eran las movilizaciones más masivas de la historia del país y que había habido hasta treinta millones de personas en las calles,[22] y, posteriormente, divulgando las espectaculares grabaciones aé-

22 Sara Abu Bakr: «Armed Forces spokesman: "National Security, not politics is our focus"», *Daily News Egypt*, 18-07-2013.

reas de las marchas, registradas desde los helicópteros militares, y que fueron ampliamente replicadas por los medios seglares y las redes sociales. Estos gestos no eran nada corrientes dentro del hermético Ejército egipcio y, en comparación con los hechos de febrero de 2011, mostraban un cambio claro de tendencia. No fue el único. Algunos informes mencionaron los encuentros entre los líderes de Tamarrod y miembros retirados de las Fuerzas Armadas, previos al 30 de junio, con el mensaje de mantenerse unidos. Los helicópteros militares jugaban a exaltar de nuevo la unión entre la calle y los cuarteles militares, sobrevolando con banderas patrias el centro de El Cairo, dibujando corazones en el cielo y saludando a los manifestantes cuando pasaban sobre unas protestas que volvían a gritar que Ejército y pueblo eran una sola mano. Después, aún se sofisticarían más: helicópteros del Ejército lanzarían cupones de regalo en las manifestaciones en contra de Mursi y de apoyo al golpe militar durante el mes sagrado de Ramadán.

Es cierto que El-Sisi no era Tantawi y que la cúpula militar de 2013 era notablemente distinta a la Junta Militar que había tomado el poder en 2011. Eran, esencialmente, más jóvenes. Pero habían sido formados y seguían representando a la misma institución inamovible. El tiempo lo demostraría. El tortuoso pacto de transición entre militares e islamistas, forjado contranatura a raíz de la insurrección popular de enero y febrero de 2011 y reafirmado en la elección de Mursi en julio de 2012, se había roto. Los esfuerzos conciliadores habían sido en vano. La paciencia de la cúpula castrense se había agotado ante un presidente Mursi empeñado en caminar solo. «No me cansé nunca de alertar honesta y sinceramente al presidente a lo largo de todo este año», afirmaría el general El-Sisi. La erosión de dos años y medio de desacuerdos y malentendidos terminaron pesando más que las presiones internacionales para estabilizar la situación. Tamarrod sólo dio una oportunidad dorada a las Fuerzas Armadas para ejecutar lo que hacía meses que deseaban.

El-Sisi criticaría que Mursi atacara a la oposición utilizando la religión, que se enfrentara a todos y, sobre todo, que no escuchara sus advertencias, insultando de esa forma al Ejército egipcio. Pero, por encima de todo, dos grandes puntos de conflicto habían hecho saltar las alertas. Uno era el Sinaí, donde preocupaba la manga ancha que Mursi tenía con los grupos yihadistas que allí operaban. El presidente habría, aparentemente, llegado a pedir a las Fuerzas Armadas que detuvieran la represión contra estos grupos, que habían provocado la muerte de numerosos soldados. A cambio, Mursi apostaría por la mediación a través de grupos salafistas para detener temporalmente la violencia en la península. Y funcionó, lo que hizo levantar las suspicacias del cuerpo militar y buena parte de la opinión pública.

Éstos también desconfiaban de la connivencia con el Gobierno de Gaza, en manos de la agrupación hermana Hamás, de donde se creía que venían todos los males. En marzo, las autoridades descubrieron, en uno de los túneles de contrabando con la Franja, una fábrica de falsos uniformes militares egipcios, lo que generó nuevas tensiones entre Ejército y Presidencia. Además, entre las filas militares existía la convicción, casi la certeza, de que los grupos vinculados a Hamás se encontraban tras la emboscada que, en agosto de 2012, había provocado la muerte de 16 soldados egipcios en el paso fronterizo de Rafah. Aquel atentado dio alas al presidente para abordar la reestructuración de la Junta Militar, ocasionando el retiro de Tantawi y el nombramiento de El-Sisi. Mursi habría hecho todo lo posible para encubrir los nombres de los encausados, aumentando el recelo castrense. La desconfianza entre militares e islamistas salía a la luz. Para el Ejército, Mursi estaba sobreponiendo los intereses de la Hermandad por encima de los del país. Las teorías conspirativas de los partidarios del antiguo régimen, que defendían que episodios clave de la revuelta de 2011 habían sido ejecutados por militantes de la palestina Hamás y la libanesa Hezbolá, ganaban peso dentro del cuerpo mi-

litar. De hecho, una de las primeras acciones que el nuevo Gobierno emprendió fue cerrar el paso fronterizo de Rafah e intensificar la lucha contra los túneles de contrabando, estrangulando de nuevo el ya de por sí asfixiante cerco sobre la Franja de Gaza. En pocas semanas, el tráfico de bienes por los túneles se redujo un 85%.[23]

El 16 de mayo, un mes y medio antes de la destitución de Mursi, tres policías y cuatro soldados habían sido secuestrados en el Norte del Sinaí. Este nuevo ataque a las fuerzas de seguridad egipcias volvió a levantar chispas. Entre bastidores, se rumoreaba que el mandatario podría utilizarlo, como había hecho durante el mes de agosto anterior, para destituir al general El-Sisi. Hacía tiempo que se rumoreaba en los pasillos que el islamista quería acabar con el general al frente de la cúpula militar. El jefe de las Fuerzas Armadas había sido alertado de que asesores presidenciales habían tanteando a oficiales del Ejército con el aparente objetivo de destituirlo del cargo. Mursi se habría acercado incluso al jubilado Tantawi y al jefe de la Guardia Republicana, Mohamed Zaki, con esta intención. El presidente islamista lo negaría todo ante el general, afirmando que se trataban de «simples rumores» y «palabrería de periódicos». Pero esto se volvió otro gran punto de conflicto entre militares y presidente: el temor a que los Hermanos Musulmanes intentaran aplicar a la cúpula castrense lo que estaban haciendo con el resto de instituciones estatales. Según algunas informaciones, los servicios de inteligencia egipcios habían interceptado llamadas telefónicas entre el presidente y miembros de la Hermandad que revelaban estos planes. Enfadado, Mursi encargaría al jefe de la Guardia Republicana la detención de los periodistas que habían filtrado estas informaciones y habían provocado la crisis con los militares.

La gota que colmaría el vaso llegó pocos días antes de las marchas del 30 de junio. El 26 de junio, ni 48 horas después

23 Jared Malsin: «Closure from below», *Mada Masr*, 25-09-2013.

de que el Ejército hubiera exigido a través de un comunicado la conciliación entre las fuerzas políticas, Mursi ofrecía un inesperado discurso televisado en que amenazaba a diestro y siniestro a medios y oposición. Además, el entonces presidente emitía aquel mensaje rodeado de las altas instituciones estatales, incluida la propia cúpula militar y el mismísimo El-Sisi, que se vio forzado a fingir ante el mandatario. Aquello no gustó al general. Mientras le exigía conciliación, Mursi caminaba en dirección contraria. La cuerda ya estaba rota. El 30 de junio y el movimiento Tamarrod sólo aportaron la excusa perfecta.

Un nuevo ejecutivo liberal

El 4 de julio, Adly Mansour, desde hacía tres días presidente del Tribunal Constitucional, juraba el cargo como presidente interino de la República Árabe de Egipto. En su discurso de investidura destacaban los vivas, entusiásticamente aplaudidos por el público, al Ejército, la justicia, la policía y los medios de comunicación. Estos contrastaban con la pasividad de los asistentes frente a los vivas lanzados por el presidente interino al «pueblo revolucionario». Una de las primeras decisiones del nuevo mandatario fue una declaración constitucional de dos puntos: la disolución del Senado, de mayoría islamista, y, significativamente, el nombramiento de un nuevo jefe de los servicios secretos, Mohamed Farid el-Tohami.

Mansour guardaría un perfil bajo, casi a la sombra de los medios y del poder militar. De hecho, era un completo desconocido. Casi tres semanas después de jurar el cargo, una encuesta revelaba que el 40% de los egipcios no sabían el nombre de su presidente.[24] Las cifras eran aún más escandalosas res-

24 «Poll: 40% do not know interim president, 70% do not know PM», *Egypt Independent*, 23-07-2013.

pecto al primer ministro: un 70% de los encuestados reconocían no tener idea de quién era su jefe de Gobierno. Un jefe de Gobierno que sería nombrado el 9 de julio, tras una semana cargada de rumores y nombres en la quiniela.

Primero se hablaría del regreso, una vez más, de Kamal el-Ganzouri, el primer ministro de las privatizaciones de los años noventa y de la Junta Militar en 2012. Él mismo lo descartaría asegurando que era mejor darle la opción a alguien nuevo. Posteriormente, sonaría con fuerza el nombre de Mohamed el-Baradei. Incluso los jóvenes de Tamarrod emitirían un comunicado calificando el nombramiento de «victoria de la revolución».[25] Los Hermanos Musulmanes reaccionaron con ira y afirmaron que eso consumaba el golpe de Estado, volviendo a hacer evidentes las reticencias islamistas hacia el premio Nobel. Pese a que en tiempos de Mubarak la Hermandad había sido la principal defensora de la opción Baradei, el propio diplomático afirmó en un momento que Mursi habría amenazado en 2011 a los militares con «quemar Egipto» si se le nombraba primer ministro. No serían los únicos. Los salafistas de El-Nour amenazaban con boicotear la elección ya que ésta iba «contra los acuerdos que cerramos».[26] La opción Baradei quedaba descartada. El nombre que apareció entonces fue el de Ziad Baha el-Din, antiguo presidente de la Bolsa egipcia, antes de que se propusiera a Samir Radwan, antiguo ministro de Economía y negociador con el FMI en la etapa de la Junta Militar. Todos eran nombres de economistas y personalidades partidarias de los acuerdos con las instituciones financieras globales, lo que representaba un claro continuismo político. Finalmente, se acabaría nombrando a otro hombre en la misma línea: Hazem Beblaui, el también ex ministro de Economía en tiempos de la Junta Militar, sería el

25 «Tamarrod: taaiin el-Baradei ra'esan lel-wozara' intisar lel-thawra», *Shorouk*, 06-07-2013.

26 «El-Nour: ijtiar el-Baradei ra'esan lel-hokoma yojalef etefaqena maa el-qouat el-mosalaha», *Shorouk*, 06-07-2013.

nuevo jefe de Gobierno. Beblaui combinaba el cargo de miembro fundador del Partido Socialdemócrata egipcio con el de asesor del liberal Fondo Monetario Árabe. Generaría polémica un artículo suyo escrito en 2010 en que apoyaba la participación electoral de Gamal Mubarak, de quien alababa sus capacidades y conocimientos. Mohamed el-Baradei, el primer ministro vetado por los salafistas, ocuparía el cargo de vicepresidente de Relaciones Internacionales del presidente Mansour.

El nuevo mandatario formó gabinete con rapidez: tres carteras irían a parar a miembros del cuerpo policial y varias más a miembros de las Fuerzas Armadas, incluido el general El-Sisi como ministro de Defensa. Destacaba la presencia de varios ministros de la era Mubarak, incluido Ibrahim Demery, el ministro de Transportes que en 2002 se vio obligado a dimitir a raíz de un accidente de tren que provocó la muerte de 364 ciudadanos; o Doria Sharaf el-Din, la nueva ministra de Información que había encabezado la censura cultural en la época del Partido Democrático Nacional. A pesar de las promesas de buscar carteras para los islamistas, Mansour fue incapaz de cumplirlas, lo que provocó que los salafistas de El-Nour, excluidos del Gobierno, lo catalogaran como un «Gobierno decepcionante».[27]

Pero este ejecutivo destacó, ante todo, por una mayoría liberal y por el retorno de los hombres de ECES. La cartera de Finanzas, recayó en manos de Ahmed Galal, el que fuera durante ocho años director ejecutivo y de investigación del *think tank* liberal creado en la era Mubarak. La cartera de Inversiones volvía a Osama Saleh, quien en 2009 había presidido la Organización de las Zonas Francas del país y que había sido sacrificado políticamente por los Hermanos Musulmanes, en mayo de 2013. La vicepresidencia del Gobierno acabaría en posesión del antiguo jefe de la Bolsa egipcia, Ziad Baha el-Din.

27 «El-Nour: Tashkil el-hokoma mojeib lel-amal», *Al-Masry al-Youm*, 18-07-2013.

Era, en definitiva, un ejecutivo claramente continuista en su política económica.

Una de las aparentes victorias de los movimientos de izquierda fue el inesperado nombramiento de Kamal Abu Eita como ministro de Trabajo. Histórico líder sindical y presidente de la Federación de Sindicatos Independientes, su llegada al cargo se producía tras el respaldo entusiasta del golpe y de defender, una vez caído Mursi, que «los héroes de la huelga lo serán ahora de la producción». Para muchos, la presencia de Eita era demasiado simbólica y un mal calculado intento de los militares de domar al sector sindical y ayudar al regreso de los obreros al trabajo. Una vez en el puesto, Eita fue incapaz de impedir la represión militar contra los trabajadores. El 12 de agosto, las fuerzas castrenses y policiales intentaban desalojar una protesta fabril en la empresa de Acero de Suez, deteniendo a dos trabajadores. A pesar de las promesas de Eita de intervenir para solucionar la crisis, prometiendo que no volvería a su casa hasta que se liberara a los detenidos, una semana después, miembros del Ejército asaltaban de madrugada la casa de cuatro obreros, detenían a dos de ellos y amenazaban con el despido a todos aquellos que no volvieran al trabajo, lo que provocaría el fin violento de la huelga. Incidentes similares se repetirían en el futuro. Los mismos tanques volverían a servir para desalojar una acampada obrera en Mahala el-Kobra a finales de agosto.

Los economistas liberales, e incluso el secretario de Estado de la Casa Blanca John Kerry, aplaudieron el nuevo ejecutivo, que calificaron como uno de los más preparados de los últimos tiempos. La agencia de calificación Standard & Poor's sería una de las que mostraría más entusiasmo por el cambio político en Egipto. Afirmaba que «la etapa del fracaso» había sido superada, mientras aseguraba estar a la espera de la estabilidad futura de la economía egipcia. Al fin y al cabo, los primeros objetivos en la agenda del nuevo Gobierno no serían muy diferentes de los anteriores: recuperar la economía a través de políticas liberales encabezadas por el recorte del déficit fiscal y

la eliminación de barreras y obstáculos a la producción para acelerar las inversiones ya en curso.

El nuevo ejecutivo, sabiéndose interino, no intentó poner en marcha grandes y arriesgadas reformas impopulares, sino que mantuvo la línea política abierta por la Hermandad. Ni dos semanas después de formarse el Gobierno, el ministro de Finanzas anunciaba que seguiría con el recorte a las subvenciones energéticas y pondría en marcha el programa de las cartillas de racionamiento planteado por el anterior ejecutivo islamista. De hecho, el ministro de Finanzas, Ahmed Galal, seguiría hablando de la abolición de los subsidios energéticos en dos o tres años. Un programa que, de hecho, formaba parte de las propuestas de Mursi para satisfacer las demandas del FMI. En realidad, las nuevas instituciones seguían calificando el acuerdo con el Fondo como crucial para el restablecimiento económico. El Fondo había anunciado el cese de las conversaciones a raíz del golpe y exigía un reconocimiento internacional de las autoridades interinas antes de reanudar las negociaciones. Pero la aceptación tácita de la nueva realidad política hizo que éstas se retomaran a partir del mes de agosto. Al menos así lo admitía la misma Christine Lagarde, presidenta del FMI, cuando hablaba en una entrevista de la existencia de «conversaciones técnicas» en curso entre la organización y las autoridades egipcias más allá del golpe.[28] Aparentemente, se reiniciaron las negociaciones tras recibir luz verde de William Burns, vicesecretario de Estado de la Casa Blanca. Mientras tanto, el vicepresidente Baha el-Din lanzaba la propuesta de solucionar el desbarajuste económico con un «Plan Marshall a la egipcia». Los primeros en socorrer a Egipto serían las petromonarquías árabes, que apoyaron con entusiasmo el cambio de poder en El Cairo.

28 «Lagarde urges global coordination of QE Exits», Bloomberg, 23-08-2013 [vídeo].

Riad aplaude

«El Ejército ha sacado a Egipto de un túnel del que sólo Alá conocía sus dimensiones y consecuencias.» El rey Abd Allah Ibn Abd el-Aziz, guardián de las dos mezquitas y máxima autoridad de Arabia Saudí, se mostraba eufórico con el golpe en Egipto.[29] El derrocamiento de Mohamed Mursi suponía una nueva sacudida al rompecabezas de Oriente Próximo. Y éste volvía a poner a El Cairo en la órbita de Riad. Exactamente como antes de enero de 2011. Las petromonarquías del Golfo recibían con entusiasmo la caída de los Hermanos Musulmanes porque significaba el fin de su proyecto político y regional. El ascenso de la Hermandad, y su retórica del califato, era vista con recelo, al creer que podía poner en peligro la supremacía wahabi-saudí en el mundo suní y abrir, a la vez, frentes de oposición interna en las herméticas monarquías pérsicas. Ni una semana después, ya mostraban su voluntad de apoyar la nueva situación política prometiendo cerca de doce mil millones de dólares en donaciones en forma de petróleo, ayudas económicas y préstamos a las autoridades egipcias. Unas aportaciones que contrastaban con los cerca de siete mil millones de dólares que Catar había entregado al Gobierno de los Hermanos Musulmanes. Riad prometía ahora cinco mil millones de dólares, los Emiratos Árabes prometían tres mil y Kuwait aportaba cuatro mil más. A diferencia de lo ocurrido tras la caída de Mubarak, cuando los montos prometidos nunca llegaron, en quince días ya se habían hecho entrega de cerca de la mitad de los préstamos. Kuwait no tardó ni una semana en ingresar dos terceras partes de la ayuda económica prometida al Banco Central, y una semana después hacía llegar a Egipto 200 millones de dólares de crudo y diesel para paliar la grave crisis de suministros que sacudía el país en los últimos meses. Quince

29 «El-Saaodeya: El-yeish ajray Masr men nafaq maghol el-abaad», Al-Arabiya, 04-07-2013.

días más tarde, los Emiratos Árabes enviaban seis embarcaciones más llenas de combustible. Los depósitos monetarios de las monarquías árabes permitieron a Egipto rescatar de la bancarrota total las reservas exteriores y le ayudaron a tomarse con más tranquilidad el asunto del préstamo del FMI.

Embriagadas de euforia, las autoridades saudíes iniciaban internamente un nuevo cerco a grupos considerados cercanos a la Hermandad y detenían a los populares Mussen el-Awajj y Mohamed el-Aref, considerados próximos al grupo islamista. «Los Hermanos Musulmanes se han extraviado y hay que aleccionarles», afirmaba el jefe de la policía de Dubái, Dahi Khalfan, uno de los más beligerantes con la Hermandad.[30] Los Emiratos habían acogido durante esos dos años y medio a los fugitivos más destacados del mubarakismo y habían sido acusados por los Hermanos Musulmanes de estar planeando un complot en su contra. Ahora, una vez caído Mursi, en todo el mundo árabe se cerraba el cerco sobre todos los grupos cercanos al proyecto de la Hermandad y se creaban, a menudo bajo el paraguas de las monarquías del Golfo y sus aliados, nuevas campañas Tamarrod de inspiración egipcia. Así nacerían en Túnez, contra el Nahda, en Marruecos, contra Justicia y Desarrollo o, en Gaza, contra Hamás, entre otros. En Palestina, el proceso de reconciliación entre Fatah y Hamás volvió a dinamitarse a raíz del golpe. Desde Ramallah, se iniciaba una escalada en la confrontación contra la formación islamista. Para alimentar las conspiraciones en la mente de los militares egipcios, Fatah filtró unos documentos señalando la implicación del Gobierno de Gaza en la muerte de los soldados egipcios y otros episodios de violencia en Egipto. Todo con la financiación de Catar. Hamás, por su parte, lo negaría todo y acusaría a Fatah de fabricar esos informes con las autoridades golpistas para cercar al movimiento islamista.

30 «Dhahi Jalfan: El-Ijwan dhalau el-tareq [...]», *Al-Masry al-Youm*, 14-07-2013.

Catar, hasta entonces la gran aliada regional de la Hermandad, experimentaba un sorprendente cambio de rumbo. La Agencia de Noticias de Catar, afín al Gobierno, emitía el mismo miércoles del golpe un breve comunicado del nuevo ministro de Asuntos Exteriores catarí, en el que afirmaba que «Catar seguirá apoyando a la hermana Egipto» y en el que alababa el papel de las Fuerzas Armadas en la defensa de la seguridad nacional.[31] Pocos días después, el emir enviaba felicitaciones al presidente interino Adly Mansour por su toma de posesión del cargo. A pesar de la evidente pérdida de peso estratégico en el país después del cambio de tornas, Catar continuaría con sus proyectos de ayuda económica. Sólo haría tímidas presiones por la liberación de los presos políticos, que consideraba clave para superar la crisis. La destitución de Mursi había llegado tan sólo una semana después de la sorprendente renuncia al trono del emir en beneficio de su hijo Tamim bin Hamad al-Thani. Probablemente el reto le venía demasiado grande a un joven e inexperto monarca que parecía verse sobrepasado por los acontecimientos. La credibilidad de la, hasta entonces, impresionante política exterior del emirato se puso en duda. Pocos días después de la caída de Mursi, Catar experimentaría otro revés. En Siria, la Coalición Nacional Siria, uno de los principales grupos opositores, nombraba a Ahmad Jarb, considerado alguien cercano al Gobierno de Riad, como nuevo presidente en sustitución del hombre de Doha. El pequeño emirato iba perdiendo gradualmente el enorme peso político ganado con la denominada Primavera Árabe.

Por el contrario, uno de los más beligerantes con el derrocamiento de Mursi fue el otro gran aliado de la Hermandad, el presidente turco Racyp Tayeb Erdogan. Éste veía con preocupación la caída en manos militares de su aliado regional en un momento en que las protestas populares en las calles de Estambul y Turquía lo habían desgastado. La destitución de Mursi

31 «Qatar affirms its support to egyptian people's options», *Qatar News Agency*, 04-07-2013.

era «la peor pesadilla» de Erdogan. El primer ministro turco atacaría a los países occidentales, a raíz de sus tibias reacciones frente al golpe militar. «¿Qué ha pasado con sus ideales democráticos?», afirmaría visiblemente enervado.[32] Erdogan se negó a recibir a las delegaciones diplomáticas egipcias, mientras reclamaba una intervención de las Naciones Unidas en el país y seguía acusando a la Unión Europea de hipocresía y doble moral. El Cairo y Ankara abrieron una guerra diplomática que ocasionó repetidos toques de alerta de las autoridades egipcias al embajador otomano, por lo que consideraban una interferencia turca en los asuntos internos del país, antes de que ambos países llamaran a consultas a sus respectivos embajadores en Egipto y Turquía. En paralelo, el 5 de julio, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana suspendía la participación de Egipto en el organismo a raíz del derrocamiento de Mursi, que calificaba como «inconstitucional». Los países africanos, a pesar de las reticencias de Uganda y Yibuti, trataban de alejar el fantasma del golpismo de tierras africanas. Mientras tanto, el mundo entero intentaba hacer malabares con la definición del derrocamiento de Mursi.

La Casa Blanca se ahoga

Estados Unidos mostraría una vez más estar completamente desbordado y descolocado por los acontecimientos. El pacto entre militares e islamistas había sido apadrinado por Washington, y su fracaso era un duro revés a las políticas de la Casa Blanca. La Administración estadounidense intentaría sin éxito mediar para solucionar la crisis y volver a militares e islamistas al entendimiento. Con aliados a ambos lados, intentó hacer imposibles malabarismos que fueron hipócritamente señalados en Egipto,

32 Daniel Dombey: «Erdogan attacks west's reacton to Morsi's overthrow», *Financial Times,* 05-07-2013.

por unos y otros, para demostrar una connivencia política del otro bando con el Gran Hermano. Al fin y al cabo, Washington había apoyado a ambos lados durante aquella transición y ahora se sentía incómoda ante la opinión pública volviendo a legitimar un golpe de Estado, por muy popular que éste hubiera sido.

Justo después de producirse el derrocamiento, Obama instó a los militares a transferir sin demora el poder a una entidad civil democráticamente elegida. Pero, a la vez, se negaba a calificar lo sucedido como golpe de Estado, a pesar de la inconstitucionalidad del acto. Tildarlo de eso, según la legislación estadounidense, hubiera implicado poner fin a la ayuda económica y militar a Egipto, lo que según palabras posteriores del portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, «no es del interés de Estados Unidos». Obama, a pesar de todo, amenazó en el mismo comunicado con revisar esta ayuda, lo que se convertiría en un tema de tertulia política durante los siguientes días y semanas. Senadores republicanos, encabezados por el ex candidato a la presidencia John McCain, presionarían a Obama para que cerrara el grifo. «No podemos repetir los errores, debemos cerrar la ayuda», afirmó dicho senador a los medios.[33] Pero sólo dos días después del golpe y de las declaraciones del presidente, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos llamó a su homólogo egipcio para tranquilizarlo, afirmando que la ayuda no se acabaría. Tres días más tarde, esta postura sería defendida de nuevo por el portavoz de la Casa Blanca en una rueda de prensa. La misma Cámara de Representantes reafirmó el mantenimiento de la ayuda militar, en una sesión el 18 de julio, aunque también aprobó una moción para exigir al Gobierno egipcio «compromiso con una democracia pluralista e inclusiva». De hecho, esa ayuda militar no sólo no se acabó: a pesar del fuerte debate, el 10 de julio se anunciaba el inminente envío de cuatro aviones F16 a Egipto,

33 «McCain yedaau ltaaliq el-mosaadat el-amerikiya le Misr besabab aazl Morsi», *Al-Masry al-Youm*, 06-07-2013.

mientras que los entrenamientos conjuntos, bajo el programa «Estrella brillante», retomaban su curso. A pesar del discurso antiamericano imperante en Egipto, el general El-Sisi mantenía contacto regular con su homólogo en Washington, Chuck Hagel; hasta 16 llamadas en menos de dos meses, desde la caída de Mursi.

La Casa Blanca debió hacer auténticos malabarismos para defender que lo que sucedía en Egipto no era un golpe de Estado. Un vistazo a los *briefings* de prensa diarios con la portavoz de la Secretaría de Estado de la Casa Blanca, Jen Psaki, dan buena prueba de ello. «Hay millones de personas en Egipto que no lo ven como un golpe; lo estamos analizando», afirmaba ante la presión de los periodistas.[34] Por si acaso, el secretario de Estado John Kerry empezó a hacer declaraciones aplicando la política de hechos consumados. Por un lado, pedía a los partidarios de Mursi que detuvieran las protestas para no «obstaculizar el avance de Egipto», mientras que en una polémica entrevista en el canal paquistaní GeoTV afirmaría que los militares egipcios, cuando derrocaron a Mursi, «estaban restaurando la democracia».

El tema de la ayuda económica y militar a Egipto se convertiría en un irreal tema de confrontación política. Irreal porque la Casa Blanca no se podía plantear seriamente el fin de esta colaboración. Por un lado, Tel Aviv, que no ocultaba su satisfacción por la caída de la Hermandad en Egipto, presionaba a Washington para que la ayuda no se recortara. En el interés de Israel, puesto que disminuir esa ayuda podía afectar negativamente la seguridad de la entidad sionista, especialmente en la sensible península del Sinaí, y poner en riesgo el tratado de paz de Camp David al que la ayuda iba vinculada. El primer ministro Netanyahu así se lo expresó al secretario de Estado John Kerry, mientras que el ministro de Defensa israelí, Moshe Yaa-

34 «Daily press briefing. Jen Psaki», US Department of State, Washington, 08-07-2013.

lon, hacía lo propio con su homólogo en la Casa Blanca. Para Estados Unidos, el Ejército era «la única fuerza estabilizadora del país», según palabras del representante republicano Mike Rogers, que defendía la continuidad de la ayuda.

Por otra parte, el cese de esta colaboración podía acarrear importantes costes. La Administración reconocía en el Congreso que suspender la ayuda militar a Egipto podía suponer dos mil millones de dólares en penalizaciones a las empresas armamentistas por incumplimiento de contrato;[35] una multa a la que la Casa Blanca no parecía dispuesta a hacer frente. El Ejército egipcio era claramente dependiente de dicha ayuda, sobre todo en materia de entrenamiento y mantenimiento del sobredimensionado equipamiento aéreo de que disponía y que no parecía suficientemente preparado para utilizar. Pero la Administración estadounidense también estaba ligada a ésta. Por si acaso, Arabia Saudí afirmó que si las aportaciones no llegaban, los países del Golfo las suplirían con entusiasmo.

En paralelo, la Unión Europea no tuvo un posicionamiento muy diferente. «Lo que ha sucedido en Egipto es más complejo que un golpe de Estado», afirmaba el enviado especial de la Unión Europea, Bernardino León.[36] Aparte del antiguo *premier* británico Tony Blair, que aseguraba que «la intervención militar protege a Egipto del caos»,[37] los máximos mandatarios europeos se limitaron a hacer tímidas críticas y a exigir, eso sí, la liberación de Mursi. Cathrine Ashton, la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, pidió a los líderes de la Hermandad la aceptación del golpe y la destitución del presidente como una realidad. Así lo

35 Eric Schmitt: «Cairo Military firmly hooked to US lifeline», *The New York Times*, 20-08-2013.

36 Luis Doncel: «Lo ocurrido en Egipto es más complejo que un golpe de Estado», *El País*, 20-08-2013.

37 «Blair: la yomken el-tajali aan Misr w el-tadajol el-aaskary hami el-balad men el-fawda», *Al-Masry al-Youm*, 18-07-2013.

comunicó al mismo presidente Mursi, con quien se le concedió una extraña entrevista en que la diplomática europea hizo de fracasada mediadora entre islamistas y militares. Como si se tratara de una película de acción, la representante europea afirmó desconocer dónde la habían conducido los militares, manteniendo la incógnita sobre el lugar de detención del recién destituido presidente del país.

El mubarakismo renace

Mientras el cerco a los Hermanos Musulmanes proseguía, el 13 de agosto juraban el cargo los nuevos gobernadores tras la reestructuración propuesta por el presidente interino. De los seis que mantenían el puesto cinco eran miembros de las Fuerzas Armadas ya nombrados por Mursi. Entre los 18 que tomaban posesión, ni una mujer, once eran militares jubilados y dos más lo eran del cuerpo policial. De 27 provincias, 18 estaban en manos de militares o policías. El resto de gobernadores serían acusados de tener fuertes vínculos con el disuelto Partido Democrático Nacional de Mubarak, incluido el nuevo gobernador de Kafr el-Sheyj, acusado de manipular las elecciones de 2005 en favor del dictador depuesto. Las protestas impidieron que el gobernador de Minufiya tomara posesión del cargo, que quedó vacante después de que los activistas lo tildaran de mubarakista. Algo similar sucedería con el nombramiento de Sami Sedhom como vicegobernador de Sharqeya, donde decían que había tenido un papel prominente durante la era Mubarak como represor y torturador para el cuerpo policial.

La destitución de Mursi no sólo ponía otra vez a los militares en el primer plano de la esfera política, sino que también reconstruía las pocas estructuras del antiguo régimen sacudidas a raíz de la insurrección del 25 de enero de 2011. Los partidarios del mubarakismo habían ganado la partida ideológica y volvían por la puerta grande. En esto había colaborado activa-

mente buena parte de la oposición seglar, que abrió la veda a la restauración política de los llamados *fulul*. El Frente de Salvación Nacional aceptó, en su lucha contra Mursi, la cooperación con destacadas figuras del mubarakismo tanto político como mediático. Semanas antes del golpe, Mohamed el-Baradei abría la posibilidad a que figuras del antiguo régimen formaran parte de su partido El-Dostour, mientras que el nasserista Sabahi afirmaría que la batalla contra los *fulul* era secundaria ante la lucha contra la Hermandad. Las fuerzas seglares dieron alas a los mubarakistas y a los nostálgicos del antiguo régimen en general y estos aprovecharon la oportunidad con creces, intentado reapoderarse de las estructuras de poder que habían perdido a raíz de la caída de Mubarak.

Entre éstas, se encontraba el cuerpo policial, uno de los más beneficiados por la revuelta popular de 2011. Pocos días después del derrocamiento de Mursi, varios miembros de este cuerpo, dispersados por el presidente islamista dentro del Ministerio del Interior, retornaban a sus lugares de trabajo originales. Era el primer paso de la retrorreforma del cuerpo que algunos oficiales tanto deseaban. La policía, que había mostrado su fervor al apoyar las movilizaciones del 30 de junio y la destitución de Mursi, retornaba con fuerza, reanudaba con entusiasmo su trabajo en la calle y recuperaba el espíritu previo al 25 de enero de 2011. El 29 de julio, el ministro del Interior anunciaba una reestructuración del cuerpo policial que incluía a 3744 oficiales y el movimiento de diez directores de seguridad. Ésta, definida como «una de las más grandes de la historia del Ministerio», provocaba el reintegro al cuerpo de catorce oficiales retirados a raíz de la revolución y que regresaban para «luchar contra el terrorismo».[38] Precisamente en nombre de esta lucha, el ministro anunciaba el retorno de la unidad de monitorización de las actividades políticas y religiosas, que se había disuelto a raíz de la revolución de

38 «El-dajleya taaid 14 men el-zobat am el-dawla lemoayha el-erhab», *Al-Watan*, 25-07-2013.

2011. La policía volvía a su lugar anterior a la revuelta. Así lo manifestaba el propio ministro Mohamed Ibrahim, prometiendo el regreso de la seguridad de los tiempos de Mubarak, cuando la polémica por el uso policial de la fuerza bruta se instaló de nuevo en algunos medios.

Aunque los partidarios del derrocamiento afirmaban por activa y por pasiva que no se trataba de un golpe militar, el tiempo no hacía más que reforzar la presencia de las fuerzas castrenses en todas partes. Se repetían de nuevo los juicios por difamación al jefe de las Fuerzas Armadas y los tribunales militares volvían a tomar parte activa en los juicios a civiles. A principios de septiembre, un miembro de la Hermandad sería condenado a cadena perpetua y 48 más, a penas de entre cinco y quince años de prisión por un tribunal castrense. De cara a proteger al cuerpo militar, el presidente interino Adly Mansour emitió un decreto por el cual se eliminaba el juramento de fidelidad al presidente en la toma de posesión de los oficiales del Ejército. Se quería evitar, a toda costa, repetir el escenario Mursi en un futuro, y se blindaba de nuevo al Ejército.

Por su parte, la judicatura iniciaba su particular caza de brujas abriendo investigaciones contra 75 jueces, acusados de actuar de forma sesgada a favor de los Hermanos Musulmanes. Mientras tanto, la Administración retornaba a sus cargos directivos a varias figuras del Gobierno mubarakista, y los procesos de amnistía a personajes del antiguo régimen seguirían, lógicamente, su curso. El magnate del acero, Ahmed Ezz, o el ex ministro de Vivienda, Ibrahim Soleiman, serían liberados durante el mes de agosto, mientras que el ministro de Información, Anas el-Fekky, era absuelto de sus cargos el 30 de julio. Animados por el ambiente contrario a los grupos islamistas, los medios incitarían de nuevo los viejos discursos: se pediría mano dura a las autoridades en aras de la lucha contra el terrorismo, se reclamaría reinstaurar la prohibición de crear partidos con base religiosa y se volvería a escuchar el mensaje racista que justificaba el cierre fronterizo de Gaza o la polémica deporta-

ción de 276 refugiados sirios, en el aeropuerto de El Cairo, cuando huían del conflicto en su país. En la denominada «guerra contra el terrorismo», los medios legitimaron toda acción militar, ofreciendo parte de sus parrillas a vídeos de promoción y exaltación de las Fuerzas Armadas. Se censuraron artículos críticos con el Ejército y el cuerpo policial lanzó llamamientos a denunciar a aquellos que amenazaran u ofendieran a las autoridades militares. Al cabo de poco tiempo, todo valdría.

El mandato de El-Sisi

Al amanecer del 8 de julio, a pocas horas del inicio del mes sagrado de Ramadán, las puertas de la sede de la Guardia Republicana se convirtieron en el escenario de un nuevo capítulo sangriento de la transición egipcia. Al menos 51 personas perdieron la vida, entre ellas un oficial del Ejército, en violentos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los partidarios del presidente depuesto. Mientras unos y otros se acusaban de tirar la primera piedra, varias filmaciones mostraban a soldados disparando desde las azoteas y, alguna otra, a manifestantes islamistas empuñando armas de fuego de bajo calibre. La desproporción entre ambos bandos se hacía evidente en el recuento de víctimas. Aquella acción militar provocaría la rotura del frágil pacto del golpe y favorecería la salida temporal del proceso de los salafistas de El-Nour. También levantó las críticas de El-Baradei, para entonces ya vicepresidente, que exigió investigaciones independientes urgentes mientras afirmaba que «la violencia no es el camino». Los militares respondieron sarcásticamente. «¿Uso excesivo de la fuerza? Hubiera sido excesivo si hubiéramos matado a 300 personas», afirmaría el portavoz militar a la prensa.[39]

39 Alain Gresh: «La revolución, a la sombra de los militares», *Le monde diplomatique en español*, n.º 214, p. 8., agosto 2013.

La respuesta del nuevo presidente interino fue acelerar un decreto constitucional en el que se marcaba la hoja de ruta política. El artículo 33 del mismo establecía que habría un nuevo presidente y una nueva Constitución antes de seis meses, y un nuevo Parlamento en nueve. El decreto simplemente reciclaba buena parte de la polémica Constitución aprobada por los islamistas en enero y volvía a dar poderes ejecutivos y legislativos al presidente, incluso superiores a los que tenía Mursi antes de ser depuesto. El texto tampoco suprimía los tribunales militares ni el artículo primero, según el cual la *sharia* era la base de la legislación del Estado. También levantaba suspicacias el hecho de que la comisión encargada de modificar la Constitución estuviera formada por diez miembros elegidos a dedo provenientes de la judicatura. Lejos del consenso mínimo, el texto topaba con la oposición de un espectro muy grande de fuerzas políticas y sociales. La iglesia copta, el Frente de Salvación Nacional, el grupo 6 de abril, los salafistas de El-Nour o los rebeldes de Tamarrod mostraban, por un lado o por otro, sus reticencias ante el redactado propuesto por Mansour. Pero, en la lucha contra las fuerzas islamistas, la mayoría de estos grupos terminarían haciendo piña junto a los militares.

Aquello no calmó a la calle. Ni en pleno mes de Ramadán. El país caminaba hacia la polarización total y la violencia se abría paso. El 21 de julio, enfrentamientos armados en las calles de todo el país volvieron a dejar doce muertos. Uno de ellos era fruto del ataque armado que partidarios del presidente depuesto habían protagonizado contra los manifestantes seglares de la plaza Tahrir. Los defensores del derrocamiento militar de Mursi justificaban el carácter violento de las protestas, denunciaban la presencia de gente armada en las acampadas islamistas, incluida la existencia de centros de torturas, mientras se difundían grabaciones en que se veía a niños sosteniendo carteles en que decían ser «proyectos de mártires» de la causa islamista. Las denuncias de torturas en la acampada serían insinuadas por Amnistía Internacional, que exigió in-

vestigaciones, mientras desde el escenario del campamento se escuchaban incendiarias amenazas de acabar con los militares, con los coptos y hasta con los comunistas, generalmente en boca del ex diputado de Gamaa Islamiya Essam Abd el-Maged.

El 24 de julio, una bomba con temporizador explotaba en la comisaría central de Mansoura. En el incidente, calificado de «terrorista» por las autoridades, murió un soldado y resultaron heridos una decena más. Los primeros informes hablarían del alto nivel de tecnología empleado por los asaltantes. Al día siguiente, con uniforme y gafas de sol, el general El-Sisi se dirigía a los egipcios: «Estamos en una encrucijada. Todo lo que se nos ha ordenado, lo hemos hecho. Nunca os he pedido nada. Pero, sinceramente, ahora pido a los egipcios una cosa: el próximo viernes, salid a la calle todos los egipcios puros y honorables. Salid a darme un mandato para enfrentarme a la violencia y el terrorismo inevitables». El general abría la puerta de la guerra a la Hermandad e inauguraba así una particular versión egipcia de la «guerra al terror» de George Bush. Aunque las palabras de El-Sisi eran casi una declaración de guerra civil, buena parte de la sociedad respondió con entusiasmo a su llamada.

El 27 de julio, miles y miles de egipcios volvían a llenar las calles siguiendo el llamamiento del general. Pese a que las cifras eran claramente inferiores a las históricas del 30 de junio, el Ejército volvió a dar números estrambóticos de hasta treinta millones de manifestantes. Los medios de comunicación, que cortaban la emisión de las tradicionales telenovelas de Ramadán para emitir en directo las protestas de apoyo al general, apoyaban al líder militar con carteles en inglés donde se leían lemas como «No a la violencia», «Egipto combate el terrorismo», «Egipto atacado» o «Guerra al terrorismo».

El mandato del general El-Sisi no tardaría en empezar a aplicarse. Esa misma tarde, doce personas murieron en enfrentamientos en el centro de la ciudad de Alejandría. Al día siguiente de las marchas, de madrugada, se produjeron violentos choques entre las fuerzas policiales y los islamistas acampados en Rabaa Adaweya. Unos 74 egipcios perdieron la vida, mientras que los hospitales, ante la falta de sangre, hacían llamadas para donar sangre. Una vez más, uno y otro bando se acusaban de haber iniciado la batalla, pero el recuento de muertos mostraba una vez más el desigual equilibrio. La policía no reclamaba ninguna víctima mortal en los incidentes. El Frente de Salvación Nacional lamentaba las muertes, pero responsabilizaba a los islamistas de ello. «Afirman que enfrentarse a los militares y a la policía, atacar las propiedades estatales y poner la vida de los ciudadanos en riesgo es una *yihad* por Alá», acusarían en un duro comunicado.[40]

Cuatro días más tarde, el Consejo de Ministros encargaba oficialmente al Ministerio del Interior el desalojo de la acampada islamista. Lo hacía, en boca de la polémica ministra de Información Doria Sharaf el-Din, apelando al «mandato masivo del Pueblo al Estado». La Hermandad calificaría el comunicado como «una declaración de guerra al pueblo».[41] El desalojo, sin embargo, se aplazó en medio de una guerra cruzada de declaraciones sobre si la acampada era o no violenta. Mientras el Ejército afirmaba haber detectado armas entre los manifestantes, la Hermandad intentaba ofrecer una imagen completamente distinta, organizando parques acuáticos y carnavales para los niños para celebrar el fin del Ramadán.

Rabaa Adaweya y la rotura del hilo

Rabaa Adaweya, la iraquí que en el siglo VII introdujo la idea del amor divino y la construcción de la Fe a través del amor y

40 «NSF mourns deaths, says "can't help" but blame the Muslim Brotherhood», *Ahram Online*, 28-07-2013.

41 «El-Ijuan: Bian el-mayles el-wozara' aalan harb aala el-shaab», *Al-Masry al-Youm*, 31-06-2013.

no del miedo, vio como la mezquita que llevaba su nombre en la capital egipcia se convertiría en un símbolo de la polarización, el odio y la venganza. La madrugada del 14 de agosto, las fuerzas policiales, coordinadas por el ministro del Interior y en contacto directo con el general El-Sisi, ejecutaron la orden surgida del Consejo de Ministros y emprendieron el desalojo de las acampadas islamistas de Rabaa Adaweya y de la plaza de El-Nahda. A las cinco de la madrugada, *bulldozers* militares empezaron a desmontar las tiendas e hicieron caer los carteles, entre los aplausos de los vecinos despiertos y la oposición de los manifestantes islamistas. Éstos serían repelidos por el gas de las fuerzas policiales y militares poco antes de que pasaran al uso de munición real. La acampada se convirtió rápidamente en una terrible zona de guerra, con un aterrador fuego cruzado a dos bandas. Los enfrentamientos duraron horas. «No es una batalla equilibrada», afirmarían unos Hermanos Musulmanes que catalogaban de «criminal» el desalojo, mientras negaban el uso de armas en su bando.[42] Las quejas de Obama anunciando que «deploramos la violencia contra los civiles» eran contestadas por la presidencia egipcia afirmando que «no están basadas en la realidad».[43] Una realidad que dejaba, según el Ministerio de Salud, 578 muertes en todo el país, 318 de las cuales en el desalojo de las acampadas de El Cairo y 260 más en los enfrentamientos derivados en el resto de provincias. Entre ellas, cuerpos quemados entre las tiendas, gente desarmada ultimada por disparo de fusil y la hija del líder de la Hermandad, Mohamed el-Beltagi, muerta por el tiro de un francotirador militar. El cuerpo policial denunciaría, por su parte, el fallecimiento de 32 de sus miembros durante el desalojo. En las morgues no daban abasto. Amontonaban los cadáveres en los pasillos ante la falta

42 «El-ijwan: Fadh el-aatasam maarka geir motakafe'a [...]», *Al-Masry al-Youm*, 14-08-2013.

43 «Egypt crisis: UN Security Council demands restraint», BBC, 15-08-2013.

de salas refrigeradoras suficientes. Los médicos sólo permitían retirar los cuerpos, para enterrarlos, en caso de que los familiares aceptaran el suicidio como causa de la muerte.

El Gobierno mostró su pleno apoyo a la acción policial destinando 27 millones de euros en sobresueldos extras a los miembros en servicio el día del desalojo. Esto, que el primer ministro Beblaui calificó posteriormente de necesario ya que la acampada «obstaculizaba la hoja de ruta»,[44] fue apasionadamente defendido en un comunicado delirante del Frente de Salvación Nacional, la coalición de fuerzas seglares, lo que acabaría provocando la dimisión del portavoz de la coalición. En el texto se aseguraba que «hoy Egipto ha levantado su cabeza bien alta para declarar al mundo no sólo su victoria contra los que comercian con la religión, sino contra varios complots que se esforzaban en apoyar al imperio de la Hermandad».[45] El portavoz militar Ahmed Ali también sería rotundo: «Cuando tratamos con terroristas, la consideración de los derechos humanos y civiles no es aplicable».[46]

Como respuesta al violento desalojo, decenas de iglesias y centros, viviendas y tiendas propiedades de cristianos coptos fueron asaltadas y quemadas en todo el país, en lo que parecía la peor ola sectaria de la historia moderna de Egipto. Al menos 42 iglesias fueron atacadas, quemándose 37, incluidas algunas consideradas de valor patrimonial histórico. Cuatro personas, tres coptos y un musulmán, murieron fruto de estos ataques. Los primeros asaltos se produjeron casi de forma simultánea al desalojo de las acampadas, lo que levantaba sospechas sobre una ofensiva planeada. Sin embargo, los coptos denunciaron la pasi-

44 «Pro-Morsi sit-ins were obstacle to roadmap: Egypt's PM», *Ahram Online*, 28-08-2013.

45 «El-enqaz: Al-youm Masr rafaat rasha aalian ded toyar el-din w el-mo'amarat el-daulia», *Al-Watan*, 14-08-2013.

46 Jon Lee Anderson: «Egypt's dirty war?», *The New Yorker*, 21-08-2013 [*online*].

vidad policial y militar ante las agresiones. El obispo Makarios, obispo de Minya, aseguró en televisión que, cuando alertaron a la policía, ésta se excusó afirmando que, pasara lo que pasara, no se dirigirían al lugar de los hechos. Durante los siguientes días, se recogieron testimonios similares. A pesar de todo, las autoridades internacionales señalarían la violencia desatada contra los coptos. Una violencia que se habían negado a sofocar. El seísmo sectario volvía a ser una carta política, como en tiempos de Mubarak. Y éste no sería el único asalto que se produciría entonces. La comisaría policial de Kerdassa fue escenario de un ataque islamista en el que perdieron la vida once oficiales de policía. Museos arqueológicos, como el Museo Nacional de Malawi, fueron saqueados en actos de vandalismo y decenas de piezas destruidas o robadas, aprovechando el caos imperante.

Antes de llegar a las cuatro de la tarde, el presidente declaraba el estado de emergencia en el país por un mes y daba carta blanca al Ejército para restaurar el orden. Una hora más tarde, hacía público también un toque de queda en más de la mitad de las provincias, vigente desde las siete de la tarde hasta las seis de la madrugada. A pesar del evidente impacto para la economía, la Cámara de Comercio declaraba su apoyo afirmando que «no afecta a los mercados». Una afirmación que no cuadraba con la realidad. Entre otros, el metro de El Cairo perdió más de cincuenta mil euros diarios debido al toque de queda, mientras que las empresas de transporte denunciaron que su negocio se había visto afectado en más de un 50%.[47] La excepcionalidad jurídica del país, originalmente de un mes, sería prolongada sin demasiados problemas poco antes de terminar el plazo.

La situación seguía incomodando a Washington, que seguía sin saber cómo manejar el curso de los acontecimientos. Condenaba la violencia y reclamaba cancelar la ley de emergencia y, como única medida de presión, anunció la cancelación de los

47 «Egypt's curfew takes toll on transport, shipping businesses», *Ahram Online*, 29-09-2013.

ejercicios conjuntos entre ambos ejércitos. Era la primera medida de fuerza, tras parar el envío de cuatro F16 a El Cairo unos días antes. Mientras tanto, la Casa Blanca seguía jugando al juego de amenazar con cortar la ayuda económica; amenazas que siempre tenía que salir a desmentir el ministro de Defensa Chuck Hagel, confirmando la continuidad de la cooperación militar entre los dos países. Aquel juego desataría una nueva ola de antiamericanismo en Egipto, que cristalizó en una llamada de los jóvenes rebeldes de Tamarrod a hacer una campaña de recogida de firmas para la supresión de la ayuda estadounidense y la renuncia a los acuerdos de Camp David. En medio de esta ola, grupos seglares acusaron al senador republicano John McCain de ser un miembro de las «cédulas durmientes» de la Hermandad y una ex miembro del Tribunal Constitucional egipcio, Tihan el-Gebal, salió en televisión asegurando que el hermano de Obama era un responsable de la organización internacional de los Hermanos Musulmanes en África.

Si la destitución de Mursi quería evitar el conflicto civil no parecía que aquél fuera el camino. La fractura era total. Aquellos hechos pusieron a la transición egipcia en un callejón sin salida. El viernes siguiente, se produjeron 173 nuevas muertes y el centro de El Cairo se convirtió en escenario de una auténtica batalla campal entre partidarios de Mursi y miembros de las Fuerzas Armadas. La policía anunciaba la detención de 1118 defensores del presidente depuesto; el asesor presidencial Mostafa Hegazy anunciaba «el fin del fascismo religioso en Egipto»[48] y el ministro de Asuntos Exteriores, Nabil Fahmy, afirmaba que «Egipto va por el buen camino»;[49] 36 detenidos islamistas morían bajo custodia policial durante su traslado a la prisión de Abu Zaabel. Al día siguiente, como si se tratara de una revancha, 24 soldados resultaron muertos cerca del paso fronterizo de Rafah. Algunos informes independientes aumen-

48 «Hegazy: El-fashya el-dinia fi Masr entahet [...]», *Shorouk*, 18-08-2013.

49 «Egypt on right path, FM says in Sudan», *Ahram Online*, 19-08-2013.

taban el número de muertos de toda la semana a 1666, incluyendo 869 víctimas mortales durante el desalojo de la acampada islamista, lo que duplicaba las cifras oficiales.

Caza de brujas

«Se hace difícil para mí seguir teniendo la responsabilidad sobre decisiones que no apruebo y de cuyas consecuencias ya alerté.» La misma tarde del desalojo de Rabaa Adaweya, Mohamed el-Baradei, el vicepresidente y premio Nobel de la Paz, presentaba su dimisión debido al derramamiento de sangre. Una renuncia que no caería bien a las fuerzas seglares partidarias del golpe. Los rebeldes de Tamarrod, que hasta entonces se habían mostrado muy cercanos al diplomático, decidieron sellar su vínculo de fuego con los generales y acusaron a Baradei de «rehuir la responsabilidad en un momento histórico».[50] Con una sociedad claramente dividida, el diplomático fue apartado de su cargo en el Frente de Salvación Nacional y acusado de alta traición por los medios de comunicación y la opinión pública en general. De hecho, el Tribunal de Delitos de Madinat Nasr aceptaría a trámite una querella contra Baradei por traición y convocaría la primera sesión de ésta para el 19 de septiembre. Sería el inicio de una cacería de brujas que llevaría también a los tribunales a las activistas del 6 de abril Esma Mahfouz y Esra Abd el-Fattah, bajo la acusación de espionaje para un país extranjero, o al destacado abogado laboralista de los trotskistas Socialistas Revolucionarios Haitham Mohammeddain, detenido bajo la acusación de «liderar y formar parte de una organización secreta encargada de negar la autoridad estatal, atacar a ciudadanos y erosionar la paz social». El activista también fue acusado por «crear una organización que

50 «Tamarrod: Istiqala el-Baradei horob men el-maso'oleya», *Al-Watan*, 14-08-2013.

provoca disturbios con el objetivo de imponer una clase social específica al conjunto de la sociedad derribando el orden social del Estado».[51] En paralelo, la fiscalía abriría investigaciones contra una treintena de revolucionarios, entre los que se encontraban las principales figuras públicas del 25 de enero, acusándolos de recibir financiación ilegal a través de Estados Unidos por haber, simplemente, aparecido sus nombres en un *leak* de la embajada estadounidense en que se hacía referencia a una recepción pública. Todos eran activistas que habían mostrado su oposición al Gobierno de Mursi; que, incluso, habían apoyado las movilizaciones de Tamarrod, pero que se habían mostrado críticos con las Fuerzas Armadas y con su regreso a la arena política.

Durante aquellos días, cuatro nuevas cadenas de televisión consideradas cercanas a los movimientos islamistas fueron clausuradas, incluida la filial egipcia de Al-Jazeera, que sería catalogada por la ministra de Información como «una amenaza para la seguridad nacional».[52] Se otorgaron poderes a la policía para hacer uso de la fuerza bruta y a los guardas de los recintos universitarios para arrestar a estudiantes y profesores, lo que levantó suspicacias sobre el control político de los campus universitarios, como sucedió al comienzo del nuevo curso. Se forzó a las escuelas públicas a comenzar la jornada escolar con un himno patriótico a favor de las Fuerzas Armadas y se llegó a abrir investigaciones contra aquellos profesores que se negaban a hacerlo. De hecho, la obsesiva caza provocó que la policía de Qena llegara a encarcelar a una cigüeña, arrestada en el Nilo, bajo la acusación de espionaje, y a un campesino por haber llamado «Sisi» a su burro. Ahmed Moslemany, asesor del presidente, fue taxativo:

51 «Haitham Mohamedain released, but under investigation by State Security», MENA Solidarity Network, 07-09-2013.

52 «Wazira el-aalam: El-Jazeera tahded elaman el-qaumi», *Al-Masry al-Youm*, 22-09-2013.

«Quien ataca al Ejército va a parar a la misma bolsa de basura que los tártaros y los cruzados».[53]

Precisamente el grupo 6 de abril, junto con los trotskistas Socialistas Revolucionarios, fueron de los pocos grupos seglares que habían denunciado la violencia militar en los desalojos. Lo hicieron sin apoyar a la Hermandad, a quien habían ayudado a hacer caer participando en las movilizaciones de Tamarrod. No importaba. Fueron acusados de ser «células durmientes» de la Hermandad o «mercenarios del 25 de enero». «Merecen el neomacartismo, ya que son mucho más peligrosos que los Hermanos Musulmanes», afirmaría el columnista Mahmoud el-Kardosi.[54] El pensamiento mayoritario aplaudía las actuaciones militares ante una Hermandad que, en un mes y medio, había pasado de gobernar el país más poblado del mundo árabe a ser considerada la más temible organización terrorista. Así la definía el Consejo de Ministros de forma oficial cuando hablaba de «actos de terrorismo para extender el caos en el país» por parte de la formación islamista.[55] El Ministerio del Interior editó un vídeo bajo el título «No son de mi país», en el que atacaba sin miramientos a los Hermanos Musulmanes mientras el muftí de la República, el mubarakista Ali Gomaa, justificaba religiosamente el asesinato de los manifestantes partidarios de Mursi. Los medios de comunicación atacaban noche y día a la formación islamista y hablaban de los líderes de la Hermandad como «camaradas de sangre». Voces habitualmente moderadas, como las del escritor Alaa el-Aswany o el periodista Hamdy Kandil, escribieron duras declaraciones sobre la Hermandad, acusándolos de terroristas. Presidencia, sin embargo, procuraba mostrarse conciliadora. «Sabemos que no todo el mundo dentro de la Hermandad apoya la violencia y quien renuncie a ella es bienvenido», afirmaría en rueda de prensa.[56]

Pero mientras se hacían aquellas declaraciones centenares de miembros de la Hermandad y miles de miembros de las corrientes islamistas eran encerrados en las cárceles egipcias bajo la acusación de terrorismo. Muchos de ellos incluso negarían tener relación con la formación, en una clara muestra de las dimensiones del asalto y de cómo los propios miembros daban la batalla casi por perdida. Los detenidos actuaban, de hecho, como si hubieran vuelto media década atrás; las mismas caras se volvían a encontrar entre rejas. El Gobierno, que se negaba a hablar de detenciones políticas, planteó la disolución de la Hermandad, que fue dictada por los tribunales el 23 de septiembre de 2013. El Tribunal de Jurisdicción Sumaria de Abdeen aprobaría su disolución, la prohibición de todas sus actividades y la incautación y congelación de todas las propiedades vinculadas al grupo. Era la tercera disolución judicial de la entidad en la historia, después de las de 1948 y 1954. En realidad, en sus 85 años de vida habían estado más tiempo ilegalizados que con un estatus legal concreto.

La madrugada del 20 de agosto, el Ministerio del Interior anunciaba también la detención, cerca de la mezquita de Rabaa Adaweya, del guía supremo de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badie. La policía emitía grabaciones del líder islamista arrestado, exponiéndolo como si fuera un trofeo de caza. Los Hermanos Musulmanes, conocedores del simbolismo de la detención, la minimizaban afirmando que «sólo se trata de un hombre entre los millones que se oponen al golpe de Estado».[57] Al día siguiente, la Corte Penal de El Cairo ordenaba la libera-

53 «El-Moslemany: Men yehawel kasr el-geish makano salat el-qemama maa eltatar w el-salybyin», *Al-Masry al-Youm*, 25-08-2013.

54 Mohamed El-Kardosi: «Jalaq Allah 30 yunio», *Al-Watan*, 04-09-2013 [*online*].

55 «Mayles el-wozara': El-Ijuan taqoom be aamal erhabeya tajribiya [...]», *Al-Masry al-Youm*, 15-09-2013.

56 «El-re'asa: Leisa kol men fe el-Ijuan yu'ayed el-oonf [...]», *Al-Masry al-Youm*, 17-09-2013.

57 «Egypt arrests Muslim Brotherhood's top leader», Al-Jazeera, 20-08-2013.

ción del dictador Hosni Mubarak, después de la prescripción de su detención preventiva y la revisión de sus casos pendientes. Pese a que éste era un proceso iniciado bajo el mandato de Mursi y que no significaba el fin de los procesos judiciales contra el ex presidente, el evento no dejaba de estar cargado de simbolismo y mostraba el cambio de tendencia en el país. En 24 horas, las dos máximas figuras de los Hermanos Musulmanes y del régimen político pretendidamente derribado en febrero de 2011 se intercambiaban los papeles. Que la Fiscalía ordinaria no se opusiera a la puesta en libertad no dejaba de ser un dato significativo, a pesar de que la Fiscalía militar sí dispuso un arresto domiciliario alegando razones de seguridad. De seguridad para el dictador. Mubarak fue, poco después, transferido al hospital militar de Maadi ya como un hombre libre. La indignación de las fuerzas revolucionarias por la liberación del dictador quedaría sofocada por la abrumadora lucha del Estado contra la Hermandad. La fiscalía incluso abrió investigaciones contra el portavoz de Tamarrod, Mohamed Bader, después de que éste cuestionara la liberación de Mubarak. Al día siguiente, el joven se desdijo de las críticas y salió en televisión defendiendo la decisión judicial. En pocos días, esta liberación se normalizó y se aceptó como parte de la nueva realidad. Mientras Badie y Shater se negaban a acatar una justicia que calificaban de partidista y politizada, Mubarak asistía con porte relajado y confianza a la revisión de su caso respecto a la muerte de manifestantes en el levantamiento de enero de 2011.

Dos años y medio después, ya pocos recordaban a aquellos 836 muertos que habían dado su vida por el futuro del país. Y los miles que vinieron después. Muertes reclamando una justicia social que ahora ya no estaba ni en la agenda política ni en los debates televisivos. La lucha entre militares e islamistas, dos fuerzas que en ese punto estaban de acuerdo, pasaba por encima de todo. El 31 de agosto de 2013, dos meses y un día después de las movilizaciones masivas para derrocar al presidente Mohamed Mursi, los tribunales de Alejandría acogían

una sesión muy especial. La revisión de la sentencia del juicio contra los dos oficiales de policía condenados por la muerte de Khaled Said, el mártir de la ley de emergencia, considerada la chispa de la revolución. Tres años después de su muerte, y con un proceso revolucionario de por medio, los responsables políticos de aquel asesinato pedían su libertad en la revisión del caso. A las puertas de los tribunales, los activistas allí concentrados se convirtieron en el centro de los insultos de los peatones, que tampoco ahorraban esfuerzos por atacar la memoria del joven Said. Ese rayo de esperanza que había iluminado el verano de 2010 parecía ahora apagarse. Y, mientras, desde las oficinas de las Nile City Towers, el paisaje seguía mostrando un horizonte interminable de chabolismo y miseria.

Epílogo

En los años setenta, el presidente Anuar el-Sadat provocó un giro político y económico histórico en la República egipcia. El presidente reanimó a unos Hermanos Musulmanes que, por entonces, eran poco más que una sombra de lo que habían sido antes de la redada nasserista. Entre 1971 y 1975, se liberó a todos los prisioneros de la organización, se toleró de nuevo su actividad y se permitió su entrada progresiva en los colegios profesionales y, sobre todo, que los movimientos islamistas se reorganizaran en los campus universitarios. Los islamistas no eran más que una carta política. Sadat, por aquel entonces un presidente débil, necesitaba contrarrestar el influyente peso de la oposición nasserista y comunista para llevar adelante el poco popular proceso de reforma y liberalización de la economía, la *infitah*.

Pero aunque les dio alas para acabar con la oposición interna de izquierdas, Sadat y los islamistas entraron en crisis a raíz del proceso de paz con Israel y la represión volvió a estar en la agenda. En 1981, Sadat emprendía una de las peores redadas políticas conocidas hasta el momento con la detención de más de 1600 activistas de todos los espectros políticos y sociales, incluidos islamistas y de militantes de izquierda. Pocos meses

después, sería asesinado durante un desfile militar por 56 balas disparadas por miembros infiltrados de Yihad Islámica, una escisión surgida de la propia Hermandad. Aquel incidente marcaría el comienzo del reinado de Hosni Mubarak.

Cuarenta años después, el régimen militar y los islamistas se volvían a tomar de la mano para aplacar el pulso popular. Un pacto apadrinado por Occidente y forzado por el ímpetu de una calle empeñada en ir más allá de la caída del presidente. «Pan, libertad y justicia social.» Las demandas de aquel mes de enero de 2011 suponían una auténtica amenaza para el régimen y el statu quo vigente, y forzaban un nuevo acuerdo para aplacar el ímpetu de la calle y convertir la revolución en un simple proceso transicional, que permitiera mantener intactas las estructuras del régimen. A cambio, se permitiría el acceso a una parte del pastel a los Hermanos Musulmanes. El continuismo sería la nueva bandera política.

La historia de la revolución egipcia es, desde la caída de Mubarak, la del esfuerzo de islamistas y militares por detener el ímpetu popular. Por denunciar las protestas obreras. Por detener a los activistas. Por acusarlos de ser espías extranjeros. Por acusarlos de ser *baltagueya*. Por acusar a las mujeres de las protestas de ser putas. Es la historia de un proceso que ha permitido llamar «revolución» a lo que es transición, y «sabotaje» a lo que es revolucionario; acusar de terrorista al disidente, y cambiar los lemas de la revolución. Todo para atacar al corazón de lo que había llevado a la gente a la calle.

Pero la unión entre islamistas y militares, que volvía a poner sobre la mesa la misma dualidad existente desde hacía sesenta años, los condenaba a encerrarse en el mismo callejón sin salida del que nunca habían salido. Y con ellos, a una sociedad egipcia empapada por los respectivos imaginarios colectivos, ya fueran nacionalistas o religiosos. Éste es el motivo del fracaso de la revolución egipcia: no haber sabido evitar la colisión frontal con el muro de una dialéctica política arraigada en el corazón de la sociedad, que se volvió contra la propia esencia

de lo que había sublevado al pueblo a principios de 2011; no haber sabido huir de la telaraña urdida por islamistas y militares; no haber sabido superar el muro generacional e institucional construido durante décadas. La urgencia del cambio ha topado con la lentitud prácticamente inmovilista de unos cuadros políticos, tanto del poder como de la oposición, asentados en vicios y costumbres muy arraigadas.

De hecho, los mismos islamistas, subestimando el peso político, pero sobre todo simbólico, de un Ejército omnipotente y columna del Estado y del régimen, han sido víctimas de esta trampa. Guste o no, la situación actual no hace más que poner de manifiesto la más robusta popularidad de la fuerza simbólica de las Fuerzas Armadas egipcias, capaces incluso de superar el enorme desgaste del año y medio de Gobierno transicional del mariscal Tantawi y compañía. La revolución egipcia merece un estudio en profundidad sobre los complejos comportamientos de la opinión pública que este libro evidentemente no ha sido capaz de cubrir ni ha tenido la ambición de hacerlo.

Al cierre de este libro los rumores sobre una candidatura presidencial del general El-Sisi eran cada vez más ensordecedores y ya ni el propio jefe militar trataba de desmentirlo, flirteando con esta idea. El Gobierno ha reemprendido las políticas económicas anteriores. Figuras del liberalismo mubarakista han vuelto al Ministerio de Finanzas para mantener inalterado el trazado de los programas y la hoja de ruta económica iniciada décadas atrás y acentuada con la caída del *rais*. Tan sólo la ayuda de las petromonarquías árabes había retrasado la reapertura de negociaciones con el FMI. La redacción de la Constitución se ha cerrado fuera de plazo, después de solucionar el conflicto de los artículos relacionados con las Fuerzas Armadas, que garantizan una vez más el blindaje de sus privilegios en el periodo transicional, incluyendo los polémicos juicios militares a población civil. Si la Constitución de Mursi fue acusada de ser redactada por un comité poco representativo de la pluralidad de la sociedad, ésta ha sido directamente escrita por un comité donde la fuerza política

más votada de las últimas contiendas electorales, fuesen limpias o no, brillaba por su ausencia.

El Gobierno mantiene la cacería de brujas a los disidentes, tanto si son islamistas como si no. A finales de noviembre ha aprobado una restrictiva ley de manifestaciones que amenaza con penas de prisión a quienes corten el tráfico o «interrumpan la producción». Siguiendo las indicaciones de esta ley, algunas provincias han estipulado zonas aptas para la protesta en áreas agrícolas alejadas de los núcleos urbanos. Mientras tanto, el Gobierno ha continuado implacable con la represión. A principios de octubre, nuevas movilizaciones islamistas acababan con una cincuentena de muertos en las calles egipcias. En la primera semana de diciembre, mientras acabamos esta edición, el joven Mohamed Reda, un estudiante cairota de ingeniería, moría en el asalto policial contra unas protestas estudiantiles que exigían la depuración de los órganos de gobierno y la liberación de los compañeros detenidos. Lo que hace que, desde enero de 2011, se contabilicen 2500 muertos en incidentes de tipo político en el país.

Estos 2500 muertos recaen sobre la conciencia de la clase política y militar egipcia, pero también sobre la de una comunidad internacional que ha apadrinado este proceso desde su inicio. Desde el maquillaje mediático de la revolución de Tahrir hasta el aplauso a las elecciones y la vista gorda sobre los excesos transicionales. Las actuales tímidas lamentaciones de la Casa Blanca o la Unión Europea no son sólo eso, tímidas, sino que también llegan demasiado tarde para una sociedad egipcia encerrada en un túnel cavado por los informes diplomáticos y las alianzas estratégicas. El Estado español también ha sido cómplice de todo esto. No sólo exportando en encuentros diplomáticos la «modélica transición española» (un cuento de hadas en que 590 personas perdieron la vida en actos de violencia política,[1] en el curso de una reforma dictada por las estructuras de una dictadura obligada a reformularse para mantener su presencia). También lo ha hecho impidiendo la extradición a Egipto del magnate Hussein Salem, conocido como «la caja negra de la corrupción en Egipto» y reclamado por las autoridades judiciales cairotas con sentencias que sumaban cerca de medio siglo de presidio. Salem, amparado por una nacionalidad española que nadie ha aclarado cómo consiguió —ni si tenía vinculación, como apuntaban algunos periodistas egipcios, con la concesión a la española Unión Fenosa de la explotación anual de 3,2 millones de toneladas de gas natural líquido a Damietta—, evadió tranquilamente, desde la Moraleja madrileña, millones de euros reclamados por las autoridades egipcias sin que las españolas le pararan los pies. Para el Estado español —que con 1.300 millones de euros anuales representa el tercer importador mundial de productos egipcios, sólo superado por Estados Unidos e Italia—,[2] la conflictividad en Egipto ha supuesto, por encima de todo, una oportunidad de amarrarse a un flotador salvavidas ante la crisis, gracias a que en el verano de 2013 cerca de setecientos mil turistas huían de Egipto para ir a parar a las playas españolas.[3] Eso ha conducido a muestras de cinismo como la del diario *Última Hora* de Palma que, el 17 de agosto, afirmaba en portada que «la masacre en Egipto desviará miles de turistas a Baleares». La inestabilidad egipcia no sólo era lucrativa para el sector turístico. En el año 2012, España exportaba cincuenta millones de euros en armamento para el Ejército egipcio.[4] Un arsenal que, a día de hoy, nadie ha aclarado si ha sido empleado o no en la represión contra las movilizaciones políticas en las calles de Egipto.

1 Alejandro Torrus: «La Transición, un cuento de hadas con 591 muertos», *Público.es*, 27-01-2013.

2 Cagri Ozdemir; Mohamed Haddad (et al.): «Interactive: Egypt friends and foes», Al-Jazeera, 22-10-2013 [*online*].

3 «Sangre árabe y especulación petrolera, las condiciones del crecimiento turístico», *Masala*, n.º 69, p. 8., septiembre-octubre 2013.

4 «Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, año 2012», Ministerio de Economía y Competitividad, Secretaría de Estado y de Comercio.

El proceso de cambio en Egipto aún tiene muchas páginas por escribir. Más allá de las transformaciones que experimente el país, que indudablemente nunca volverá a ser como había sido bajo Mubarak, la auténtica revolución se ha producido en la mente de millones de egipcios que se han despertado de un largo sueño. La revolución abrió un nuevo horizonte de debates y perspectivas que no será aniquilado con facilidad. Las calles, cafés y mercados de Egipto hablan hoy en día sin rodeos. La conciencia de millones de personas se ha despertado.

La revolución es una montaña rusa en continua metamorfosis. La revolución es un proceso, no un hito. Y una revolución, por mucho que nos lo quisieran hacer creer, no se hace en dieciocho días. No fueron así la rusa ni la francesa. Ni siquiera el corto verano del 36 transformó a la sociedad catalana y aragonesa en un par de meses. La revolución que en enero de 2011 reclamaba «Pan, libertad y justicia social» no ha muerto. Estará viva mientras la injusticia provocada por unas políticas generadoras de desigualdades y por la extensión de las nuevas formas de esclavismo y colonialismo sigan vivas. Mientras a los pies de los lujosos rascacielos de las Nile City Towers siga existiendo la miseria de las chabolas sin agua ni luz de Ramlet Boulaq, la revolución seguirá viva. Reclamando «Pan, libertad y justicia social».

Barcelona, 12 de diciembre de 2013

Glosario

Términos

Baltagueya. Generalmente traducido como «matón», se refiere a los alborotadores, normalmente a sueldo, utilizados por cabecillas políticos o comunitarios.

Chicago boys. Con el nombre de *Chicago boys* eran conocidos una serie de economistas neoliberales educados bajo la batuta del economista Milton Friedman y que aplicarían medidas de liberalización económica radical en el Chile de Pinochet durante la década de los setenta.

Corniche. Nombre con el que se conocen las avenidas y paseos fluviales o marítimos de las ciudades egipcias.

Fatua. Respuesta no vinculante de un muftí ante una consulta jurídica para aclarar puntos oscuros de la ley basada en la *sharia* o ley islámica.

Fulul. Concepto que hace referencia a los remanentes del régimen de Mubarak que intentan tener presencia en la nueva vida política.

Infitah. Proceso de aperturismo económico y político iniciado por el presidente egipcio Anuar el-Sadat en los años setenta. Egipto rompió sus lazos con la URSS y se aproximó a Estados Unidos, en un proceso que culminó con la firma de los acuerdos de Camp David, en 1977.

Intifada. Palabra árabe traducible por «alzamiento popular».

Minbar. Púlpito de las mezquitas desde donde se pronuncian los sermones de los viernes.

Muftí. Jurisconsulto musulmán que, por su conocimiento de la *sharia* o ley islámica, tiene la potestad de emitir fatuas.

Nasserismo. Corriente política partidaria del difunto presidente Gamal Abd el-Nasser, basada en la retórica del panarabismo y el control estatal de la economía.

Neocon. Ideología marcada por los nuevos conservadores en Estados Unidos, defensores del individualismo, el mercado libre y la promoción de los intereses estadounidenses.

Omra. Peregrinaje menor a la Meca que, a diferencia del *Haj*, se puede realizar en cualquier momento del año y no representa uno de los cinco pilares de la religión musulmana de obligado precepto.

Rais. En árabe, «presidente» o «cabecilla».

Salafismo. Corriente del islam suní que promueve un retorno a los orígenes del libro sagrado a través de la imitación de los primeros seguidores del profeta Mohamed.

***Shaabi*, música**. Música de raíz popular egipcia, con orígenes en el sufismo y, generalmente, con letras irreverentes.

Sharia. Ley islámica basada en el Corán y complementada con otras normas jurídicas, que regula las actividades públicas y privadas del feligrés musulmán.

Sheij. Título de origen árabe aplicado a líderes, por lo general religiosos y políticos, normalmente asociado a su sabiduría.

Shisha. También conocida como «narguile», es una pipa de agua muy popular en Egipto y buena parte de Oriente Próximo.

Sukuk. Bonos estatales que, presumiblemente, cumplen con los preceptos islámicos, certificando que no se cargan intereses abusivos ni se encubre la usura.

Think tank. Institución investigadora o asesora encargada de generar opinión, ejercer influencia y dar recomendaciones a instituciones militares, políticas o económicas.

Yihadistas. Grupos de acción, generalmente armada, partidarios de la instauración de una sociedad puramente islámica.

Personalidades

Abd el-Nasser, Gamal. Militar egipcio líder del Movimiento de los Oficiales Libres y jefe de Estado entre 1956 y 1970. Lideró la represión contra los Hermanos Musulmanes, condujo al país hacia un pseudosocialismo de Estado y se convirtió en el carismático líder del panarabismo laico.

Adli, Habib al-. Ministro del Interior desde 1997 hasta el levantamiento revolucionario de 2011. Como jefe de la policía, era considerado el temido brazo represor del régimen Mubarak y centro de las críticas de las primeras movilizaciones del 25 de enero.

Anan, general Sami. Militar egipcio y jefe de Estado Mayor. Considerado por muchos como la pieza clave del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas que lideró la transición a la caída de Mubarak, fue jubilado por el presidente Mohamed Mursi en el verano de 2012.

Badie, Mohamed. Guía supremo de los Hermanos Musulmanes desde 2010.

Banna, Hassan el-. Islamista egipcio fundador, en 1928, del movimiento de los Hermanos Musulmanes.

Mubarak, Gamal. Hijo del presidente y, desde 2002, secretario político del oficialista PDN. Su condición de posible heredero del cargo presidencial generó tensiones internas dentro del régimen y con la oposición.

Mubarak, Hosni. Presidente de Egipto entre 1981 y 2011. Llegó al poder tras el asesinato de Sadat, intensificó las políticas de liberalización económica del país y abandonó el cargo tras las movilizaciones populares de enero de 2011.

Mursi, Mohamed. Miembro de los Hermanos Musulmanes y presidente de Egipto entre el verano de 2012 y el de 2013. Su corto mandato se vio marcado por el continuismo político y, sobre todo, económico, y por los intentos de la formación islamista de controlar las instituciones estatales, produciendo masivas movilizaciones que pedían su dimisión, el 30 de junio de 2013.

Sadat, Anuar el-. Miembro del Movimiento de los Oficiales Libres y jefe de Estado entre 1970 y 1981. Cambió el rumbo del país a través del proceso de *infitah*, rompiendo lazos con la URSS y acercándose a Washington a través de la liberalización de la economía. En 1979, firmó los polémicos acuerdos de paz de Camp David que llevarían a su asesinato en manos de militantes islamistas de Yihad Islámica.

Said, Khaled. Joven alejandrino cuya muerte bajo custodia policial, el 6 de junio de 2010, provocó protestas y movilizaciones precursoras de la insurrección de enero de 2011.

Shafiq, Ahmed. Comandante de las Fuerzas Aéreas egipcias, ministro de Aviación y primer ministro del último Gobierno nombrado por el presidente Hosni Mubarak. Candidato del continuismo en las presidenciales de 2012.

Shater, Khairat. Hombre de negocios considerado como uno de los más influyentes miembros de los Hermanos Musulmanes.

Sisi, general Abd el-Fattah el-. General egipcio, desde el verano de 2012 comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa. Nombrado por Mursi, sucedió en el cargo al mariscal Tantawi tras liderar los servicios de inteligencia militar y ser el encargado en el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas de las relaciones entre el Ejército y los Hermanos Musulmanes.

Suleiman, Omar. Jefe supremo de los servicios secretos egipcios desde 1993 y considerado uno de los personajes más influyentes y poderosos de la región. En enero de 2011, fue nombrado vicepresidente por Mubarak. Presentó su precandidatura a las presidenciales de 2012, pero fue descalificado por faltarle 31 firmas, exiliándose misteriosamente del país poco antes de anunciarse su extraña muerte.

Tantawi, mariscal Hussein. Ministro de Defensa desde 1991 hasta 2012. Como comandante en jefe del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, tomó el cargo de presidente interino del país después de la caída de Mubarak.

Instituciones

Centro Legal Hisham Mubarak. Centro de defensa de los derechos humanos muy activo en la lucha contra las detenciones arbitrarias y la aplicación de la tortura, y que debe su nombre a un abogado y activista muerto en 1998 de un infarto y que nada tiene que ver con el dictador del mismo apellido.

ECES. *Think tank* egipcio creado en 1992 con la financiación de USAID con el objetivo de diseñar las políticas de reforma económica para la liberalización de la economía egipcia.

El-Azhar. Principal escuela de teología suní del mundo islámico. Fundada en 975, en tiempos del imperio Fatimí, está considerada como la universidad más antigua del mundo con funcionamiento ininterrumpido. Tiene carácter de institución estatal y sus cargos son nombrados políticamente.

El-Wafd. Histórico partido nacionalista liberal que lideró el movimiento independentista egipcio de los años veinte.

Fatah. Formación política palestina fundada por Yasser Arafat en 1957. Actualmente, liderada por Mahmoud Abbas, ostenta la máxima representación de la Autoridad Nacional Palestina.

Gamaa Islamiya. Formación islamista suní cuyo brazo armado fue particularmente activo en la década de los noventa. A raíz de la revolución, formaron un partido político que lograría trece escaños en el Parlamento.

Hamás. Formación sociopolítica islamista palestina, vinculada al movimiento de los Hermanos Musulmanes y que, desde 2007, gobierna la Franja de Gaza, tras el *putsch* a los resultados electorales de 2006. Liderada por Khaled Meshaal y Ismail Haniye.

Hermanos Musulmanes. Influyente movimiento sociopolítico islamista fundado en 1928, en Ismailiya, por Hassan el-Banna. Con presencia en una decena de países, era considerado el principal grupo organizado de oposición a Mubarak.

Karama. Partido nasserista dirigido por el político Hamdeen Sabahi.

Kefaya (Movimiento Egipcio para el Cambio). Formación política de oposición fundada en 2004 que aglutinó, por primera vez, a la oposición al régimen, llevando a la calle las primeras protestas dirigidas contra el presidente Mubarak.

Knesset. Parlamento monocameral del Estado de Israel.

Mayles el-Shaab o Consejo del Pueblo. Cámara baja del Parlamento egipcio.

Mayles el-Shura o Consejo de la Shura. Cámara alta del Parlamento egipcio.

Movimiento del 6 de Abril. Grupo activista surgido en apoyo a los obreros de Mahala y que sigue el ideario político de las revoluciones no violentas de Gene Sharp.

Partido Democrático Nacional (PDN). Partido oficialista del régimen, instaurado en 1978 por Sadat y disuelto en abril de 2011 tras las protestas populares.

Socialistas Revolucionarios. Grupo político trotskista.

Tagarrod. Movimiento político islamista de oposición al grupo Tamarrod.

Tamarrod. Movimiento político que impulsó la campaña de recogida de firmas pidiendo la dimisión de Mursi y que lideró las movilizaciones del 30 de junio que llevaron a la deposición militar del presidente.

Yihad Islámica. Grupo armado islamista que, en 1981, atentó contra la vida del presidente Anuar el-Sadat.

Cronología básica

1882. Las tropas británicas toman el control de Egipto.

1914. Egipto es oficialmente nombrado protectorado.

1928. Se funda la organización de los Hermanos Musulmanes en Ismailiya.

1948. Primera Guerra Árabe-Israelí en la que las tropas egipcias sufrieron una vergonzosa derrota a manos de las tropas sionistas.

1952. Se produce una insurrección popular en las calles de todo Egipto contra la presencia británica en el país. El levantamiento es aprovechado por un grupo de militares agrupados en el Movimiento de los Oficiales Libres, que toman el poder en un golpe conocido como la «Revolución del 23 de julio». Se anula la monarquía, acusada de seguir los dictados de Londres, y se declara la república. Dentro del grupo de generales, destaca la figura de Gamal Abd el-Nasser.

1954. Nasser sufre un intento de asesinato en Alejandría y acusa a los Hermanos Musulmanes de estar detrás del complot. Se ilegaliza la formación islamista y comienza la persecución de sus miembros.

1956. Nasser nacionaliza el Canal de Suez provocando una invasión militar de las fuerzas de Israel, Reino Unido y Francia. La victoria egipcia sobre la soberanía del canal ayudará a Nasser a construir su figura de líder nacional.

1970. Nasser muere y es reemplazado por Anuar el-Sadat, también miembro del Movimiento de los Oficiales Libres. Sadat iniciará el proceso de *infitah* o aperturismo, alejando a Egipto de la órbita soviética y acercándolo cada vez más al libre mercado y a la órbita de Estados Unidos.

1978. Se firman los Acuerdos de Camp David entre Egipto y Israel, con el patrocinio de Estados Unidos. Fruto de esos acuerdos de paz, Egipto recupera la península del Sinaí y el Ejército egipcio recibe una ayuda directa anual de Estados Unidos. Egipto es expulsado de la Liga Árabe.

1981. Anuar el-Sadat es asesinado por militantes islamistas y Hosni Mubarak es nombrado presidente de la República.

1991. Egipto entra en el consenso de Washington y aplica las políticas de liberalización económica propuestas por el FMI.

2002. Gamal Mubarak, hijo del presidente, es nombrado secretario político del oficialista PDN con el objetivo de liberalizar aún más la economía.

La creciente influencia de Gamal en la política egipcia se certifica dos años más tarde con la formación del Gobierno de Ahmed Nazif.

2004. Nace el movimiento Kefaya.

2005. Las elecciones legislativas en Egipto llevan a que los Hermanos Musulmanes consigan unos históricos 88 escaños en el Parlamento. A partir de entonces, se inicia una nueva política represiva del régimen contra la oposición.

2008. El 6 de abril, se produce la insurrección obrera en la ciudad de Mahala.

2010. En verano, muere asesinado en Alejandría el joven Khaled Said, a manos de oficiales de la policía. En invierno, unas accidentadas y discutidas elecciones legislativas provocan decenas de muertos y dan el 91,2% de los escaños al gubernamental PDN.

2011

25 de enero. Día de la Polícia. Se convocan movilizaciones en todo el país con un éxito que supera las previsiones

28 de enero. Viernes de la Ira. Las fuerzas policiales y los manifestantes se enfrentan en todo el país. El Ejército baja a las calles para controlar la situación y sustituye a la policía, que se retira. Los manifestantes ocupan finalmente la plaza Tahrir y acampan allí.

3 de febrero. Batalla del Camello. Partidarios del presidente Mubarak se enfrentan violentamente a manifestantes antirrégimen acampados en Tahrir.

11 de febrero. El vicepresidente Omar Suleiman anuncia la dimisión de Hosni Mubarak. El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, encabezado por el mariscal Tantawi, toma el poder.

26 de febrero. Las Fuerzas Armadas desalojan violentamente a los últimos acampados de la plaza Tahrir. Entre los detenidos se encontrarían los primeros civiles juzgados por tribunales militares.

9 de marzo. Nuevo desalojo violento en la plaza Tahrir. Varias activistas serán sometidas a agresiones sexuales por parte de las Fuerzas Armadas enmascaradas bajo el eufemismo de pruebas de virginidad.

19 de marzo. Se aprueba en referéndum la reforma constitucional propuesta por la Junta Militar y apoyada por los Hermanos Musulmanes. Eso allana el camino de la hoja de ruta transicional trazada entre militares e islamistas.

23 de marzo. La Junta Militar aprueba el decreto ley 34 que penaliza huelgas, protestas y asambleas que puedan afectar a la economía y la productividad.

11 de abril. Una primera delegación del FMI visita El Cairo para negociar un préstamo con las autoridades egipcias.

3 de agosto. Comienza el juicio del siglo que sienta a Hosni Mubarak, sus dos hijos y los principales líderes del cuerpo policial en el banquillo de los acusados por la muerte de manifestantes durante la insurrección de enero.

11 de septiembre. Después de varias protestas contra el Estado de Israel y el asalto a la embajada israelí en El Cairo, la Junta Militar anuncia una nueva extensión de la Ley de Emergencia.

9 de octubre. Una protesta copta acaba en masacre cuando 25 personas pierden la vida ante el violento intento de desalojo de las fuerzas militares.

19 de noviembre. Hechos de Mohamed Mahmoud. Enfrentamientos entre fuerzas revolucionarias y cuerpos policiales estallan en el centro de El Cairo, a pocos días del inicio de las elecciones legislativas. Al menos 42 personas pierden la vida.

16 de diciembre. Hechos del Consejo de Ministros. Nuevos enfrentamientos entre grupos revolucionarios y fuerzas policiales en el centro de El Cairo.

28 de noviembre – 11 de enero. Primeras elecciones legislativas en el país, que dan una ámplia mayoría a los Hermanos Musulmanes.

2012

23 de enero. El nuevo Parlamento toma posesión de los escaños. El mariscal Tantawi anuncia el fin de la ley de emergencia .

25 de enero. Primer aniversario de la revolución. Enfrentamientos entre fuerzas revolucionarias y los Hermanos Musulmanes en el corazón de El Cairo

2 de febrero. 74 aficionados ultras del equipo cairota de El-Ahli pierden la vida a final de un partido de fútbol en Port Said. Los aficionados acusan a las fuerzas policiales de estar detrás. Se producen enfrentamientos en todo el país.

23 y 24 de mayo. Primera vuelta de las elecciones presidenciales. Unas urnas llenas de irregularidades ponen en la segunda vuelta al continuista Ahmed Shafiq y al hermano musulmán Mohamed Mursi.

2 de junio. Se anuncia la sentencia del juicio a Mubarak. Absolución para la mayoría de encausados y pena de cadena perpetua para el presidente por no haber impedido la muerte de manifestantes.

14 de junio. El Tribunal Constitucional disuelve el Parlamento, quitando a los Hermanos Musulmanes su bastión de poder a las puertas de la segunda vuelta de las presidenciales.

16 y 17 de junio. Segunda vuelta de las presidenciales egipcias, que coronan a Mohammed Mursi como primer presidente civil del país.

30 de junio. Mursi toma posesión del cargo.

12 de agosto. Se reestructura la cúpula militar. Mursi jubila a Tantawi y Anan y nombra al general Abd el-Fattah el-Sisi como ministro de Defensa y jefe del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas.

21 de noviembre. Presidencia anuncia un decreto constitucional que da nuevos poderes a Mohammed Mursi y hace dimitir al fiscal general, que es reemplazado por uno a elección del presidente islamista. La decisión provoca la ira entre una oposición que dice que estas medidas se caracterizan por mostrar tintes totalitarios. Al menos 28 sedes de los Hermanos Musulmanes son atacadas y quemadas por los manifestantes en los siguientes días.

5 de diciembre. Enfrentamientos sangrientos entre partidarios y detractores del presidente Mursi tienen lugar a las puertas del palacio presidencial de Etehadeya.

15 y 22 de diciembre. Un referendum constitucional aprueba el borrador defendido por las fuerzas islamistas con un pequeño margen y una participación bajo mínimos.

2013

12 de enero. El tribunal de apelaciones acepta las alegaciones de Hosni Mubarak y el ministro del Interior Habib el-Adly y ordena repetir el juicio contra las dos figuras. Es el punto culminante de un proceso de revisión de sentencias contra figuras del antiguo régimen.

25 de enero. El segundo aniversario de la revolución se celebra con nuevas protestas contra el Gobierno de los Hermanos Musulmanes, y enfrentamientos sangrientos entre partidarios y detractores del presidente

islamista en todo el país.

13 de abril. Mubarak vuelve a comparecer ante los tribunales para la revisión de su sentencia

30 de junio. Manifestaciones masivas llenan las calles de Egipto como culminación de la campaña de Tamarrod para exigir elecciones anticipadas al presidente Mursi. Al día siguiente, las Fuerzas Armadas dan un ultimátum de 48 horas para que el presidente escuche el clamor de la calle.

3 de julio. Las Fuerzas Armadas, lideradas por el general El-Sisi, llevan a cabo un golpe de Estado y deponen al presidente Mursi de su cargo. Se elabora una hoja de ruta y se nombra presidente interino al presidente del Tribunal Constitucional, Adly Mansour, quien no hace ni 48 horas que ostenta ese cargo. El ejército rompe el pacto de transición.

14 de agosto. El desalojo militar de la acampada islamista de Raba Adaweya deja 318 muertos, que se suman a los 260 más a causa de los disturbios habidos en todo el país. Este violento ataque culmina el asalto militar a la oposición islamista.

21 de agosto. Los tribunales ordenan la liberación del dictador Mubarak después de la prescripción de los plazos de prisión preventiva. Por razones de seguridad, la justicia militar decide su reclusión hospitalaria.

31 de agosto. Los tribunales de Alejandría reabren el juicio por la muerte de Khaled Said tras aceptar las apelaciones presentadas por la defensa de los policías procesados.

23 de septiembre. El tribunal de Jurisdicción Sumaria de Abdeen aprueba la disolución de los Hermanos Musulmanes

Bibliografía

Medios de comunicación

ABC News
Al-Masry al-Youm
El-Ahram
Ahram Online
Ahram Weekly
El-Akhbar
Akhbar el-Youm
Los Angeles Times
Al-Arabiya
Al-Arabiya English
Associated Press
El-Badeel
BBC
El-Bedaiah
Bikyanews
Bloomberg
CBS News
Daily Mail
Daily News Egypt
El-Dostour el-Asly
Egypt Independent
El-Eshteraky
Europa Press
El-Fagr
Financial Times
Foreign Policy
France 24
The Guardian
Haaretz
Hoqook News Network
Huffington Post
The Independent
Jaddaliya
Al-Jazeera
Al-Jazeera English
The Jerusalem Post
KUNA, Kuwait News Agency
Mada Masr
Masrawy
Masress
Agencia MENA
Le Monde Diplomatique
El-Mogaz
NPR – National Public Radio
ONA
ONTV
Qatar News Agency
Reuters
El-Riyadh
Shorouk
Sky News
Der Spiegel
Al-Tahrir
The Telegraph
Time World
Times of Israel
United Press International (UPI)
Voice of America (VOA)
El-Wafd
The Washington Post
Washington Times
Al-Watan
El-Youm el-Sabaa

Webs

Amnistía Internacional: www.amnesty.org

Anasalafy: www.anasalafy.com

Arabist: www.arabist.net

Banco Mundial: www.web.worldbank.org

Blog Egipcio para los Derechos Humanos: ebfhr.blogspot.com

Campaña Contra los Juicios Militares a Población Civil: www.nomiltrials.com

Carnegie Endowment for International Peace: carnegieendowment.org

The Carter Center: www.cartercenter.org

CIA: www.cia.gov

Committee to Protect Journalists: www.cpj.org

Web del departamento de Estado de la Casa Blanca: www.state.gov

Drop Egypt's Debt: www.dropegyptsdebt.org

Egyptian Chronicles: www.egyptianchronicles.blogspot.com

Blog *Egytimes*: egytimes.org

Electronic Intifada: www.electronicintifada.net

El-mobada el-Masreya lel-hoqoq el-shahseya - Egyptian Initiative for Personal Rights: www.eipr.org

El-monazama el-masreya le-hoqoq el-ensan – The egyptian organization for human rights: www.eohr.org

Emsekfolol: www.emsekflol.com

Estklal: www.estklal.com

European Bank for Reconstruction and Development: www.ebrd.com

Gobierno egipcio: www.egyptiancabinet.gov.eg

Financial Transparency Coalition: www.financialtransparency.org

FMI - Egypt fast facts: www.imf.org

Global Voices Online: www.globalvociesonline.org

Blog de Hossam el-Hamalawy: www.arabawy.org

Ikhwan Online: www.ikhwanonline.com

Ikwhanweb: www.ikhwanweb.com

Blog *Inanities*: www.inanities.org

Investigative Project on Terrorism (IPT): www.investigativeproject.org

Markez el-darast el-eshterakeya (Centro de Estudios Socialistas): www.e-socialists.net

Blog *Masar Tagreby*: masar-tagrepy.blogspot.com

Mena Solidarity Network: www.menasolidaritynetwork.com

Middle East Media Research Institue (Memri): www.memri.org

Parlamento Europeo: www.europarl.europa.eu

Red Árabe para la Información de los Derechos Humanos: www.anhri.net

Servicio de Información del Estado (elhy'a el-aama lel-estaalemat): www.sis.gov.eg

Solidarity: www.solidarity-us.org

Tahrir documents: www.tahrirdocuments.org

Unión Egipcia de Sindicatos Obreros Independientes - El-etehad el-masry lel-neqabat el-omaleya El-Mostaqela (EFITU): www.efitu.com

Wikileaks: www.wikileaks.org

YouTube: www.youtube.com

Artículos

ABD EL-QODDOS, Sharif: «Egypt's Looming Economic Shock Doctrine», *The Nation*, 02-04-2012 [*online*], www.thenation.com/article/167159/egypts-looming-economic-shock-doctrine

ABUL-MAGD, Zeinab: «The Army and the Economy in Egypt», *Jadaliyya*, 23-12-2011 [*online*], www.jadaliyya.com/pages/index/3732/the-army-and-the-economy-in-egypt

ALI, Amro: «Saeeds of Revolution: De-Mythologizing Khaled Saeed», *Jadaliyya*, 05-06-2012 [*online*], www.jadaliyya.com/pages/index/5845/saeeds-of-revolution_de-mythologizing-khaled-saeed

ASHER-SCHAPIRO, Avi: «The GOP Brotherhood of Egypt», *Salon*, 26-01-2012 [*online*], www.salon.com/2012/01/26/the_gop_brotherhood_of_egypt/

BAR'EI, Zvi: «Mohammed Morsi, Israel's brother», *Haaretz*, 21-11-2012 [*online*], www.haaretz.com/opinion/mohammed-morsi-israel-s-brother.premium-1.479390

BASSIOUNI, Mustafa: «Will Egypt workers pay the price again?», *El-Akhbar*, 30-07-2013 [*online*], english.al-akhbar.com/node/16585

BEININ, Joel: «All unionized and Nowhere to go», *Sada*, 08-01-2013 [*online*], carnegieendowment.org/2013/01/08/all-unionized-and-nowhere-to-go/f04r

BISHARA, Marwan: «Egypt, back to the future: Scoring points, making none», Al-Jazeera, 28-07-2013 [*online*], www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/07/2013728122856571495.html

CATTORI, Silvia: «The incredible story of Youssef Nada», entrevista, 17-06-2011 [*online*], www.silviacattori.net/article461.html

COLE, Mathew; WALI, Sarah O.: «New egyptian VP ran security team, oversaw torture», ABCNews, 01-02-2011 [*online*], abcnews.go.com/Blotter/egypt-crisis-omar-suleiman-cia-rendition/story?id=12812445#.T4PI-05otgnV

DEEB, Sarah el-: «Egypt's military generals defend their business», Associated Press, 28-03-2012.

«El-nizam yuzaded tawaheshan. Bedaam America w sharaka moaarda mozyfa», *Markez el-darasat el-eshterakeya*, 20-10-2010 [*online*], www.e-socialists.net/node/6270

FISK, Robert: «Now we know. America really doesn't care about injustice in the Middle East», *The Independent*, 30-11-2010 [*online*], www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/robert-fisk-now-we-know-america-really-doesnt-care-about-injustice-in-the-middle-east-2146971.html

GAMAL, Wael: «Elshaab yurid aayala entay ojra», *Shorouk*, 26-04-2011 [*online*], www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=26042011-&id=fe75bca3-f2c9-4fde-857b-39142dfede35

GRESH, Alain (2013): «La revolución, a la sombra de los militares», *Le monde diplomatique en español*, n.º 214, agosto de 2013, p. 8.

HENDAWI, Hamza; MICHAEL, Maggie: «Mohamed Morsi's final days - the inside story», *The Guardian*, 05-07-2013 [*online*], www.theguardian.com/world/2013/jul/05/morsi-final-days-egypt-president?CMP=twt_gu

HENRY, Clement M.; SPRINGBORN, Robert: «A Tunisian Solution for Egypt's Military. Why Egypt's Military will not be able to govern», *Foreign Affairs*, 21-02-2011[*online*], www.foreignaffairs.com/node/67290

HICKEL, Jason: «The fallacy of freedom: USAid and neoliberal policy in Egypt», *Though Leader*, 15-03-2011 [*online*] www.thoughtleader.co.za/jasonhickel/2011/03/15/the-fallacy-of-"freedom"-usaid-and-neoliberal-policy-in-egypt/

IGNATIOUS, David: «Egypt's scapegoat for the Sinai attack», *The Washington Post*, 09-09-2012 [*online*], articles.washingtonpost.com/2012-08-09/opinions/35491131_1_sinai-attack-egyptians-morsi

KARDOSI, Mohamed el-: «Jalaq Allah 30 yunio», *Al-Watan*, 04-09-2013 [*online*], www.elwatannews.com/news/details/301733

KIRKPATRICK, David D.: «Mursi spurned deals, seeing military as tamed», *The New York Times*, 06-07-2013 [*online*], www.nytimes.com/2013/07/07/world/middleeast/morsi-spurned-deals-to-the-end-seeing-the-military-as-tamed.html?_r=0&adxnnl=1&adxnnlx=1382054577-plMi/Ytau62sYm6tHMhwFw

LEE ANDERSON, Jon: «Egypt's dirty war?», *The New Yorker*, 21-08-2013 [*online*], www.newyorker.com/online/blogs/comment/2013/08/in-egypt-echoes-of-latin-america.html

MALSIN, Jared: «Closure from below», *Mada Masr*, 25-09-2013 [*online*], www.madamasr.com/content/closure-below

MARSHALL, Paul: «Egypt's other extremists», *Weekly Standard*, 16-05-2011 [*online*], www.weeklystandard.com/articles/egypt-s-other-extremists_559363.html

MOUSTAFA, Tanmir (2003): «Law versus the State: The judicialization of politics in Egypt», American Bar Foundation.

NABIL, Maikel: «El-yeish w el-shaab omorhom ma kanu eid wahda», *Blog de Maikel Nabil*, www.maikelnabil.com

NAGUI, Ahmed: «Hada el-tariq ajrho lahun hazin», *Al-Masry al-Youm*, 21-09-2013 [*online*], www.almasryalyoum.com/node/2052306

NAGUIB, Sameh; BECHLER, Rosemary: «Egypt's long revolution. Knowing your enemy», *Open Democracy*, 29-07-2013 [*online*], www.opendemocracy.net/sameh-naguib-rosemary-bechler/egypt's-long-revolution-knowing-your-enemy

OTTERMAN, Sharon: «Muslim Brotherhood and Egypt's Parliamentary Elections», Council on Foreign Relations, 01-12-2005 [*online*], www.cfr.org/egypt/muslim-brotherhood-egypts-parliamentary-elections/p9319

OZDEMIR, Cagri; HADDAD, Mohamed (y otros): «Interactive: Egypt friends and foes», Al-Jazeera, 22-10-2013 [*online*], www.aljazeera.com/indepth/interactive/2013/08/201382272740309904.html

RAMSIS, Basel: «Mujeres 2: La historia de Nawal», *Huffington Post*, 10-08-2012 [*online*], www.huffingtonpost.es/basel-ramsis/mujeres-2-la-historia-de-_b_1752246.html

SAADAWI, Nawal el-: «A People's revolution, not a crisis or a coup», IslamiCommentary, 08-07-2013 [*online*], islamicommentary.org/2013/07/nawal-el-saadawi-a-peoples-revolution-not-a-crisis-or-coup/

«Sangre árabe y especulación petrolera, las condiciones del crecimiento turístico», *Masala*, n.º 69, septiembre-octubre 2013, p. 8.

SAYIGH, Yezid: «Above the State: The Officers' Republic in Egypt», Carnegie Middle East Center, 01-09-2012 [*online*], www.carnegie-mec.org/publications/?fa=48972

SHAOUL, Jean: «Egypt: Strike wave throughout public and private sector», World Socialist Web Site, 04-03-2008 [*online*], www.wsws.org/en/articles/2008/03/egpt-m04.html?view=print

SHATER, Khairat el-: «No need to be afraid of us», *The Guardian*, 23-11-2005 [*online*], www.theguardian.com/world/2005/nov/23/comment.mainsection

STEPHAN, Maria J.; CHENOWETH, Erica (2008): «Why civil resistance works. The strategic of nonviolent conflict», *International Security*, vol. 33, verano 2008, p. 7.

TAMMAM, Husam: «Egypt's New Brotherhood Leadership: Implications and Limits of Change», *Sada*, 17-02-2010 [*online*], carnegieendowment.org/2010/02/17/egypt-s-new-brotherhood-leadership-implications-and-limits-of-change/b1x5

ZEWAIL, Ahmed: «Reflections on arab renaissance», *The Cairo Review of global affairs* [*online*], www.aucegypt.edu/gapp/cairoreview/pages/articleDetails.aspx?aid=22

Informes

ABD EL-LATIF, Abla; NUGENT, Jeffrey (2010): *A Quiz on the net benefits of trade creation and trade inversion in the QIZs of Jordan and Egypt*, The Economic Research Forum, El Cairo.

BOLLE, Mary Jane; PRADOS, Alfred B. (y otros) (2006): *Qualifying Industrial Zones in Jordan and Egypt* Washington, Congressional Research Service.

HALIME, Farah (2013): *Egypt, the IMF and european economic assistance*, European Council on Foreign Relations (ECFR), Londres.

LAGI, Marco; BERTRAND, Karla Z. (y otros) (2011): *The food crises and political instability in North Africa and the Middle East*, New England Complex System Institute, Cambridge.

NELSON, Rebecca M.; SHARP, Jeremy M. (2013): *Egypt and the IMF: Overview and issues of Congress*, Congressional Research Service, Washington.

SCHWABM, Klauss (2010): *The global competitiveness report 2010-2011*, World Economic Forum, Ginebra.
—(2012): *The global competitiveness report 2012-2013*, World Economic Forum, Ginebra.

SHARP, Jeremy M. (2013): *Egypt: Background and US Relations*, Congressional Research Service, Washington.

SISI, Abd el-Fattah Sayed el- (2006): *Democracy in the Middle East*, USAWC strategy research project, US Army War College, Pennsylvania.

Agents of Repression. Egypt's police and the case for reform (2012), Amnesty International, Londres.

El-barnameg el-ra'esi lel-doctor Mohamed Mursi. El-nahda... eradet shaab (2012), Hezb el-horreya w el-aadala, El Cairo.

Broken promises. Egypt's military rulers erode human rights (2011), Amnesty International, Londres.

Duaa fi darb el-horreya. Shohadaa thawret 25 yanair (2012), El-shabaka el-arabiya lemaalumat hoqoq el-insan, El Cairo.

El-ehteyayat el-aamaleya fi Misr 2012, El-markez el-masry lel-hoqoq el-eqtesadeya w el-eytemaaeya, El Cairo.

Egypt's Muslim Brothers: Confrontation or Integration?, *Middle East/North Africa Report* [International Crisis Group], n.º 76, junio de 2008.

Egypt Rises. Killings, detentions and torture in the '25 January revolution' (2011), Amnesty International, Londres.

«Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, año 2012», Ministerio de Economía y Competitividad, Secretaría de Estado y de Comercio.

Globalizing torture. CIA secret detention and extraordinary rendition (2013), Open Society Justice initiative.

Informe Anual 2010, Reporteros Sin Fronteras, Barcelona.

Informe Anual 2011, Reporteros Sin Fronteras, Barcelona.

Informe Anual 2012, Reporteros Sin Fronteras, Barcelona.

Informe Anual de Amnistía Internacional 1997, Amnistía Internacional.

Mashroaa el-dostor el-yedid lel-dawla el-masreya el-hadiza (2012), El-yamaaeya el-ta'aseseya lewadaa mashroaa dostor yedid lel-balad, El Cairo.

Mit youm men hokm Mursi...mit youm men elaataqal w el-taazib w fad el-aatasamat bel-qowa w el-qatl jareg el-qanun (2012), Markez el-nadeem lel-aalay w el-tahil el-nafsy ledahaya el-aonf, El Cairo.

Moatenon bela hoqoq...baad aamen men thawret 25 yanair (2013), El-monazama el-masreya lehoqoq el-ensan, El Cairo.

Reforming Egypt: In search of a strategy, *Middle East/North Africa Report* [International Crisis Group], n.º 46, octubre 2005.

Tahdid el-adala fi Misr. Mada yurid el-ijuan men el-qadaa (2013), El-monazama el-masreya lehoqoq el-ensan, El Cairo.

The Arab Spring and Climate Change. A Climate and Security Correlations Series (2013), Center for American Progress.

The blacklash against democracy assistance. A report prepared by the National Endowment for Democracy for senator Richard G. Lugar, chairman committee on Foreign Relations United States Senate (2006), National Endowment for Democracy, Washington.

The impact of World Bank policy and programs on the built environment in Egypt. The World Bank and Egypt (2013), Bank Information Center.

The travel & tourism competitiveness report 2013. Reducing barriers to economic growth and job creation, World Economic Forum, Ginebra.

Work on Him Until He Confesses. Impunity for Torture in Egypt (2011), Human Rights Watch, Nueva York.

Yarema ehana el-ra'is, yarima nizam mostabed (2013), El-shabaka el-aarabeya lemaalomat hoqoq el-ensan, El Cairo.

Yaumiat taht hokm el-aaskar. Waqa'e entehakat w mohakamat el-madaneen emam el-mahakem el-aaskareya baad el-thawra (2011), Markez Hisham Mubarak lelqanun, El Cairo.

Libros

ÁLVAREZ-OSSORIO, Ignacio; ZACCARA, Luciano (2009): *Elecciones sin elección. Procesos electorales en Oriente Medio y el Magreb*, Ediciones de Oriente y del Mediterráneo, Madrid.

AZAOLA PIAZZA, Bárbara (2008): *Historia del Egipto contemporáneo*, Los libros de la Catarata, Madrid.

BASHIR, Mohamed Gamal (2011): *Ketab el-Altras. Aandama tetaady el-gamahir el-tabyaa*, Dar Daun lel-nasher w el-tawzyaa, El Cairo.

BEININ, Joel; LOCKMAN, Zachary (1998): *Workers on the Nile. Nationalism, communism, Islam and the egyptian working class, 1882-1954*, The American University in Cairo Press, El Cairo.

COOK, Steven A. (2012): *The struggle for Egypt: From Nasser to Tahrir square*, The American University in Cairo Press, El Cairo.

El-eshterakeya el-thawreya. El-tarej, el-nazareya, El-momarrasa (2013), Markez el-darasat el-eshterakeya, El Cairo.

IBRAHIM, Sonallah (2004): *Zaat*, The American University in Cairo Press, El Cairo.

KHARBAUI, Thaurat el- (2012): *Ser el-maabad. El-asrar el-jafeya leyamaa el-ijwan el-moslemeen*, Dar nahdet misr lelnasher, El Cairo.

NAGUIB, Sameh (2012): *La revolución egipcia. Análisis y testimonio político*, En Lucha.

RODRÍGUEZ, Olga (2012): *Yo muero hoy. Las revueltas en el mundo árabe*, Debate, Barcelona.

RUTHENFORD, Bruce K. (2008): *Egypt after Mubarak: liberalism, Islam, and democracy in the Arab World*, Princeton University Press, USA.

YEHYE, Karim (2012): *El-sandoq el-aswad. Qeset Hussein Salem*, Dar el-zaqafet el-gedida, El Cairo.

Otros

ALMODÓVAR, Marc (2011): *Erhal. Diario de la plaza Tahrir* [doc. audiovisual] Barcelona.

Comunicados oficiales del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas.

Cuentas de Facebook y Twitter de diversos activistas, cargos políticos e instituciones políticas o sociales.

Diversos panfletos y octavillas políticas.